

63ª REUNION — Continuación de la 3ª SESION EXTRAORDINARIA  
MARZO 7 Y 8 DE 1974

Presidencia de los señores diputados Raúl Alberto Lastiri, Salvador F. Busacca  
e Isidro J. Odena

Secretario: señor Ludovico Lavia

Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González y Alberto Rodríguez Gallardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis  
ACUÑA, Hipólito  
AGUIRRE, Mario D.  
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.  
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo  
AMADO SALEME, José  
AMAOLO, Mario O.  
AMAYA, Mario Abel  
AMERISE, José Carmelo  
ARAGONÉS, Carlos Osvaldo  
ARANA, Tomás Pedro  
ARRO, Tomás Ameghino  
ARCE, Rodolfo Juvenelo  
ARIANI, Adriano  
ARIGOS, Ramón Eduardo  
ARRAYA, Jorge Francisco  
ARRUE, Willebrordo  
ASMAR, Ramón  
AVILA, Agustín Alfredo  
AZURMENDI, Ernesto  
BAJCZMAN, Raúl I.  
BALESTRA, Ricardo Ramón  
BARBARO, Julio D.  
BARRIONUEVO, Roque R.  
BARTOMIOLI, Héctor Luis  
BÉHÉGAN, Arn. Ido Mario  
BELLISIO, Víctorio Alberto  
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto  
BLANCO, Manuel  
BONAS, Abraham Efraín  
BONIFATTI, Arolinda S. A.  
BORRAS, Raúl Antonio  
BRAVO, Carlos Alberto  
BRAVO, Federico S.  
BRITO LIMA, Alberto  
BUSACCA, Salvador F.  
BUSTOS, Tomás Roberto  
CABANA, Manuel I.  
CABEZAS, José Humberto  
CALABRESE, Pablo  
CAMPBELL, Oscar S.  
CAMPOS, Ernesto Manuel  
CAMUS, Jorge M.  
CAPILLO, José  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARRAL TOLOSA, Humberto  
CASAZZA, Luis Angel  
CASTELLANO, Hug. Luis  
CATALANO, José Armando

CITATI, Angel  
COLELLO, Clemente J.  
COMINGUEZ, Juan Carlos  
COSSY ISASI, Edgar  
COSTARELLI, José  
CROCCO, Luis Ferdinando  
CHAQUIREZ de PALACIOS, María  
D'ANGELO, Lorenz. Francisco  
DAVICO, Miguel Angel  
DAY, Alberto Ricardo  
DE APARICI, Ricardo José Manuel  
DE LUCA, Ricardo  
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo  
EQUIREUN, Enrique  
ESPECHE, Juan Bautista  
ESPONDABURU, Raúl Horacio  
ESQUIVEL, Faustino  
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes  
FALABELLA, Francisco José  
FALÚ, Ricardo Munir  
FARIAS, Eduardo Isidro  
FERNANDEZ, Dante Dionisio  
FERNANDEZ, Juan Máximo  
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano  
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos  
FERNANDEZ VALONI, José Luis  
FERREYRA, Jorge Washington  
FLORES, José María F.  
FONTE, Carlos A.  
FRANCO, Hugo Armando  
FRESCHI, Pedro José  
FUENTES, Pedro Alfredo  
GAITAN, Adelmo Alberto  
GALVAN, Raúl Alfredo  
GANEM, Héctor  
GARCIA, Luis Antonio  
GARONA, Alberto A.  
GARRÉ, Nilda Celia  
GASS, Adolfo  
GIMÉNEZ, Nicolás Alberto  
GOLÉ, Tomás Juan B.  
GONZALEZ, Ricardo A.  
GRAU, Mario Agustín  
GUALCO, Jorge Nelson  
GUERRERO, Antonio Isano  
GUZMAN, María Cristina  
HAIEK, José  
HARRINGTON, Luis José D.  
HUEYO, Horacio  
IMBAUD, Carlos Alfredo  
INSÚA, Carlos Raúl

KELLY, Rodolfo Feliciano  
LABAKE, Juan Gabriel  
LASTIRI, Raúl Alberto  
LATRUBESSE, Francisco Alberto  
LAVALLE, Mario  
LAZZARINI, José Luis  
LENCINA, Luis A.  
LÉPEZ, Lysis Augusto  
LIMA, Hugo Camón  
LITERAS, María Haydée A. de  
LONCHARICH FRANICH, Cándido A.  
LÓPEZ, Domingo  
LÓPEZ, Horacio Fidel  
LÓPEZ, Miguel Angel  
LÓPEZ de GALLO, Amelía  
LORENCE, Mariano Rufino  
LUMELLO, José Elio  
LLORENS, Roberto Oscar  
MACRIS, Antonio J.  
MALDONADO, Clemente  
MARINO, Rafael Francisco  
MARQUEZ, Alfonso Carlos  
MARTÍNEZ, Juan Antonio  
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás  
MARTOS, Mario Raúl  
MASSOLO, Eduardo A. R.  
MASTOLORENZO, Vicente  
MAUHM, Fernando Hugo  
MERA FIGUEROA, Julio T.  
MERCHENSKY, Marcos  
MIGLIOZZI, Julio Alberto  
MIRA, Jesús  
MOLINA, Gilberto H.  
MOLINA, Manuel Isauro  
MOLINA ZAVALIA, Armando  
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto  
MOMBELLI, Fausto J.  
MÓNACO, Horacio Miguel  
MONSALVE, Evaristo A.  
MONTERO TELLO, Régulo L.  
MORAL, Angel  
MORENO, Antonio E.  
MORINI, María Teresa Merciadri de  
MOYANO, Francisco J.  
MUSACCHIO, Vicente Miguel  
MUSSO, Eufemia  
NARANJO, Decio B.  
NATALE, Ricardo T.  
NICOLICHE, Lisardo Oscar  
NOSIGLIA, Plácido Enrique  
ODENA, Isidro J.

OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio  
 PALACIO DEHEZA, Carlos  
 PARENTE, Rodolfo Domingo  
 PASCUAL, Paulín Rubén  
 PATALAGOTIA, Osvaldo E.  
 PAZ, Guido Ulises  
 PEDRINI, Ferdinando  
 PEREIRA, Antonio  
 PETRUCCELLI, Agustín  
 PONCE, Rodolfo Antonio  
 PORTERO, Héctor  
 PORTO, Jesús E.  
 RABANAL, Rubén Francisco  
 RACCHINI, Juan Nicolás  
 RAFAEL, Juan  
 RAMIREZ, Juan Manuel  
 RATTI, Luis Carlos  
 RITVO, Miguel  
 RIZO, Eusebio Víctor  
 RODRIGUEZ, Alfredo S.  
 RODRIGUEZ FLORES, Argentina  
 ROJAS, Ramón Pablo  
 ROLANDO, Esteban Domingo  
 ROMAN, Irene Graciela  
 ROMERO, Carlos Alberto  
 ROMERO, Juana N.  
 ROSAS, Alberto Horacio  
 ROTA, Silvana María I.  
 RUBEO, Luis

RUIZ VILLANUEVA, Arturo  
 SALIM, Luis  
 SALOMON, Jorge  
 SALVADOR, Nicolás  
 SALVATIERRA, Julio Domingo  
 SAMBUEZA, Osvaldo  
 SANCHEZ AHUMADA, Luis Alberto  
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio  
 SANDLER, Héctor Raúl  
 SANGIACOMO, Ricardo Arturo  
 SANGUINETI, Virginia Luisa  
 SARBOLI, Rubén Juan  
 SARLI, Osvaldo Raúl  
 SAUL, Roberto  
 SERVINI GARCIA, Clara Cristina  
 SILEONI, Nelo I.  
 SILVA, Anacleto  
 SLAMOVITS, Ludovico  
 SOLANA, Jorge D.  
 STECCO, Alberto Eleodoro  
 SUÁREZ, Humberto F.  
 SUAREZ, Leopoldo M.  
 SUELDO, Horacio Jorge  
 SULETA DE ARRAYA, Arminda  
 TACHELLA, Elberto S. J.  
 TAGLIAFERRO, Jorge  
 TOLLER, Roberto Lino  
 TRABOULSI, Eduardo Elías  
 TRÓCCOLI, Antonio A.

TULA DURAN, Joaquín  
 URDINEZ, Clotilde Isolina  
 VACCAREZZA, Eduardo H.  
 VALENZUELA, Héctor R.  
 VAZQUEZ POL, José  
 VERGARA, Roque Antonio  
 VIALE, Jorge Omar  
 VILLADA, Mario Anselmo  
 VILLALBA, Bernardo Samuel  
 VINARDELL MOLINERO, Miguel  
 VINTI, Carmelo  
 ZAMANILLO, José Miguel  
 ZAPATA, Hipólito Bernardo

## AUSENTES, CON LICENCIA:

ARATA, Juan Carlos  
 AUYERO, Carlos Alberto C.  
 CARRERAS, Ruperto R.  
 ESTIGARRIA, Agustín Tomás  
 GALLO, Carlos R.  
 HUGHES, Gilbert  
 LUCENA, Luis Arnaldo  
 LLANO, Juan Pedro  
 MIGUEL, Pedro Honorio  
 MORENO FERRER, José Carlos W.  
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto  
 SVRSEK, Enrique A.  
 VALERI, Salvador

## SUMARIO

- 1.—Plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 6103.)
- 2.—Indicación de la señora diputada Guzmán para que se invite al señor ministro del Interior a fin de que informe a la Honorable Cámara sobre las razones que determinaron al Poder Ejecutivo nacional a enviar el proyecto de intervención a la provincia de Córdoba. Se rechaza. (Pág. 6108.)
- 3.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba. Se sanciona definitivamente. (Pág. 6109.)
- 4.—Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de los señores diputados Tróccoli, Pedrini y otros por el que se establece que la actuación del ex jefe de Policía de la provincia de Córdoba teniente coronel (R.E.) Antonio Domingo Navarro y la de los participantes en los hechos del dominio público constituyen el delito de sedición. Se aprueba. (Pág. 6188.)
- 5.—Moción del señor diputado Zamanillo para considerar sobre tablas el proyecto de resolución por el que se solicitan informes al señor ministro de Defensa sobre el encuadramiento y tipificación del delito que el teniente coronel (R.E.) Antonio Domingo Navarro hubiera podido cometer en relación con el grado que reviste. Se rechaza. (Pág. 6189.)
- 6.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el que la Honorable Cámara insiste, por segunda vez, en su sanción originaria sobre el proyecto de ley de gravamen a las apuestas hípcas. Se sanciona definitivamente. (Pág. 6191.)

- 7.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se otorgan a las empresas industriales locales que participen en la realización de obras multinacionales los beneficios que se acuerdan a la exportación de productos manufacturados. Se sanciona. (Pág. 6192.)
- 8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre incremento del presupuesto general del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se sanciona. (Pág. 6193.)
- 9.—Consideración del dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de interés nacional al carbón residual de petróleo. Se sanciona definitivamente. (Pág. 6196.)
- 10.—Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueban las cuentas de inversión presentadas por el Poder Ejecutivo correspondientes a los ejercicios de los años 1963, 1964 y 1965. Se sanciona definitivamente. (Pág. 6198.)
- 11.—Consideración del dictamen de la Comisión de Finanzas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre certificados de depósito a plazo fijo nominativos transferibles. Se sanciona. (Página 6199.)
- 12.—Moción del señor diputado Pedrini de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio hasta el miércoles 13 del mes en curso para continuar el tratamiento de los asuntos del plan de labor pendientes de consideración y de los que la Comisión de Labor Parlamentaria incorpore en su próxima reunión. Se aprueba. (Pág. 6201.)

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Lorences.

**Sr. Lorences.** — Señor presidente: solicito que la votación se haga en forma nominal.

**Sr. Presidente** (Busacca). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

—No resulta suficientemente apoyado.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el punto primero del plan de labor: intervención federal a la provincia de Córdoba. Se requieren dos tercios de votos.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar el resto del plan de labor de que se ha dado cuenta por Secretaría. Se requieren dos tercios de votos.

—Resulta afirmativa.

## 2

### INDICACION

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra la señora diputada Guzmán.

**Sra. Guzmán.** — Señor presidente: he solicitado la palabra a fin de proponer que se incluya en el plan de labor el pedido de que concurra el señor ministro del Interior a esta sesión y nos informe pormenorizadamente de los hechos acontecidos.

La República se ha sentido resentida en su proyección histórica y lesionada en su basamento institucional por los acontecimientos que han sucedido en Córdoba. Es así que reclama que todo su pueblo, y no una parcialidad, conozca por intermedio del señor ministro del Interior las pormenorizadas razones que han determinado esta actitud sugestivamente renuente del Poder Ejecutivo nacional para que se aplique el remedio federal del artículo 69 de la Constitución ante el hecho criminoso del jefe de Policía de la provincia, teniente coronel retirado Antonio Navarro, quien en un acto sedicioso ha privado de la libertad a los mandatarios elegidos por la voluntad del pueblo ciudadano.

Hace unos días, según reza la crónica periodística, en el ámbito senatorial ha concurrido el señor ministro del Interior para informar exclusivamente a los señores senadores del partido mayoritario sobre las razones fácticas que han determinado el envío de este proyecto. Esto es como si los demás pares no tuviéramos análogas inquietudes y la misma desesperanza por concluir el caos de la provincia mediterránea. Esta aparcería insólita, señor presidente, está reñida con las reiteradas expresiones del señor presidente de la Nación, quien dice que las mayorías y las minorías deben enjugar sus intenciones en un marco de recíproco respeto. En aquella oportunidad yo he pensado que esta

actitud del señor ministro ha sido como un lapsus cálamí de procedimiento, ya que admitir lo contrario sería entronizar aquí el apogeo antidemocrático de los réprobos y de los elegidos.

Pero en el día de ayer el señor ministro concurrió nuevamente a esta casa para dar más razones a algunos miembros del bloque mayoritario. Otro lapsus cálamí del señor ministro. Es natural, entonces, que al tratarse este proyecto el señor ministro tendría oportunidad de rever su conducta frente a los integrantes de esta Cámara, aportando las razones del caso.

Nuestra angustia ciudadana ha leído atónita las declaraciones del señor diputado Dante Agodino, a cargo, digamos, del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, en las cuales dice que todos sus actos tienen el aval y la conformidad del teniente general Perón. En consecuencia, pensamos que tendría también el aval del presidente el acto por el cual se vuelve a sus funciones al teniente coronel Navarro, al que se confirma en su cargo. Ello significaría que el propio Poder Ejecutivo nacional estaría coonestando un hecho sedicioso, un acto criminoso, lo que por supuesto nos resulta difícil creer. Esta es, entonces, una de las tantas razones por las cuales tiene que venir el señor ministro aquí a aclarar la situación.

Señor presidente: nuestra labor como oposición en este Parlamento ha sido clara y ha contribuido a comprender este proceso, porque ésta es nuestra responsabilidad, y creo que la hemos asumido más que los propios hombres del partido gobernante. Es así que pedimos que esta Honorable Cámara acceda a que el señor ministro revea su posición y venga a dar aquí todas las explicaciones del caso.

**Sr. Pedrini.** — ¿Me permite una interrupción señora diputada, con el permiso de la Presidencia?

**Sra. Guzmán.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Pedrini.

**Sr. Pedrini.** — Señor presidente: lamentablemente no podremos complacer el deseo de la señora diputada Guzmán de Andreussi porque consideramos que la presencia del señor ministro en el recinto no es necesaria, ya que éste es un hecho demasiado conocido por toda la ciudadanía argentina.

Por esta razón vamos a votar por la negativa el pedido de hacer comparecer en este recinto al señor ministro del Interior, y recojo la inquietud de la señora diputada Guzmán para el futuro, adelantando que cuando sea necesario y creamos conveniente el procedimiento, habremos de votar por la afirmativa.

**Sra. Guzmán.** — En relación al futuro, agradezco la promesa del señor diputado Pedrini, porque implicará una forma de refirmar el prin-

cipio republicano de gobierno y demostrar el real papel que debe cumplir el Parlamento.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a votar la indicación de la señora diputada Guzmán de invitar al señor ministro del Interior a concurrir a este recinto.

— Resulta negativa.

**Sr. Presidente** (Busacca). — Se va a pasar a considerar el primer punto del orden del día, referido a la intervención a la provincia de Córdoba.

### 3

#### INTERVENCION A LA PROVINCIA DE CORDOBA

(Orden del día número 362)

### I

#### Dictamen de mayoría

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno y de decretar la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador; así mismo ha tenido en cuenta otras iniciativas presentadas por varios señores diputados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja en mayoría la sanción del proyecto de ley venido en revisión.

Sala de la comisión, 6 de marzo de 1974.

*Luis Antonio García. — Mario D. Aguirre. — José Armando Catalano. — Edgar Cossy Isasi. — José Luis Lazzarini. — Francisco J. Moyano. — Hugo Ramón Lima. — Domingo López. — Julio Domingo Salvatierra.*

En disidencia parcial:

*Héctor R. Valenzuela.*

Buenos Aires, 5 de marzo de 1974.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

**Artículo 1º** — Declárase intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno.

**Art. 2º** — El delegado federal decretará la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador, asumirá el Poder Ejecutivo y procederá a su reorganización.

**Art. 3º** — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a la misma.

**Art. 4º** — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

*JOSÉ ANTONIO ALLENDE.*

*Aldo Hermes Cantoni.*

#### INFORME

*Honorable Cámara:*

Es innecesario extenderse en mayores consideraciones para fundamentar la intervención federal a la provincia de Córdoba en el nivel del Poder Ejecutivo.

El mensaje número 688 de fecha 1º de marzo de 1974, dando cuenta de la situación existente en la provincia de Córdoba, determinante por otra parte de la ampliación de la convocatoria a sesiones extraordinarias con la inclusión de ese tema, así como el del día siguiente por el que se propicia la intervención federal a fin de restablecer la forma republicana de gobierno, procediendo a reorganizar su Poder Ejecutivo, son lo suficientemente elocuentes como para no hacer otro género de consideraciones.

Baste señalar que los hechos producidos en la provincia mediterránea son de tal gravedad que han provocado un estado de subversión, alterando las bases fundamentales sobre las que descansan el orden y la paz públicos.

Y, como si esto fuera poco, encierran dentro de sí la potencia de generar hechos de mayor magnitud que podrían derivar hacia un estado de disociación y caos.

Se impone, entonces, el remedio de la intervención federal, que el gobierno nacional, respetuoso de las autonomías provinciales, la limita exclusivamente al área de poder responsable de esa situación.

*Edgar Cossy Isasi.*

#### Disidencia parcial

**Artículo 1º** — Declárase intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de garantizar su forma republicana de gobierno.

**Art. 2º** — Substituir su texto por:

El delegado federal deberá reponer en sus cargos a las autoridades constitucionales: gobernador, doctor Ricardo Obregón Cano, y vicegobernador, señor Atilio López, según lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Nacional.

**Art. 3º** — Substituir su texto por:

El delegado federal dispondrá el traslado de los antecedentes del señor teniente coronel Navarro a la justicia competente.



Art. 4º — Substituir su texto por:

El delegado federal cumplirá su cometido en un plazo máximo de quince días.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Héctor R. Valenzuela.*

**Informe de la disidencia parcial**

*Honorable Cámara:*

Sin duda el orden institucional en la provincia de Córdoba ha sido subvertido por un hecho sin precedentes en la historia del país y la situación caótica resultante (y provocada por la sedición) requiere una pronta atención para paliar sus efectos.

Estamos contestes en que la intervención federal es el medio idóneo para ello, máxime cuando puede aparecer comprometida la responsabilidad del gobierno nacional por su pasividad cuando se produjeron los hechos subversivos de dominio público. Pero no es menos cierto que los objetivos que debemos perseguir al sancionar la intervención federal no son ni podrían ser otros que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la Constitución Nacional, es decir: "...para restablecerlas (a las autoridades) si hubiesen sido depuestas por sedición...". Lo contrario implicaría convalidar y otorgar patente de impunidad a hechos subversivos que persiguen precisamente esos propósitos: derrocar a un gobierno libremente elegido. Resulta importante consignar que el ejemplo del «comisario» de Córdoba ha cundido rápidamente. Versiones periodísticas que no han sido desmentidas afirman que en algunas poblaciones del interior de la provincia los comisarios seccionales han «destituido» a los intendentes municipales (?).

Por los argumentos expuestos, confío en que esta Honorable Cámara dará sanción favorable a este dictamen en disidencia.

*Héctor R. Valenzuela.*

**II**

**Dictámenes de minoría**

**1**

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno y de decretar la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador; así mismo ha tenido en cuenta otras iniciativas presentadas por varios señores diputados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja en minoría la sanción del siguiente

**PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Córdoba, al solo efecto de reponer en sus funciones al señor gobernador y al señor vicegobernador, destituidos por la sedición del jefe de Policía, y proceder al inmediato restablecimiento del orden y de la paz públicos.

Art. 2º — El delegado federal cumplirá su misión en un plazo no mayor de treinta (30) días y se pondrán a su disposición las fuerzas nacionales de seguridad que sean necesarias.

Art. 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a la misma.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 6 de marzo de 1974.

*Fernando Hugo Mauhum. — Osvaldo Alvarez Guerrero. — Raúl Alfredo Galván. — Mario Agustín Grau. — Leopoldo M. Suárez.*

**INFORME**

*Honorable Cámara:*

En la provincia de Córdoba se ha producido, quizás, el más grave conflicto institucional de toda su historia. Un jefe de Policía desorbitado y en abierta sedición procedió a destituir al gobernador y vicegobernador de la provincia.

Tan insólito atentado, que debió provocar la inmediata acción del gobierno nacional para poner las cosas en su quicio, se ha prolongado hasta ahora ante la más completa y sorprendente pasividad de las autoridades federales, intensificándose un peligroso clima de inseguridad sobre las personas y bienes de los habitantes de la provincia.

Siendo así, se impone adoptar con urgencia el remedio previsto en el artículo 6º, última parte, de la Constitución Nacional y declarar intervenida la provincia de Córdoba al solo efecto de reponer en sus funciones a los titulares del Poder Ejecutivo depuestos por la sedición de las fuerzas policiales.

Cualquier otro remedio que se intentara lesionaría la autonomía de Córdoba y repugnaría a elementales principios de justicia.

*Fernando Hugo Mauhum.*

**2**

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno y de decretar la caducidad de los mandatos del señor gobernador

y del señor vicegobernador; así mismo ha tenido en cuenta otras iniciativas presentadas por varios señores diputados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja, en minoría, la sanción del proyecto de ley de los señores diputados Portero y otros.

Sala de la comisión, 6 de marzo de 1974.

*Héctor Portero.*

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Córdoba al solo efecto de restablecer en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Nacional, al señor gobernador don Ricardo Obregón Cano y al señor vicegobernador don Atilio López.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo designará al delegado federal dentro del término de las 12 horas de sancionada la presente ley y dispondrá el concurso de las fuerzas armadas y de seguridad necesarias para su cumplimiento.

Art. 3º — Dentro de las 72 horas siguientes a su designación, el delegado federal deberá asumir su cargo, remover al jefe de policía teniente coronel Armando Navarro, tomar las medidas conducentes al procesamiento del mismo y cumplir lo dispuesto en el artículo 1º.

Art. 4º — Los gastos que demande la aplicación de la ley se tomarán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Héctor Portero. — Horacio Jorge Sueldo. — Luis Arnaldo Lucena. — Eduardo Elías Traboulsi. — Juan Carlos Cominguez. — Armando Molina Zavalia. — Jesús Mira. — Vicente Miguel Musacchio. — Mariano Rufino Lorences. — Rafael Francisco Marino. — Tomás Pedro Arana. — Héctor Raúl Sandler.*

#### INFORME

*Honorable Cámara:*

Reproduzco, a los efectos reglamentarios del informe en este dictamen, los fundamentos del proyecto de ley cuya aprobación auspicio en la correspondiente parte resolutive.

*Héctor Portero.*

#### FUNDAMENTOS

##### I. El hecho sedicioso

Señor presidente:

La provincia de Córdoba soporta una situación institucional sin precedentes en su historia.

La sedición cometida por el ex jefe de policía provincial llegó a culminar con la detención del gobernador, vicegobernador, ministros, funcionarios, legisladores y otros ciudadanos, con violación de toda clase de fueros, inmunidades y garantías individuales. El gobierno de Córdoba, legalmente constituido, quedó así privado de hecho de sus facultades y fue reemplazado por un funcionario sedicioso. El pueblo quedó sometido a la caprichosa discrecionalidad de quien encabezó la rebeldía policial, y la provincia privada del goce y ejercicio de sus instituciones.

También el Poder Judicial de la Nación fue desconocido, pues la intimación a los sublevados, dispuesta por el juez federal de la ciudad de Córdoba, para que se disolvieran o retiraran, no fue acatada.

En esas circunstancias, la asunción de la gobernación por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, con invocación del artículo 100 de la Constitución local, no alcanzó a cubrir o siquiera disimular el acto sedicioso, dado que la ceremonia del juramento contó con la presencia del cabecilla de la rebelión, autor —precisamente— de la detención del gobernador y vice legítimos, ahora invocada como «impedimento» justificativo de la usurpación del mando. Corroborando esto, el jefe sedicioso continuó a posteriori en la jefatura de policía y prolongó las detenciones hasta por lo menos 24 horas más, en tanto el legislador que detentaba el Poder Ejecutivo efectuaba una convocatoria a elecciones cuya causal, según la Constitución de la provincia, debía consistir en un impedimento absoluto del gobernador y del vice.

Además, la Policía de la provincia continuó privando ilegítimamente de su libertad a otras autoridades, realizó procedimientos al margen del Poder Judicial, obstruyó la circulación de personas y vehículos en importantes arterias de la ciudad capital colocando barricadas hechas con ómnibus del transporte público de pasajeros. El alzamiento adquirió ya ribetes dramáticos que hacen a sus responsables incursos en la comisión de gravísimos delitos, además del de sedición: obstrucción de los servicios públicos de transporte, toma de los medios de comunicación, privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita, instigación a la sedición, etcétera.

En efecto, además de la detención de sus autoridades, las radioemisoras locales fueron ocupadas en la noche del 27 de febrero por un supuesto «Comando Peronista de la Rebelión Civil», que, con la evidente complacencia policial, difundía proclamas subversivas, denuestos contra autoridades administrativas y jueces, amenazas contra los conductores de ómnibus que circulaban en las primeras horas del día 28, partes policiales referidos a la sedición y frases especiales que, sin duda alguna, implicaban mensajes en código para quienes ejecutaban actos ilegítimos coordinados con la sedición.

Durante las noches del 27 y 28 de febrero la población de la ciudad estuvo a merced de la Policía rebelada y de bandas armadas que consumaron gravísimos atentados contra los domicilios particulares del gobernador, ministro de Gobierno, un juez de instrucción y varios otros. En algunas municipalidades del interior de la provincia fueron ocupados los edificios y expulsadas las autoridades elegidas por el pueblo.

## II. El gobierno federal

Sin duda, el Poder Ejecutivo nacional no arbitró las medidas oportunas que efectivizaran la garantía establecida en los artículos 59 y 69 de la Constitución Nacional mediante la concurrencia de fuerzas que restablecieran en sus cargos a los gobernantes depuestos y dieran apoyo a la resolución del juez federal.

La actitud de observar y aguardar el desarrollo de los acontecimientos, librando el derecho de los gobernantes provinciales a la suerte de la fuerza, significó —en realidad— otorgar al jefe sedicioso y sus cómplices todo el tiempo y todas las condiciones fácticas que la maniobra demandaba.

Ni siquiera hubo reacción del gobierno federal cuando el propio gobernador, apenas recuperada su libertad, el 19 de marzo, reclamó la protección de la Policía Federal para continuar en su cargo de primer mandatario de la provincia. Tampoco hubo respuesta en sus intentos de conversar telefónicamente con el señor ministro del Interior. Igual silencio e inacción mereció el requerimiento de la ayuda federal contenido en su mensaje de fecha 2 del corriente mes. Ni aun ha merecido la atención de las autoridades nacionales de la Cámara de Diputados cordobesa, con la presencia de todos los sectores políticos que la integran y con quórum por demás holgado, haya reclamado la concurrencia del poder central para sostener a los legítimos gobernantes de la provincia.

Con exceso, pues, se reiteraron las requisiciones de las autoridades constituidas, en la forma exigida por el artículo 69 de la Constitución Nacional. Más aún: la naturaleza de los hechos ocurridos, la forma especial adquirida por la sedición y la arbitraria detención de los gobernantes permitía prescindir, incluso, de la exigencia formal de tales requerimientos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional nada hizo antes ni después de las peticiones en demanda de apoyo para combatir la sedición. Por el contrario, la presencia de los jefes en esa provincia del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Gendarmería y de la Policía Federal en el acto de asumir el mando ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados provincial implicó, tácitamente, un aval del gobierno central, del cual dependen, en favor de la situación creada.

Queda todavía un último elemento de juicio para resaltar: el jefe sedicioso es un oficial del Ejército, en situación de retiro. Diversos medios

podieron emplearse para que, en atención a su estado, se le ordenara deponer la actitud lesiva del orden institucional, la Constitución y la ley.

## III. La trascendencia político-institucional

El Congreso Nacional no puede ignorar que detrás del acto de fuerza y la violación de normas formales se oculta una realidad política, animada indudablemente de propósitos también políticos que marcadamente exceden el ámbito de la provincia de Córdoba. Luego de las elecciones del 11 de marzo de 1973, ratificadas en septiembre del mismo año, el fenómeno político más importante del país es la constitución de los gobiernos nacional y provinciales mediante el masivo voto popular y como cierre definitivo —en pos de la liberación nacional— de los hechos de fuerza a cargo de funcionarios cuyo fin es el de salvaguardar la soberanía del pueblo y no su frustración. Tanto la elección nacional como las respectivas provinciales fueron parte del mismo proceso político. Todo acto sedicioso, violatorio de las normas constitucionales, es así no sólo un ataque contra el gobierno que lo soporta, sino un atentado contra aquel proceso por el cual el pueblo buscó su liberación. No es posible ignorar esta realidad que en los hechos significa no sólo un avasallamiento de la soberanía popular del pueblo de Córdoba, sino un artero ataque a ese proceso político general. Se pretende arrasar una gobernación, pero además, principalmente, deteriorar el poder político acordado por el pronunciamiento popular al gobierno nacional. El Congreso tiene así una obligación específica y múltiple: reponer en el acto a las autoridades constituidas y restaurar por el pleno ejercicio de las facultades constitucionales el pleno poder político del máximo poder.

## IV. La solución propuesta

Proponemos lisa y llanamente la aplicación del artículo 69 de la Constitución Nacional, en cuanto obliga al gobierno federal a restablecer las autoridades provinciales depuestas por la sedición. Ese debe ser el único alcance de la intervención a la provincia de Córdoba. La designación del delegado federal debe efectuarse con urgencia y su cometido cumplirse en términos muy breves. La totalidad de las fuerzas armadas y de seguridad deben estar a disposición de la gestión reparatoria de las instituciones, pues aquellas están subordinadas —sin duda— al orden constitucional.

Los días transcurridos desde el 19 de marzo próximo pasado, fecha en que los diputados nacionales electos por la Alianza Popular Revolucionaria solicitamos del Poder Ejecutivo la inclusión del tema en la nómina de asuntos de sesiones extraordinarias para poder aprobar el proyecto de ley pertinente, tornan necesaria la sanción que proponemos a la Honorable Cámara.

No existe otra medida posible que no sea la restitución en sus cargos del gobernador don Ricardo Obregón Cano y del vicegobernador don Atilio López. Cualquier variante significará desconocer la Constitución y la soberanía del pueblo.

*Héctor Portero. — Horacio Jorge Sueldo. — Luis Arnaldo Lucena. — Eduardo Elías Traboulsi. — Tomás Pedro Arana. — Armando Molina Zavala. — Héctor Raúl Sandler. — Jesús Mira. — Vicente Miguel Musacchio. — Juan Carlos Comínguez. — Rafael Francisco Marino. — Mariano Rufino Lorences.*

3

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno y de decretar la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador; así mismo ha tenido en cuenta otras iniciativas presentadas por varios señores diputados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja en minoría la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Concúrrase en auxilio de las autoridades de la provincia de Córdoba, legítimamente elegidas en los comicios del 15 de abril de 1973.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo designará al comisionado federal que se pondrá a las órdenes del señor gobernador, con el concurso de las fuerzas armadas y de seguridad de la Nación, a fin de aplastar la sedición.

Art. 3º — La justicia federal actuará en forma inmediata para procesar a los responsables del acto sedicioso.

Art. 4º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se harán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 6 de marzo de 1974.

*María Cristina Guzmán.*

#### INFORME

*Honorable Cámara:*

Dado que existen autoridades legítimamente elegidas por el pueblo de la provincia de Córdoba, que no renunciaron ni tienen impedimen-

tos legales para ejercer sus magistraturas, sino que por el contrario reafirmaron su voluntad de continuar en sus funciones, el gobierno federal debe concurrir con el auxilio de efectivos regulares para aplastar la sedición y sostener en el poder a los elegidos en los comicios de 1973.

Se propone que el Poder Ejecutivo designe un comisionado federal, quien con el concurso de las fuerzas armadas, Policía Federal y Gendarmería Nacional, se pondrá a disposición del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba para repeler la sedición y asegurar el sostenimiento y normal funcionamiento del gobierno provincial.

Esta actitud es una consecuencia del deber ineludible del gobierno federal de mantener la vigencia de las instituciones locales y asegurar el orden y las garantías individuales alteradas en este caso por un acto ilegal y sedicioso injustificable.

La justicia federal debe procesar de inmediato a los autores de la sedición.

Las autonomías provinciales no pueden ser lesionadas por consecuencia de hechos criminosos, que lejos de contribuir a la pacificación, liberación y ejercicio pleno de los principios republicanos y federales, nos conducen al camino del caos y la postergación.

*María Cristina Guzmán.*

4

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión, por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno y de decretar la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador; así mismo ha tenido en cuenta otras iniciativas presentadas por varios señores diputados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja, en minoría, la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declárase intervenido el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, al sólo objeto de restituir a sus autoridades legítimas depuestas como consecuencia del delito de sedición.

Art. 2º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se harán de «Rentas generales», con imputación a la misma.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 6 de marzo de 1974.

*Francisco José Falabella.*

## INFORME

Honorable Cámara:

El mensaje enviado por el Poder Ejecutivo con fecha 19 de marzo, resulta contradictorio con el proyecto de ley que hace llegar al Honorable Congreso el día 2. En tanto en el primero se estima como superada la crisis institucional en la provincia de Córdoba y por consentidos sus efectos, en el segundo se considera la necesidad de un remedio federal.

Ni los antecedentes que se dan en uno, ni los que se complementan con el otro, dan cuenta de una situación legal o de hecho que de acuerdo a la doctrina del artículo 69 de nuestra Constitución, hicieran necesaria y procedente la intervención federal, que no fuera al sólo efecto de reponer a las autoridades legítimas en situación de impotencia para actuar por sí mismas y con los medios a su alcance.

Toda vez que no se ha producido una alteración a la forma republicana de gobierno y sólo surge como causal la separación de hecho de las autoridades ejecutivas, debe entenderse que se produce la requisición tácita de las mismas, privadas de hacerlo expresamente por la detención y el secuestro, en cuyo caso se hace exigente e ineludible la orden constitucional para que el poder federal intervenga en el proceso hasta la recuperación y normalidad institucional.

Por estas razones y las que dará el miembro informante, pido a vuestra honorabilidad su aprobación.

Francisco José Falabella.

## ANTECEDENTES

## 1

Buenos Aires, 1º de marzo de 1974.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad a fin de remitirle los antecedentes que obran en su poder relacionados con la situación institucional creada en la provincia de Córdoba:

1. — El pueblo de la provincia de Córdoba tuvo oportunidad, como el del resto del país, de elegir el 11 de marzo de 1973, a sus gobernantes. En este estado resultaron electos como gobernador y vicegobernador los señores doctor Ricardo Obregón Cano y Atilio López. Ambos pertenecientes al movimiento justicialista, triunfante, así mismo, en el resto de la República.

2. — Debe señalarse que Córdoba, especialmente la ciudad capital, dentro del panorama argentino, señala rasgos señaladamente distintos al resto del país. Por su historia, por su tradición de meridiano político durante la época colonial y las largas luchas y guerras civiles que precedieron a la organización e institucionalización nacional, significó para el país un centro de equilibrio a veces y, lo contrario, general-

mente. Allí el país comenzaba a ser el interior. Pero Córdoba no era ni se sentía interior. Estaba, diríamos, en los límites de América interior pero, culturalmente, pertenecía a su periferia.

3. — Estas características acompañan a Córdoba hasta nuestro presente. Con otras que han perfilado de un modo más completo su individualidad diferenciada. Allí se produce el ultramontanismo más agudo y, tal vez por eso mismo, estalla la reforma universitaria del año 1918 en cuyo ideario romántico y teñido de barroquismo intelectual abrevan varias generaciones estudiantiles argentinas y latinoamericanas.

4. — A esta reforma sucede, en 1932, el estallido de un nuevo movimiento en su universidad, la trisecular Casa de Trejo, que replantea a la luz de los problemas sociales y de la lucha contra la dependencia colonizante, la problemática nacional. Continúa, visto y analizado el proceso desde nuestra perspectiva temporal, la confusión ideológica y la indefinición programática. Pero, también, el impulso y la trascendencia nacional de los hechos allí producidos.

5. — Y llega, también para Córdoba, el tiempo de la industria y de las grandes fábricas. Nace una clase obrera apenas llegada del campo, o de la lenta rumia de esperanzas del Norte argentino y del Sur boliviano. El peronismo fructifica en realizaciones y Córdoba se transforma en la segunda ciudad industrial y obrera de la República.

6. — Allí nace, también, la contrarrevolución de 1955, producto local de una extraña alianza de los ultramontanos clásicos —fascistas a veces— y los herederos de la reforma universitaria del 18 y de la revolución universitaria del 32. Pero allí también se da el remezón del cordobazo, que señala a todo un pueblo unificado alrededor de las grandes consignas de liberación nacional y social argentina y latinoamericana. Pero, todo, con un claro sentido nacional y con una tremenda vocación por lo nuestro.

7. — Esta Córdoba es la realidad con la que debieron manejarse los gobernantes electos el 11 de marzo y con la que tenemos que manejarnos nosotros. Desgraciadamente los elegidos, ya gobierno, no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función y comprender el curso de un movimiento nacional con capacidad para expresarse hasta en los programas de sus adversarios de la víspera.

8. — Sin percatarse, se fueron alejando de la revolución auténtica que vive y quiere la Argentina, y la única posible en las condiciones históricas en que ella se está dando, para adoptar, o tolerar, la incidencia de programas y de metodologías inadecuadas y antagónicas con el real proceso de reconstrucción nacional, revolución en paz e integración latinoamericana, producto de un desarrollo sociopolítico auténtico, y desemboque histórico de siglos de experiencias y de luchas nacionales, plasmadas en una concepción coherente.

9. — Al margen de este compromiso con los requerimientos provinciales y las expectativas de su pueblo, el gobierno provincial toleró, y hasta fomentó, a veces, diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública; así, mencionamos sin que se pretenda agotar la enumeración, los siguientes:

a) El conflicto que mantiene aún el gremio que nuclea a los conductores de vehículos de automotores de pasajeros (UTA), el que derivó, sugestivamente, en una cuestión entre el gobierno provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, cuyas consecuencias habrá

de soportar, necesariamente, la población de esa capital; esta huelga tenía como objetivo, según denuncias del propio intendente, el lograr la intervención de esa comuna por parte del Ejecutivo provincial;

- b) El clima gremial adquirió creciente tensión y, lejos de contribuir la labor del gobierno a distenderla, resultó la misma un elemento catalizador y profundizador de enfrentamientos;
- c) En el campo de la seguridad y el orden público, el déficit de actuación positiva del gobierno fue realmente alarmante; tanto así que puede afirmarse que en esa provincia se halla radicado el centro de gravedad alrededor del que gira la más importante acción subversiva que se registra en el país;
- d) De acuerdo a una simple contabilización de hechos, puede afirmarse que desde Córdoba se proyecta también una coordinada acción subversiva hacia el resto del país, que procura, como alternativa, una revolución violenta en lugar de la expresada voluntad de cambio pacífico que sustenta la inmensa mayoría del pueblo argentino;
- e) Tanto en los ámbitos estudiantiles como gremiales de la provincia se ha comprobado el accionar sistemático de grupos subversivos, sin que el gobierno provincial haya querido o haya podido hacerles frente de un modo eficaz; a esto debe sumarse la innumerable serie de hechos violentos e intimidatorios que ha debido soportar la ciudadanía cordobesa sin que hayan sido adoptadas por el gobierno las medidas conducentes a ponerle fin o, por lo menos, intentar su control.

10. — Toda esta situación tiende a una crisis que estalla el día 26 de febrero cuando un titulado comando policial irradia por radio L.V. 3 Radio Córdoba comunicados en contra del gobierno provincial. Esta crisis se agrava cuando el ministro de Gobierno solicita la renuncia del jefe de Policía por presunta inspiración del comunicado. Y llega a su clímax al resolverse, por el gobernador, la exoneración del teniente coronel Navarro de sus funciones de jefe de Policía de la provincia.

Se suceden, entonces, a un ritmo cada vez más acelerado, la detención del gobernador, del vicegobernador y de un grupo de funcionarios entre los que se cuentan ministros, legisladores, subsecretarios, en un número de 75, todos los cuales son conducidos al Comando Radioeléctrico de la Policía.

11. — El jefe de Policía fundamenta públicamente su actitud en el hecho de haberse comprobado, en la Casa de Gobierno, el reparto de armas a civiles con la presunta intención de provocar una resistencia, o un ataque, de imprevisibles consecuencias para la paz y la tranquilidad de la ciudad capital y del resto de la provincia.

12. — La provincia, obvio es señalarlo, había entrado en un período de absoluta falencia institucional. Es así que el día 28 de febrero, en las últimas horas de la tarde, ante la situación creada, asume las funciones de gobernador de Córdoba, invocando las providencias del artículo 100 de la Constitución provincial, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Mario Agodino, quien procedió a prestar el juramento de ley por ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Designó, seguidamente, ministros.

13. — El día de la fecha el actual gobernador ha dictado un decreto, también en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución provincial, convocando al pueblo de la provincia de Córdoba a elecciones para gobernador y vice, fijando como fecha para su realización el día 1º de septiembre del corriente año.

14. — Los hechos vividos durante estos últimos días señalan la culminación de ese desencuentro con la realidad y muestran que la revolución nacional tiene vigencia por sobre los errores o las limitaciones de los que la ignoran consciente o inconscientemente.

15. — Lo hasta aquí expresado nos lleva, de suyo, a condenar la subversión, madre del caos y fuente de inseguridades. Reiteramos que hay que ser esclavo de la Constitución y de las leyes si se quiere alcanzar, en plenitud, la condición de hombre libre.

16. — El Poder Ejecutivo nacional ha seguido, como lleva dicho, con atención el proceso de Córdoba. Ha ponderado sus deberes con referencia a escalas de valores constitucionales, políticos e históricos y resolvió mantenerse en el respeto de nuestro federalismo abriendo un crédito de confianza al nivel político alcanzado por el pueblo de Córdoba para que, por sí mismo, supere sus problemas. Es un riesgo, pero lo es en función de cumplir con la tarea de reconstrucción nacional, también en el plano de las autonomías provinciales.

17. — Esa confianza, al parecer, no habría sido defraudada. Córdoba, por sus propios medios, dentro del juego de sus propias normas constitucionales, estaría recuperando el rumbo de su institucionalización.

Este mensaje y sus agregados implican, así mismo, la voluntad del Poder Ejecutivo nacional de mantener informado al Honorable Congreso de la Nación, facilitando, para su análisis, la totalidad de lo que obra documentadamente en su poder acerca de lo acontecido en Córdoba y de sus antecedentes.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.  
Benito P. Llamblé.

2

Buenos Aires, 2 de marzo de 1974.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, urgido por la situación institucional de la provincia de Córdoba cuya evolución en las últimas horas ha señalado una aceleración en su desarrollo negativo que debe encontrar, sin demoras ni hesitaciones, la solución que restaure la paz y la seguridad de sus habitantes.

Debe señalarse que, a partir del momento en que el gobernador doctor Ricardo Obregón Cano y el señor vicegobernador don Atilio López recuperan su libertad de acción, comienza a crearse un ambiente de tensa expectativa que es substituido paulatina pero planificadamente por movimientos de grupos sediciosos armados, cuyo propósito ostensible es generar el caos.

Los enfrentamientos, con lamentables pérdidas de vidas, se suceden y se afirma que una operación de más envergadura, que podría comprometer a fuerzas de mayor importancia, se encuentra en pleno curso de realización.

Evidente resulta el aceptar que la situación local no puede ser ya controlada por las autoridades provinciales y que este hecho aparece como irreversible.

Este Poder Ejecutivo que ha proclamado su voluntad y su esperanza de que Córdoba, dentro del ejercicio de su propia autonomía, encontrase los caminos de su recuperación institucional, debe reconocer que esa esperanza carece ya de bases de sustentación frente al desborde de los desordenados y la posible actuación de los depredadores.

No ignora que los agentes del caos y de la sedición han de tratar de provocar hechos que desdibujen en el exterior la imagen de esta Argentina en reconstrucción, que quiere, y lo logrará, realizar su revolución en paz, como parte de la anhelada integración latinoamericana.

Es por todo ello y para asegurar la vida, derechos, libertades y bienes de todos los habitantes de ese Estado, que este Poder Ejecutivo, asumiendo las facultades que la Constitución Nacional le otorga, cumple con elevar a vuestra honorabilidad un proyecto de ley por el que se dispone la intervención federal a la provincia de Córdoba a fin de restablecer el ejercicio de la forma representativa y republicana de gobierno y proceder a reorganizar su Poder Ejecutivo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERÓN.  
Benito P. Llambí.

3

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declárase intervenida la provincia de Córdoba al solo efecto de reponer en sus cargos al gobernador don Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador don Atilio López.

Art. 2º — El delegado federal deberá además proceder a hacer efectiva la destitución del jefe de Policía de la provincia teniente coronel (R) Antonio Navarro, ordenando por la vía y forma que corresponda se forme proceso criminal en su contra por los delitos de sedición, secuestro de personas intimidación pública, asociación ilícita y todo otro que fuere resultado de su alzamiento.

Art. 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se tomarán de «Rentas generales» con imputación a la misma.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Carlos Cárdenas.

Señor presidente:

El remedio federal que este proyecto propicia debe mantenerse en los límites estrictos de los valores constitucionales comprometidos por la sedición del jefe de la Policía cordobesa. Hacer efectiva la destitución de este funcionario, y formarle causa criminal es un imperativo que no puede soslayarse bajo ningún punto de vista, en resguardo de principios constitucionales cuya claridad exime de mayores comentarios.

La reposición en plenitud de los mandatarios populares «depuestos» por este singular personaje, resulta así mismo inexcusable como fundamento de la intervención federal, bajo pena de dar pábulo a las versiones que indican que el «navarrazo» fue digitado desde esferas extraprovinciales.

Juan Carlos Cárdenas.

4

#### Proyecto de resolución

*La Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVE:

Invitar al señor ministro del Interior, para que se sirva concurrir a la sesión pública del día 6 de marzo de 1974, a fin de que informe las razones por menorizadas de los hechos que determinaron el envío del proyecto de intervención a la provincia de Córdoba.

María Cristina Guzmán.

Señor presidente:

La República, resentida en su proyección histórica y lesionada en su basamento institucional por los acontecimientos de Córdoba, reclama que todo su pueblo y no una parcialidad, conozcan por intermedio del señor ministro del Interior, cuáles han sido las determinantes de la actitud sugestivamente renuente del Poder Ejecutivo, para aplicar el remedio federal que preceptúa el artículo 8º de la Constitución Nacional ante la actitud criminal del jefe de la Policía provincial, teniente coronel Antonio Navarro, que en acto sedicioso priva de la libertad a los mandatarios electos por voluntad del voto ciudadano.

En el ámbito senatorial, reza la crónica periodística, el señor ministro del Interior ha concurrido a una reunión para informar exclusivamente a los senadores del partido oficialista sobre las razones fácticas que han determinado el envío del proyecto de ley de intervención al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, como si los demás pares, no tuvieran iguales desesperanzas frente al caos de la provincia mediterránea y análogas inquietudes para concluir con la anarquía.

Esta aparcería insólita está reñida con las reiteradas declaraciones del presidente de la Nación quien en plurales ocasiones ha significado que en el país las mayorías y las minorías deben enjugar sus intenciones en un marco de recíproco respeto. Quiero creer que esta actitud ha sido un lapsus calamit de procedimiento del señor ministro del Interior, ya que admitir lo contrario sería entronizar el apotegma antidemocrático de réprobos y elegidos.

Naturalmente que a través de este proyecto de resolución, tendrá oportunidad el señor ministro del Interior para rever su conducta frente a la otra rama parlamentaria y dar las razones fácticas que han determinado el envío del proyecto del Poder Ejecutivo de intervención a Córdoba.

Nuestra angustia ciudadana, como legítimos representantes del pueblo, ha leído atónita el comunicado del diputado Mario Agodino «a cargo del Ejecutivo provincial», donde enfáticamente dice que «se complace en llevar a conocimiento de la población que todos sus actos de gobierno celebrados hasta la fecha cuentan con la conformidad y han merecido el aval del presidente de la República, teniente general Juan D. Perón»; en consecuencia el propio presidente de la Nación expresaría conformidad con el decreto dictado por el diputado Agodino por el que derogan los decretos 740 y 743 del 27/2/74 y se ratifica la total confianza al teniente coronel Navarro para el desempeño del cargo de jefe de Policía de la provincia. Ello significaría que el propio presidente de la Nación estaría cohonestando el hecho criminal de sedición y de incumplimiento a los deberes de funcionario en



que sin duda alguna está incurso el citado teniente coronel Navarro, lo que por supuesto se me hace difícil creer.

La Argentina reclama como exigencia perentoria la vigencia plena de un estado de derecho y de los principios federalistas, que inspiran nuestra vocación política.

Por este abrupto camino andado se está abriendo el cauce de la ley de la selva para sumergirnos en el caos y se evita que el pueblo de la República arribe a su destino de grandeza, de liberación y de goce pleno de los principios republicanos y federales.

*Maria Cristina Guzmán.*

**Sr. Presidente (Busacca).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante del dictamen de mayoría, diputado Cossy Isasi.

**Sr. Cossy Isasi.** — Señores diputados: me toca hacer uso de la palabra en calidad de miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de sostener y explicar las motivaciones constitucionales, jurídicas y políticas que la han llevado a dictar el despacho favorable al proyecto de intervención a la provincia de Córdoba remitido por el Poder Ejecutivo nacional, y a cuyo tratamiento se encuentra abocada esta Honorable Cámara.

Conocidos son no sólo por vuestra honorabilidad, sino por la opinión pública entera, los hechos acaecidos en la provincia mediterránea que la llevaron a un estado de subversión linderó al caos social y político. Para su análisis, no podemos en forma alguna limitarnos a la simple enunciación de los hechos ocurridos en estos últimos siete días, ya que ellos son simples consecuencias o prolongación de un estado sociopolítico que data de mucho tiempo atrás.

Si bien Córdoba constituye un Estado provincial autónomo, es parte integrante de nuestra querida República Argentina; como integrante de ella, ha recepcionado en su seno las distintas alternativas económicas y políticas vividas en la República en los últimos años, adicionando a tal recepción los caracteres propios que le dictaban su idiosincrasia tan particular y las modalidades señaladas por su tradición histórica, las que a su vez han sufrido, más que en cualquier otra provincia, mutaciones significativas. Bien lo señala el mensaje del Poder Ejecutivo al calificar a la provincia de Córdoba como el meridiano político de la Nación, porque su ubicación geopolítica y el desarrollo cultural de sus habitantes determinaron que la mayoría de éstos en el desenvolvimiento de nuestra historia tuviera conciencia histórica de su gravitación en el quehacer nacional, ya que conjugaban en su seno a habitantes que eran ciento por ciento provincianos, pero poseedores a su vez de un avance en la cultura, en las letras y en las ciencias que los equiparaba —por no decir que superaba— a la sociedad que desarrolla su actividad en los otros centros urbanos y portuarios, principalmente en este Gran Buenos Aires.

Esas condiciones que ha poseído el habitante de Córdoba y la conciencia que tiene de tal circunstancia han llevado a través del tiempo a demarcar en el cordobés una particularidad individual que lo identifica frente a los habitantes de otras provincias argentinas, sobre todo por sus dotes sobresalientes en lo que hace a nuestro numen cultural; tuvo y tiene conciencia de su valía, y los demás provincianos siempre lo han distinguido en el consenso general.

Esas características sociales han llevado a través de los años a que en la provincia de Córdoba nacieran inquietudes intelectuales y políticas que en muchas ocasiones significaron un avance hacia el futuro, un adelantarse a su tiempo, un ver más allá, o por lo menos tener la intención de hacerlo así, aunque en la realidad no se ajustara estrictamente al sentir de toda la República. Pero en definitiva, en muchas ocasiones marcó o intentó marcar un sendero para el quehacer político de la Nación y para el quehacer cultural del pueblo.

No corresponde en esta circunstancia efectuar una evaluación ajustada de cada uno de esos hechos sobresalientes de la vida de la provincia mediterránea. Es decir, que no compete en este momento indicar si tal o cual acontecimiento significativo acaecido en la provincia de Córdoba tenía justificativo en el momento, o si los hechos posteriores indicaron que sus aspiraciones estaban equivocadas. Pero el hecho real y cierto es que Córdoba tuvo una actuación destacada y muchas veces orientadora.

Esas circunstancias o perfiles caracterizantes se acentuaron en los últimos años cuando se manifiesta en este Estado mediterráneo la eclosión industrial. Es una nueva oportunidad que tiene la provincia para demostrar al resto de la República el empuje y tesón que tienen sus habitantes para las grandes cosas, para las cosas del pueblo. Córdoba llega así a constituirse en uno de los principales centros fabriles argentinos; el segundo en cuanto a su potencialidad, precedido por Buenos Aires.

Todas esas circunstancias determinaron que la provincia de Córdoba se convirtiera en un gran receptáculo de las inquietudes argentinas, de las aspiraciones del pueblo de toda la Nación. Receptáculo no sólo de trabajo, de actividad física y económica, sino también de las grandes corrientes de opinión que caracterizan a nuestro país. Por eso el mensaje del Poder Ejecutivo, en forma muy atinada, señala que en esa provincia tuvieron su origen dos grandes acontecimientos en la vida política argentina. Por un lado, la contrarrevolución de 1955, y por el otro, la actitud heroica de sus habitantes al producirse el llamado «cordobazo», que se caracterizó por ser un grito y actitud de rebelión contra la opresión y la dictadura militar que azotaba a la Nación.

Momento histórico en que el cordobés generosamente deja de pensar por un instante en su familia, dejando a su esposa y a sus hijos para salir a la calle y teñirla con el rojo bermellón

de su sangre generosa en procura de la liberación nacional. Logró su objetivo pues encendió en todo el territorio nacional la llamada altiya que puso coto al régimen nefasto que nos venía gobernando.

Si bien los objetivos principales eran definidos, no es menos cierto que dentro de esas corrientes se anidaron algunas tendencias que no coincidían plenamente con nuestro ser nacional pero que, no obstante no estar consubstanciadas con la forma de ser de los argentinos y no coincidir plenamente con el pensamiento de éstos, hicieron propicia la oportunidad para tratar de proyectar en un futuro sus ideas extranjerizantes, con el evidente propósito de emplear para ello la bondad del cordobés.

Y es así como vemos en esa provincia mediterránea proliferar hechos que no conciben con una sociedad organizada con vocación de vivir en paz para producir más en beneficio de la sociedad. Estos hechos antisociales no podrán ser desmentidos por los señores diputados pues son del conocimiento de todos ellos. Me refiero a los secuestros, a la guerrilla, etcétera. Tales hechos han traído la zozobra y la inquietud en el hombre común de la provincia de Córdoba.

Acontecido el acto eleccionario del 11 de marzo, el pueblo cordobés mostró una vez más su vocación y su identificación con la causa popular y nacional votando masivamente por los candidatos que a ella representaban. Respondieron al líder de nuestra Nación, es decir que respondieron masivamente al teniente general Juan Domingo Perón, como le respondió la República entera.

Y respondieron a nuestro conductor porque vieron en él el símbolo de la convivencia en paz y del progreso definitivo de la Argentina, como así mismo adivinaron en la fórmula Perón-Perón un porvenir bienaventurado y de dicha. Y en el orden nacional están palpando claramente el inicio de una nueva etapa en la vida social y política de la Argentina; vislumbran el gran despegue.

Así también interpretó el hombre de pueblo de la provincia de Córdoba que lograría esos grandes objetivos en su provincia al votar por la fórmula Obregón Cano-Atilio López, porque los creía consubstanciados con los propósitos patrióticos de Juan Domingo Perón y de Isabel Martínez de Perón.

Por ese motivo y no por otro hecho o circunstancia es que avaló a aquéllos con sus votos en las urnas. No los votó como candidatos de un partido ajeno al peronismo, sino como voceros de los principios que sustenta la doctrina justicialista.

Interpretó que aparte de estar consubstanciados con los principios de la doctrina justicialista, investirían así mismo una personalidad suficiente, una voluntad decidida, una vocación inquebrantable y una fuerza tal que asegurara al pueblo cordobés la realización efectiva y concreta de la revolución nacional. Y adivinaron

estas cualidades porque las mismas deben ser intrínsecas a todo gobernante, a toda persona que aspire a dirigir un conglomerado político máxime en esa provincia que encierra en su pueblo diversas corrientes de opiniones, tanto pujantes como decididamente encontradas.

No corresponde entrar a analizar la identificación de los señores Obregón Cano y Atilio López con los principios justicialistas, ni tengo autoridad partidaria para ello, como también desconozco su actuación sobre el particular. Pero sí son públicos y notorios los hechos que han sucedido en Córdoba en los últimos días que demuestran palmariamente que a los mandatarios mencionados les faltó gravitación personal, poder de decisión y de mando sobre sus subordinados y gobernados.

Este es el punto neurálgico de las causales del pedido de intervención que formula el Poder Ejecutivo. Por eso manifesté al comienzo de mi exposición que no podíamos entrar al análisis de los hechos recientes de Córdoba sin evaluar primero los antecedentes de la vida política y social de la provincia. Porque si analizamos únicamente los hechos recientes nos harán perder por completo una visión panorámica de la realidad cordobesa, y, en consecuencia, incurriríamos en el craso error de calificar esto por los efectos inmediatos, descuidando los que le son antecedentes y principalmente los que le rodean.

Si procediéramos en esa forma equivocada nos reduciríamos a explicar que un jefe de policía privó de su libertad al gobernador y al vicegobernador. No haría falta ser muy jurista para calificar el hecho como una evidente sedición contemplada tanto por la Constitución Nacional como por el Código Penal como figura delictiva, y en consecuencia, aplicar en forma fría y mecánica, en virtud de una hermenéutica elemental lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional, es decir, decretar la intervención al solo y único objeto de restituir en sus cargos a los mandatarios depuestos por el jefe de policía.

Pero si analizamos el hecho señalado precedentemente como un síntoma más de la situación general de la provincia en lo que hace a su vida de convivencia y de enfrentamiento de corrientes ideológicas y nos detenemos a preguntarnos si el mandatario depuesto estaba revestido de las condiciones esenciales que debe tener el gobernante para imponer su autoridad y llevar la paz y tranquilidad a los habitantes, colegiremos que no, porque es evidente, y no desmentido, que en la provincia de Córdoba encontraron campo propicio para su desarrollo las fuerzas que intentan el descalabro argentino, como una etapa de una escalada de mayor envergadura y que en substancia se oponen a las aspiraciones del pueblo argentino por las cuales se votó masivamente el 11 de marzo de 1973 y se eligió a esos gobernantes en la creencia

de que los mismos pondrían coto a tales actividades, por no estar consubstanciadas tales fuerzas con la doctrina del general Perón, la aspiración del pueblo argentino y la tradición histórica.

El hecho de la detención del gobernador y del vicegobernador es una simple consecuencia de un estado general que ha vivido y vive la provincia de Córdoba. Es un estado o situación política que no garantiza en absoluto la vigencia plena del sistema republicano de gobierno, ya que no se encontraba garantizado y menos ahora, el libre juego de los poderes públicos, puesto que sus gobernantes demostraron no ser fieles representantes del pueblo que los votó, o por lo menos no respondieron precisamente al mandato que se les había otorgado.

A esta altura llegamos a la conclusión de que si bien existió un hecho sedicioso indiscutible, éste fue como culminación de un proceso de desfiguramiento del sistema republicano de gobierno. Ello se encuentra acentuado por los sucesos callejeros acontecidos en los últimos días, en que la población entera de Córdoba ha tenido que buscar refugio en sus hogares para salvar sus vidas desatendiendo sus obligaciones y ocupaciones, paralizando la industria y el comercio, deteniendo la actividad bancaria a la vez que se ha visto privada de los alimentos más indispensables para la subsistencia, poniendo en grave riesgo la salud pública y la vida misma.

Cabe preguntarse entonces, Honorable Cámara: ¿puede garantizarse el libre juego a las instituciones públicas que identifican y caracterizan al sistema republicano de gobierno si los integrantes del pueblo, cuyo bien común aquellas buscan desesperadamente, deben vivir constantemente en zozobra y en peligro? En este extremo, ¿tal sistema republicano de gobierno no se habrá convertido en una simple apariencia? ¿No es obligación del gobierno nacional garantizar el sistema republicano, como manda nuestra Carta Magna? ¿Podrá existir, con vida plena, un sistema republicano de gobierno cuando el ciudadano, que constituye su origen y finalidad, tiene que vivir al margen de la ley o sin la protección de ella? Simplemente, no.

He efectuado este somero y sintético análisis de la situación de la provincia mediterránea para poder evaluar más ajustadamente la procedencia o improcedencia del remedio constitucional que sugiere el Poder Ejecutivo de la Nación, porque para tener una ajustada y verdadera respuesta se hace necesario e imprescindible determinar previamente si al disponerse tal medida extrema se garantiza o se avasalla la autonomía de una provincia, sustento de nuestro sistema federal.

Interpreto que resultaría atinado transcribir las palabras de Aristóbulo del Valle, que vienen al caso. Decía el ilustre argentino: «La forma republicana de gobierno de que habla nuestra Constitución es aquella que reposa en la soberanía del pueblo; se constituye bajo el sistema representativo, con poderes limitados llamados

a desempeñar funciones determinadas: un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, un Poder Judicial y también un poder electoral. Pero como se comprende, la base fundamental de la forma republicana de gobierno, en el sentido de nuestra Constitución e instituciones, es el pueblo, de cuya soberanía originaria surgen todos los poderes del Estado. Si, pues, de alguna manera, se altera de un modo radical aquella base, el gobierno republicano se modifica en su esencia».

Examinando la realidad de la vida pública de Córdoba, las angustias y la inestabilidad que sufren el ciudadano y el habitante de Córdoba, la falta de garantías para el ejercicio pleno de los derechos que les otorgan la Constitución Nacional y la provincial, llegaremos rápidamente a la clara conclusión de que en la provincia mediterránea no se dan en lo más mínimo las condiciones esenciales para que tenga plena vigencia el sistema republicano que consagra la Constitución, mientras subsistan las condiciones actuales.

Por ello, la comisión ha interpretado, y así lo sostiene, que la actitud del Poder Ejecutivo de la Nación se ajusta en un todo a los preceptos constitucionales en la materia, como que corresponde en forma indiscutible decretar la intervención sin requisitoria de las autoridades provinciales, pues la situación de la provincia entra dentro de las previsiones del artículo 6º de la Constitución Nacional en cuanto determina que «el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno».

Tal cláusula busca que en todo el territorio de la República impere un mismo sistema de gobierno, ese sistema de gobierno que heredamos desde los albores mismos de la organización nacional, por la voluntad expresa de los Estados confederados. La Constitución quiere que el imperio del sistema representativo, republicano y federal lo sea en forma efectiva, concreta y palpable, es decir, que no se convierta en un simple enunciado teórico. Por ello es que el artículo 5º de la Constitución Nacional declara que el gobierno federal solamente garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones si las provincias, por su parte, se dan para sí un sistema de gobierno que se ajuste a aquellos principios, es decir, que se enmarquen dentro del sistema representativo y republicano.

Los tratadistas más conocidos son contestes en incluir como elemento configurante del sistema republicano, aparte de la división de los poderes, de la democracia, etcétera, el ejercicio de las libertades individuales de los ciudadanos que conforman la Nación. Así lo señala Bidart Campos, entre otros, al comentar las intervenciones federales que puede decretar el Estado nacional sin requisitoria de las autoridades provinciales. En su *Tratado de derecho constitucional* expresa lo siguiente: «Debe vincularse con la

garantía a que se refiere el artículo 59 para considerar que la intervención procede cuando la provincia no cumple una o todas las condiciones bajo las cuales tiene derecho al goce y ejercicio de sus atribuciones. En efecto, si el Estado federal garantiza a las provincias su competencia constitucional, exigiéndoles cumplir determinados recaudos en su forma y existencia política, y si a continuación prevé las situaciones en que procede la intervención federal, lo ha hecho precisamente considerándola como potestad derivada de la misma garantía acordada a los Estados miembros. Puede hablarse en tales casos de un verdadero derecho del gobierno federal, originado en la falta de cumplimiento por parte de la provincia intervenida de las obligaciones que le impone el artículo 59 de la Constitución Nacional, falta que encierra una violación al compromiso de mantener la compatibilidad entre sus instituciones y las instituciones de la federación».

Por su parte, Linares Quintana en su tratado *Gobierno y administración de la República Argentina*, expresa: «Dentro del sistema federativo que ha organizado la Constitución Argentina, las provincias son autónomas, lo que importa decir que —según expresamente estatuye el artículo 98 de aquélla— se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Pero los Estados miembros han delegado en el poder central las atribuciones suficientes para que éste sea capaz de defender a todos y cada uno de ellos, no solamente de los peligros exteriores, sino de los peligros que puedan surgir en el orden interno y sean susceptibles de afectar los respectivos gobiernos y hasta la existencia misma de la provincia».

Esta facultad que la Constitución Nacional da al gobierno federal para resguardar la existencia de las instituciones, de la tranquilidad pública, de la vigencia efectiva del sistema republicano en las provincias es lo que llevó a decir a Rivarola, en forma de ejemplo muy gráfico y conocido, refiriéndose a la intervención, que «en política, es la operación que el gobierno federal ejecuta para extirpar un mal que perturba la vida constitucional de la Nación por mal funcionamiento en el órgano "gobierno de provincia". Su eficacia depende, como en cirugía, de dos circunstancias: el acierto en el diagnóstico, que corresponde principalmente al Congreso, y la habilidad del cirujano, que es el presidente de la Nación».

No hace mucho el jefe de nuestro movimiento nacional justicialista y presidente de la República manifestó, ante preguntas de periodistas —y lo hizo en reiteradas oportunidades—, que en el ejercicio de su mandato será respetuoso de las autonomías provinciales y que el gobierno central a su cargo no se inmiscuiría en la vida interna de las provincias. Tales afirmaciones se han concretado acabadamente en los hechos, como lo demuestra palmariamente la actitud ob-

servada ante el caso de la provincia que nos ocupa.

En efecto; a pesar de la serie de hechos acontecidos en Córdoba, con anterioridad a la actitud del jefe de Policía que culminó con la detención del señor gobernador y del señor vicegobernador; el general Perón no tomó injerencia directa ni inmediata en ellos, esperando que los gobernantes provinciales dieran la solución adecuada, por medio del juego normal de las instituciones provinciales. Pero cuando los acontecimientos culminaron en la forma que es de conocimiento público, cuando evidentemente la prudencia observada hasta el momento no se adecuaba a los principios elementales de la razonabilidad, recién entonces recurre al Poder Legislativo para que éste encuentre el remedio institucional que nuestras leyes indican, no obstante que el Congreso se encontraba en receso y a pesar de la existencia de numerosos casos donde en tales circunstancias el Poder Ejecutivo decretó intervenciones ad referendum del Congreso para cuando éste sesione en forma ordinaria.

Por lo demás, no debemos olvidar que la intervención federal a una provincia es un hecho, un acto o una medida esencialmente política, no obstante el criterio de algunos tratadistas en contrario. Y es intrínsecamente político pues es un acto que no sólo se dicta a la luz del texto frío de la ley y por hechos determinados y palpables, sino que el gobernante recurre a ese remedio constitucional en tal calidez, es decir, en la de gobernante. Para ello evalúa, sí, situaciones determinadas, pero también algunas imponderables, no determinadas ni definidas, que solo su tacto y prudencia le indican.

El presidente de la República, al recurrir a un remedio tan extremo, lo hace luego de un análisis general del país, contemplando la incidencia que ciertos hechos acaecidos en la provincia pueden tener para el resto de ellas, puesto que su misión principalísima, al decir de Aristóteles, es lograr el bien común, lo que se conseguirá solamente con una visión panorámica de la situación y el contralor del Poder Legislativo.

Como consecuencia de este criterio, el Poder Ejecutivo nacional ha optado por la intervención federal conforme a la primera parte del artículo 69 de la Constitución. Si bien se han producido hechos jurídicos que podrían inclinar a algunos señores diputados o sectores a interpretar que sería factible la aplicación del artículo precitado en su segunda parte, es decir, decretar la intervención al solo objeto de restituir al gobernante depuesto ante la requisitoria que éste habría efectuado en forma oficiosa, las circunstancias fácticas que ofrece el panorama político argentino determinan que no es aconsejable tal camino, pues nada se lograría con ello. Sólo se restituiría a un mandatario para retrotraer en su plenitud la crisis política cordobesa, que tiene graves proyecciones en toda la República.

Las circunstancias apuntadas señalan que pudieron haberse presentado al Poder Ejecutivo dos soluciones para afrontar el problema que nos ocupa, pero era privativo de ese poder optar por el camino constitucional que considerare más aconsejable para la Nación toda. No obstante que es privativo del Ejecutivo optar por una u otra solución, y aun encontrándose en receso el Congreso, ha demostrado el presidente de la Nación un respeto ponderable hacia el Poder Legislativo al enviar a nuestra consideración su actitud.

Como acto eminentemente político es indiscutible que en el caso concreto que nos ocupa, la intervención está concretamente ajustada a los preceptos constitucionales.

En cuanto a la conveniencia de la intervención —es decir, saliendo ya del marco eminentemente jurídico de la cuestión—, interpreto que nuestro conductor, a través de los años, ha dado muestra cabal e indiscutida de que su visión de político va más allá de las impresiones inmediatas, que muchas veces incitan a algunos a la rápida crítica de algunas medidas; pero con el transcurrir del tiempo, resulta claramente que eran las necesarias e indicadas para el caso. Su actuación frente a la República ha sido tal que ha despertado en las masas populares una confianza ciega hacia su líder. Y es oportuno destacar que, precisamente, las masas populares no sabrán mucho de códigos y de leyes, pero sí son poseedoras de esa intuición natural que jamás hace errar el verdadero derrotero de la Nación hacia sus grandes destinos. El pueblo siempre ha sabido interpretar e interpreta a su conductor.

El proyecto de intervención podrá provocar ciertos reparos en determinados sectores políticos minoritarios; pero téngase la seguridad de que cuenta con el respaldo del pueblo argentino, que de manera intuitiva comprende los fundamentos metajurídicos que lo fundamentan. Y tengan también la seguridad todos los sectores políticos y los electores que representan, que esta medida que nuestro partido solicita sea aprobada es un paso más que damos para una política futura que erradique de aquí en más y para siempre los actos sediciosos, para poder llevar así a todos los rincones de la República la tranquilidad tan ansiada por el pueblo argentino.

Por los argumentos expuestos, solicito, en nombre de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que los señores diputados se sirvan otorgar el voto favorable para la iniciativa del Poder Ejecutivo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Mauhum.

**Sr. Mauhum.** — Señor presidente: dadas las circunstancias puntualizadas hace un momento, que se relacionan con las renunciaciones indeclinables que para sus respectivas funciones han pre-

sentado y hecho públicas en esta tarde los señores gobernador y vicegobernador de la provincia de Córdoba, resulta ya manifiestamente inoficioso el dictamen que el sector radical formulara oportunamente.

En consecuencia, solicito que quede constancia del retiro de dicho despacho de minoría, el que queda reemplazado por uno nuevo, cuyo texto solicito sea leído por Secretaría.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Así se hará, señor diputado.

**Sr. Secretario (Lavia).** — El texto del dictamen de minoría mencionado por el señor diputado Mauhum es el siguiente:

#### Dictamen de minoría

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el que se declara intervenida la provincia de Córdoba a los efectos de restablecer su forma republicana de gobierno y de decretar la caducidad de los mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador; así mismo ha tenido en cuenta otras iniciativas presentadas por varios señores diputados; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja en minoría la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Declarar intervenida la provincia de Córdoba al solo efecto de normalizar su Poder Ejecutivo, perturbado en su regular funcionamiento por los actos de sedición del jefe de Policía y sus diversas consecuencias.

Art. 2º — El delegado federal para el cumplimiento de su cometido procederá conforme al sistema de acefalía previsto en el artículo 100 de la Constitución de la provincia de Córdoba.

Art. 3º — El delegado federal cumplirá su misión en un plazo no mayor de treinta (30) días y se pondrán a su disposición las fuerzas nacionales de seguridad que sean necesarias.

Art. 4º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a la misma.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 7 de marzo de 1974.

*Fernando Hugo Mauhum. — Raúl Alfredo Galván. — Mario Agustín Grau. — Leopoldo M. Suárez.*

**Sr. Presidente (Busacca).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Mauhum.

**Sr. Mauhum.** — Córdoba vive, en estos días quizá su más grave crisis institucional. Un jefe de Policía desorbitado destituyó al gobernador y al vicegobernador de la provincia el 27 de febrero último y desde entonces la provincia se encuentra sin gobierno y su pueblo a expensas de bandas armadas que, con el respaldo de la Policía insurrecta, han cometido toda clase de desmanes apoderándose de las radioemisoras que

tiene la provincia, incitando desde allí a la subversión, agravando a las instituciones y a las personas y amenazando con armas de todo tipo a pacíficos ciudadanos que no se plegaban a los oscuros designios de estos maleantes que recorrían las calles de Córdoba y de las principales ciudades de la provincia.

Esta inseguridad general que alcanzaba a las personas y a los bienes de los habitantes en todo el territorio de la provincia, en condiciones de peligrosidad nunca antes conocidas, se presenta ante la vista y paciencia del gobierno central que nada hizo ni nada hace —bueno es destacarlo— para devolver la tranquilidad a Córdoba, reprimiendo y castigando como se merecen a los autores responsables y cómplices de la sedición que agravía al pueblo cordobés y a las instituciones republicanas.

Decimos que el gobierno central nada hizo ni nada hace por devolver la tranquilidad a la provincia porque para esto no era necesario, ni mucho menos indispensable, este proyecto que hoy estamos discutiendo; bastaba que el gobierno nacional se dispusiera a cumplir con la ley. Recurriendo nada más que a las facultades que le otorgan las disposiciones de la ley de defensa nacional, pudo llevar a la provincia de Córdoba las fuerzas armadas necesarias para que horas después de la asonada policial fueran restablecidos el orden, la seguridad y la paz en la provincia, restituyéndose en sus funciones a los gobernantes depuestos. Cuando la subversión y la intranquilidad públicas llegaban a sus mayores extremos recién el Poder Ejecutivo nacional se decide a intervenir conforme al proyecto de ley que estamos considerando, mediante el cual se pretende allanar la autonomía de la provincia de Córdoba recurriéndose a los argumentos más deleznable. Cuando no sólo Córdoba, sino el país entero podían esperar y exigir del gobierno nacional que cumpliera con su obligación constitucional de reponer en sus funciones a los gobernantes depuestos por la sedición, tomamos conocimiento de este proyecto insólito de intervención dirigido a convalidar y a consumir la destitución de los gobernantes que llevara adelante el jefe de Policía incurso en el delito de sedición al lograr removerlos de sus cargos.

De ahí entonces que cobrara cuerpo en todos los círculos y sectores ciudadanos de mi provincia la convicción cada vez mayor de que lo que estaba ocurriendo no era la obra de un militar alienado que, como jefe de Policía, resuelve un día emplear las fuerzas de que dispone para destituir y encarcelar al gobernador y vicegobernador y erigirse al mismo tiempo en autoridad suprema de la provincia. Esta convicción empieza a calar hondo en el espíritu ciudadano cuando se advierte que los acontecimientos se inician y desarrollan por varios días con la tolerancia del poder central, como si fuera necesario fomentar el caos para justificar medidas posteriores.

Esta convicción de que el jefe de Policía fue un simple instrumento del gobierno nacional para poder allanar la autonomía de Córdoba con argumentos aparentemente legítimos, se afirma precisamente cuando se conocen los términos del mensaje y del proyecto que estamos analizando. Y esta convicción ciudadana sobre la responsabilidad directa del gobierno nacional en los episodios de Córdoba se afirma todavía más cuando el mismo teniente coronel Antonio Navarro, el jefe de Policía exonerado por sedicioso, es repuesto en sus funciones por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia que detenta el Poder Ejecutivo y que recibe órdenes y consulta sus pasos con el Ministerio del Interior.

Por si esto fuera poco, cabe recordar el episodio casi increíble y, diríamos vergonzoso, de la ceremonia de juramento como gobernador de este presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, que se desarrolla con la presencia del jefe de Policía sedicioso y a su lado —¡oh sorpresa!— el general Della Croce, el comandante del Tercer Ejército con asiento en la ciudad de Córdoba, quien parece ignorar el acto criminal de su subordinado, el teniente coronel en retiro efectivo Antonio Navarro y que, de esta manera, con su desconocimiento o con su tolerancia, compartiendo la ceremonia con un subalterno incurso en delitos comunes, lamentablemente estaba comprometiendo por lo menos el decoro de nuestras fuerzas armadas.

La crisis institucional de Córdoba aparece como de una gravedad incuestionable. Los hechos que la han producido configuran una larga serie de delitos previstos y castigados por la ley penal. El desarrollo de los acontecimientos nos autoriza a pensar fundadamente que tales responsabilidades penales quizá nunca se harán efectivas, mucho más cuando he escuchado el tono tolerante y casi compasivo que acaba de usar el señor miembro informante con respecto al autor de la sedición. Más aún, nos inclinamos a pensar que el teniente coronel Navarro, autor principal de la subversión, será premiado —como es habitual en los malos gobiernos— con algún importante destino en el servicio exterior, para asombrar del país. De esta manera quedaría terminada la farsa vivida en estos días para vergüenza no sólo de los cordobeses, sino de todos los argentinos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

**Sr. Mauhum.** — Pero si esta probable tolerancia con la delincuencia ya constituye de por sí un acto inmoral y lesivo para la República, mucho más grave resulta pretender convalidar con este proyecto los resultados de la acción criminal, porque, quierase o no, decretar la caducidad de los mandatos del gobernador y vicegobernador de mi provincia importa poner el sello final de «visto bueno» a la gestión sediciosa de Na-

varro y, por ende, aceptar cumplidamente los resultados de la mayor quiebra institucional que hayamos conocido.

Si bien estamos en presencia ya de las renunciaciones de sus respectivos mandatos del señor gobernador y del señor vicegobernador, el intento inicial que traduce el proyecto que consideramos consistía precisamente en convalidar la sedición manteniendo la destitución de ambos mandatarios. Este gobierno, que se precia permanentemente de estar trabajando por la reconstrucción moral y material de la Nación —gobierno al cual todos los argentinos sin distinciones partidarias estamos deseando verlo triunfar dentro del respeto irrestricto de las normas constitucionales y legales que forman el andamiaje de la República—; este gobierno, que nació en el marco auspicioso de las mejores y más nobles esperanzas argentinas, increíblemente, sin embargo, va a consumir, mediante la intervención que ha proyectado para Córdoba, una forma inédita aún dentro de las numerosas quiebras del orden constitucional que ha sufrido la República a través de las intervenciones federales desde la organización nacional.

Nunca se había proyectado en el país una intervención federal para decretar, como en este caso, la caducidad de los mandatos populares de los gobernantes que aparecen destituidos por la sedición, no ya por la sedición de un jefe de Policía, como en este caso de Córdoba, sino aun por la sedición de cualquier grupo armado. Nunca antes —digo— se proyectó en este país, desde la organización nacional, y mucho menos se sancionó, una intervención federal dirigida, como en este caso, a convalidar la sedición y la destitución de los gobernantes. Es a este gobierno al que le cabe este triste honor por primera vez en la historia de la República.

Las intervenciones federales a los poderes Ejecutivos de las provincias en toda nuestra historia político-institucional fueron dirigidas a responder a los mandatarios depuestos por la sedición y la violencia. Es ésta la primera vez, repito, que se intenta convalidar la sedición mediante el desplazamiento definitivo de los titulares legítimos del Poder Ejecutivo por la intervención federal. Y es que a nadie se le ocurrió nunca este grosero procedimiento para restablecer el orden jurídico y constitucional subvertido en cualquier provincia mediante la sedición, acción vedada y castigada por la ley. Este original y todavía inédito procedimiento, que repugna a cualquier ortodoxia constitucional y que está muy lejos de ajustarse a los más elementales principios de justicia y de moral política, de ninguna manera prestigia a este gobierno, que aparece tratando de llevar adelante, quíerase o no, mediante la intervención federal al Poder Ejecutivo de Córdoba, el avasallamiento de la provincia.

Estamos convencidos, señor presidente, que de aprobarse y cumplirse la ilegal intervención incluida en la iniciativa que estamos considerando

sentaríamos el peor de los precedentes en materia de intervención federal. Pero además proyectaríamos seguramente sobre el orden y la paz de la República un peligroso cono de sombras que especialmente en Córdoba, convulsionada y víctima directa del atentado institucional, serviría para oscurecer las perspectivas de un futuro promisorio y para arrojar a su pueblo al desánimo y al descreimiento en las ventajas del orden jurídico y republicano dentro de la libertad y la democracia.

Así mismo, señor presidente, la inconsulta medida que se proyecta introduce quizá el más serio factor de perturbación que haya sufrido hasta ahora el diálogo iniciado en la República por las principales fuerzas políticas del país, incluido el oficialismo, como un imperativo ineludible de esta hora argentina. Si el diálogo político promovido con los mejores y más nobles propósitos —por lo menos así lo entiende la Unión Cívica Radical— no alcanza o no sirve para detener este avasallamiento que prepara el gobierno nacional contra la provincia de Córdoba mediante una intervención federal que configura una gravísima infracción a las normas legales y constitucionales comprometidas en el caso; si el diálogo —digo— ya no sirve para esto, nos atrevemos a vaticinar que se acerca su final, pues no tendría razón de ser cuando se advierte que todos los intervinientes no participan en el mismo nivel de buena fe y de honradez política.

Esa es la situación de Córdoba, hoy manifestamente modificada, —diríamos— por la actitud asumida por el gobernador y por el vicegobernador de mi provincia, a quienes yo no vacilo en rendir aquí, no obstante mi condición de opositor, el tributo de reconocimiento que merecen como ciudadanos que en sus funciones públicas cumplieron con su deber y particularmente aseguraron algo que nos es muy caro a los radicales y, sobre todo, a los hombres que están ubicados en la oposición, ya que ellos efectivamente aseguraron de modo permanente las libertades públicas en esa provincia. Este es un título del cual pueden enorgullecerse personalmente, pero también pueden hacerlo los hombres y las mujeres de Córdoba que militamos en la democracia.

No obstante estas condiciones, el problema interno del oficialismo no ha permitido a esos gobernantes continuar al frente de los destinos de Córdoba, por lo cual debemos afrontar este debate tan innecesario como injusto; nosotros lo hacemos con la convicción absoluta de que en toda forma estamos salvando el patrimonio moral y material de la provincia. Con este último concepto venimos a este debate; nos oponemos a un proyecto de ley que allana innecesaria e injustamente la autonomía de Córdoba, y haciéndonos eco de las manifestaciones del propio señor presidente de la República, reclamamos una vez más que se deje a la provincia resolver



sus problemas dentro de sus propios cánones constitucionales.

Con esa finalidad, proyectamos la intervención al Estado provincial, pero al solo efecto de normalizar el Poder Ejecutivo, el cual indudablemente se encuentra subvertido por los resultados de la sedición, y que inclusive actualmente es detentado por un funcionario usurpador. El delegado federal que se designe deberá normalizar el Poder Ejecutivo local, recurriendo a las normas constitucionales de la provincia, las que en forma sabia, clara y precisa prevén la forma de suceso para estos supuestos. Tenemos la convicción, señores diputados, de que solamente de ese modo, pese a la grave situación por la que atraviesa la provincia, ajustándonos estrictamente a las prescripciones de la ley y de la Constitución provinciales podremos solucionar con cordura esta crisis.

No se piense, por ventura, que la intervención federal proyectada habrá de devolver la seguridad y la tranquilidad al pueblo de Córdoba. De ninguna manera; los cordobeses somos lo suficientemente altivos como para resistir una y tantas veces como sea necesario la arbitrariedad del poder central. Nosotros conocemos los resultados de las intervenciones federales. Las hemos soportado y aguantado mucho tiempo, especialmente con posterioridad al año 1966, y no estamos dispuestos a soportarlas calladamente una vez más. No quede ninguna duda de que nuestro pueblo, en todos sus niveles, habrá de resistir nuevamente la arbitrariedad. De modo que nadie se llame a engaño: a Córdoba no se le devuelven la tranquilidad y la paz; a Córdoba se la lleva nuevamente al desorden, lo que indudablemente no permite fructificar en algo grande, positivo y progresista para Córdoba ni para el país. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Señor presidente: el proyecto que nos toca considerar, venido en revisión del Honorable Senado, es quizás el de mayor trascendencia política que ha debido ser considerado por este Congreso de la Nación en lo que va desde el comienzo de su funcionamiento. Es de gran trascendencia política porque cuestiona principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional. Además, el tema en debate viene a introducirnos en la consideración de problemas creados en el enfrentamiento interno del partido gobernante; enfrentamiento interno que, excediendo lamentablemente el marco de sus cauces naturales, desemboca en excesos y en violencia que los organismos deliberativos de la Nación no han vacilado en condenar reiteradamente.

Pero es bueno tomar en cuenta lo que ha comenzado a ocurrir en la provincia de Córdoba; en esta provincia, en que el confuso mensaje del Poder Ejecutivo, el primero de los enviados al

Congreso de la Nación, califica por momentos en forma halagüeña y en otros con severas críticas en cuanto a su composición social y política.

En la provincia de Córdoba, a pocos días de asumir el mandato constitucional los gobernantes cuya conducta ahora se enjuicia, y con la complacencia de tales gobernantes, tal como ocurriera en otros lugares de la República, se rindió tributo y homenaje a las formas más abyectas de la violencia y del terrorismo y a sus más destacados protagonistas, y hasta se llegó a substituir, a cuatro días del 25 de mayo, la bandera argentina por la insignia de una organización terrorista. Y esto con la complacencia de los gobernantes cordobeses.

Pero la situación de desorden y de convulsión en la provincia de Córdoba iba a continuar. Habría conflictos municipales, con esa institución municipal que tanto se preocupan de preservar los artículos 59 y 60 de la Constitución cuando hacen referencia a las hipótesis del caso federal. Habría conflictos gremiales, políticos y económicos que mantenían a la provincia en un clima de constante agitación que desvirtuaba, por cierto, los principios, declaraciones y garantías que conforman las bases constitucionales del sistema republicano.

Y estos últimos episodios, que ahora ocupan la atención de la Honorable Cámara, no son sino el lamentable desenlace de acontecimientos lanzados con la responsabilidad de los gobernantes provinciales, con la demora en su consideración por el propio gobierno nacional y que tomaron la burda forma de que un subordinado directo del gobierno provincial, como lo es el jefe de Policía, no vacila en tomar las armas para derrocar, con una conducta sediciosa, al mandatario elegido por el pueblo.

Este no es un episodio aislado; es la culminación de un largo proceso demorado y consentido, que, además, fue alentado antes de las elecciones y que llega a cundir en forma alarmante en la provincia de Córdoba y en el país, sembrando la discordia, el caos y la anarquía. Discordia, caos y anarquía de las que es, por cierto, discípula dilecta la violencia, que nos ha preocupado más de una vez, y que nuestros partidos Liberal y Autonomista de Corrientes no han vacilado en condenar de manera invariable cualesquiera sean sus autores, protagonistas, artífices o inspiradores.

La conducta sediciosa del jefe de Policía, que no dudamos en condenar en los términos más enérgicos y la posterior asunción del gobierno por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia configuran una clara situación inconstitucional juzgada a la luz de las disposiciones normativas de la Constitución cordobesa, donde no está prevista la asunción del mando por la vía de la ley de acefalía cuando el impedimento que media respecto del gobernador y vicegobernador no es otro que el que deriva de la sedición de un jefe rebelde. Esto afecta al

sistema republicano, yo diría comprometido casi desde el inicio mismo del gobierno cordobés.

Veamos cómo esta situación de hecho, someramente reseñada, se encuentra contemplada en la Constitución de la Nación. El llamado remedio federal que autoriza e impone la intervención del gobierno central se da en los supuestos previstos por los artículos 59 y 69 de la Carta Magna.

Analicemos con claridad estas disposiciones porque la impresión que dan las manifestaciones de esta última desgraciada semana argentina y el enfoque de los textos constitucionales han sido realizados con parcialidad en su contenido.

Dice el artículo 59 que «cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones». Estos conceptos son básicos, previos y fundamentales para analizar la hipótesis de la intervención federal a que se refiere el artículo 69 de la Constitución.

Dentro del sistema federal de gobierno que establece nuestra Carta Magna, en que las provincias son entidades preexistentes a la Nación —aunque a menudo se olvida de ello el poder central— que conservan todo el poder no delegado, es importante recordar que el interés de la Nación, cuya existencia es derivada del Pacto Federal en su esencia misma, requiere un mínimo de condiciones que, fundamentalmente, están relacionadas con las declaraciones, derechos y garantías incluidos en la primera parte de la Constitución que establece el sistema republicano, federal y representativo.

Como se aprecia, no se trata de ir en contra de las autonomías de las provincias cuando éstas se encuentren convulsionadas, sino de preservar la entidad de la Nación cuando la convulsión de las provincias afecta el principio republicano que hace a la esencia misma de la Nación. De ahí que esta reforma representativa y republicana tiene que estar de acuerdo con los principios, derechos y garantías a que me he referido para que pueda asegurarse y garantizarse al gobierno federal la vigencia plena de sus instituciones.

Cuando nosotros examinamos las declaraciones y garantías de la Constitución a que se refiere el artículo 59 y, fundamentalmente, por ejemplo, las del artículo 14, que establece los derechos fundamentales del individuo, como los de trabajar y ejercer una industria, entrar y salir del territorio, publicar sus ideas por la prensa, o cuando advertimos la garantía de propiedad, que establece el artículo 17, o la de la defensa en juicio, prevista en el artículo 18, bases fundamentales de la existencia del sistema republicano, y yendo, por otra parte, a la apreciación de la situación de hecho engendrada en la provincia de Córdoba, donde la violencia, la anarquía y el caos se habían enseñoreado, cabe preguntarse cómo que-

daba resguardada la libertad de los individuos y de grupos de individuos, al igual que el derecho a la propiedad o la garantía de la defensa en juicio, ante la conjunción de las acciones subversivas y de violencia no condenadas, aceptadas y, en algunos casos, hasta con complacencia del gobierno de la provincia. El municipio de la capital de Córdoba y otros del interior de la provincia se vieron progresivamente avasallados.

Bajo estas condiciones y a tenor del artículo 59 de la Constitución, cabe preguntarse lo siguiente: ¿debe, pues, el gobierno federal garantizar a cada provincia el ejercicio y goce de sus instituciones? La respuesta, señor presidente, es categórica: no. No es bajo estas condiciones que el gobierno federal ha de garantizar a las provincias el ejercicio y goce de sus instituciones. ¿Qué remedio queda, pues, cuando la existencia misma de la Nación se ve peligrar por el caos, la convulsión y el hecho de que se desvirtúe, en fin, el sistema republicano de gobierno dentro del territorio sujeto a una autonomía provincial?

El remedio está previsto en el artículo 69 de la Constitución. Obsérvese cómo también respecto de este artículo la interpretación que se ha difundido en los últimos días ha sido parcial y equívoca. El artículo 69 dice: «El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia».

¿Qué es lo fundamental de este artículo, señor presidente? ¿Repeler invasiones exteriores o reponer a las autoridades constituidas cuando han sido depuestas por la sedición o invasión de otra provincia? Esto es, sin duda, importante, pero previo y fundamental es la intervención que la doctrina prevé como el caso de la intervención reconstructiva, que es la que tiende a garantizar la forma republicana de gobierno, porque no es dado concebir que haya forma republicana de gobierno en la Capital Federal y en algunas provincias, y que haya un estado anárquico, de violencia y de caos en otras provincias. La forma republicana de gobierno es una sola y general para toda la Nación Argentina, y no podemos admitir que se confunda porque estaríamos reconociendo que se desvirtúa la esencia misma de nuestra nacionalidad. Tan alto precio no puede pagarse ni siquiera en nombre del principio más caro que guía a nuestras agrupaciones políticas, que es el de la defensa de un auténtico federalismo.

Se ha observado con un error valorativo que lo que debía haberse hecho de inmediato era reponer a las autoridades provinciales elegidas por el pueblo. Pero no bastaba para el hecho de su reposición el que hubieran estado elegidas por el pueblo, aunque ésta es una característica

fundamental del sistema republicano. Era necesario que en el ejercicio del cometido del gobierno de la provincia por el gobernador y el vicegobernador, por la Legislatura, por las autoridades administradoras de justicia, por las autoridades municipales, por el funcionamiento conjunto de la vida en sociedad, en Córdoba estuviera garantizada la forma republicana de gobierno como manda la Constitución, bajo los principios, declaraciones y garantías que ella establece. Es evidente que esto no existía mientras reinaba el caos en Córdoba.

De ahí que cuando sucede el episodio condenable de la sedición y la destitución del gobernador de la provincia, tan inconstitucional como la subsiguiente asunción del Poder Ejecutivo por el presidente de la Cámara de Diputados, para un supuesto de acefalía que no es precisamente el caso del derrocamiento, donde se interrumpe la vida institucional, y si bien es cierto que la situación está prevista en el artículo 22 de la Constitución Nacional y tipificada, además, en el Código Penal para su castigo, existe un hecho previo que es el cuestionamiento de la forma republicana de gobierno. Ese cuestionamiento se produce desde antes del episodio de sedición policial.

El Poder Ejecutivo nacional envía al Congreso un mensaje explicativo, pero se equivoca de temperamento en el análisis de la dimensión del problema, en la consideración del sistema republicano de gobierno y además en las derivaciones que este nefasto caso argentino tendría en Córdoba y en la República.

En el mensaje del 1º de marzo, luego de narrar algunos antecedentes históricos, se destacan características de Córdoba enunciadas en una forma realmente incomprensible para el más avisado de los lectores, y se habla tanto de «ultramontanismo» como de reforma universitaria o de la inauguración de un nuevo movimiento en el año 1932 en la Casa de Trejo.

Asistimos en este mensaje al análisis crítico del ejercicio del mandato del gobernador y vicegobernador de la provincia. También se hace referencia a una serie de problemas que afectaron al régimen de los transportes en vehículos automotores de pasajeros y que involucraron a la Unión Tranviarios Automotor, determinando denuncias del propio intendente municipal de la ciudad de Córdoba en el sentido de que se procuraba la intervención de esa comuna por parte del Poder Ejecutivo provincial. Se alude así mismo a un clima gremial de honda tensión y a la afectación de la seguridad y el orden público, lo que venía a constituir a Córdoba en «el centro de gravedad alrededor del que gira la más importante acción subversiva que se registra en el país».

No obstante reconocer esto el propio Poder Ejecutivo en su mensaje, al destacar a Córdoba como el centro de la acción subversiva que se propone destruir a las instituciones para subs-

tituir las luego por un régimen de violencia y anarquía, y admitir que hasta los propios medios masivos de comunicación como las radios cordobesas, han sido utilizados para irradiar comunicados sediciosos, se culmina por entender, en el punto 17 de ese primer mensaje del Poder Ejecutivo, que la confianza no habría sido defraudada y que «Córdoba, por sus propios medios, dentro del juego de sus propias normas constitucionales, estaría recuperando el rumbo de su institucionalización».

¿Cómo podría estar recobrando Córdoba, el 1º de marzo, el rumbo de su institucionalización si el mismo Poder Ejecutivo afirma que constituía el centro de la sublevación, la anarquía y el caos de la República, de donde partía la subversión organizada hacia todos los puntos del país? ¿Acaso porque había asumido la primera magistratura de la provincia el presidente de la Cámara de Diputados mientras estaban detenidas las autoridades constitucionales mediante una forma de sedición y de violencia ajena al juego de cualquier sistema institucional? Obviamente, no.

Aquí ha actuado, en el mensaje y en la dilación por la consideración del tema, no sólo con torpeza el Poder Ejecutivo, sino que también lo ha hecho con demora y negligencia grave para los grandes intereses de la República. Y tan es cierto esto que al día siguiente, el 2 de marzo, el Poder Ejecutivo tiene que remitir al Congreso otro proyecto francamente contradictorio con el anterior, en razón de los «movimientos de grupos sediciosos armados, cuyo propósito ostensible es generar el caos»; según sostiene en su mensaje, y agrega que ello «podría comprometer a fuerzas de mayor importancia». «No queda ya esperanza frente al desborde de los desordenados y la posible actuación de los depredadores.» «La situación local —según el Poder Ejecutivo al 2 de marzo, un día después del mensaje anterior— no puede ser ya controlada por las autoridades provinciales y este hecho aparece como irreversiblemente.» Es entonces cuando se propone al Congreso de la Nación, por cierto que muy tardíamente, la intervención a Córdoba para restablecer la forma republicana de gobierno.

Discrepamos, pues, con la fundamentación contradictoria de ambos proyectos; pero reconocemos sí que antes de que el Poder Ejecutivo adoptara la proposición de estas tardías medidas como consecuencia de la responsabilidad de autoridades provinciales —responsabilidad e irresponsabilidad de las autoridades provinciales— y por la morosidad del Poder Ejecutivo nacional en tomar las medidas oportunas, desde el inicio de la gestión del gobierno provincial la forma republicana de gobierno estaba seriamente lesionada en la provincia de Córdoba.

Aparecen hoy como elementos dados, como hechos nuevos para algunas bancadas de esta Cámara, las renuncias del gobernador y del vicegobernador, como si esos hechos nuevos justificaran, recién hoy, que se tratase sobre tablas el proyecto de intervención a Córdoba.

Quiero destacar muy especialmente, señor presidente, cuál ha sido la posición de nuestro bloque en esta materia. Sostuvimos, sin realizar ninguna consulta previa con otras agrupaciones partidarias, que el tema de Córdoba debía ser analizado sobre tablas y de inmediato, y que hubiera sido descabido que la convocatoria ocurriera el primer día de los hechos sediciosos. ¿Y esto por qué? Porque la responsabilidad de la intervención a las provincias no es del Poder Ejecutivo sino fundamentalmente del gobierno federal, y en primer lugar, del Congreso de la Nación.

No podemos entonces delegar nuestra responsabilidad para que se tenga que argumentar la adopción de medidas ad referendum, como si éste fuera el medio idóneo en la atención de los graves problemas de la República, cuando ésta nos ha convocado en defensa de sus sagrados principios y fines.

El tratamiento de este problema ha sido urgente desde el principio, y sigue siéndolo, pues debe restablecerse de inmediato en esa provincia la forma republicana de gobierno.

Para sintetizar nuestro pensamiento hasta aquí expuesto he de decir, en primer término, que la intervención que el gobierno federal de la Nación debe efectuar en la provincia de Córdoba no es realizada ni por el presidente de la República ni por sus ministros, sino que la efectúa en primer lugar el Congreso de la Nación, avalado por el Poder Ejecutivo como órgano colegislador, porque ésta es facultad conjunta. Pero debe verse muy claramente, señor presidente, que esta intervención dispuesta por el gobierno federal no es una intervención partidista. Quien lo crea así se equivoca, porque el partidismo y las luchas intestinas en el partido gobernante vienen desangrando ya a muchos argentinos y amenazan con desangrar a la Nación en su conjunto. Esta es una intervención de las instituciones, y deseamos que el Poder Ejecutivo, que debe designar al interventor, acierte en las calidades de probidad moral y de capacidad técnica para que el gobierno de la provincia de Córdoba sea ejercido en atención a los altos fines que el mandato de la República y de la provincia exige.

En segundo lugar, a la necesidad de intervención agregamos nuestro más serio y decidido repudio al intento sedicioso a través de un jefe policial que se ha insubordinado contra las autoridades constituidas de la provincia y que ha pretendido erigir la fuerza en el derecho, cosa a la cual los representantes del pueblo, por el mandato institucional que ejercemos en las bancas del Congreso, debemos oponernos categóricamente.

En tercer término, también lamentamos y condenamos la falta de intervención oportuna del Poder Ejecutivo, que ha determinado que esta situación hiciera crisis en forma cada vez más aguda y que costara varias vidas de argentinos

en enfrentamientos irreconciliables entre hermanos, que pudieron y debieron evitarse.

Es preciso, pues, reconstituir la forma republicana de gobierno para que entonces la autonomía provincial de Córdoba pueda ser plena, en un régimen en el que se conjuguen armoniosamente la libertad y la democracia con la seguridad y la justicia; y además con un profundo sentido nacional, ajeno a toda concepción de violencia o formas veladas de regímenes totalitarios que, con tácticas de infiltración u otras parecidas, quieren deformar el sentir de nuestra Nación para llevarnos a formas extrañas tanto a nuestra tradición como a nuestra vocación y estilo de libertad.

Sólo bajo estas condiciones hemos de tener el federalismo que añoramos, robusto en su estructura, pleno en sus realizaciones, vigoroso en las posibilidades de su futuro. No queremos remedios raquíticos, ni la falta de probidad o la inmoralidad pública que restan autoridad a las decisiones del gobierno. Bregamos en cambio por que se transite, por las instituciones y dentro de ellas, por el camino venturoso de la nacionalidad.

Con el análisis que dejamos enunciado de la Constitución Nacional, que prevé y exige el remedio federal para situaciones de caos, y con la reflexión responsable para que el Poder Ejecutivo se oriente por los cauces de seriedad moral y de capacidad técnica en el ejercicio de su función gubernativa de alta responsabilidad en la hora de la patria, dejamos expuesto el pensamiento del Pacto Autonomista Liberal de Corrientes. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Portero.

**Sr. Portero.** — Si fuera por las promesas y anhelos del señor miembro informante de la mayoría que aseguran —por lo menos en su opinión— un futuro en que no habrá más sediciones ni subversiones, las consideraciones que voy a formular no justificarían gastar el tiempo de los señores diputados. Pero ocurre que en la historia argentina este tema de las intervenciones federales ha apasionado bastante, ha causado generalmente grandes males y, a su turno, los oficialismos —cuando invocan razones— generalmente mencionan la de que nunca más habrá otra intervención porque las excepcionales circunstancias en que se efectúa servirán de ejemplo para las generaciones del futuro.

Como la labor que nos queda esta noche a los diputados de la minoría es dejar un aporte que fije la posición de quienes intentamos servir lealmente el espíritu de la Constitución, voy a formular la expresión de nuestro pensamiento. Vuelvo a decir, no ante el hecho concreto de una sanción ya decidida por la mayoría sino para que sirva de precedente, fundamento y norte ante futuras intervenciones que hayan de decidirse.

Los diputados preopinantes ya han sintetizado la crónica de los hechos ocurridos en la ciudad y en la provincia de Córdoba. Yo quiero re-

montarme un poco más atrás, un mes quizá. Se produce un episodio policial en la provincia de Córdoba: son asesinados a mansalva cinco cooperativistas en la ruta 9; y en medio de todo lo extraño y bárbaro del episodio el 12 de febrero un juez de instrucción, el doctor Miguel Angel Ferrero, decreta la detención de dieciséis policías por ese hecho, y los incomunica. Y estos dieciséis se suman a otros cuatro que ya estaban detenidos por la misma causal y entre los que figuraba un jefe del comando radioeléctrico local. Aparecen luego en algunos medios de difusión serias denuncias del personal policial de la provincia de Córdoba reincorporado en virtud de disposiciones similares e inspiradas en los mismos fundamentos de la ley de amnistía. Este personal formula denuncias respecto a cómo se traba y se perturba el trámite, y se le plantean exigencias un poco insólitas a este personal que se reincorpora. En «El Cronista Comercial» del 14 de febrero de 1974, en un despacho fechado el día anterior en la ciudad de Córdoba, se expresa que ese personal denunciaba la irregularidad de que para ser reincorporado, no obstante estar en condiciones, el jefe de Policía le exigía «que haga un curso de lucha antiguerrillera de un mes de duración», «que se vaya a combatir a la calle», a la «lucha», y luego se le señalaba que las jornadas de trabajo serían de veinte horas, sin descanso en sábados ni domingos, que no hacía falta personal en las oficinas y, por último, que el jefe llamaría a este personal, así fueran las dos de la madrugada, y que debía encontrarse en su puesto porque en caso contrario lo citaría en su domicilio.

Luego también se generaron problemas relativos a la calificación de los funcionarios que están en servicio, inclusive la introducción dentro del escalafón, el presupuesto y las planillas del personal de la policía que venía a reincorporarse. Y ocurren además todas las demás cosas que conocen los señores diputados: el problema de los aumentos de sueldos y las denuncias de que se intentaba violar el Pacto o Acta de Compromiso; las gestiones nerviosas internas y problemas de enfrentamientos dentro del movimiento mayoritario en los que no queremos ni debemos interferir y la figura del ministro del Interior actuando como eje de las conversaciones, gestiones, enfrentamientos, desentendimientos y desinteligencias. Y, para completar esto, se pronuncia una frase sutil, clara, categórica, como suelen ser las que manifiesta y utiliza el señor presidente de la República: en la provincia de Córdoba hay «un foco infeccioso».

Poco tiempo después, el 27 de febrero, ocurren los episodios cuyo relato doy por reproducido a través de las palabras de quienes han hecho referencia al mismo tema. Quizá lo más destacado es que cuando el jefe de Policía es relevado por el gobernador, las fuerzas rodean la jefatura en posición de combate, en posición de tiro, pero no hacia la jefatura sino en contra

de la población. Se toman las radios; se propan palabras de solidaridad con las fuerzas policiales a las que, entre otras cosas, se les dice que el gobernador es responsable de esos problemas que inquietaban al personal que se iba a reincorporar; inclusive en forma sutil se hace circular en medios de la policía provincial que el responsable de que no se terminen de definir los problemas es el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. Se sucede luego la exoneración del jefe de Policía y entonces la guardia de la Casa de Gobierno abandona su puesto y se violan varios principios, entre los que figura el de la eterna lealtad de la guardia, que debe estar custodiando al gobernante. Se ocupa la Casa de Gobierno y luego se producen las detenciones del gobernador, del vicegobernador, de los ministros, de los legisladores, etcétera; se ocupa la cadena de radios, se realiza la toma de los medios de transporte y se produce la obstrucción de la circulación en las calles; hay tres mil quinientos efectivos en rebeldía; se ocupa la Legislatura; hay atentados contra los diarios y contra la casa de un juez de instrucción; hay una resolución del juez federal con fecha 28 de febrero que no se cumple por la que se intimaba a los sublevados para que se disolvieran y depusieran su actitud.

Esta decisión sin fuerza del juez federal y los hechos referidos nos advierten que el derecho es una cosa muy bonita para invocarla en los fallos y sentencias y, en nuestro caso, en los recintos parlamentarios, pero que cuando ese derecho no tiene el brazo armado que lo apoya pasa a ser una declamación. Y esto nos hace pensar si las instituciones, en tanto se las computa únicamente como normas, sirven para algo, en cuanto no se les adosa la interpretación de tipo social. En la norma general, la realidad social debe pasar a constituir algo positivo que haga que el pueblo permanentemente la vaya custodiando, enriqueciendo y cumplimentando.

Luego, merece especial análisis la asunción del cargo de gobernador por el presidente de la Cámara de Diputados —y aquí tengo que repetir algo que dijo el señor diputado Mauhum— avalada por la presencia del jefe de la guarnición aérea de Córdoba, por el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, por el jefe del Comando Noroeste de la Gendarmería Nacional y por el jefe de la Delegación Córdoba de la Policía Federal. En principio se dijo que se trataba de un acto protocolar oficial, al que aquellos fueron invitados. El único problema —¡pequeño problema!— es que junto al titulado gobernador Agodino, que asumía el mando, estaba nada más y nada menos que el jefe sedicioso. Y también estaban los cuatro representantes del gobierno federal, unos por vía del Ministerio de Defensa y otros por el de Interior, que tienen disponibilidad de fuerzas y además la obligación de proceder en el caso de flagrante delito y, en el caso del comandante del Tercer Cuerpo, ju-

jurisdicción y potestad para ordenar allí mismo el arresto conforme a artículos del Código de Justicia Militar.

Concretamente, el artículo 109, inciso 5º, establece que «están en todo tiempo sujetos a la jurisdicción militar los militares retirados», y el artículo 196 dispone que «en caso de flagrante delito, el oficial de servicio, jefe del establecimiento, y, en general, todo militar a quien corresponda en ese momento el mando inmediato de la fuerza del lugar donde el hecho se ha perpetrado, procederá rápidamente a la detención de los culpables, y a comprobar por los medios a su alcance, la existencia del hecho...».

Y estos hombres de las fuerzas armadas y de seguridad no pensaron en extremar el análisis para determinar si había rebelión, subversión o sedición. El «acto social» terminó y el país asistió impávido, asombrado, mejor dicho, extremadamente preocupado frente a este episodio. No se tomó ninguna medida ni esta novedad fue comunicada por estos señores oficiales o jefes de las fuerzas de seguridad a sus inmediatos superiores; cosa rara en momentos en que se moviliza en la ciudad de Buenos Aires y en otras zonas del país todo un engranaje represivo o preventivo —no me importa discutirlo ahora—, con una exhibición de fuerzas que recurren a modernos medios de represión, que como argentino me avergüenza se estén utilizando hasta para simples corridas de personas que lo único que quieren es expresar sus puntos de vista. Pareciera que estas fuerzas armadas y de seguridad, y sobre todo el comandante del Tercer Cuerpo, no pudieran hacer lo que les marca el Código de Justicia Militar: ordenar que un soldado arreste y acompañe detenido al jefe rebelde.

La convocatoria que hace después el titulado gobernador Agodino es nula. El artículo 100 de la Constitución de la provincia lo conocemos todos perfectamente. Pero además de ser nula la convocatoria en su forma lo es también en su esencia, ya que implica una falsedad y una hipocresía en los hombres que se beneficiaron con la asunción del poder, pues afirman que el impedimento consiste en que está detenido el gobernador, pero tienen a su lado al jefe sedicioso, lo que los hace cómplices, coparticipes y responsables en igual o mayor grado todavía que éste.

Ahora, frente al hecho consumado, es fácil decir que hubo una sedición. Yo quiero destacar con qué espontaneidad y sentido correcto y claro del derecho constitucional el vicepresidente 1º de la Cámara y su partido político, el presidente de la bancada de la primera minoría y su partido político, el presidente del bloque de la Unión Conservadora y el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo no hesitaron en señalar que esto era sedición. Pero, cosa curiosa: los únicos bloques que se dirigieron al

presidente de la Nación para decirle que procediera, que no fuera a ocurrir que todas las preocupaciones de Estado le impidieran conocer que se daba lo insólito de que ninguno de los delegados que tiene el gobierno federal en la provincia estaba actuando, los bloques de la Alianza Popular Revolucionaria no obtuvieron ningún eco. Pero ahora, homologado el hecho, legitimado, muchos son los que buscan el culpable.

Es claro que el jefe sedicioso está incurso en ese delito. Pero, ¿qué novedad que la Cámara sólo tenga que decir que se procese a quienes cometen el delito! ¿Y qué hace mientras tanto el Poder Ejecutivo central? Resuelve esperar alegando el respeto de la autonomía provincial.

Yo sé que es obligación del poder central no precipitar la crisis ¿Pero qué se esperaba? Se esperaba poder mostrar a la opinión del país, simultáneamente, la renuncia de los mandatarios depuestos por la sedición y la puesta en libertad de los mismos. Y ahí hubiera terminado todo, con un costo un poco mayor desde el punto de vista institucional que en el caso de la provincia de Buenos Aires, también señalado por el presidente cuando dijo que el gobierno estaba incurso en «negligencia culpable» y se produjo el relevo. Se volvería a entender que, en tanto no se afecten las instituciones, el movimiento mayoritario tiene el derecho de resolver conforme a su concepto de disciplina y responsabilidad los problemas internos derivados de un determinado tipo de ortodoxia y de la interpretación de la línea política a seguir por los gobernantes.

Pero yo no quiero terminar esta parte de mi exposición señalando la responsabilidad por omisión del poder central. Es necesario decir que después aparecieron los gestores no del derecho que debe cumplirse sino los custodios aparentes del orden formal, aunque en esencia homologaran una sedición. Y los titulares de los diarios señalaron que se «arreglaba» la situación cordoba, cuando todos sabíamos que la «normalización» consistía en que el pueblo aceptara mansamente la posibilidad de resolver los problemas dentro de las instituciones pero desconociendo su voluntad.

Esto que señalo no son simples apreciaciones. El 1º de marzo el juez federal decreta la libertad del gobernador Obregón Cano. Pide a la Policía Federal la protección armada, y no la obtiene. Llama al Ministerio del Interior, y no encuentra al ministro. Se reúne la Cámara de Diputados de la provincia y requiere la intervención del poder central. Hay un mensaje publicado en «La Razón» del 3 de marzo, atribuido al gobernador Obregón Cano, que vuelve a pedir el auxilio federal. Y entiendo que en la renuncia que el señor gobernador ha elevado menciona, sin imputar culpabilidad, sin señalar responsabilidad, que durante varios días estuvo esperando que concurra el auxilio federal que había solicitado.

Pero el problema es demasiado grave como para atenernos exclusivamente a lo formal y a las declaraciones que figuran en los diarios. Hay que ir a los hechos concretos. Y para mí el primer hecho concreto lo produjo el Poder Ejecutivo con el primer mensaje que envió el sábado pasado, un mensaje que viene acompañado de una serie de antecedentes. Como lo puede atestiguar el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fui a la comisión a ver el original o la fotocopia del mensaje, porque me parecía mentira que el Poder Ejecutivo de la Nación, que ha dicho y proclamado que el respeto de la ley y la Constitución y la convivencia política deben ser normas que nos obliguen a todos los argentinos, produjera un documento con un contenido de análisis literario y de ensayo de enjuiciamiento de todo un proceso, como si ese poder o este Congreso tuvieran la facultad, a través de la sanción de un proyecto de intervención, o de la medida legal que fuese, de enjuiciar procesos políticos referidos no sólo al gobierno actual, sino que se remontan hasta los comienzos de este siglo, y calificar de culpable o no culpable a la provincia de Córdoba y a sus hombres según sus pensamientos y trayectorias. Es así como encontramos en un párrafo de ese mensaje que se le imputa a la provincia ser un centro de desequilibrio en la vida del país, pues si bien se le reconoce importancia histórica, por las corrientes que vinieron del Norte, se advierte que tan importantes son, tanto se han destacado sus pensadores, sus estudiantes y sus sectores gremiales, que se han excedido y entonces han desequilibrado a la República.

Paso por alto lo del «ultramontanismo» y las referencias a la reforma universitaria consignadas en el mensaje. Pienso que únicamente alguien que en su vida política haya recorrido todo el espectro que va desde la extrema izquierda hasta una posición de derecha oscurantista y reaccionaria puede haber sugerido al señor presidente de la República que firmara ese acopio de antecedentes. Por supuesto que no lo ha redactado él personalmente como hombre de gobierno, porque evidentemente éste no puede redactar todas las cosas. Digo esto con absoluta honestidad, y no se piense que hago un giro literario. Estas consideraciones, aunque las ha firmado con su responsabilidad el presidente, en realidad las ha redactado una persona que ha puesto de manifiesto su complejo de culpa por haber oscilado en todas las gamas del arco iris del pensamiento, la doctrina y la política.

Se le imputa luego a Córdoba que continúe en la confusión ideológica y la indefinición programática. Pero, ¿acaso una provincia como tal tiene la culpa de todo esto?

Se destaca y elogia luego el «cordobazo», hecho importante, claro está; pero al abrir juicio sobre este gobierno, lo cual es factible, porque el Poder Ejecutivo nacional tiene el derecho y la

obligación de juzgar la acción de un hombre perteneciente a su mismo movimiento político, se le imputa y descarga la responsabilidad por el clima gremial y de «subversión».

En este último aspecto creo oportuno recordar que el señor diputado Musacchio, cuando tratamos las reformas al Código Penal, se detuvo en aquella afirmación del señor presidente, quien alegó necesita la reforma penal porque, según dijo, con la ley en cinco días liquidaba la subversión. Señalamos entonces que la cuestión no era tan simple, sino mucho más grave y que tiene raíces y ramificaciones; que no se trata únicamente del problema de una legislación más o menos represiva, sino, por el contrario, que afrontar la situación implicaba ponernos de acuerdo en otras cosas muy superiores a un código penal. Evidentemente, el Poder Ejecutivo ahora tiene la reforma penal, pero no pudo resolver el problema de una sedición en cinco días.

En el párrafo 12 del mensaje se afirma que en la provincia había una absoluta falencia institucional. Afirmamos, a la inversa, que evidentemente no había tal falencia. Había, sí, un gobernador y un vicegobernador detenidos, como lo ha reconocido el propio señor miembro informante. Pero, evidentemente, no estaba configurada la falencia institucional, sino que las autoridades de la provincia estaban siendo víctimas de un episodio de subversión.

Luego, en el párrafo 15, para tranquilidad de todos, se reitera la voluntad de ser esclavos de la Constitución y de las leyes, y la convicción de que Córdoba sola iría a procurar su solución. Sin embargo, muy pocas horas después, mientras leíamos estas consideraciones en los diarios, llegaba el segundo mensaje propiciando la intervención en la forma en que ha tenido entrada en el Honorable Senado. Aquí sí el Poder Ejecutivo se definió, y aun cuando los bloques de la Alianza Popular Revolucionaria discrepemos con la solución propuesta, celebramos que el Poder Ejecutivo haya asumido la responsabilidad y propiciado una medida clara y públicamente confesada en cuanto al propósito perseguido. Todos los demás sectores empezaron desde ese momento a solicitar una intervención para restituir a los gobernadores depuestos, pero era tarde. El oficialismo había elegido otro camino.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Raúl Alberto Lastiri.

**Sr. Portero.** — Aquí debo apartarme de la crónica para ocuparme de los aspectos jurídicos con la pretensión de que sirvan de antecedentes en la interpretación constitucional.

¿De dónde viene este famoso artículo 6º de la Constitución Nacional que obliga al gobierno federal a sostener las autoridades locales?

Cuando Artigas envía sus instrucciones a los delegados, luego rechazados, en aquel famoso episodio que luego significaría el comienzo de la



destrucción de la unidad de los pueblos sudamericanos, especialmente con el Uruguay, incluye un párrafo en el punto 20 de sus instrucciones y dice que «la Constitución garantizará a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana; y que asegurará a cada una de ellas de las violencias domésticas».

Y también, expresa luego, «de la usurpación de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la fuerza armada intente alguna de ellas sofocar los principios proclamados y, así mismo, prestará toda su atención, buena fidelidad y religiosidad, a todo cuanto sea o juzgue necesario para preservar a esta provincia las ventajas de la libertad...».

En el artículo 99 del Pacto de Unión y Alianza entre las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y La Rioja, firmado en Córdoba el 31 de agosto de 1830, se establece: «El supremo poder sostendrá el sistema representativo que existe en las nuevas provincias, sofocando los tumultos o sediciones que tengan lugar con el objeto de alterar el orden legal establecido en ellas».

Después, en el Acuerdo de San Nicolás, en su artículo 14, se determina: «Si, lo que Dios no permita, la paz interior de la República fuese perturbada por hostilidades abiertas entre una u otra provincia, o por sublevaciones armadas dentro de la misma provincia, queda autorizado el encargado de las relaciones exteriores para emplear todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le sugieran, para restablecer la paz, sosteniendo las autoridades legalmente constituidas...».

Alberdi propone una cosa un poco distinta porque está mirando el modelo norteamericano. Y en la Constitución de 1853, inspirada en la filosofía de la Constitución de los Estados Unidos de América, en sus artículos 59 y 69, se hace la enunciación de esa medida esencial que es la intervención o auxilio federal para reponer a las autoridades destituidas por la sedición.

Cuando en la Convención del Estado de Buenos Aires del año 1860 se examina y discute la Constitución Nacional del año 1853, en la opinión de todos los convencionales constituyentes —figura en el acta del 27 de abril de ese año—, se expresa la preocupación que sienten los hombres de Buenos Aires frente a este problema de la intervención. Sarmiento advierte, para que no se repita, el ejemplo de lo ocurrido en la provincia de San Juan, donde el gobierno central envió un grupo de soldados para dificultar la acción de las autoridades provinciales y luego, en función del episodio, invocarlo como causa y pretexto para intervenir la provincia, y deponer su gobierno. También Vélez Sarsfield repite lo mismo y hace hincapié en el cuidado que se debe tener en referencia al requerimiento de las autoridades constituidas.

¿Por qué menciono estos antecedentes históricos? Porque tanto en el proyecto del Poder Ejecutivo como en el de las otras bancadas se habla de la intervención. Y es posible que una interpretación pueda servir para conculcar las autonomías provinciales y otra para respetarlas. ¿Es la intervención un vocablo equívoco; acaso es una institución que suscita dudas? ¿O es simplemente, y este es nuestro criterio, una garantía constitucional del derecho argentino puesta al servicio de la institución señalada en el artículo 59, que es la autonomía de la provincia?

Para emitir un juicio habrá de tenerse en cuenta que en la Convención del 60 hasta se llegó a disentir si debía substituirse la expresión «interviene» el Estado federal por los términos «concorre», «auxilia» o «sostiene» a las autoridades depuestas por la sedición. No hay duda posible, entonces.

La doctrina establece que hay intervenciones motu proprio, por las facultades que tiene el Congreso y excepcionalmente el Poder Ejecutivo. Pero distingue una intervención requerida, otra potestativa y una intervención obligatoria. Y este auxilio obligatorio para el poder central era el que debió prestar para defender la autonomía de la provincia de Córdoba.

Sé que algunos de los legisladores que luego harán uso de la palabra dirán si conozco cuál es el resultado de la historia de las intervenciones federales, referida únicamente a los gobiernos constitucionales, sin computar por supuesto los períodos de facto donde la intervención aparece como una consecuencia natural de la ruptura de las instituciones. Entre los años 1853 y 1966 he computado 158 intervenciones, de las que 106 se disponen por ley y 52 por decreto. En general debo reconocer que casi siempre aparecen conculcadas las autonomías provinciales y que muy pocas veces se destaca el principio reparador de la soberanía del pueblo y del derecho de cada provincia a elegir sus gobernantes, como lo señala la Constitución Nacional.

Pero invocando esos precedentes en forma tan solo estadística no habrá manera de entendernos. Al respecto, leí la crónica de una reunión a la que habrían asistido el presidente de un partido político y el ministro del Interior, donde este último le había señalado que en esta materia una pila de libros dicen sí y otra pila de libros dicen no. Insisto en que esto no puede aceptarse en la doctrina argentina. La interpretación del federalismo y del concepto de la autonomía puede ser causa de que una pila de libros diga sí, en tanto las conclusiones se basen en la filosofía de la Constitución norteamericana. Pero los otros libros dirán no, si se inspiran en nuestro derecho patrio y en los antecedentes españoles.

Nuestro federalismo no es copia del federalismo norteamericano, aunque la Constitución formal sea copia del texto fundamental estadounidense. Nosotros tenemos una realidad política

que está dada por los antecedentes españoles, por la acción posterior en los cabildos, por la lucha de los caudillos del interior y por la puja de todo este inmenso sentimiento federal, muchas veces penado, abrumado y reprimido por el centralismo porteño.

—El señor diputado Molinari Romero pronuncia palabras que no alcanzan a percibirse.

**Sr. Portero.** — Ya he dicho, señor diputado, al comienzo de mi exposición, que el señor presidente de su partido político y el presidente de su bloque habían hecho claras manifestaciones en ese sentido.

Quiero terminar con las referencias sobre el origen de nuestras instituciones.

Si esto es verdad; si es que no puede tomarse fría y literalmente una norma, debemos ir al análisis de las instituciones reales, existenciales, y comprender el hecho concreto a través del cual la vivencia de una sociedad se convierte en norma jurídica. La norma jurídica equivale así a la realidad del pueblo, y la norma es entonces igual a justicia. En esta forma debe interpretarse nuestro federalismo esencial.

Lo contrario, es decir que se puede avanzar sobre una provincia con el simple apoyo en la letra del articulado constitucional sin respetar la voluntad del pueblo, es completamente equivocado y no procede, ahora ni nunca, sostenerlo válidamente en nuestro país.

Quiero terminar con esta larga disquisición marcando la diferencia político-filosófica entre uno y otro modo de entender el federalismo. La frase «quien dice libertad y no dice federación no dice nada» puede hacer pensar que es propia de Hamilton o de Locke, de quien era discípulo Hamilton. Sin embargo es de Proudhon, quien ponía en sus obras como lema: «La propiedad es un robo». El federalismo, según se ve, varía en su acepción conforme a las doctrinas políticas.

Para los que crean en la federación con la filosofía de la Constitución norteamericana, aquella será un mero mecanismo mediante el cual se garantice a cada comunidad local condiciones en que el individuo, sin coacción, pueda gozar de su libertad política y de su propiedad. Cuando, por el contrario, con el concepto fundamental de los fueros españoles, de las luchas de las comunas, de nuestros cabildos y de nuestros caudillos, se entienda que la limitación del individuo está dada para fortalecer el grupo comunal, prevalecerá este concepto de la autonomía que queremos que se defienda y que inspira nuestro despacho y el proyecto de ley que presentó la bancada de la Alianza Popular Revolucionaria.

Hay que seguir minuciosamente el desarrollo de los argumentos jurídicos y de los hechos sociales en la historia. El hecho social que a nosotros nos importa en la Argentina es el de la plena vigencia de la soberanía popular y sus

expresiones locales. El 14 de agosto de 1821 la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires implantó por primera vez en el país el sufragio universal. Esta es la base de nuestra institución federalista y representativa. Ahora, en 1974, hemos descubierto que un jefe de policía, militar retirado, y la inacción de un poder central hacen posible que la voluntad electoral de un pueblo, expresada inclusive en doble comicio, sea destruida por un acto sedicioso frente al cual no hay la suficiente reacción del poder federal.

Sé que vendrán a escucharse en este debate opiniones que interpretan el federalismo en la primera de sus acepciones, opiniones que serán vertidas no solamente por la bancada mayoritaria. Se dirá que lo importante es custodiar el orden y que la soberanía del pueblo no puede ceder ante la entidad de la Constitución. Posiblemente se invocará el precedente de las intervenciones sancionadas por el Congreso o por decreto durante el tiempo de las dos presidencias de Hipólito Yrigoyen. Pero con la aclaración que hice antes, se comprenderá que cuando las intervenciones son para que la expresión del pueblo no tenga cortapisas, o para que se destruyan sistemas montados por gobiernos de la oligarquía o por concepciones demoliberales o del liberalismo burgués, que no tienen correspondencia con los intereses, las ansiedades y los deseos del pueblo de acceder al poder, bajo la aparente caída formal de la autonomía provincial se reconoce un principio superior cual es el de la soberanía del pueblo. Salvo en ese supuesto, todos los demás son argumentos de circunstancia para justificar la caída de un gobierno y su suplantación por otro.

Si me permite la Cámara, he de repetir las palabras de Hipólito Yrigoyen en su mensaje al Congreso en oportunidad de tratarse las intervenciones, e inclusive en el decreto con que intervino la provincia de Buenos Aires el 24 de abril de 1917.

«Frente a esta política desatinada —decía Yrigoyen—, en la que el patriotismo ingenuo y el intelectualismo pedante arrastran insensiblemente a la violencia, resulta difícil sostener que los caudillos representativos de una tradición democrática y de una aspiración popular, que sostenían con las armas en la mano los postulados de la revolución que propugnó la independencia nacional, fueran los representantes de la anarquía. Porque anarquía era sí, y lo comprobaron los hechos, la utilización de la fuerza armada sostenida por los pueblos para defender su libertad para instalar despotismos castrenses y apuntalar intereses oligárquicos.

»La República representativa federal —sostenía más adelante—, instaurada por la Constitución, no existe en la realidad. Y para hallar una justificación teórica a la violación de los principios históricos y morales que informan nuestra concepción federalista, se violenta el claro senti-

do de las cláusulas constitucionales de 1853 para interpretarlas a la luz de la doctrina norteamericana.»

Es que después de Pavón se había falseado el sufragio; la oligarquía había consolidado su poder; había un centralismo que predominaba en la República y que explicaba el porqué de las intervenciones. Pero la situación es distinta en 1974, año precedido de un glorioso 1973, que registró dos episodios electorales que enaltecieron no sólo a todo el pueblo que votó, a la mayoría que ganó y a sus candidatos, sino a toda nuestra Nación, porque la proyectaron en una imagen que es reconocida y admirada por los pueblos y los estadistas de todo el mundo, cualesquiera sean su orientación ideológica y los intereses que tengan en favor o en contra de nuestro país. La situación es ahora totalmente distinta, porque el pueblo ha elegido libremente a sus gobernantes. Ante un conflicto interno y local no queremos que se dañe el principio de la soberanía del pueblo, como va a ocurrir si se aprueba el proyecto de intervención. Hay que restituir nada más ni nada menos que la soberanía del pueblo y la autonomía provincial preexistentes. Constatadas como premisas, debe ir la garantía federal y, de inmediato, si hay sedición, efectivizarse mediante el auxilio concreto.

Aprobar el proyecto del oficialismo, aun en las circunstancias actuales, donde, como lo dije antes al fundar nuestro voto frente a la moción de tratamiento sobre tablas, pareciera que podría lograrse una solución pacífica, es no creer en la sabiduría y en la prudencia del Poder Legislativo cordobés, en la templanza y el equilibrio político de su pueblo y en la actitud responsable que advierte han asumido los protagonistas de este episodio.

No nos seduce ni nos importa que este Congreso solamente declare que está bien o mal el procedimiento del teniente coronel Navarro. No nos satisface ni nos tranquiliza definitivamente decir estas cosas respecto de la inacción del Ministerio del Interior. Son importantes; son graves; pero, en definitiva, puede ponerse término a estos procedimientos erróneos, groseros, equivocados.

Lo malo es que una declaración de la Cámara y la sanción del proyecto de ley no alcanzarán a reparar el daño y, por el contrario, servirán de patente legal, de ropaje legítimo, para homologar los efectos del delito de sedición.

Entienda entonces la Cámara que no queremos callar nada. Que rechazamos categóricamente toda imputación de que nuestra posición, nuestros proyectos, nuestro pedido de sesión especial, nuestro telegrama al presidente, nuestra negativa al tratamiento sobre tablas en el día de ayer, puedan ser actitudes para favorecer el caos. De ninguna manera es así. Todos nuestros actos son claros, porque incluso tenemos el derecho —y nos sentimos interpretados en la Argentina— de opinar sobre los temas políticos e ideológicos conforme nos parezca, en tanto

estemos sirviendo claramente el interés de la Nación y no violemos todos los principios fundamentales que mencioné.

¿Acaso no debemos tener presente que el propio presidente Perón, el 13 de noviembre, cuando se dirigió a los hombres de los partidos políticos en la reunión que tuvo lugar en la Casa de Gobierno —a la que asistimos los intransigentes— dijo que muchas veces se enfrentan los hombres políticos por la falta de un diálogo conveniente, por la falta de buena voluntad, expresando después que era natural la discrepancia, que no podíamos estar todos de acuerdo, que era ilógico suponer que todos pensáramos igual y que cada cual debía venir con el aporte de su punto de vista para enriquecer, si era posible, con brillantes sugerencias y aportes, los proyectos del gobierno?

No tenemos la pretensión de que fuera «brillante» lo que propusimos apenas ocurridos los sucesos; pero estamos convencidos de que ante la situación de hecho debió intentarse la única solución posible. Pero el diálogo no se pudo hacer; la comprensión no llegó; no hubo una manera efectiva, como lo han dicho diputados de otros sectores, de poder analizar esto a fondo, haciendo llegar nuestra preocupación a los niveles máximos del poder.

Aún tenemos esperanzas; no se nos ha colmado la paciencia; creemos en este gobierno. Pero no deseamos encontrarnos algún día con la evidencia de que se nos ha destinado una habitación en la Casa de Gobierno y se nos han dicho hermosos y sentidos conceptos por el presidente de la Nación, en tanto en la práctica eso no funciona y no se puede concretar este tipo de cosas.

Hemos estado dando pasos hacia atrás en todo lo posible para que ello no ocurra, pero hay una breve historia política que necesito narrar y que nuestro bloque hubiera reseñado al señor presidente de la República de habernos éste concedido la audiencia. Hubo al comienzo del proceso un documento reservado, conocido a través de trascendidos en los diarios, no desmentidos en su oportunidad. Por ese documento se le daban instrucciones al movimiento mayoritario indicando cuál debía ser el estilo de interpretación de su doctrina y de su aplicación hasta en los mínimos detalles.

Poco antes el general Perón había sido elegido presidente por el voto de siete millones y medio de habitantes, obteniendo los partidos que no votaron la fórmula que aquél integraba los siguientes cómputos: 2.900.000, la Unión Cívica Radical; 1.450.000, la Alianza Federalista, y 181.000 el Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Qué otro país exhibía esta riqueza? ¿Qué otro país tenía esa unanimidad en torno del principio de la soberanía del pueblo? ¿Para qué hacer entonces ese tipo de pruebas? ¿Para qué caer en este riesgo de la lucha ideológica? Cuando los pueblos tienen la única riqueza máxima, envidia-

ble, de estar unidos en torno a un líder y a un programa, no pueden arriesgar esa unidad. Así lo entendíamos y entendemos los intransigentes. Me remito a los juicios que formulara el señor presidente de la Asamblea Legislativa, senador don José Antonio Allende, antes de que se tomara el juramento al presidente y a la vicepresidente de la República. Dijo cuál era el papel constructivo de la oposición. Los opositores seguimos en lo mismo, pero advertimos preocupadamente que en el natural juego y choque por el poder entre los sectores internos del movimiento mayoritario la presión de algunos grupos es tan fuerte y el apresuramiento de otros es tan acelerado que por mucha fuerza en la competencia interna o por mucho apuro en consolidar cierto tipo de solución puede romperse la estructura de fondo, que es la común para todos nosotros, la que nos permitía hablar con ese fervor de la unidad popular.

Hoy aparece ya esta aventura, que no es solamente la de un jefe de policía, puesto que ha sido tolerada por responsables de distintas áreas. El día de mañana este ejemplo puede afiebrar la mente débil de algún hombre o de ciertos grupos al servicio de un planteo de sector o de facción, y así llegar a poner en juego el poder del pueblo. No quiero incurrir en las sutilezas del editorial de un diario oficialista. Poner en juego el gobierno del pueblo implica poner en juego también al general Perón, que es nuestro presidente, al que respetamos y con el que queremos dialogar en estas condiciones. Entiéndase bien que ésta es nuestra intención y temor. ¡Ojalá no haya más sediciones! ¡Ojalá el peso de la acción del Estado caiga para reprimir todo tipo de acción verdaderamente subversiva! Pero no sigamos corriendo a muchachos que se reúnen para hacer una manifestación callejera, mientras dejamos durante varios días a un jefe sedicioso, en presencia simultánea con jefes que representan a las fuerzas armadas y de seguridad.

Claro que la clave de interpretación no se va a dar hoy, en el año 1974, con esa disquisición que hice hurgando en la doctrina y en el origen de las autonomías provinciales. No somos ingenuos. Vuelvo a decirlo: la realidad de un país indica que todos los movimientos tienen que luchar por el poder y consolidarlo. No nos asusta entrar a este terruño. El poder estatal, la norma jurídica, no alcanzan a ser eficaces si no son poder social. Nos parece bien que los grupos representativos de la vida nacional den al viejo esqueleto proveniente de la filosofía liberal burguesa el contenido de pueblo, sin el cual la democracia carece de sentido y es una simple forma. Queremos que se luche por la Constitución, que seamos esclavos de ella, como ha dicho el presidente, pero con real y efectiva participación del pueblo, para que no asista más, atónito, a hechos de esta naturaleza sin saber qué ocurre, mientras sólo unos pocos iniciados y poli-

tizados estamos en el conocimiento de problemas tales como la intervención y el ejercicio de las autonomías provinciales, y de todas estas cosas tan desagradables que han ocurrido.

Los caudillos dieron su respuesta a quienes desconocieron la presencia del pueblo: la guerra civil. Los regímenes oligárquicos tuvieron, a su vez, la respuesta de los pronunciamientos masivos de Yrigoyen y Perón, cuando ese mismo pueblo pudo elegir. La dictadura militar tuvo la nueva respuesta de los estallidos populares, de los cuales precisamente el «cordobazo» se usó como símbolo y común denominador para encerrarlos a todos en el sentido de un pueblo unido que rompe un régimen de dictadura.

No es posible desconocer al pueblo ni violentar su unidad. Las parcialidades distorsionan y debilitan en cuanto no cumplen esas reglas del sistema. Lo dijo también el señor presidente: defendámonos unos a otros para defender el sistema. Por supuesto que se refería al sistema de la Constitución y de este tipo de democracia, y no al sistema clásico de la dependencia. Pero tengamos prudencia. Se puede atacar la estructura común —no romperla—, pero no se debe dañar la médula de nuestra organización política.

Este es el sentido de nuestro despacho: que el voluntarismo no siga caminando y obteniendo patente de legalidad; que no haya algún trasnochado intento corporativista; que no haya alguna inquietud inoportuna, ilegal e impropia sobre apresuradas sucesiones del mandato popular. Un día se producirán los relevos; pero cuando se produzcan estaremos dispuestos a dialogar para encontrar de nuevo, juntos y por el único camino común que es el de la elección y las instituciones que se irán sucediendo, los robustecimientos del poder en la Argentina. Lo otro es peligroso, sobre todo cuando no es un hecho aislado y se muestra como una tendencia. Empezó con cosas aisladas como la derogación por decreto de algunos decretos leyes —no hagamos la valoración jurídica—, o la limitación del derecho de reunión. Empezó también, y esto es mucho más grave, con la presencia de bandas armadas que el Poder Ejecutivo dijo en determinado momento que no podía controlar, y que dan el espectáculo tan deplorable, en un gobierno que cuenta con tal grado de poder y con la colaboración de todos, de que a varios meses de los episodios que empezaron el 20 de junio de 1973 todavía no sabemos si hay detenidos, no conocemos ninguna aclaración y ni siquiera si fue por motivaciones políticas como para que queden alcanzados un día por una ley de amnistía.

La propaganda oficial debe existir. Pero se va acentuando a través del avance de frases que muchas veces hasta carecen del contenido trascendente que deben tener, así se trate de un aviso repetido que aparece en la televisión. Estamos de acuerdo en que al pueblo se lo

oriente y se le muestre el punto de vista del gobierno. Lo dijo este bloque al considerarse la ley de ministerios: no queremos estructuras huecas, sin sentido político. Esa política debe hacerse porque ésta es la democracia moderna con participación; pero vayamos a lo de fondo y no perdamos el tiempo en frases de propaganda superficiales, que colocan un día arriba y otro día abajo a determinados grupos internos del oficialismo, mientras el país mira preocupado. No nos incumben los problemas internos del oficialismo; pero el resto del país no puede ser un convidado de piedra. Hasta que un día ocurre que lo irracional e intrascendente no se controla y entonces nos tenemos que reunir para encontrar otro tipo de soluciones, más duras y dolorosas.

La supuesta desviación ideológica, en un pleito partidista, no puede llegar a destruir las autonomías para que resuelva sus cosas el movimiento mayoritario. ¿Cómo va a ser causal eficiente la desviación ideológica partidista si en una positiva medida el Poder Ejecutivo ha abierto inteligentemente una política de relación comercial y cultural con todos los países del mundo? Parece una sorna que mientras en Córdoba se cumplía la sedición y en el mensaje del Poder Ejecutivo se enjuiciaba el proceso formativo filosófico —sobre todo de filosofía política— del pueblo cordobés y de sus círculos pensantes, ese mismo día se publicaba el intercambio de mensajes entre el presidente Perón y el comandante Fidel Castro.

Entonces, ¿no será posible que evitemos este tipo de hechos? Podríamos pedir, en ese intento, que se rechace el despacho de la mayoría y, consecuentes con nuestro proyecto, solicitar que se apruebe éste. Pero no nos llamamos a engaños: ante el informe de la mayoría, advertimos que esto no tiene andamio fáctico alguno; no hay posibilidad.

Entonces, vamos a utilizar esta sesión para pedir públicamente orden en la Constitución y en la ley, respeto de los derechos y de las autonomías y también eficiencia, porque estos conflictos hacen que estén parados los gobiernos provinciales y también las comunas. Pedimos que se facilite la participación popular; que se hable de cómo se cumplen o no los programas. Entonces no habrá caos en la República y la violencia perderá clima y causales o pretextos.

Obregón Cano, López y los otros funcionarios que hoy me anticipaba el señor presidente es posible que renuncien y faciliten la solución constitucional en la provincia de Córdoba, no son materia de nuestro juicio, porque no vivimos en la provincia de Córdoba y porque el juicio, en última instancia, lo tendrá que dar el pueblo a su debido tiempo o la Legislatura cuando decida si acepta o no las renunciaciones.

Aclaremos que en Córdoba no fuimos en aparcería, en el buen sentido de la palabra, unidos o aliados con ninguna de las dos fórmulas que

allá contendieron disputándose exitosamente el triunfo. Estuvo nuestra boleta, pobre, modesta, sola, de la Alianza Popular Revolucionaria, con muy pocos votos, menos de los que se pensaba, porque la dimensión de los dos candidatos locales del Frente Justicialista y de la Unión Cívica Radical en ese momento, según nos lo señalaron nuestros propios adictos, arrastraban las preferencias de la ciudadanía; era una magnífica competencia por ver quién elegía el mejor programa o el mejor candidato. No ganó ninguno de los dos, diría yo. La primera diferencia fue muy corta; quien ganó en la segunda fue el pueblo, y a ese pueblo nosotros requerimos que se lo siga respetando.

Que no haya más intervenciones, entre comillas. Nosotros leemos en los diarios que en otras provincias se plantean ya innumerables cuestiones a través de comentarios, denuncias, peticiones de la policía, acusaciones, depuraciones, etcétera. Hagamos un frente único para que no se repitan esos episodios. Si el oficialismo advierte que en ciertas situaciones es indispensable, por su responsabilidad de gobierno tomar una medida, debe hacer partícipes con tiempo a todos los demás sectores que son parte de la Nación.

Yo sé, como a veces se lo señala a nuestro bloque en los debates, que la mayoría tiene derecho a sancionar las leyes. Es claro que es así; pero creo que este aporte, este punto de vista, es precisamente para enriquecer si es posible, como lo ha pedido el presidente, el juicio y la claridad de miras de la bancada oficialista.

Por primera vez desde que los diputados intransigentes estamos en estas bancas después del restablecimiento del gobierno del pueblo, y salvo en el homenaje que se le tributara en la Cámara, citamos palabras de Hipólito Yrigoyen. No por ser aficionado a la historia sino en la tarea de comprender nuestra realidad política, me remito a sus conceptos: «Las autonomías provinciales son de los pueblos y para los pueblos, y no para los gobiernos. Estos pueden o no ser representantes legítimos de ese derecho, y por consiguiente su invocación tiene que ser sometida al análisis de la verdad institucional... La primera autonomía provincial es de orden interno también provincial, y consiste en el respeto a los hechos primarios del ciudadano, para que logre contribuir a la creación y mantenimiento legal de las autoridades de su provincia... Los gobiernos que menosprecian la soberanía de los pueblos, no se sostienen sino en apariencia, desde que lo hacen contra los designios superiores que deben regirlos, y contra la legítima representación, y por sus extremadas injusticias concluyen por perder, en un momento dado, todo lo que han absorbido en largos años de detención».

Debiéramos eliminar de esta última frase la palabra «detención» para distinguir los regíme-

nes oligárquicos a los que iban dirigidos aquellos conceptos, de la causa popular que encarna el peronismo. Lo que hoy puede perderse es todo lo obtenido por el pueblo en largos años de sacrificios y de lucha para reconquistar el poder.

Este es nuestro mensaje al Poder Ejecutivo. Le decimos hoy y aquí, en la Cámara de Diputados y ante la opinión pública de la Nación, que no dude. Que debe elegir entre avalar una fuerte asociación de grupos poderosos o afirmar la presencia de su jefatura sobre veinticinco millones de argentinos convencidos, que son esencialmente parte de la Nación. No por la fuerza sino por la razón y la verdad. No caben dudas ni hay otras alternativas. Queremos que definitivamente se emprenda este camino y se limpie todo obstáculo que impida el avance popular. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Lastiri). — Tiene la palabra la señora diputada Guzmán.

**Sra. Guzmán.** — Nosotros hemos emitido un dictamen en minoría por el cual solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional concorra en auxilio de las autoridades de la provincia de Córdoba, legítimamente elegidas en los comicios del 15 de abril de 1973. A tal efecto se designaría un comisionado federal, quien, con el concurso de las fuerzas armadas y de seguridad, se pondría a disposición de las autoridades para aplastar la sedición y asegurar el sostenimiento y normal funcionamiento del gobierno de la provincia.

Ahora se nos ha asegurado que están en manos del señor presidente de esta Honorable Cámara las renuncias de los mandatarios del Ejecutivo provincial cordobés. Es claro; se han desesperado pidiendo auxilio y los han dejado ahogar por asfixia, se han visto obligados a hacerlo por una omisión que parecería cohonestar su derrocamiento. Supongamos que los mandatarios cordobeses mantienen su decisión de renunciar y no la retiran. Es entonces cuando la autoridad constitucional que le siga debe tener la ayuda del gobierno central para mantener esta solución natural que se dio. Esta actitud es consecuencia del deber ineludible del gobierno federal de mantener la vigencia de las instituciones locales y asegurar el orden y las garantías individuales alterados en este caso por un hecho criminal y sedicioso.

La intervención que propone el proyecto del Poder Ejecutivo, llamada en doctrina intervención reconstitutiva, procede para restablecer o garantizar la forma republicana de gobierno y es entonces cuando el poder federal lleva su acción suprema donde el hecho se produce para restablecer o garantizar dicha forma de gobierno. Es la más extraordinaria y grave medida que puede tomar el gobierno nacional cuando las instituciones provinciales están hondamente desnaturalizadas y corrompidas y siempre que no haya manera alguna, dentro del juego regular de ellas mismas, para normalizarlas o restaurar su funcionamiento regular.

Dice González Calderón que la intervención reconstitutiva debe ser motivada sólo por circunstancias que sean así, extraordinarias y graves, y no transitorias complicaciones en la vida institucional y política de la provincia.

Córdoba se dio su propia solución. El correctivo a los problemas existentes fue hallado dentro de sí. Si conforme se prevé, la Asamblea Legislativa de la provincia de Córdoba acepta las renunciaciones del gobernador y del vicegobernador, se impone la aplicación de los artículos 99 y 100 de su Constitución, que me voy a permitir leer.

Dice el artículo 99: «En caso de muerte del gobernador o de su destitución, dimisión, ausencia, suspensión u otro impedimento, las funciones pasan al vicegobernador, que las ejercerá durante el resto del período constitucional...».

El artículo 100 dice: «En caso de separación o impedimento simultáneo del gobernador y vicegobernador, el mando será ejercido por el presidente provisorio del Senado; en defecto de éste por el presidente de la Cámara de Diputados, quien convocará dentro de tres días a la provincia a una nueva elección para llenar el período corriente, siempre que de éste falte cuando menos un año y que la separación o impedimento del gobernador y vicegobernador fuese absoluta».

Por lo tanto sostenemos que debe ser aplicada esta solución. No puede ser de otra manera en un Estado federal cuya base ha sido y es la autonomía preexistente de las provincias, conservada por ellas sin más limitaciones que las provenientes de la naturaleza y de los fines de nuestra ley suprema. Si se hace lo contrario, las fórmulas constitucionales que estructuran nuestro federalismo serán groseras mistificaciones y el sentido de la autoridad y el poder rodarán por el suelo. Eso es federalismo bien entendido y quienes hagan lo contrario serán los abanderados de un régimen unitario.

El Poder Ejecutivo nacional asistió como un extraño espectador a los hechos gravísimos que sucedieron y no se cumplió con el deber de ir en auxilio de la autoridad constituida; se desoyó el pedido de éstas.

Lamentablemente, señor presidente, si en Córdoba se perdieron vidas y bienes, la causa es la pereza del gobierno central. ¿De quiénes fue la complacencia o la complicidad en los hechos ocurridos? En el país están temblando los cimientos constitucionales por las reyertas internas del partido gobernante.

Claro que todo esto era previsible, pues uno de sus orígenes es la falta de definiciones oportunas del Partido Justicialista. Y ahora se acepta lo inaceptable: el derrocamiento de un gobierno provincial por un acto criminal y sedicioso.

Nos llama profundamente la atención, señor presidente, que en el proyecto del Poder Ejecutivo, que viene con sanción del Senado, no se prevea la convocatoria a elecciones. ¿Es que

acaso se tiene miedo a la decisión de un pueblo? Nosotros le decimos al gobierno del pueblo que al pueblo no se le tiene miedo; al pueblo no se lo amordaza; al pueblo se le deja labrar su destino y ejercer sus derechos naturales. Valga esto como una simple reflexión.

Quienes hoy estamos en estas bancas hemos bregado por poner nuevamente en vigencia nuestras instituciones. Se ha peleado, se ha derramado sangre de compatriotas para que el pueblo pueda expresarse libremente en las urnas. Pero ahora parece que logrado el objetivo de la toma del gobierno ya no vale más la opinión y el deseo de un pueblo.

Señor presidente: la Argentina reclama con urgencia perentoria la vigencia plena del Estado de derecho y de los principios federalistas que inspiran nuestra vocación política. Las autonomías provinciales no pueden ser lesionadas como consecuencia de hechos criminales. Es penoso pero es necesario advertirlo: por este camino la liberación que se ha prometido nunca llegará y es ahora que se está abriendo el cauce de la ley de la selva para sumergirnos a todos en el camino del caos y de la postergación.

Con esto, señor presidente, dejo sentada nuestra posición totalmente contraria a este proyecto que implica un avasallamiento de las autonomías provinciales y un desconocimiento de la voluntad de un pueblo.

**Sr. Presidente** (Lastiri). — Tiene la palabra la señora diputada Morini.

**Sra. Morini.** — Señor presidente: cuando leímos en los diarios el mensaje que acompaña al decreto nacional 686, vimos que lo que se enjuiciaba no era el gobierno de Córdoba: se enjuiciaba a Córdoba en su espíritu, en su vida. Hoy, aquí, el señor miembro informante en este recinto vuelve de nuevo a repetir todas las expresiones contenidas en el mensaje, agregando también que uno de los motivos que justificaban esta intervención son hechos que datan de tiempo atrás. Vale decir que aquí no se enjuicia la conducta de los gobernantes actuales de Córdoba sino que se enjuicia a Córdoba en sí.

El señor diputado Portero ha hablado ya de este mensaje pero pasando por alto una serie de aspectos que él contiene. Nosotros creemos que es lo suficientemente importante como para que lo analicemos detalladamente en esta Cámara.

Se expresa en el mensaje, con un equivocado enfoque histórico, que Córdoba «por su historia, por su tradición de meridiano político durante la época colonial y las largas luchas y guerras civiles que precedieron a la organización e institucionalización nacional, significó para el país un centro de equilibrio a veces y lo contrario generalmente».

Este mensaje ha sido redactado por alguien que no conoce a Córdoba y que ignora su historia; por alguien que incluso no quiere a Córdoba.

No hay autor o historiador que no alabe la misión histórica de Córdoba, que por medio de la acción política ha mantenido y acrecentado la aspiración del interior argentino, defendiendo la democracia con un sentido federal. Más adelante volveremos sobre este particular.

Sigue diciendo el mensaje que en Córdoba «estalla la reforma universitaria del año 1918, en cuyo ideario romántico y teñido de barroquismo intelectual abrevan varias generaciones estudiantiles argentinas y latinoamericanas». Hablar de este modo de los episodios de 1918 y de la reforma universitaria significa desconocer la historia de la educación argentina. El pensamiento del 18 y la reforma universitaria significaron no solamente un cambio de estructuras en la enseñanza superior sino que, como pensamiento revolucionario y liberador, fue llevado a todos los países de América, por cuyo motivo no podía ser tratado de esta manera burlesca y despectiva en el mensaje que comentamos. Aquí se habla de «ideario romántico y teñido de barroquismo intelectual», y, sin embargo, cincuenta años luego de aquellos hechos, en París, en la Ciudad Luz, los muchachos lucharon precisamente por conseguir la aplicación de aquellos principios que constituyeron la base de la reforma universitaria de 1918. Además, como lo ha señalado el señor senador Angeloz, la expresión «barroquismo intelectual» no es correcta. Conforme a lo explicado por él en el debate del Senado, barroquismo significa extravagante y profusión de adornos, lo que, evidentemente, no ocurrió en los hechos ni en el ideario de 1918. En ese debate se señaló que esto había sido redactado con un criterio reaccionario, a lo que yo me permito agregar que ha sido no sólo reaccionario sino realmente ultramontano, y no es posible juzgar de esta manera la reforma de 1918, que nos enorgullece a los cordobeses.

Continúa diciendo el mensaje que «a esta reforma sucede, en 1932, el estallido de un nuevo movimiento en su universidad, la trisecular Casa de Trejo, que replantea, a la luz de los problemas sociales y de la lucha contra la dependencia colonizante, la problemática nacional», agregando que, analizado el proceso desde la perspectiva temporal, continúa «la confusión ideológica y la indefinición programática». En 1932 no hubo replanteo de la problemática nacional, sino simplemente refirmación de la reforma universitaria y, además, una lucha contra la dictadura militar que comienza el 6 de septiembre de 1930. A través de esa lucha, desarrollada en las calles de Córdoba, se obtuvo que fueran restituidos a sus cátedras aquellos profesores dignísimos que separara la dictadura militar. Pero no hubo solamente esto, sino que también se luchaba por extender la cultura universitaria, por la rebaja de aranceles y por el hecho de que la universidad debe irradiarse a todo el pueblo.

Es posible, cuando nos informamos por intermedio del señor diputado Portero, sobre quién era el redactor de este mensaje, que esa persona



haya desconocido estos hechos porque en esa época escribía versos y, posiblemente, no participó de estas luchas en las calles.

Por otra parte, en aquella oportunidad vimos a los jóvenes estudiantes y a los obreros, en multitudinarias manifestaciones, que posiblemente no se hayan repetido más en la provincia de Córdoba, que utilizaban las tribunas con un criterio bien claro, bien definido y bien categórico. De tal manera que no puede el autor de este mensaje hablar de confusión ideológica y de indefinición programática.

También dice: «Y llega, también, para Córdoba, el tiempo de la industria y de las grandes fábricas. Nace una clase obrera apenas llegada del campo —lo cual es cierto—, o de la lenta rumia —no sé lo que quiere decir— de esperanzas del Norte argentino y del Sur boliviano».

Es posible que este señor, que es de Jujuy, se confunda y aplique a la provincia de Córdoba lo que puede ser dable en la provincia de Jujuy. En Córdoba la cantidad de bolivianos es verdaderamente insignificante.

Este mensaje tiene dos partes. La primera de ellas contiene una crítica a Córdoba, y la otra no posee ninguna importancia porque es lo simplemente anecdótico.

En esta primera parte del mensaje también se dice: «Pero allí también se da el remezón del cordobazo». Los sanjuaninos y mendocinos saben muy bien que cuando se habla de remezón se hace referencia a un ligero temblor, a un movimiento de tierra vulgar. El «cordobazo» no fue un remezón, sino que constituyó un movimiento enérgico que consiguió hacer caer la dictadura del tirano Onganía, que ya había anunciado que se quedaría durante veinte años para asolar a esta pobre Argentina.

No fue un remezón. Fue un gran movimiento de todo el pueblo de Córdoba, de sus hombres, mujeres y niños, de todas las extracciones sociales, de cualquier nivel intelectual, de todos los gremios, en fin, de todo el mundo. Córdoba estaba en pie.

Lo importante del mensaje, como he dicho, es la crítica a la provincia de Córdoba. Lo demás es anecdótico, sin importancia. Es simplemente para justificar la intervención a la provincia de Córdoba.

En la segunda parte del mensaje se dice que después del 11 de marzo «desgraciadamente los elegidos —esto va dirigido directamente al gobernador y al vicegobernador—, ya gobierno, no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función y comprender el curso de un movimiento nacional...».

Si estos gobernantes no supieron cumplir con su función, el partido político que ocupaba el poder, y que tenía mayoría en las dos Cámaras, pudo iniciarles el juicio político por no «colocarse a la altura de los deberes de su función».

Otro de los argumentos que se esgrime es que «sin percatarse se fueron alejando de la revolu-

ción auténtica que vive y quiere la Argentina». Y aquí me surge una preocupación muy grande, porque ocurre que todos los grupos políticos oficialistas que están pretendiendo terminar con los gobiernos de provincias dicen lo mismo. Entonces mi temor es que esto siga con Santa Fe, con Salta, con Chubut, con Corrientes y, finalmente, con todas las provincias argentinas.

Es muy vago hablar de esta manera, diciendo «que se fueron alejando de la revolución auténtica que vive la Argentina». Esto no puede ser un argumento para justificar una intervención como la que estamos tratando en este instante.

Más adelante se dice que «el gobierno provincial toleró, y hasta fomentó, a veces, diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública». Y a continuación en el mensaje se da una cantidad de ejemplos. El primero de ellos se refiere al conflicto mantenido por la UTA, relacionado con el transporte automotor. Evidentemente el redactor del mensaje no conoce la provincia de Córdoba.

El problema del transporte es uno de los peores problemas que tiene la ciudad de Córdoba, y no es de hoy ni de ayer, porque lo han sufrido todos los gobiernos. En algunas oportunidades se han producido dos conflictos por año. De tal manera que es una situación por la cual no podemos echar culpas sobre el actual gobierno de la provincia.

Señalamos que el gobierno de la provincia de Córdoba se ha manejado muy mal en el conflicto del transporte. La Unión Cívica Radical lo ha dicho en sus comunicados y en las entrevistas personales con los señores gobernantes. Pero el manejarse mal en cualquier asunto de la administración pública no es motivo suficiente para decretar la caída de un gobierno.

En otro de los ejemplos se dice: «El clima gremial adquirió creciente tensión, y lejos de contribuir la labor de gobierno a distenderla resultó la misma un elemento catalizador y profundizador de enfrentamientos».

¿Qué es lo que pretendía el redactor de este documento?

En Córdoba, los cordobeses sabemos que desde hace muchos años existen problemas de enfrentamientos gremiales. El señor ministro de Trabajo Ricardo Otero, va a normalizar la C. G. T. de Córdoba, y en Alta Gracia reúne a 32 gremios de las 62 organizaciones ortodoxas. Veintinueve gremios, también de las 62, pero legalistas, no concurren, y tampoco lo hacen 11 gremios no alineados.

Se aprecia que en la reunión de Alta Gracia, si bien concurren 32 gremios, no forman parte de la misma otros 40 gremios, entre los cuales se encuentran los más importantes de la provincia por el número de sus afiliados.

¿Qué es lo que pretende el redactor de este mensaje? ¿Cree que el gobernador debía haber considerado este problema y logrado que todos los

gremios de Córdoba concurrieran a esta reunión? evidentemente, no. Conflictos gremiales existen y han existido siempre en todas las provincias. Si se refiere a este problema en particular, es una cuestión antigua que no se puede adjudicar al actual gobierno de Córdoba, el que por otra parte, no puede inmiscuirse en esos asuntos.

Dice el mensaje que en el campo de la seguridad y el orden público el déficit de actuación positiva del gobierno fue realmente alarmante y que se puede afirmar que en Córdoba se halla radicado el centro de gravedad alrededor del cual gira la más importante acción subversiva que se registra en el país.

Parece que no se dispone de mucha información porque los diarios informan constantemente de hechos subversivos realizados en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario y en otros lugares del país. ¿Vamos a echarle la culpa a los gobernadores de Córdoba, para sacarlos del medio, por los hechos subversivos de la provincia, cuando éstos se cometen permanentemente en todo el país? ¿Cuáles son los hechos de tanta gravedad como para determinar la intervención?

También se dice que en el ámbito estudiantil de la provincia se ha comprobado el accionar sistemático de grupos subversivos. Justamente, en estos momentos, los estudiantes están organizando sus centros. Justo ahora cuando no hay ningún malestar estudiantil, cosa que no es muy común en Córdoba, donde muchas veces existe malestar estudiantil. Sin embargo, en estos momentos no existía malestar estudiantil. Los estudiantes estaban organizando sus centros en medio de un ambiente de tranquilidad y normalidad.

A ello debe sumarse, se dice, la innumerable serie de hechos violentos e intimidatorios. Yo me pregunto: si el gobernador y el vicegobernador son responsables de esos hechos violentos e intimidatorios y, por esa razón, se los debe sacar de sus funciones, ¿a quién tendríamos que destituir cuando pensamos en el atentado al senador Solari Yrigdyen, que por poco le costó la vida? En la Biblioteca del Congreso se registró un incendio, y no sabemos aún cómo se produjo. Además, de acuerdo con las informaciones de los diarios, se dan en esta Capital, muy seguido, casos de secuestros, torturas y muertes. Días pasados falleció uno de los jóvenes que solía visitar al presidente de la Nación en Olivos. De conformidad con la primera información periodística su muerte fue consecuencia de una bomba que portaba en su portafolio. Según una segunda versión, fue a causa de una bomba que le arrojaron. No interesa si llevaba la bomba o si se la arrojaron, pero pregunto: ¿puede pasar por la imaginación de alguien que por esos hechos podamos juzgar al presidente de la Nación como responsable de ellos? A nadie se le puede ocurrir semejante idea. De la mis-

ma manera, creo que los que se esgrimen no son argumentos que justifiquen la intervención a una provincia y la decapitación de su gobernador y vicegobernador.

Quiero aclarar, de paso, que no se trataba de un gobernante de nuestro partido, y que lo hemos criticado acerbamente. Cada vez que fuimos invitados a su despacho le hicimos presente nuestras reflexiones con respecto a los actos de gobierno. También lo hemos dicho públicamente en los comunicados de la Unión Cívica Radical. Pero de ninguna manera esas críticas, que siempre hemos creído eran constructivas, podrían dar pie a una intervención. Del mismo modo, cuando en esta Cámara criticamos los proyectos del Poder Ejecutivo y no los acompañamos con nuestro voto, no puede interpretarse esa posición en el sentido de que se pretenda terminar con este gobierno constitucional.

Por otra parte, con respecto a los actos intimidatorios que se adjudican a la pasividad del gobierno provincial, quiero preguntarme qué ha ocurrido en Córdoba en estos días en que la policía estaba enseñoreada en la ciudad. El miembro informante de la mayoría dijo que el pueblo estaba atemorizado. Es cierto. Pero no lo estaba por la gente de la calle sino por la policía y por esos grupos de amigos de la policía a quienes se había dado armas, que portaban brazaletes amarillos y que no permitían el abastecimiento ni la apertura de los negocios bajo apercibimiento de hacerlos cerrar por la fuerza, con la amenaza de las armas de fuego. Esos grupos eran los que quebraron la normalidad en Córdoba.

Se dice en el mensaje que el jefe de policía —ese insurrecto— fundó su actitud en el hecho de haberse comprobado en la Casa de Gobierno el reparto de armas a civiles con la presunta intención de provocar una resistencia. Esto es lo más burdo que se pueda escuchar. El juez indagó a los gobernantes y colaboradores y los puso en libertad y no había ni una persona que tuviera armas ni en las calles ni en las oficinas ni en ninguna parte, como no fueran estos grupos armados por la policía. Esto no sólo es del conocimiento de los cordobeses. Leemos en el diario «Crónica» del 5 de marzo —los hechos comenzaron el día 27 de febrero— que «los grupos de civiles armados, que desde el comienzo de la crisis secundaron a la policía, esta mañana se abocaron a tareas vinculadas con el ordenamiento del tránsito. Su armamento ya no es exhibido con la misma insolencia que en las jornadas anteriores y, por el contrario, tratan de congraciarse con los cordobeses a través de la modificación de su anterior expresión torva por otra más amable». Vale decir que es del conocimiento de todos los habitantes de la República quiénes eran los que tenían armas.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

**Sra. Morini.** — En el mensaje se dice que «los hechos vividos durante estos días señalan la culminación de ese desencuentro con la realidad». Este es un calificativo leve. Y sigue diciendo: «Lo hasta aquí expresado nos lleva, de suyo, a condenar la subversión, madre del caos y fuente de inseguridades. Reiteramos que hay que ser esclavo de la Constitución y de las leyes si se quiere alcanzar, en plenitud, la condición de hombre libre».

Entonces, ¿qué hacía el ministro del Interior? Ya han formulado esa pregunta los señores diputados Mauhum y Portero, y han dado la respuesta correspondiente.

Con este análisis he querido demostrar que la intervención a Córdoba no se ha hecho a su Poder Ejecutivo. Esta intervención a la provincia de Córdoba —repito— es la intervención a Córdoba en su espíritu y en su vida, y a estos señores mal informados acerca de lo que es mi provincia les respondo con palabras del historiador Félix Luna.

«Córdoba es la constante alternativa histórica. Si el destino de Buenos Aires está irremediablemente ligado a Europa a través de su ancha boca fluvial y oceánica, el de Córdoba se enraíza con lo americano, se proyecta al corazón del continente y tiende a americanizar a la vez toda la perspectiva argentina. A partir de estas fatalidades geopolíticas, el papel de Córdoba en la vida de la Nación consiste en proponer racional o intuitivamente, pacíficamente o en el tumulto, planteos que pueden llamarse contrarrevolución de Mayo o «cordobazo», reforma universitaria o «Córdoba Heroica», liberalismo juarista o intransigencia sabattinista; siempre diferentes y a veces antagónicas a los valores contemporáneamente predominantes.

«Este rol supone una intensa politización y un espíritu agudo. Docta Córdoba, no sólo por la formativa presencia de su universidad sino también por la innata sabiduría de su gente, ducha en ese análisis sagaz, esa crítica sutil y hasta esa ironía desmitificadora que definen un trajín político practicado cotidianamente, casi como una forma de vida. A lo que cabe agregar que, asombrosamente, esta vocación humanista por esencia no se contradice con esa otra vocación técnica que también define el alma cordobesa y que viene desde el colonial «Calicanto» que defendió a la ciudad de las crecientes, o la Fábrica de Armas Blancas de la época independiente para pasar por la proeza del primer dique San Roque y culminar ahora con el sólido cinturón industrial que le da su sello.

«¿Acaso puede existir un destino más alto que este que viene ejerciendo Córdoba desde hace cuatro siglos? Función acuciante, inconformista, disidente, suscitadora de polémicas y confrontaciones, generadora de corrientes renovadoras, inauguradora de nuevos estados colectivos de conciencia, desnudadora implacable de mitos políticos, tabúes ideológicos, formalismos

y convencionalismos. Misión de inquietud y cuestionamiento, como la del tábano socrático».

**Señor presidente:** ésta es la revancha en contra de Córdoba, por todo lo que Córdoba significa, ha significado y significará. Hace siglos se dijo: «Delenda est Cartago». Ahora se pretende decir: «Delenda est Córdoba». Pero el pueblo de Córdoba y la Unión Cívica Radical no se prestarán a ello y defenderán a la provincia en cuanto oportunidad sea necesario. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan a la oradora.*)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Valenzuela.

**Sr. Valenzuela.** — Señor presidente: debo confesar que con un poco de emoción estaba escuchando en forma atenta una tonada cordobesa, que con tanto fervor y ardor defendía a la provincia. En este recinto, a lo largo de muchos años, muchas tonadas de las distintas provincias argentinas han venido a defender a sus pequeños terruños contra el avance del poder central.

Debo confesar también que entro a este debate con profunda pena: por Córdoba, pero sobre todo por el país y por las instituciones argentinas que, día a día, y a través de los hechos y acontecimientos que se han venido sucediendo en este último año —consciente o inconscientemente muchas veces, y otras por la buena fe—, se están viendo pisoteadas y avasalladas.

A cinco meses escasos de la asunción del mando por el teniente general Perón —el hombre al que masivamente votó el setenta por ciento del electorado argentino—, ya se están produciendo hechos en el país que no se compatibilizan en modo alguno con los postulados de paz, de tranquilidad e institucionalizadores del pueblo argentino. Debo confesar —y en esto no va un agravio hacia la bancada mayoritaria, sino la reflexión— que, por lo menos nuestro sector, observa alarmado cómo la figura de este hombre que está dirigiendo los destinos del país se va deteriorando día tras día por los malos consejos de sus asesores políticos.

**Sra. Fadul de Sobrino.** — No le podemos permitir que trate así al primer magistrado de la Nación, porque el señor teniente general Perón...

**Sr. Valenzuela.** — Le concedo una interrupción, señora diputada.

**Sra. Fadul de Sobrino.** — El teniente general don Juan Domingo Perón agiganta su figura. En este momento vemos a nuestro país pacificándose día a día. Y todos sabemos que estos asuntos se están tratando con cierta picardía y simulación por parte de algunos partidos políticos.

Por ello es que no podemos permitirle al señor diputado que en este recinto trate en esta forma al excelentísimo señor presidente de la Nación.

**Sr. Valenzuela.** — Yo creo que la señora diputada me ha entendido mal.

**Sra. Fadul de Sobrino** — Le he entendido perfectamente bien, señor diputado. Pero le reitero que la figura de nuestro líder se agiganta día a día. Por eso no le vamos a permitir...

**Sr. Valenzuela.** — No le estoy pidiendo permiso, señora diputada. Además, no habré de conceder más interrupciones, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Valenzuela.

**Sr. Valenzuela.** — Señor presidente: ratifico lo que he dicho, a la vez que reitero que en absoluto me ha movido en la instancia la intención de agraviar ni al presidente de la República ni a la bancada mayoritaria.

Nos encontramos abocados a la consideración del proyecto del Poder Ejecutivo sobre intervención federal a la provincia de Córdoba. Desgraciadamente, lo vertiginoso de los hechos que se han venido sucediendo en estas últimas horas obliga a muchos de los miembros que integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales a rever posturas anteriores. En esta emergencia quiero dejar expresamente aclarado que retiro la disidencia parcial que mantenía con respecto al despacho de la mayoría y la convierto en disidencia total por las razones que voy a explicar.

Se está tratando un proyecto de intervención a la provincia de Córdoba; pero hace muy pocas horas nos enteramos por boca del señor presidente del bloque mayoritario que los mandatarios cordobeses han presentado la renuncia a sus cargos. Entendemos entonces que el proyecto de intervención no tiene ya significado jurídico. No se puede intervenir un Poder Ejecutivo que no existe y, por consiguiente, vamos a votar en contra de la intervención.

Entendemos que deben entrar a jugar los resortes constitucionales de la provincia de Córdoba. Pero sin perjuicio de ello es necesario que hagamos una breve relación de los hechos que han motivado este desgraciado suceso.

El problema de Córdoba se plantea a raíz de la subversión de un ex jefe de policía que encarceló al gobernador, al vicegobernador, a algunos legisladores provinciales y a funcionarios del gobierno del doctor Obregón Cano. Pero este hecho tan grave, casi sin antecedentes en la República, encuentra como respuesta por parte del poder central, que tiene en sus manos el recurso del artículo 69 de la Constitución Nacional, una pasividad asombrosa, rayana en la negligencia. Y esto ya no es en un ciento por ciento responsabilidad del presidente de la República: es responsabilidad del ministerio político de este país, del Ministerio del Interior.

Y bien, ¿qué pasó? El Poder Ejecutivo envía un proyecto de intervención a Córdoba, pero lo remite varios días después de que han ocurrido hechos luctuosos en la provincia medite-

rránea. Setenta y dos horas después, más o menos, de que el gobernador fuera encarcelado; de que jure, no sé en qué forma, el presidente de la Cámara de Diputados; setenta y dos horas después de que ese presidente, que dice es el gobernador constitucional de Córdoba, confiese a la prensa que el jefe de policía sigue insurrecto y no le responde, y esto fue publicado por los diarios del país; setenta y dos horas después de los tiroteos y de una serie de hechos desgraciados que van configurando un panorama al que el Poder Ejecutivo debió haber dado una solución inmediata.

Yo me pregunto, señor presidente, si esto es una crisis institucional o una crisis de las instituciones argentinas. Pareciera que es un simple juego de palabras, pero yo no lo interpreto así. Crisis institucional podría ser un golpe de Estado, pero las instituciones básicas de la República quedan como una garantía, como una reserva, para cuando el orden institucional y constitucional en el país es restablecido, como en el caso de 1966, en que las instituciones básicas del país quedaron como una reserva para todos los habitantes: el Parlamento, el sistema republicano, el sistema representativo federal.

Pero resulta que este hecho de Córdoba, que es gravísimo, pero que no es otra cosa que la gota que ha rebasado el vaso de agua, me hace pensar que lo que está entrando en crisis, quizás artificialmente, no es otra cosa que las propias instituciones básicas del país. En este sentido los argentinos debemos partir de esta premisa y preguntarnos si queremos vivir en un sistema representativo, republicano y federal o si deseamos vivir en una tiranía o en una monarquía, porque son sistemas distintos.

Digo esto porque en la calle he recogido el rumor de mucha gente que dice: ¿para qué quieren la Constitución Nacional si no se la aplica? ¿Para qué quieren la ley si la están pisoteando? ¿Para qué quieren un gobernador elegido por el pueblo cuando un teniente coronel retirado, jefe de policía, lo puede encarcelar siendo su subalterno? ¿Para qué quieren, en definitiva, el Congreso de la Nación si han tenido una dictadura que dictaba las leyes?

Esto constituye una crisis de fe en las instituciones básicas del país. Yo pregunto si estamos dispuestos a vivir con estas instituciones básicas del país, que son la esencia de la República y de la nacionalidad. Si así fuera, debemos sujetarnos a ellas, como dice Perón: sujetarnos a la ley para vivir dentro de la ley.

Yo desearía hacer resaltar inclusive un poco más algunos de los errores cometidos, quizá de buena fe —yo no dudo de la buena fe— por el Ministerio del Interior. Quisiera hacer una breve comparación por reducción al absurdo. El Ministerio del Interior se movilizó muchas horas después de la insurrección del teniente coronel Navarro, y setenta y dos horas después recién toma intervención el Congreso. ¿Qué pa-

saría si en la provincia de Buenos Aires una banda armada subversiva al mando de Santucho, pongamos por caso, toma el gobierno de la provincia y encarcela al actual gobernador? ¿El Poder Ejecutivo tendrá tanta displicencia en este caso como en el de Córdoba? Si así fuera, yo considero que esa actitud sería suicida y convendrán conmigo todos los señores diputados que eso no podrá ser.

Indudablemente flota un poco en el ambiente de la calle, y también en el nuestro, el convencimiento de que detrás de toda esta locura —llamémosle así— del jefe de policía de Córdoba existe algo, porque un funcionario subalterno como lo es el teniente coronel Navarro no se levanta contra la autoridad constituida sublevando la tropa si no tiene algo atrás que lo respalde. Lo que flota en el ambiente es la sospecha acerca de qué puede existir atrás. Atrás del coronel Navarro, del gobernador de Córdoba y del presidente de la República no debe existir otra cosa que la ley, a la que todos tenemos la obligación de sujetarnos. No pueden existir sombras, poderes ocultos que estén corrompiendo voluntades y haciendo caer gobiernos. Es bueno que esto lo digamos alguna vez en este Parlamento. Siempre se han buscado pretextos para intervenir las provincias. Problemas políticos han obligado a los gobiernos a buscar pretextos para intervenirlas, como en el caso de San Juan en 1934, en que le fabricaron una revolución a Cantóni, y el gobierno central, en vez de intervenir para reponerlo, lo hizo para destituirlo, que es lo mismo que ahora pasa con Córdoba.

También existe una dualidad de criterios en la apreciación de la política a seguir. En materia de política exterior el gobierno argentino se está manejando brillantemente al romper fronteras ideológicas y comerciales con todos los países del mundo y cumpliendo lo que en este aspecto prometió. Pero en el orden interno existen fronteras ideológicas, aunque no adjudicó al gobierno la exclusiva responsabilidad, puesto que todos somos responsables de lo que está ocurriendo en el país. Si esas fronteras ideológicas no trascendieran el marco de un partido gobernante u opositor, nosotros no tendríamos que intervenir, pero están trascendiendo su marco natural para entrar en el de las instituciones y en la administración pública.

Señor presidente: ahondando en el aspecto jurídico de este problema, vamos a decir con Sánchez Viamonte que la intervención es un acto de soberanía nacional que consiste en la imposición de la voluntad que emana del cuerpo orgánico de la Nación y referida a una parte componente de ella, en este caso una provincia argentina. Pero como la soberanía se resuelve esencialmente en su identificación con el derecho no puede tener otra forma de expresión que una norma jurídica nacional impuesta a la provincia como una voluntad superior a ella. Pero esa voluntad no es la de los hombres que ejercen

el gobierno ordinario sino la voluntad soberana y permanente de las normas constitucionales.

Traigo a colación este pensamiento de Carlos Sánchez Viamonte y la interpretación que él hace de la norma constitucional porque el artículo 69 de la Constitución es perfectamente claro y enumera cuatro casos en los cuales la Nación puede y debe intervenir en una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores y restablecer las autoridades constituidas depuestas por sedición interna o por invasión de otras provincias. Pero se da el caso de que en este momento, desde hace tres o cuatro horas, ninguno de los presupuestos del artículo 69 de la Constitución Nacional se puede aplicar en la provincia de Córdoba. El gobernador y el vicegobernador de la provincia han renunciado indeclinablemente a sus cargos y, por consiguiente, lo que corresponde es que la provincia de Córdoba resuelva ese problema institucionalmente en su propio seno, aplicando la norma constitucional correspondiente de la provincia. Por esto vamos a votar en contra de este proyecto de la mayoría.

Para terminar voy a retomar un pensamiento de la señora diputada Morini. Ella hablaba de un remezón. Nosotros sabemos bastante de remezones y de temblores. Pero en este momento el temblor o el remezón no ha llegado solamente a las instituciones cordobesas: están temblando las instituciones básicas de la República; está temblando el sistema republicano, representativo y federal de gobierno; están temblando el sistema parlamentario y el sistema presidencial elegido por el pueblo. Parece que mucha gente no se da cuenta todavía de que estos sucesivos atropellos, consentidos ingenuamente, están poniendo en peligro la paz de la República y también algo mucho más grave: las instituciones básicas del país. Vuelvo a hacer entonces la pregunta que hiciera hace unos instantes. ¿Queremos vivir en un país representativo, republicano y federal? ¿Queremos vivir en una república o queremos vivir en una monarquía o en una tiranía?

Partamos de esta premisa básica: las instituciones fundamentales de nuestro país están en peligro. Hay una crisis de fe, pero aunque así fuera debemos reformar y remodelar esas instituciones básicas para que sirvan de reserva para las generaciones futuras.

**Sr. Presidente** (Odena).— Tiene la palabra el señor diputado Sueldo.

**Sr. Sueldo**.— Señor presidente: hago mías las argumentaciones formuladas en este recinto por los diputados que se han opuesto al proyecto de intervención y especialmente las expuestas por el diputado Portero y —¿por qué no decirlo?— por mis comprovincianos. Si bien por una radiación de dieciséis años en la provincia de Buenos Aires, éste es mi distrito de adopción, no he perdido, desde luego, la fidelidad al sentimiento y a todos los vínculos que me ligan con mi tierra

natal. De modo que siento este atropello como un golpe, como una herida en el fondo de mis afectos y de mis convicciones.

No voy a ocultar, señor presidente, que si bien puede ser un tema remanido a esta altura de mi debate el mensaje de la triste fama, que ya ha sido hecho trizas aquí, me siento forzado a referirme ligeramente a él. Ese mensaje con el que se acompañaba el simple envío de los antecedentes al Congreso, es un texto incoherente, modelo de lo que no se debe escribir; muestra de lo que no se le debe hacer firmar al presidente de la República, que no tiene tiempo ni tampoco obligación de leer todo lo que se le pone delante; ejemplo, en fin, de lo que no se debe descargar sobre su responsabilidad, porque para eso hay quienes la tienen específicamente, si bien están demostrando que no poseen la capacidad de asumirla correctamente. Mensaje de una longitud insólita e injustificable por su metodología absurda: amontonamiento de balbuceos pseudocientíficos, crónicas recortadas y retorcidas, consideraciones vagas y contradictorias, a veces ininteligibles. Todo, ¿para qué? Quizás para volcar la frustración y el resentimiento del autor, que, lamentablemente, como bien ha dicho la señora diputada Morini, ha hecho, no de un gobierno ni de una crisis, sino del pueblo de la provincia de Córdoba, el reo a quien ha sentado en el banquillo de los acusados para lapidarlo; y yo me agravio aquí, legítimamente, de semejante ofensa.

Con el pretexto de señalar a Córdoba como de rasgos señaladamente distintos al resto del país (la repetición va por cuenta del escriba) se han escrito cosas inauditas. Por ejemplo, que Córdoba pertenece al interior, pero que no ha obrado como tal ni se ha sentido parte del interior; que culturalmente no ha representado jamás a la América interior, sino a su periferia. Vale decir que Córdoba sería una provincia o una entidad alienada y desubicada, que no ha acabado de ser argentina y a la cual hay que redimir. Todo esto es tan disparatado y ridículo que basta con su mera mención y no merece, por ende, el honor de una refutación.

Lamentablemente, en vez de aprovechar el espacio y el tiempo rindiendo un informe objetivo, se produjo así un discurso inoficioso, sin unidad de criterio y sin ninguna utilidad práctica. Tras esa pretendida tesis o ensayo histórico y sociológico para interpretar a Córdoba, se cae luego en un anecdotario de pequeñeces, para llegar finalmente a consideraciones que parecen injertadas de otro libro o de otro texto. Tal es el caso del párrafo 14: «Los hechos vividos durante estos últimos días señalan la culminación de ese desencuentro con la realidad y muestran que la revolución nacional tiene vigencia por sobre los errores o las limitaciones de los que la ignoran consciente o inconscientemente». Aquí no se sabe qué es lo que ha querido decirse,

porque si tiene vigencia pero es una demostración del desencuentro, parece que el autor estuviera descalificando a la revolución nacional.

El párrafo 15 agrega: «Lo hasta aquí expresado nos lleva, de suyo, a condenar la subversión, madre del caos y fuente de inseguridades». Es una literatura pardusca, que no acaba de hacerse comprensible. Podría ser un tanto infantil, con perdón de los niños, que suelen expresarse mejor. Esto me hace acordar a viejos sermones según los cuales la ociosidad es madre de todos los vicios. Pero, ¿qué subversión o qué caos es el que se está condenando aquí? Porque la secuencia inmediata de este mensaje insólito es el proyecto de intervención, que desde luego con otro texto, con otro estilo, con otros objetivos, con claridad rotunda, no deja, sin embargo, de hacer pie en afirmaciones contenidas en el mensaje anterior.

Llama la atención la insistencia en esta palabra del caos, que los historiadores de la literatura política argentina inventariarán en el diccionario de la reacción.

Se habla de los agentes del caos y de la subversión. Esta insistencia que mete la palabra cada diez líneas deja flotando una sensación de despiste, de desorientación en quienes la usan. Por ejemplo, debe señalarse, dice el segundo mensaje, «que a partir del momento en que el gobernador, doctor don Ricardo Obregón Cano —¡cuántos títulos para quitárselos después!—, y el señor vicegobernador, don Atilio López, recuperan su libertad de acción, comienza a crearse un ambiente de tensa expectativa con la acción de movimientos sediciosos armados, cuyo propósito es generar el caos».

Pero yo pregunto: ¿cuál caos? ¿Es que no había caos cuando un jefe subalterno se permitió invadir la Casa de Gobierno para arrestar a los gobernantes, a legisladores y funcionarios, y aherrarlos en un Comando Radioeléctrico, y por cierto que sin comunicación con el exterior para las víctimas del encierro? ¿Es que acaso esto no es subversión institucionalizada, practicada de arriba hacia abajo y sostenida con pasividad por el poder central?

En una sesión anterior de esta Honorable Cámara me tocó recordar el sentido etimológico de la palabra subversión y descalifiqué la acepción vulgar que da al prefijo «sub» el significado de un tumbar desde abajo. Quiere decir un poner hacia abajo, pero a veces esto se hace desde arriba. Todavía vez que se prostituyen o se manosean las reglas maestras de un sistema institucional, e incluso los valores espirituales, morales o culturales de una sociedad, se lo haga desde abajo o desde arriba, hay subversión, y la consecuencia es el caos. De ahí que sea doloroso para mí, no ya como cordobés sino como diputado de la Nación y como argentino, encontrar este fundamento en el proyecto de intervención.

También se dice: «Urgido por la situación institucional de la provincia de Córdoba, cuya evolución en las últimas horas...» ¿Cuándo se produce la urgencia? Cuando el gobernador y el vicegobernador salen en libertad. Antes no hubo urgencia, y esto es lo tremendo. Esto es lo que nos duele en el alma como solidarios que somos en el fondo con el proceso institucional y con la suerte del gobierno popular, que va a recibir a la larga o a la corta las consecuencias de este tipo de procedimientos.

Cuando estaban presos los gobernantes no hubo urgencia. Se habían verificado «enfrentamientos con la pérdida lamentable de vidas». Se habían producido sólo dos muertes, lo cual es grave aunque sean pocas las víctimas. ¿Pero cuántos hubo —y ciñámonos a Córdoba— antes del 19 de marzo y desde el 25 de mayo del año pasado? ¿Cuántos allanamientos, cuántos asaltos a sindicatos, cuántos secuestros? ¿Y qué hacían entonces los jefes policiales de Córdoba, acusados de complicidad en muchos de esos delitos?

Se podrá argüir el fundamento de la inseguridad pública, pero los autores y las víctimas están bastante entrecruzados. En Córdoba —como en el resto del país—, si tomáramos dos columnas y en una colocáramos el detalle de las víctimas —personas, locales, diarios—, y en la otra, paralelamente, la calificación ideológica de las mismas, podríamos comprobar que tanto en Córdoba como en el resto del país, entre el 70 y el 80 por ciento de las víctimas pertenecen a esa izquierda que se ha acusado de infiltración en el gobierno de Córdoba.

Solamente la noche que sancionamos la reforma del Código Penal tuvimos una jornada inmediata, como si la hubiéramos provocado nosotros, de veinticinco atentados dinamiteros contra locales de unidades básicas, de la Juventud Peronista, etcétera, todos de esa corriente.

De modo que las contradicciones que ya flotan en el ambiente —como se suele decir— son una red enmarañada de la cual es muy difícil salir airoso, si se quieren invocar tales argumentos como base de la intervención.

El mensaje dice: «Evidente resulta el aceptar que la situación local no puede ser ya controlada por las autoridades provinciales y ese hecho aparece como irreversible». Dejó de ser controlada recién el 19 de marzo, cuando salieron en libertad el gobernador y el vicegobernador, que habían perdido el control de la situación por una maniobra, por la habilidad maquiavélica con que algunos pretenden solucionar el problema del enfrentamiento político, social y económico de Córdoba.

Es como si alguien hubiese dicho a las altas autoridades: «No pierdan ustedes el tiempo, no se rompan la cabeza imaginando fórmulas; nosotros tenemos la solución encarcelando a estas personas, siempre que ustedes se crucen de brazos».

A menudo los atajos maquiavélicos son redituables, tienen éxito, pero a la larga cuestan caro, porque la verdad y la moral son como resortes, y no puede uno sentarse indefinidamente sobre ellos puesto que algún día su fuerza salta hacia arriba y lo tumba a uno sobre el piso.

¿Qué opinaba el ministerio político sobre ese descontrol? ¿Qué opinaba horas antes, sobre la sublevación del teniente coronel Navarro, sobre la toma de las radios y sobre las bandas armadas parapoliciales que ponían a la población a merced de la anarquía organizada?

Tenemos ya casi un año de gobierno del pueblo, cargado el ambiente por los temores públicos contra la sedición y el terrorismo. Pero he aquí que los argentinos a los ojos del mundo aparecemos como incorregibles, como queriendo combatir la subversión con la subversión. Como cristiano podría decir con San Pablo que el mal no se ha de combatir con el mal, sino con el bien. No nos es lícito recurrir a métodos inmorales, pero además todos vamos a pagar las consecuencias de esos desvíos.

Como último fundamento el mensaje dice que «para asegurar la vida, derechos, libertades y bienes de todos los habitantes de Córdoba, se eleva un proyecto de ley por el que se dispone la intervención federal a la provincia a fin de restablecer el ejercicio de la forma representativa y republicana y proceder a reorganizar su Poder Ejecutivo».

Lástima grande que se acordaron tardíamente de restablecer la forma republicana de gobierno, no antes cuando un militar sublevado incurrió en la Casa de Gobierno, ultrajó instituciones y no sólo cometió el delito de sedición, sino que acumuló una parva vergonzosa y miserable de delitos que, en cierto modo, nos viborean a todos en la conciencia. Y digo esto porque aquí no hay nadie que esté tranquilo sabiendo que, aun sin querer y con la mayor buena fe, pueda aparecer a los ojos del mundo como convalidando y usufructuando el delito que verbalmente se condena.

Se habla de reorganizar el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se reorganiza un poder ejecutivo? Podríamos hacer un simple análisis de gramática jurídica. Reorganizar significa volver a organizar, poner las cosas en el orden que les corresponde, esto es, en el orden constitucional. No tengo entendido que Obregón Cano y Atilio López fueran usurpadores del poder público. Reorganizar sería, pues, reponerlos en su jerarquía atropellada. Pero en este caso no es así, y parecería que el idioma está adulterado en su significación jurídica. En este caso reorganizar significa decretar la caducidad de los gobernantes, como reza el artículo 19 del proyecto en debate.

El delegado federal eliminará, en primer lugar, la composición local del Poder Ejecutivo. Claro que su trabajo se va a ver aliviado porque el pobre gobernador errabundo, oculto, con mensajes que durante ocho días el ministro del



Interior no se dignó contestar, terminó renunciando. Pero, de cualquier modo, esto de extirpar primero y reorganizar después es como matar al sujeto y después resucitarlo, cuando convenga a los intereses de los que así planifican las cosas.

Apenas salió en libertad el gobernador, requirió el auxilio de las fuerzas federales, ya que las provinciales le habían sido sustraídas mañosamente. Lo reiteró con su mensaje desde un lugar de Córdoba, en el que dice lo siguiente: «Simultáneamente, me dirijo al señor ministro del Interior, en mi carácter de gobernador, e invocando el artículo 69 de la Constitución Nacional, reclamándole el auxilio de las fuerzas del gobierno nacional para reducir al grupo sedicioso y garantizar el pleno ejercicio del poder que ejerzo en nombre de la ley. Los hechos que denuncio son públicos y notorios y ninguna autoridad puede razonablemente invocar la ignorancia de aquéllos. Formalizo por este medio, habiéndoseme privado por la fuerza del uso de la red de comunicaciones con las autoridades nacionales, mi petición ante el presidente de la Nación y el Congreso, a fin de que se adopten de inmediato los recaudos constitucionales para el restablecimiento de la legítima autoridad».

Y luego habla del remedio local, que aquí se ha invocado como el correcto: «Sólo las cámaras legislativas provinciales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, pueden declarar producida la situación de impedimento absoluto que importa la vacancia del Poder Ejecutivo, único caso que autoriza la convocatoria a elecciones de gobernador y vicegobernador».

Alguien podrá decir: ¡qué inocente este diputado! Resulta que en las dos Cámaras, entre radicales y partidarios de Obregón Cano, se obtendría una mayoría adversa al juicio político. Pero entonces, si quienes representan a la mayoría absoluta del pueblo de la provincia piensan así, eso significa que el pueblo de la provincia no quiere enjuiciar a sus gobernantes. Yo me pregunto cómo podemos transformar en enjuiciador al Congreso Nacional. El miembro informante de la mayoría ha pasado más que a vuelo de pájaro, a vuelo de jet, en su cita de preceptos constitucionales, sin concretar la infracción que haga pasible a ese Poder Ejecutivo provincial del remedio federal de la intervención. En cambio, ha dicho que podría darse el caso de que a pesar de la situación sediciosa, esos gobernantes no reuniesen las condiciones suficientes para ejercer el poder. Me enteró ahora de qué el Congreso de la Nación puede juzgar si los gobernadores de provincia son hábiles o no para ejercer sus funciones. Siempre creí que era misión de las legislaturas provinciales realizar ese juicio político.

Vale decir que de algún modo se estaría entrando también, toda vez que se retuerce el sentido y la aplicación de las cláusulas de nuestra Carta Magna, en algún tipo de subversión institucional.

Se ha condenado reiteradamente en este recinto la actuación sediciosa del jefe de policía. Valga la reiteración para decir que al bloque del Partido Revolucionario Cristiano le merece el calificativo de una grosera y brutal felonía, que deshonor a la historia político-institucional de la Nación. Decimos esto con una absoluta independencia de criterio, porque no hemos tenido arte ni parte en la formación de ese gobierno provincial, ni hemos usufructuado un solo cargo público, ni de alto ni de bajo nivel. No nos compete defender la gestión administrativa y política del gobernador y del vicegobernador destituidos o renunciantes, que para el caso viene siendo lo mismo.

En nuestra opinión y en la de nuestros compañeros del distrito Córdoba, se han cometido numerosos errores en esa gestión provincial, como en muchas otras. También hemos expresado que ha habido desaciertos en el gobierno nacional, pues de no ser así nunca habríamos discrepado. Pero no admitimos falacias leguleyas tendientes a demostrar que ese desempeño, acertado a veces, equivocado otras, haya configurado una violación de la forma republicana de gobierno, una supuesta privación de derechos constitucionales. Aquí voy a disentir con un miembro de la minoría, el señor diputado Balestra, que desde una posición curiosa impugna la sedición, impugna al Poder Ejecutivo nacional por moroso, pero termina justificando la intervención porque según él, según su partido o su Pacto Autonomista-Liberal de Corrientes, el gobierno de Córdoba habría conculcado —aunque no lo dijo, así lo dio a entender— los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, o sea los derechos civiles de los habitantes, los derechos de defensa en juicio y de propiedad.

Se trata de una acusación demasiado grave como para no haber tenido el celo de concretarla claramente y de demostrarla. Eso es falso, y me permito decir, aunque me duela, que semeja una expresión facciosa de intereses oligárquicos agraviados por cierta orientación y ciertas medidas que el gobierno cordobés se vio obligado a tomar.

Es posible —y estoy seguro de ello— que el manejo de las cuestiones del transporte y del abastecimiento de carnes pudo haber sido más feliz por parte del gobierno provincial; pero también estoy cierto, como creo lo están todos los componentes de la Honorable Cámara, de que determinados grupos empresariales y oligárquicos del viejo poder no descansan ni de día ni de noche para provocar desabastecimiento, para torpedear los servicios y para hacer fracasar al gobierno del pueblo, sea nacional o provincial. Debemos estar bien advertidos de eso y no cometer la ligereza de hacer causa de esas

dificultades para aliarnos, consciente o inconscientemente, con los enemigos del pueblo, que de un modo u otro querían que faltara carne en Córdoba, o que no hubiera transporte, para tumbar al gobierno provincial.

Tengo presente lo que se ha dicho por parte de varios señores diputados: que esto que ha ocurrido en Córdoba —y no me bastan buenas intenciones o promesas que todos podemos cantar aquí— puede repetirse en siete u ocho provincias argentinas. En Santa Cruz, por ejemplo, durante unos ocho meses de gobierno no se había oído hablar ni leído acusación alguna sobre extremismo infiltrado. Pero hace algo más de un mes bastó la presentación de un proyecto para expropiar seiscientos mil hectáreas de una empresa latifundista británica —posiblemente de su graciosa majestad, la reina Isabel—, para que estallara también la disputa, con imputaciones de infiltración izquierdista. Y entonces, todos entramos a vivir una alarma. ¿Se trata solamente de Córdoba o cuántos más tendrán las barbas en remojo? Cuando uno lee los editoriales de un diario oficialista que dice: «Escarmienten en cabeza ajena los gobernadores que andan con devaneos raros», ello ¿qué quiere decir?

A esta altura, señor presidente, los diputados opositores que no hemos justificado la intervención ni hemos adherido vergonzantemente a ella —y lo de vergonzante no va por la bancada mayoritaria, que lo sostiene abierta y frontalmente—, hemos coincidido en que no estamos dispuestos a aceptar que este episodio se transe con un chivo emisario.

¿Qué va a pasar con el famoso teniente coronel? Y bueno, lo procesarán o no; quedará en aguas de borrajas o no, y si queda en aguas de borrajas, como mucho me temo, habremos sellado aunque sea con el talón y al descuido un nuevo baldón para la República. Y si se lo sanciona, ¿qué? ¿La cosa termina allí? No, porque no empieza allí. Hay demasiadas evidencias en la conciencia pública de que ese hombre no obró solo y por cuenta propia. Y entonces yo me sentiría llorando lágrimas de cocodrilo si viniera a sollozar aquí por la sedición del teniente coronel y me conformara, como se ha propiciado, con expresar el anhelo de que el fiscal de Estado promueva su procesamiento.

Lo que hay que detener aquí, señor presidente, es todo un andamio; no todo el proceso, sino que para salvar al proceso global de la República —y no solamente de la provincia—, hay que detener un andamio que marcha torcido. Si no, nos podríamos parecer por ejemplo a los señores feudales, que generalmente hacían ejecutar a sus propios verdugos: que hacían construir túneles secretos u ordenaban emparedar a sus rivales, y luego asesinaban a los albañiles que habían hecho esos trabajos, para que no hablaran demasiado. Pero las consecuencias quedaban impunes y ellos se beneficiaban de esas consecuencias.

Hay un significado político profundo en estos episodios. Ya otra vez he solicitado la atención de mis pares sobre cierta fiebre ideologista que se da en el país, que nos va haciendo daño y que le va a hacer mucho daño a la Argentina. No sé si valdrá la pena decir que los revolucionarios cristianos no somos marxistas precisamente porque somos cristianos. Pero tal vez, si seguimos así, pronto tendremos que andar todos absolviendo posiciones por lo que somos o no somos. Se siente olor a tribunal de inquisición.

Quiero decir algo sin ofender a nadie, o por lo menos sin intención de ofender, y adviértase que los ofendidos podrían ser no los señores diputados de la mayoría ni de la mayor parte de las minorías, sino mis propios compañeros del acuerdo parlamentario de la Alianza Popular, que incluye a dos diputados comunistas. Pero no se van a ofender porque ya me han oído otras veces esta frase que yo digo con cordial sentido. Yo no soy marxista porque me siento intelectualmente adulto, porque no necesito del marxismo integral y no porque me lo prohíban bajo pena de pecado. Es decir, no necesito ser un marxista dogmático, no obstante lo cual pienso que ningún hombre bien informado puede decir que no necesita en modo alguno del marxismo, que es una grada insustituible en la escala de la historia de las ideas y de los hechos políticos en el mundo. No hay doctrina que no tenga una partícula de verdad, y el marxismo ha aportado muchas verdades, grandes y valiosos enfoques. No necesito decir en lo que no estoy de acuerdo con el marxismo, aunque podría decir globalmente que no estoy de acuerdo en cuanto pretende ser un sistema, porque las doctrinas que se sistematizan adolecen del espíritu de sistema y se congelan a sí mismas.

Estaremos de acuerdo entonces en que hay un vicio ideologista de izquierda, un encandilamiento ideologista de ciertos grupos, juveniles o no, que pecan de un cierto racionalismo político, pretendiendo reducir la verdad a esquemas puros de razón y perdiendo así el sentido de las cosas, que son maestras, y de los hechos, que son maestros. Pero, ¿son ellos los únicos que están pecando de ideologismo? Y, en todo caso, si son jóvenes, ¿con qué derecho los juzgamos? ¿Es que las generaciones adultas han cumplido su deber de magisterio en esta República? ¿Es que las generaciones adultas a nivel de docentes, de dirigentes, de militares, de obispos, de padres de familia, se sienten libres de culpa frente a sus hijos y frente a los jóvenes? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué testimonio les han dado? Muchas veces el peor, aquel que hace cargar de resentimiento a sus propios hijos, discípulos o seguidores.

En cambio, vale la pena anotar que en el otro extremo ideológico está rondando en el país y tomando volumen el rebrote de una mentalidad fascista. Y valga otra aclaración, porque aquí hay que andar con pies de plomo, en el

sentido de que de ningún modo estoy imputando eso al movimiento justicialista como tal ni a la bancada que aquí se sienta y que comparte con nosotros preocupaciones y labores; pero hay grupos que van adquiriendo poder y que van dejando el testimonio de ese brazalete amarillo y de conductas que llevan ese sello, como hemos visto en Córdoba, donde la Alianza Libertado Nacionalista, la vieja guardia de choque del fascismo criollo, ha aparecido remozada. Me duele, señor presidente, tener a la vista titulares de diarios chilenos, de los diarios domesticados por Pinochet, que en estos días han batido palmas por los sucesos de Córdoba diciendo que el pueblo de Córdoba, junto a su policía, ha salido a hacer una operación de limpieza antimarxista. Y en otro titular de Santiago de Chile se dice: «Brigadas civiles cooperan en la limpieza anticomunista».

¿En qué estamos cayendo o en peligro de caer si seguimos en la fiebre de la lucha ideológica irreconciliable, obcecada y espantadiza, porque nace en una inseguridad en sí misma, en una falta de esclarecimiento sobre el propio mundo ideológico? Solamente así podemos asistir a que un ministro de la Nación, que viaja a Córdoba el mismo día de la sedición y pasa olímpicamente por sobre ella legitimándola también con su andar oficial, libre sentencia de condena, como en los peores tiempos del Santo Oficio —*anathema sit*— para todo aquel que hable de socialismo. Condena así al presidente de la República, que había dicho: «Yo soy socialista pero no alocado». Alocado no, pero socialista sí. Y esto aparece también en páginas que ha escrito Perón desde España, y en alocuciones que ha formulado aquí.

Yo no voy a reducir la patria a una fórmula ideológica y estructural, y por eso no suscribo lo de la «patria socialista», porque aunque la quiera con una estructura de tipo socialista, siempre la patria será más grande que la estructura que se dé y, por cierto, más grande que el color político y la divisa que la gobierne; por eso tampoco suscribo lo de la «patria peronista», como tampoco suscribiría lo de la patria radical, socialcristiana, y ni siquiera lo de una «patria cristiana», si esto quiere significar una exigencia de confesionalidad. Quiero una patria argentina, y como única calificación aproximativamente ideológica, una patria «humanista», en la que cristianos y no cristianos, peronistas y no peronistas, socialistas y no socialistas, tengamos nuestro lugar de dignidad.

Pero así como no suscribo lo de la «patria socialista» ni ningún otro rótulo partidario para nuestra Argentina, tampoco puedo admitir que se nos amenace por boca de un ministro nacional en cuanto a que quien quiera hablar de socialismo que se vaya de aquí, porque si no va a ser eliminado. Tras el verbo, como otras veces ha ocurrido, no se aclara el alcance de

esa eliminación, o sea, si es sólo del campo político o si es la eliminación del globo terráqueo.

Este es el clima, esta es la mentalidad totalitaria que, venga de la derecha o de la extrema izquierda, tenemos que repudiar, tenemos que avizoradamente descubrir y reconocer que nos está devorando en medio de esta disputa o por lo menos, como un reptil venenoso se está metiendo por las rendijas de disputas que no debieron existir. ¡Ni terror rojo, ni terror blanco, ni terror pardo, ni de ninguna clase!

La otra consecuencia política a que nos lleva el examen de este asunto es que aquí no se ha agredido solamente la institucionalidad cordobesa sino que se ha agredido el sistema institucional, representativo, republicano y federal, que, como bien se ha dicho por otro orador, es único en toda la República.

Yo sé que se puede salir al paso de estas afirmaciones con otras que considero volanderas, para ser piadoso en los calificativos. Yo estoy un tanto cansado de escuchar que las preocupaciones de este tipo son jurídico-formalistas e hijas del liberalismo. En primer lugar, un social cristiano de avanzada es insospechable de liberalismo, de individualismos y de procapitalismo. Sin embargo, como cada doctrina tiene una parte de verdad y ha cumplido un rol en la historia, quede bien en claro que no nos sumaremos jamás a quienes so pretexto de atacar al liberalismo no combaten simultáneamente al capitalismo; que atacan al liberalismo de palabra y han hecho un sonsonete de lo de la economía liberal o de la filosofía liberal o el derecho liberal, pero les sirve de máscara para disimular su propensión fascista para ocultar su espíritu y mentalidad antidemocráticos.

Honorable Cámara: permítaseme la redundancia, la perogrullada, en un intento de recordación de lo que está puesto sobre la mesa y que sé que todos compartimos, pero estamos apelando unos a otros para revivir en las palabras y en el servicio cívico ciertos valores. El federalismo, como el resto de la arquitectura jurídica del país —pero sobre todo el federalismo—, no es un resabio folklórico, no es una madeja de academicismo jurídico. El federalismo es jurídicamente pero también histórica y sustancialmente la base del nacimiento del país. Fueron las provincias las que crearon la Nación, que no existía sino a través de las quejas, de las luchas y de la sangre de las provincias que buscaban el ente nacional y que lo dieron a luz en sus pactos sagrados. Las provincias son preexistentes a la Nación y el Preámbulo nos los recuerda: «por voluntad y elección de las provincias que la componen». Ese *substractum* sagrado es hoy el mandato sagrado. No hay nación aquí si no hay federalismo. No sé qué pasaría en un país unitario, pero a este país estructurado y bautizado en federalismo —aunque siempre víctima del atropello— lo estaríamos asesinando; estaríamos

retrogradando y descendiendo en nuestra propia historia si renegáramos del federalismo jurídico, político, económico y cultural.

Pero hay algo más. Se ha agregado otro factor al proceso institucional de la Nación, no ya al sistema, sino al proceso político en el cual nos hemos comprometido mediante un voto solemne en los últimos años de luchas mancomunadas y en la consagración comicial vivida por tres veces en marzo, abril y septiembre del año 1973. Los millones de votos legitiman el acceso al poder, pero no todos y cada uno de los actos de los gobernantes. Además no siempre bastan los millones de votos para que toda la gente se oriente acerca de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Eso es nada más que un llegar al gobierno; después hay que llegar permanentemente a los objetivos nacionales. Aquí nos hemos comprometido todos a la unión nacional, que estamos dañando con este tipo de episodios.

Hemos hecho la opción por la vía institucional. Si la lesionamos en una provincia, la lesionamos en todo el país; y hemos hecho el voto de la pluralidad ideológica y política. Ahora aparecemos como aceptando sonrojados los servicios prestados por el decapitador de los gobernantes de Córdoba, aunque luego le demos un puntapié a título de gracias por esos brillantes y patrióticos servicios. Estos tipos no sirven gratis, cobran en especie y muy caro. Y este punto es otro motivo de mi alarma.

Nunca hay que sentirse demasiado seguro. Martín Fierro nos lo recuerda en sus sabios consejos: «Nadie se sienta seguro/aunque en el estribo esté/ que suele quedar de a pie/ el gaucho más advertido».

El primer pecado del hombre fue el de la soberbia, y el general Perón no viene procediendo con soberbia. Nos ha dicho día y noche que necesita del concurso de todos, de los propios y de los ajenos, de los que acuerdan y de los que disienten, y nos ha convocado a lo que es por otra parte la convocatoria de esta hora del país y del mundo: a coincidir y no a enfrentarnos, a luchar codo a codo, porque los enemigos internos y externos son demasiado peligrosos y nos pueden hacer perder el rumbo a poco que no veamos con claridad; y para ver con claridad hay que ver con serenidad. No andemos pegando espantadas, como caballo chúcaro.

No puedo dejar de leer un parte policial de Córdoba que es realmente desolador, que nos avergüenza ante el mundo: «trofeo de la victoria del golpe». Este título es mío, pero aunque no se lo ponga el Comando Radioeléctrico o cualquiera de los comandos golpistas, se entiende que brinda ese parte a la opinión pública como trofeo de victoria.

Este comunicado da cuenta de que se ha detenido al ciudadano «Oscar Fernández, domicilio Roque Tello 2248, comunista». Aquí tene-

mos dos compañeros comunistas, a quienes en un gesto que nos honra les brindamos, a través de nuestras listas, legalidad contra la proscripción para que tuvieran oportunidad de expresarse y de integrar la realidad política de la República, que incluye también a los comunistas. También informa ese comunicado que se ha detenido a «Luis Avalos; antecedente, comunista; material secuestrado, propaganda comunista». Si a mí me detienen, será por tener material de propaganda revolucionaria cristiana, y a cualquiera de los señores diputados de la mayoría por tener propaganda peronista. «Oscar Vaca Martínez —sigue el comunicado—; antecedente, comunista; material secuestrado, literatura del Partido Comunista, varios libros y papelería varia de la misma ideología; afiliado al Partido Comunista y presidente de un centro vecinal». Esto último es también «delito». En el domicilio de Sarmiento 202 se detuvo a varias personas sindicadas con antecedentes de «izquierda socialista». Yo no sé cómo estoy aquí en libertad, pues soy de izquierda y socialista. «Son: Omar, José, Oscar y Abel Pucheta. Se secuestró un libro del Che Guevara (*El diario*). También con antecedentes comunistas se detuvo a Juan C. Polanco y Anacleto Fuentes, en Marquiana 3496... En Humberto I 898, sede del Partido Socialista de los Trabajadores —que tiene legalidad y personería, y participó en las últimas elecciones—, se procedió a su allanamiento y se secuestró gran cantidad de libros de izquierda, siendo aproximadamente su cantidad unos quinientos libros de corte marxista y folletos, así como también revistas impresas por el partido».

**Sr. Loncharich Franich.** — Y Perón recibió una carta de Fidel Castro.

**Sr. Sueldo.** — Van a ponerlo preso por mantener correspondencia con Fidel.

Yo, como profesor, tengo como cuarenta libros de corte marxista, entre ellos, *El capital*, así que debería ir a parar a la última mazmorra. Además, nótese que se habla de revistas impresas por el partido. Este es un agravio al presidente de la República, que dialoga con los dirigentes de este partido. Además, son revistas impresas por un partido que es legal. En el domicilio citado se detuvo —dice el comunicado— a Roque Anguinetti, Adrián Machado, y a 16 personas más. Y «en la finca de Luis Vernet 2371, a Carlos Argüello, Miguel Argüello, Mario Minari, Fernando Alderete, Luis Lucero y José E. Sosa. Alderete y Sosa se encuentran en el Hospital de Urgencia, registrando numerosas contusiones y uno de ellos conmoción cerebral». ¡Seguramente no quedaron así sólo por tomar mate!

Esto es sencillamente denigrante y debe movernos a ponernos de pie en defensa de las libertades públicas y en defensa de la cordura. Esto es «macartismo», y no puede extrañarnos entonces que Pinochet, que está buscando un eje anticomunista, que en el fondo es un eje anti-

argentino y antiperonista, aplauda en sus diarios lo que se está haciendo en Córdoba. Es lo mismo que la policía de Onganía, de Levingston y de Lanusse. En ese entonces, en el partido de Tres de Febrero se allanó una biblioteca popular y se secuestraron todos los libros que trataban de Rusia —o todos los libros cuyos autores terminaran en «of» o «isky», como la novela *La madre*, de Máximo Gorki—, y resultó el gran papelón, porque los libros, que eran análisis de la Unión Soviética desde el punto de vista norteamericano, habían sido donados por la Biblioteca Lincoln, que depende de la embajada norteamericana. Así tenemos instaurada legalmente en el país la censura de los libros que entran a la República por medio de los funcionarios de la Aduana, quienes dictaminan si somos adultos o niños de pantalón corto para leer cierta literatura. ¿Estamos o no entrando a un orden de persecución de las ideas más o menos patente, de neto corte fascista? ¿Nos hallamos o no frente al peligro de que nosotros y nuestros hijos no podamos leer lo que queramos? ¿Quiénes nos van a domesticar? ¿Los funcionarios del Correo, los vistas de Aduana y los policías? ¿Se nos enseñará lo que podemos leer o las ideas que podemos profesar? Hay una policía que despacha al otro mundo con toda frescura a cinco cooperativistas y a un viajante al día siguiente, como postre, y luego, a través de una solicitada de los guardias civiles de brazalete amarillo, publicada en los diarios de Córdoba, se invoca como razón de la subversión la siguiente: «No vamos a permitir que un juez de instrucción, ex periodista fracasado, se meta con nuestra policía; no vamos a permitir que nos manoseen a la policía, que da su vida por nosotros». ¿Qué peligrosa esta devoción por las llamadas fuerzas del orden! ¿Qué olor a mussolinismo tiene todo esto! O, si ustedes quieren decir, a policía secreta de Estados comunistas; por lo menos yo, no tengo inconveniente en decirlo, aunque otros podrían establecer diferencias.

Todo esto tiene algo que ver con la democracia; esto tiene algo que ver con la soberanía y retzona confianza que deberíamos tener todos, el peronista en la ideología del peronismo y todos los demás en la suya, y todos juntos en nuestra unión, para no ir asustándonos de sombras y bultos que se menean. Pegando saltos y demandando salvadores que nos hagan limpiezas antimarxistas, vamos a caer en las garras de los salvadores sin darnos cuenta.

Por eso, termino desafiando la posibilidad no buscada de padecer una interrupción algo violenta, como la que sufrió el compañero Valenzuela, a quien yo interpreto positivamente en su inquietud. Yo tengo el mismo celo que el señor diputado Valenzuela; yo siento por Perón, también. Esto ha de tomarse positivamente y, además, no pido permiso a nadie, porque lo tengo como diputado de la Nación y como hombre libre, para decir lo que voy a decir. El presidente de la República, todo presidente que tenga título

legítimo, debe ser nuestro primer símbolo de respeto en las jerarquías políticas; y este presidente, además de su personalidad, concita el respeto, el afecto y el deseo de éxito, junto con el concurso positivo para ese triunfo. Entonces, no se puede ver malignidad en el juicio cuando decimos que, en nuestro concepto, que puede no ser compartido, pero que no tiene por qué merecer execración, este tipo de episodios, de vivencias y de intolerancias políticas, deteriora la imagen de Perón. Esto no quiere decir que la empequeñece, porque, claro está, puede seguir siendo tan grande como se quiera, hacia afuera y hacia adentro; pero sentimos que la imagen se deteriora. ¡Qué curioso que se nos vaya a interpelar cuando decimos esto desde una bancada que no es peronista ni está formada por miembros del Frejuli! Creemos que nuestro juicio debería merecer alabanza y gratitud porque demuestra un celo familiar, ya que a este padre que empuña las riendas todos lo deberíamos defender, incluso de su desprestigio no querido.

Evidentemente, para nuestras convicciones el titular de la cartera política ha perdido la confianza de la República, porque no ha sabido manejar ni éste ni otros episodios, ni con tino ni con claridad, así como hay otros que le han informado mal al presidente, como en el famoso asunto de la Cuarta Internacional, en que le han hecho decir que el señor Posadas dirigía una conspiración universal desde París. Y luego no hemos sabido si reír o llorar al ver las cartillas políticas del señor Posadas reproducidas en revistas argentinas y al saber, por otro lado, que su partido lo ha ido a visitar al señor presidente, y fue recibido por el secretario general de la Presidencia para manifestar que apoyaba al régimen popular y que había recibido una carta del señor Posadas en la que admira al general Perón. No sabemos si reír o llorar al ver cómo el desayuno puede incluir, junto con el té y las tostadas, carpetas de equivocaciones. Nos sentimos celosos del prestigio, del acierto o desacuerdo que puedan empujar al general Perón, porque es nuestro presidente y porque este período ha costado muy caro y es único.

Si hoy cometemos errores imperdonables, nos sepultamos por diez o veinte años más; más claro; si no se llega a votar libremente en los próximos años, no se volará por diez o veinte años más.

No juguemos con la suerte de la historia. No la creamos tan barata. Todos sabemos que ha costado sangre, cárceles, bombas, privación de la libertad, opresión y entrega. ¡Qué fácil es pronunciar estas palabras, se dicen en segundos, pero no juguemos con ellas por lo mucho que todo esto ha costado y porque es importante la misión que debemos concretar!

El general Perón se encuentra en la cresta de la montaña, donde lo ha llevado su dimensión histórica y no sólo por la circunstancia de ser presidente de la República. Está en la cresta desde donde se divisa el horizonte de ayer y el

horizonte de mañana, desde donde quizá se pueda ver con mayor lejanía lo que nosotros no podemos apreciar desde la media altura y otros desde el fondo del valle. Pero ocurre que esa cresta, y no sólo en este caso sino en el de todo hombre poderoso, especialmente en los últimos años de su vida, también es cresta de soledad. Tal vez Perón, íntimamente, haya sido siempre un solitario; tal vez no. Personalmente creo que sí y esto no es un ataque, sino que es un intento de comprensión humana, porque no olvido que detrás del hombre funcional hay un ser humano que es mi prójimo, y que es lo que más me importa.

En esa soledad, en esa altura y desde esa lejanía, me parece a veces que el general Perón habla entre líneas y que en sus discursos, muy de pasada, pronuncia frases que no son recogidas con la debida importancia.

Es como si el gran cacique —dicho esto no en sentido peyorativo sino en sentido estimativo—, es como si el gran caudillo quisiera comunicarse con su gente, con la que está en la mitad de la ladera y con la que se encuentra en el fondo del valle, con signos, con señales de humo, y pareciera que no siempre se lo entiende.

Ya los años no dan para la potencia de la voz, y desde abajo la vocinglería grita de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, no escuchan al jefe y se confunden entre sí.

La historia nos está dando una oportunidad, un cuarto de hora. No lo perdamos con rencillas mezquinas, no lo perdamos con el miedo, con la falta de serenidad, con la soberbia partidista. Hagamos lo posible para que el gran jefe no esté solo, para que en estos últimos años de su vida esté rodeado de la dignidad, del decoro, del prestigio y del triunfo, no sólo personal sino de toda la argentinidad. No le amarguemos estos días creándole problemas artificiales, que se descargan sobre sus espaldas para que él los solucione como pueda, porque tiene las limitaciones de todo ser humano. Gracias a Dios es un ser humano y no un mito, porque debajo y antes del mito está el hombre.

Este es, señores diputados, el sentido final de mi exhortación. No perdamos el rumbo ni dejemos que ningún torpe se lo haga perder al señor presidente y con él a la República.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Zamanillo.

**Sr. Zamanillo.** — Señor presidente: he tenido la suerte de escuchar brillantes exposiciones llenas de un hondo contenido patriótico y, por qué no decirlo, también de una no disimulada emoción.

Parecería que el debate se ha agotado, pero siento la responsabilidad, como ciudadano argentino y como hombre de Córdoba, de referirme a los sucesos de mi provincia.

He nacido en Córdoba y allí he desarrollado toda mi vida, en esa provincia maravillosa de

la reforma de 1918, que se ha pretendido ridiculizar en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, y allí también he formado mi familia.

He accedido a esta Cámara con el más hondo y sincero entusiasmo por el hacer y con profunda vocación política.

He aprendido también a proyectarme a través de los ejemplos de una política de apuntalamiento de las instituciones asumida con plena y absoluta responsabilidad. Nunca, señor presidente, hemos renunciado a nuestros sentimientos ganados por la debilidad o por cualquier tipo de especulaciones, frente al compromiso asumido como representante del pueblo de la República.

Hemos expresado nuestro apoyo a las iniciativas útiles para el país y, cuando fue preciso, ejercitamos el derecho de crítica opositora, pero siempre en elevado tono. Muchos no nos entendieron, o no quisieron hacerlo, y fue muy difícil explicar nuestra actitud, pero no nos arredramos porque tenemos la íntima convicción que ofrece la perspectiva de la verdad.

Algunos creyeron que nuestra actitud era una expresión de la debilidad, pero se equivocaron, porque si algo tiene de patrimonio la Unión Cívica Radical es la fortaleza de las convicciones y la irrenunciable fe de sus hombres en el progreso de la República.

Dijo bien el señor diputado Mauhum que muchas veces nuestra fe se debilita, pero en este caso concretamente nuestra vocación está en el diálogo.

Hemos creído siempre en la sinceridad de los hombres con quienes tenemos que convivir esta etapa argentina y si bien sabemos que existen quienes son una expresión de orgullo para las instituciones, hay otros que, lamentablemente, están perjudicando a estas mismas instituciones que todos estamos contribuyendo a crear y sostener firmemente. Todo ello obliga, por lo menos, a hacer un replanteo, un estudio de nuestra actitud. El radicalismo no quiere ser burlado. Y porque el radicalismo cree en las instituciones y las defiende, va con sinceridad al diálogo, pero necesita correspondencia de la otra parte. El radicalismo ya sabrá qué actitud deberá adoptar con quienes no quieren oír.

Yo no pierdo la confianza, señor presidente. Creo que éste es un episodio muy desgraciado para el país, que toca íntimamente a mi provincia, a la que tanto quiero y respeto, como estoy absolutamente persuadido de que la respetan todos los integrantes de esta Cámara. Córdoba tiene verdaderos blasones que exhibir en defensa de las instituciones de la República, de la libertad, de la cultura y de su insobornable actitud frente a los dictadores de turno. Tengan la plena seguridad los señores diputados de que, a pesar de las adversidades, Córdoba seguirá siendo el faro que ilumine el camino de la redención. La Unión Cívica Radical seguirá siendo custodia fiel de las instituciones, defendiéndola celosamente.

Así como defendemos hoy las instituciones de Córdoba, sabremos defender las de todo el país.

Estos episodios no prestigian a la República, ni al Poder Ejecutivo, ni al Congreso. Lo digo con dolor pero son responsabilidad, sin ánimo de agraviar a ninguno de mis pares. La suerte de Córdoba está echada. La provincia se verá avasallada en su autonomía. Pero es bueno señalar, señor presidente y señores diputados, que el radicalismo no hace la defensa del señor Obregón Cano ni del señor Atilio López, por lo que ellos son como personas. El radicalismo los defiende en el carácter que invisten de gobernador y vicegobernador de la provincia.

No aceptamos —se ha reiterado hasta el cansancio— que un jefe de Policía se constituya en jerarca o en sátrapa de una provincia que ha sabido dar ejemplo de libertad, de hidalguía y de valor. No es posible que un funcionario, ungido por la ley para la defensa de los bienes, de la vida y de la honra de los ciudadanos argentinos y cordobeses, sea en definitiva quien atropelle las instituciones que juró defender. Pero las cosas no terminan allí ya que, en un acto que no reconoce antecedentes en la vida de la República, se atrevió a privar de la libertad al gobernador de la provincia, al vicegobernador, a ministros y legisladores. Esa disposición no alcanzó a los diputados nacionales. De haber sido así, la Cámara estaría obligada en estos instantes a tratar la cuestión de privilegio y ordenar de inmediato el arresto de ese funcionario que no ha honrado el uniforme militar que le confirió el Ejército Argentino.

Hace poco tiempo esta Cámara, con el voto adverso del bloque de la Unión Cívica Radical, aprobó las reformas al Código Penal. Y aquí cabe la calificación —lo digo con plena responsabilidad—: en este preciso instance, el primer terrorista y faccioso que tiene el país el teniente coronel en retiro efectivo Antonio Domingo Navarro. ¿Y qué está esperando, entonces, la justicia de este país? ¿Qué está esperando la justicia de Córdoba? ¿Qué está esperando el Poder Ejecutivo nacional, que puede, ya que no existe Poder Ejecutivo legalmente constituido en la provincia de Córdoba, posibilitar la aplicación de todo el rigor del Código Penal que esta Cámara ha sancionado?

Me referiré a un estudio muy sencillo, por cierto, y lamento mucho que no se encuentre presente en este momento —al menos no advierto su presencia en el recinto— el señor presidente de la Comisión de Legislación Penal para que pueda refrendarlo.

El señor teniente coronel Navarro, ex jefe de la Policía de Córdoba —pues entiendo que subsiste la vigencia del decreto 740, de separación del cargo, y el decreto 743, dictados por el hasta ahora gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Ricardo Obregón Cano—, ha incurrido en los siguientes delitos previstos en el Código Penal.

Primero, el gobernador de la provincia de Córdoba dio una orden al jefe de Policía para que realizara un procedimiento con motivo de la posible tenencia ilegítima de armas por particulares. El jefe de policía se negó a cumplir la orden impartida. Este hecho constituye una desobediencia. En el caso se trata de una desobediencia calificada, ya que el jefe policial rehusó, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente. (Artículo 250 del Código Penal: omisión o retardo de deberes; delito contra la administración pública.)

Segundo, el gobernador comunicó al jefe de Policía que la orden emitida tenía como motivo la noticia de que un grupo de particulares poseía ilegítimamente armas de guerra. De ser eso cierto, el jefe de Policía habría dejado de promover la persecución de delincuentes. (Artículo 274 del Código Penal. Esta norma sanciona el incumplimiento de un deber, distinto al enunciado en la figura delictiva del artículo 250. Aquí la sanción deriva de no promover la persecución de delincuentes. En el otro caso, es decir en la hipótesis del artículo 250 del Código Penal, la responsabilidad surge de rehusar la prestación requerida por la autoridad civil.)

Tercero, exonerado, el jefe de Policía detiene al gobernador y a otros funcionarios provinciales. Pretextu falsamente que ellos distribuían armas a particulares. La detención en esas condiciones es ilegítima y es calificada por el Código Penal como privación ilegítima de la libertad (artículo 142).

Cuarto, el ex jefe de Policía no se limita a privar de la libertad a un grupo de particulares, sino que lo hace en las personas del gobernador, vicegobernador y otros altos funcionarios para deponer la autoridad ejecutiva elegida constitucionalmente. A tal fin se alza en armas e impide a las autoridades legítimas el ejercicio de sus facultades legales. Este hecho es calificado por el Código Penal como delito de sedición (artículo 229).

Es relevante tener en cuenta que para imputar la pena del artículo 229 la ley penal establece la necesidad de que la autoridad nacional más próxima intime hasta dos veces a los sublevados a disolverse o a retirarse. En caso de disolverse el tumulto sin haberse causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito (artículo 232).

Para el caso de que los sublevados hicieran uso de las armas, la ley penal no requiere como condición necesaria la realización de intimidación alguna; tampoco si se ha causado otro mal que la mera perturbación. Finalmente, con respecto a esta cuestión es preciso tener en cuenta la figura del artículo 234 del Código Penal para el caso de que no hubiese mediado uso de armas por parte de los sediciosos, ni tampoco se hu-



piesen formulado dos intimaciones a los sublevados por parte de la autoridad nacional; aquí el juez sólo envió una intimación. En esta figura penal se sanciona «al que retuviere ilegalmente el mando político o militar para cometer una sedición». Si ella llegara a tener efecto, hecho que ocurrió en el caso, «la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición».

Por otra parte, esta norma debe ser vinculada con la regla del artículo 235 del Código Penal, que establece inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena para los funcionarios públicos que hubiesen promovido o ejecutado la sedición, así como duplica el máximo de la pena que corresponda «para los jefes y agentes de la fuerza pública que incurran (en el delito de sedición) usando u ostentando las armas y demás materiales ofensivos que se les hayan confiado en tal calidad».

En el caso, el ex jefe de Policía retuvo ilegalmente un mando, ejecutó la sedición e impidió al gobernador el ejercicio de sus facultades. Corresponde la aplicación de la pena máxima para ese delito, aumentado al doble (artículo 235, tercera parte), así como debe ser decretada inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena (artículo 235, primera parte).

Quinto. El ex jefe de Policía podría ser considerado instigador o autor del delito de falsificación de instrumento público (artículo 293) por los contenidos falsos de las actas labradas para probar, falsamente, que el gobernador distribuía ilegítimamente armas a particulares.

Sexto. El ex jefe de Policía podría ser enjuiciado por el delito de falsa denuncia (artículo 245), en relación a la que hubiese realizado ante la autoridad respecto de los hechos que falsamente le atribuye al gobernador (distribución de armas).

Séptimo. El ex jefe de Policía, con motivo de la sedición que dirigiera, habría impedido y entorpecido el normal funcionamiento de los transportes, ejecutando la conducta descrita en el artículo 194 del Código Penal (decreto ley 17.567, ratificado por la ley 20.509).

Señor presidente: todo esto transforma la actitud del ex jefe de Policía de Córdoba en un hecho que, como antes ya manifestara, no tiene antecedentes en los anales políticos de la República Argentina. Pero cabe preguntarse qué mano oculta ha estado detrás de este sedicioso o faccioso, que la provincia de Córdoba ha tenido la mala suerte de contarlo entre sus agentes públicos.

Entiendo, señor presidente, que aquí cabe una culpabilidad directa del ministro político del ramo en el orden nacional. El ministro del Interior pudo y debió haber hecho inmediatamente que la sedición abortara a la hora de haberse consumado. El ministro del Interior, de acuerdo con las prescripciones de la Constitución Nacional, no solamente tiene el derecho, sino que

tiene el deber de concurrir con la fuerza pública para reponer a las autoridades legítimamente constituidas en la provincia y que ahbían sido depuestas por el acto sedicioso.

Esto es lo que se refiere al tratamiento penal de la cuestión. Pero quiero manifestar que hace un par de días los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical pertenecientes al distrito de Córdoba presentaron un proyecto de resolución por el cual se dirigían al Poder Ejecutivo nacional para que, por el Ministerio de Defensa, se informe cuál es el estado y situación del señor teniente coronel en situación de retiro don Antonio Domingo Navarro, con relación al encuadramiento y a las consecuencias legales y disciplinarias derivadas de su actuación en los hechos que son de público conocimiento y que fueron protagonizados recientemente a través de los actos sediciosos consumados en la provincia de Córdoba.

Anticipo que tan pronto esta Cámara vote el proyecto de ley que tiene en consideración, solicitaré el tratamiento sobre tablas de este proyecto de resolución, porque es interesante conocer cuál es la actitud del Ministerio de Defensa y en qué delitos del orden militar ha incurrido este hombre que ha desprestigiado el uniforme de las fuerzas armadas argentinas.

Aquí, señor presidente, cabe calificar nuevamente la conducta del señor ministro del Interior, que a mi entender es el culpable directo de esta situación que ha soportado Córdoba, del descalabro de sus instituciones, de la pérdida de vidas, del desabastecimiento que ha soportado la ciudad durante largos días, de la angustia de la población al no poder trasladarse de un lugar a otro como es derecho de todo ciudadano libre.

No sabría decir en este momento si es por negligencia, por una torpeza incalificable o por incapacidad. Antes manifestaba que así como existen funcionarios que están prestigiando al Poder Ejecutivo nacional o a esta Cámara, existen otros que por el mismo prestigio del Poder Ejecutivo ha sido tremendamente respetuoso del pedidos y debieran irse, y éste es el caso concreto del señor ministro del Interior.

Quiero formular, señor presidente, algunas observaciones en relación con el debate producido en el Senado de la Nación al considerarse este proyecto de ley. Un señor senador manifestó que nadie podría discutir que hubo sedición en estas circunstancias. Sí —manifestó—, sería una irreverencia pretender un argumento en contra, pero el momento de la sedición pasó. Esto es paradójico, señor presidente, y yo entiendo como paradoja el arte de tomarle el pelo al sentido común. Prácticamente es como manifestar que se ha cometido un crimen, pero como esto ya pasó, el criminal queda libre y lo único que nos queda por hacer es velar al muerto.

Otro señor senador manifestó que el Poder Ejecutivo ha sido tremendamente respetuoso del

orden provincial y que mientras se trataba de una conspiración en ese medio se atuvo a que fueran las propias instituciones las que dieran el remedio legal. ¿Qué instituciones?, pregunto yo. ¿El Poder Ejecutivo, representado por el señor gobernador que se encontraba detenido por el sedicioso teniente coronel Navarro? ¿El Poder Legislativo, clausurado por orden del mismo jefe sedicioso? ¿El Poder Judicial, burlado también en sus decisiones?

Pero no es esto lo que nos perturba, señor presidente. Vuelvo a manifestar que el radicalismo no se siente arredrado por estas contingencias porque tiene trayectoria definida y antecedentes probados que le harán en definitiva recuperar en Córdoba la dignidad de esta provincia ultrajada por este atropello tremendamente inconstitucional.

Cabe aquí en este momento hacer una reflexión que es un ejemplo de civismo argentino y que lo ha dado el candidato a gobernador de la Unión Cívica Radical que por dos veces enfrentara al actual gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Ricardo Obregón Cano. Me estoy refiriendo al doctor Víctor Martínez. Desde el día lunes ha permanecido, hasta el día de hoy, junto a nosotros instándonos para que fuéramos celosos custodios del orden institucional de la provincia de Córdoba y para que exigiéramos de viva voz en esta Cámara que fueran repuestos en sus cargos el gobernador y vicegobernador de la provincia. Creo que se deben registrar muy pocos casos como éste, si no es el único en esta República.

Sin vacilaciones ni dudas de ninguna naturaleza he dejado determinada mi posición frente al proyecto de ley que cuenta con sanción del Senado y por el cual se avasalla la autonomía de mi provincia. Debo callar mucho de cuanto me dictaba mi rebeldía como ciudadano argentino, como cordobés y como diputado nacional por dicho Estado argentino.

Necesito tener fe en mis pares, y aspiro a creer en la permanencia de los valores morales. Deseo el mantenimiento de una consigna liberadora, no solamente en lo económico, en lo social y en lo político sino para la supremacía del yo humano, que no reconoce más dependencia que la íntima lealtad de su convicción, y que determina en definitiva el deseo de sacrificarnos por los altos ideales de la patria. Esta es mi invocación, que efectúo con firmeza, pero no exento de humildad. No deseo para los señores diputados, ni quiero para mí, que un día cualquiera debamos formularnos el tremendo interrogante: ¿para qué señores diputados? ¿por qué, señores diputados?

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Monsalve.

**Sr. Monsalve.** — Señor presidente: deseo formular algunas consideraciones a esta altura del debate y luego de los brillantes discursos que se han pronunciado, que no tienen solamente el

valor de ser brillantes discursos, sino que reflejan una profunda preocupación argentina por un episodio que tal vez no pueda calificarse así, simplemente como episodio; porque es algo más: es una amenaza tremenda a la que estamos expuestos en cada uno de los rincones del país.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

**Sr. Monsalve.** — Resulta difícil, después de escuchar tales discursos, poder aportar elementos que no hayan sido oídos por los señores diputados y queden a disposición de la opinión pública para que ésta juzgue los acontecimientos, como debe ser. Sin embargo, algunas cosas quedan por decir. Escuché con toda la atención posible el informe del señor vocero de la comisión respectiva, que tuvo a su cargo explicarnos las razones por las cuales la mayoría de la comisión propicia el voto del proyecto que tiene sanción del Senado y que estamos analizando. Confieso que extrañé en la voz del señor diputado que hablaba el vigor y el temperamento entrerrianos, que hubieran debido recordarnos en este momento solemne para el país a las figuras que nadie podrá olvidar y que fueron las de los grandes caudillos de Entre Ríos, defensores del federalismo y organizadores de la nacionalidad de que hoy gozamos.

Pero habló con un tono poco convincente —según yo lo interpreto— y como si tratara una situación de rutina. Se limitó prácticamente a reproducir lo que dice el fundamento escrito que tenemos sobre nuestras bancas y a mencionar el hecho de que en Córdoba se habían producido situaciones tales que era necesario remediar por la vía de la intervención federal. Pero no hubo una palabra de condenación fuerte, enérgica y terminante, referida no sólo a la persona, al ejecutor de toda esa gama tremenda de delitos que acaba de enumerar el señor diputado Zamanillo, sino a las otras fuerzas, a los otros hombres que han debido estar respaldando esa actitud, para que se pudiera consumir en la República un hecho que tiene muy pocos antecedentes, pero que con la gravedad de éste no tiene ninguno.

No se puede admitir, por más que se trate de un hombre impulsivo, incontrolado o enfermo, que un solo individuo tenga la audacia de originar todos los acontecimientos lamentables que se produjeron en Córdoba, fuese o no un teniente coronel. Es evidente que hay complicidades o aquiescencias que ahora es necesario indagar mediante una investigación exhaustiva para que se sepa cuáles son, de dónde provienen y a qué propósitos respondieron. Sólo así se podrán prevenir otras situaciones en las que, como dice el señor diputado Sueldo, varias provincias pueden estar temiendo ser involucradas.

Tampoco me conformaron los fundamentos que dio el señor miembro informante. Alabar

al Poder Ejecutivo por su prudencia y por no intervenir directamente, sino recurriendo al ámbito parlamentario, para seguir la vía legal, implica un flaco servicio que se le hace al Poder Ejecutivo, porque desde los tiempos de la vieja Roma un adagio que nadie debe olvidar dice que lo supremo es la salud del pueblo. El pueblo de Córdoba tenía y padeció una grave enfermedad. Había que correr, había que volar a poner remedio a esa situación, y no había que detenerse en escrúpulos de tipo legalista que en otras ocasiones, mucho menos importantes, han sido pasados por alto con una absoluta falta de sensibilidad.

Hemos escuchado una crónica de los hechos. Por lo tanto, yo no voy a insistir en ella. Se han escuchado de los señores diputados que me han precedido, con encendido fervor —perfectamente comprensible porque las han pronunciado no solamente como argentinos sino también como cordobeses— expresiones que deben ser tenidas en cuenta y que nos deben conmover hasta la última fibra, porque son manifestaciones de sentimientos que no podemos abandonar ni negar. Hemos escuchado la voz femenina —que acompañó a la de Cristina Guzmán— de una diputada que como madre, como cordobesa y como argentina expuso no sólo sus inquietudes sino también su tremendo dolor provocado precisamente por los hechos que están originando este debate. Esto me inhibe de hacer una crónica más extensa.

Cuando el señor diputado Portero hacía una relación de los hechos que se produjeron antes de desencadenarse la sedición, cuando mencionó ese episodio tremendo —que no tuvo la suficiente condena del país— de cinco vecinos de mi provincia, de la localidad de Armstrong, que fueron masacrados por la policía cordobesa —la misma que al día siguiente, al pasar frente a la jefatura policial de Córdoba, asesinaba también por error a un joven— nos hace pensar que no fue solamente la sedición la que puso el acento sobre la forma en que Córdoba estaba viviendo en estos últimos tiempos. Sin embargo, no hubo suficiente reacción, porque debió haber complicidad. Y esto se refuerza teniendo presente que el juez Hairabedian, que puso presos a los policías que habían cometido la masacre, no sólo fue repudiado por los sectores afectados, sino que vio su casa volada por una bomba. Y en ese momento la policía cordobesa era la misma que produciría después los hechos sediciosos de que estamos hablando. Todo esto debe compaginarse, porque alguna vinculación deben tener los hechos: alguien debió moverse para tratar de eliminar a un juez que había querido poner un principio de justicia, frente a un crimen horrendo y sin ningún justificativo.

Todo esto debe aclararse, porque de lo contrario, si resulta aprobado este proyecto, o cualquier medida de este tipo, no tendrá de ninguna manera el efecto que debe tener, de evitar la repetición de estos episodios en nuestro país.

Decía que lo producido por este teniente coronel no tiene antecedentes iguales. Nosotros vivimos todavía una etapa en la que las instituciones requieren que las reforcemos y perfeccionemos, y, sobre todo, que las respetemos y las tengamos en cuenta. Somos un país joven, y a pesar de esa juventud, ¡ciento cuarenta y ocho veces han sido avasalladas las autonomías provinciales! No voy a hacer un catálogo con todas esas intervenciones, pero como algunas tienen una llamativa similitud con los hechos que estamos en este momento juzgando, me voy a permitir pedir a los señores diputados unos minutos de paciencia para que vean de qué manera estos hechos no son únicos.

En la misma provincia de Córdoba, en el año 1867, el gobierno, a cargo de Mateo Luque, fue desalojado del poder. El mismo día de los hechos, el 16 de agosto, el gobernador denunció lo acontecido ante el gobierno nacional y solicitó su intervención a los efectos de restablecer el orden y las autoridades legales de la provincia; el 19 de ese mes se tomó conocimiento del hecho, y el día 20, «considerando doblemente criminales, por el auxilio que vienen a prestar al enemigo extranjero, y siendo un deber sagrado del gobierno nacional prestar a las personas que obran a su nombre y a nombre de la Nación la más amplia y eficaz protección, sin lo que el ejercicio de los poderes públicos es imposible», el Poder Ejecutivo acordó en definitiva mandar reponer en su cargo al gobernador Luque. Esto ocurrió en 1867.

En 1889 le tocó el turno a la provincia de Mendoza, de la que era gobernador Tiburcio Benegas. También por problemas intestinos, fue desalojado del poder y, entonces, ante la prisión del gobernador, un funcionario de la provincia, el presidente de la Cámara Legislativa, de apellido Tabanera, requirió la intervención federal. El día 6 de enero se había producido el hecho de fuerza; el día 8 del mismo mes, Benegas solicita la intervención federal, y de inmediato el gobierno central resuelve enviar una misión para que recoja los antecedentes y los eleve al Poder Ejecutivo. Considerando «que los hechos producidos, que comprueban la violencia de que fue objeto el gobernador de la provincia, obligaron a éste a presentar su renuncia para colocarse en situación de requerir la intervención nacional», el día 18 de enero de 1889 el gobierno nacional ordena la restitución en el gobierno de la provincia de Mendoza del señor Tiburcio Benegas, que había sido correctamente elegido.

Para no abundar en detalles, me limitaré a recordar que en La Rioja, en 1925, siendo gobernador Florencio Dávila San Román ocurre un episodio parecido. El 6 de marzo de 1925, exaltados por algunas medidas represivas y apoyados por otro partido, escaso número de principistas, integrantes del partido que gobernaba, se apoderaron de la Jefatura de Policía y de la cárcel poniendo en fuga al gobernador,

quien buscó refugio en el regimiento que estaba de guarnición en la capital. Esto ocurrió el día 6 de marzo.

Por decreto del día 7 de marzo el Poder Ejecutivo acordó, a los efectos de la segunda parte del artículo 69 de la Constitución, la intervención federal, que fue a apoyar y a reponer a las autoridades legítimas que habían sido eliminadas mediante una maniobra similar a la que estamos analizando.

Estamos hablando de los años 1867 y 1889, de la época de las carretas, y hacemos referencia al año 1925, cuando las comunicaciones estaban muy lejos de ser lo eficaces que son hoy. En el año 1974, un gobernador, que sufre igual agravio y que es puesto preso el día 27 de febrero, tiene que esperar pasivamente hasta el día 3 de marzo para que recién entonces el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un mensaje, acompañando un proyecto de ley, que establece no ya la reposición de las autoridades sino una intervención, que, de consumarse, no va a hacer otra cosa que satisfacer los intereses y los anhelos del promotor visible de la cuestión, o sea, el sedicioso teniente coronel.

Nosotros no podemos avalar con nuestro voto semejante absurdo, que es un absurdo jurídico, social y político.

Bien se ha dicho que hay un responsable directo, que es el señor ministro del Interior. Y voy a recordar un episodio que no sé si tendrán presente todos los que participaron en él.

Preocupada esta Honorable Cámara por los asaltos, por los crímenes y el desorden que se sucedían en todos los rincones del país, y para evitar una interpelación pública, siendo consecuente la oposición con su propósito de no crear problemas y de no hacer obstruccionismo, para no originar dificultades al gobierno, se invitó al señor ministro a concurrir a una reunión privada o semiprivada.

Me refiero al mismo señor ministro que debió haber estado hoy sentado, frente a nosotros, para explicar todas estas cosas que no tienen explicación si no es por la vía del protagonista que debió intervenir en ellas. Ese señor ministro estuvo presente en la Honorable Cámara. Algunos de los integrantes de los bloques, uno o dos por cada uno de ellos, planteamos la inquietud, la desazón y la angustia argentina frente al panorama que ofrecía el país y frente a las escaladas de violencia. Como si estuviera tomando una taza de té a las cinco de la tarde, con la flema inglesa, el ministro contestó: todo está bajo control, tenemos resueltos todos los problemas. De tal fecha a tal fecha —mencionaba dos meses— ha habido solamente trece secuestros.

Y cuando se le contestó que la crónica periodística daba cuenta de uno o dos secuestros por día, dijo: yo me refiero a los secuestros denunciados; los que no han sido denunciados no los tengo en cuenta porque lógicamente no

podemos actuar. De los trece secuestros que se han denunciado once están esclarecidos y dos en vías de esclarecimiento.

Ese mismo ministro del Interior, ese desaprensivo ministro del Interior, es el hombre que tiene la función específica de cuidar los bienes, las personas y las vidas de los argentinos. Bien se dijo que quedaba solamente un camino para este ministro, y yo me atrevo a pensar que en la mente de muchos señores diputados que ocupan la bancada de la mayoría y en la mente de muchos fervientes peronistas, debe estar en este momento bullendo la misma idea: hay que sacar a ese ministro porque los hombres deben ser mantenidos y apuntalados en tanto y en cuanto cumplan con la función que tienen a su cargo, pero si por incapacidad, por falta de conocimientos específicos o por cualquier otra circunstancia le están causando un daño al país, no deben permanecer un momento más en la función.

Esto lo dice la oposición, que si actuara con otro criterio y otro sentido de la política, podría estar en estos momentos restregándose las manos y gozando con el deterioro del gobierno. Pero no es así, porque la oposición está en la misma línea que la mayoría, y no queremos que el gobierno fracase y deje de cumplir la función que le compete, porque de que se cumpla esa función depende el porvenir del país, y nosotros integramos la Nación tanto como la integra el sector peronista.

Nosotros estamos diciendo algo que tal vez está ya en la mente de muchos de los señores diputados de la mayoría, pero que es necesario concretar de inmediato, porque de lo contrario, si se sigue con el mismo procedimiento, pronto tendremos que lamentar otros hechos tan graves como los ocurridos.

«Pecado de soberbia», se dijo hoy. Es uno de los peores pecados porque perjudica, porque cae finalmente sobre la conciencia y porque origina males. Nadie puede negar que es muy importante el número, la cantidad, la masa, que ha respaldado y respalda a este gobierno, pero sería un gravísimo error considerar que por eso el partido o la corriente es omnipotente y que no necesita del apuntalamiento que significa tener la colaboración de una oposición constructiva.

Quizás algunos sonrían en este momento, con esa sonrisa que los criollos llaman «sobradora»; quizás alguno pueda pensar que no somos nosotros quienes tenemos que orientar a nadie ni quienes tenemos que dar consejos; pero debe recordarse que desde afuera se ve mejor que desde adentro; que desde lejos se aprecia la magnitud del bosque, mientras que éste no parece tan grande como es cuando estamos inmersos en él.

No hay que caer en el pecado de soberbia y es bueno escuchar las voces de cuya buena intención nadie puede dudar. Evaluar los conceptos que se emiten desde fuera de casa, pero mirando

y velando por ella, es una virtud que permite corregir errores y evitar nuevos deterioros.

Señor presidente: estimo que no hay posibilidad de agregar nuevos elementos que puedan esclarecer más la situación. Todos tenemos hechos juicios de valor, tanto los de este sector como los de la otra vereda. A esta altura sólo cabe esperar el acto material y formal de la votación. El resultado será democráticamente acatado y las consecuencias, buenas o malas, de la resolución que se adopte pesarán inexorablemente sobre la conciencia de quienes, triunfantes por el número de sufragios, hayan podido equiparar el rumbo.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Gilberto Molina.

**Sr. Molina (G. H.).** — Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra, en primer lugar, como representante de la provincia de Córdoba y, al mismo tiempo, en nombre del grupo parlamentario del Movimiento de Integración y Desarrollo, sin que ello signifique discrepancia alguna con el bloque del Frente Justicialista de Liberación, al que pertenecemos.

No me referiré al aspecto constitucional del problema, que ya ha sido expuesto con justeza y brillo, ni tampoco a los de índole histórica, política ni al detalle de hechos y personas. Trataré de encuadrar mi exposición en el ámbito de la situación general del país y de la revolución de nuestro tiempo. Cuando el país se estremece ante los episodios de Córdoba y las opiniones se polarizaban en torno de hechos y personas, se alzó una voz serena que abrió los horizontes de la crisis y señaló amplios elementos de juicio.

Dijo entonces el doctor Arturo Frondizi: «La plataforma sobre la cual se desarrolla esta gran crisis política que vive el país y que abarca todos los días nuevas provincias es la revolución nacional. Lo que se disputa no son concepciones de izquierda y de derecha, aunque izquierdas y derechas están presentes en la liza, aquí como en el resto del mundo. Lo que se disputa es el destino mismo de la revolución nacional; que está exigiendo desde el 25 de mayo pasos audaces y urgentes en el orden económico, social y político. En estos tres frentes se libra la batalla y los tres están abiertos».

A pocas horas del estallido de la subversión policial, el comité provincial de mi partido, con la firma de su presidente, escribano Héctor Panzeri, denunció la sedición y proclamó su apoyo al orden constitucional. Así mismo formuló una urgente convocatoria a las fuerzas políticas y populares para coordinar acciones en pro de la defensa y el restablecimiento de las instituciones republicanas.

El caos se produjo rápidamente. El jefe de Policía, convertido en arrogante caudillo subversivo, se hizo dueño de la situación. Bajo un estado de fuerza fueron tomando relieve causas y circunstancias reveladoras de la verdad. No

deseo hablar de las personas, pues cada una se determina en estos casos según los factores que orienten su raciocinio, impulsen su voluntad o movilicen sus intereses. Me atenderé, sí, a ese otro esquema interpretativo a que aludía al comienzo de mi exposición.

En el país anda y vive una revolución; viene tomando forma y fuerza desde lo hondo de la problemática nacional, y tiene su más sensible vehículo humano en las vibrantes masas obreras y juveniles que tomaron en sus manos las banderas justicialistas del Frente de Liberación. Sus consignas y proclamas no fueron cosas livianas ni pasajeras. Contenían y contienen los lineamientos de un recio programa revolucionario, de un reclamo de justicia social y de una voluntad transformadora de todo el sistema estructural de la República: actualización de inventarios, modernización tecnológica, inversión reproductiva, diversificación energética, poderío siderúrgico, expansión petroquímica, multiplicación de caminos y transportes y por encima de todo ello, como una bandera mayor, surgiendo de la carne y el alma de los argentinos, un reclamo perentorio, prioritario y superior: liberación nacional. Los obreros decían: liberación o muerte; los jóvenes gritaban: liberación o muerte; las mujeres pedían: liberación o muerte. Palabras bellas y graves que pusieron una pátina heroica en el rostro de los mártires del pueblo. Muchos jóvenes argentinos cayeron cara a la opresión, al terror y a la muerte, mostrando sobre sus labios el relámpago trágico de un juramento revolucionario: liberación o muerte.

El movimiento obrero argentino ha superado los estratos meramente gremiales y clasistas para alcanzar ámbitos de totalidad nacional y de trascendencia americana; constituye la columna vertebral aguerrida, decidida y apasionada en marcha hacia la liberación de todos nuestros países subdesarrollados de América latina. A su lado, como una afirmación de heroica confianza en la grandeza de la vida, está la juventud, esa juventud inconforme y batalladora que en todos los campos de combate y de las ideologías, de las instituciones y hasta de los sueños generosos, forja la verdadera, fuerte y definitiva unidad del pueblo argentino. No está en mi ánimo halagar a la juventud, sino señalar hechos sociológicos e históricos incontrovertibles. Nuestra juventud reclama con generoso empecinamiento que se le confíe la realización revolucionaria. Y es en este estado en que ya resulta insoslayable el tema de la violencia.

Una ola de violencia sacude al mundo, y no hay razón ni vital ni histórica para que esa ola de violencia no alcance a nuestro pueblo. A través de un proceso de violencia se está por definir la suerte del hombre y del mundo. Engels la llama la fuerza instrumental; Sorel, escuela que en las calles restaura la juventud de la sociedad; Nietzsche, estimulante de la historia; Spengler, antídoto de la decadencia; Marx, par-

tera de la historia. Frente a esta exaltación de la violencia, Cristo le opuso el amor y Tolstói y Gandhi la condenaron como causa de todos los males.

Pero cualquiera sea el criterio con que se la considere es, sin duda, un fenómeno que trasciende y rebasa los planos psíquicos y éticos para invadir los de la historia, la sociología y la política. Y ya estamos tocándonos con la violencia política.

Políticamente la lucha se libra entre valores residuales y valores emergentes. Hay valores residuales que poco a poco se incorporan a los valores emergentes; y hay valores emergentes que no se liberan de herencias y adherencias residuales. Se produce un intenso pero mutuo ametrallamiento ideológico, avanzada de toda revolución auténtica. No olvidemos que todo juega su proceso definitivo en la misma conciencia de los hombres; si éstos son jóvenes, la mezcla, el choque y la decantación de las ideas alcanza fuerza y rapidez extraordinarias.

La juventud del mundo, tanto de los países altamente industrializados como la de los nuestros —caídos en el subdesarrollo y la miseria— se ha lanzado con todas las armas que logra quitar a las estructuras viejas y anquilosadas a la lucha por la transformación del mundo, de las instituciones y de las costumbres. Ha recibido las aguas de cuatro vertientes ideológicas, y las bate y las mezcla con alegría y valor. La juventud está creando en el mundo entero una filosofía de superación. Un poco de Cristo —y espero que estas referencias no se tomen como herejía— y un poco de Marx, un poco de Freud y un poco de Heidegger, a través de Marcuse. Ya no existen fronteras ideológicas. Ya no existen prejuicios ideológicos. Ya no existen inhibiciones ideológicas. Con este bagaje, a veces inmaduro, con frecuencia incompleto, luchan los jóvenes y entregan a la lucha optimista y honrada lo mejor de sí mismos.

Córdoba, digna y altiva, rebelde y sabia, está permanentemente en esa línea de combate. Nació de un acto de rebeldía; se forjó en la soledad y en la responsabilidad que le impuso la historia, de ser nudo de comunicaciones y fuerte de tierra adentro. Dio en 1604 el primer poeta a la patria; tuvo la primera cátedra de filosofía del país; montó la primera imprenta e imprimió el primer libro. Sus sacerdotes produjeron el primer alzamiento ideológico y filosófico de América, en 1756. Sus soldados, con Juan Bautista Bustos al frente, tendieron el primer esquema federalista del país; sus obreros montaron la primera exposición industrial y construyeron las fábricas que dieron a la ciudad el recio sobrenombre de Capital Metalúrgica. La universidad, vieja y pobre, sigue siendo llama intelectual que no se apaga ni decae frente a todos los vientos del mundo, a los que absorbe, reelabora y llena con ellos el corazón de la juventud argentina. Y allí, en Córdoba, se gestan muchos

de los sacudimientos espirituales y sociales que conmueven de vez en cuando a la República.

En medio de ese panorama triunfa el 11 de marzo la fórmula provincial constituida por Ricardo Obregón Cano y Atilio Hipólito López. La campaña electoral había sido brillante y los electos asumían sus cargos entre aplausos y esperanzas.

¿Qué pasó después, señor presidente? Para explicar el proceso hay que comprender a Córdoba en los tres frentes de que hablaba en su declaración el doctor Frondizi: «En estos tres frentes se libra la batalla y los tres están abiertos: el económico, el social y el político».

En cuanto al económico, sólo diré que Córdoba es sede de fábricas y empresas que compiten con Buenos Aires y aun con la industria de países capitalistas en capacidad de producción y calidad de productos elaborados. No olvidemos que buena parte de los negocios con Cuba se han convenido sobre la base de la industria cordobesa. No olvidemos que el gobierno del pueblo, conducido por un líder de la América emergente, como es el general Perón, acaba de romper el cerco imperialista que Estados Unidos había tendido en torno de Cuba y que pretende mantener contra toda América latina. Tengamos presente que Estados Unidos intenta discutir nuestros derechos a comerciar con Cuba y con otros países socialistas del mundo.

En cuanto al aspecto social, no olvidemos que a una juventud esclarecida, que estudia en las cátedras de Trejo o recibe su influencia cultural, se ha unido un proletariado industrial con bien configurada conciencia de sus derechos y de su fuerza de trabajo y pensamiento y que ha madurado su elaboración ideológica y programática. Córdoba abrió las puertas en tiempos de la colonia a San Agustín y a Duns Scotto, expositores de una filosofía voluntarista; después, a Newton y a Gassendi, expositores de la física revolucionaria. Córdoba ha modificado con Alvarez López tesis y conclusiones de la relatividad de Einstein y principios y estructuras existencialistas de Heidegger con Carlos Astrada. Córdoba ha cantado al paisaje de la patria con los versos de Tejeda, a la fuerza de la patria con los de Lugones y a la dulce belleza de la patria con los de Arturo Capdevila. Pero también ha proclamado su voluntad de pelea con Vélez, el montonero de La Calera, con Pujadas en Trelew y con muchedumbres extraordinarias en plazas y calles. Yo no olvidaré jamás que desde las tribunas del Frente Justicialista alcancé a ver el corazón en llamas de un pueblo decidido a salir al encuentro de su destino y a mantener el rumbo de su avance. Y es en esto del rumbo y del destino donde suele jugar sus contradicciones aquello de las «relaciones de incertidumbre» de que nos habla cierta filosofía que quiere superar estadios clásicos del pensamiento. Allí se nos desorienta y extravía mucha gente, que critica y condena a Córdoba sin comprenderla.

Porque el rumbo es el movimiento y el destino, la situación de la partícula, que es el hombre. Y cuando el hombre estudia, persigue y atrapa el movimiento, se da cuenta de que no puede explicarlo sin estudiar, perseguir y atrapar la situación de la partícula. Y se lanza a estudiar, perseguir y atrapar la situación de la partícula, pero cuando lo logra se da cuenta que de poco le sirve el esfuerzo si no tiene en sus manos la razón y el ser del movimiento. Para entender esto hay que tener el don de la ubicuidad, virtud intelectual de larga y lenta elaboración cuyo manejo es habitual en la mente de los cordobeses.

El gobierno de Córdoba se vio, pues, en medio de un violento tembladeral. No supo o no pudo tranquilizarlo a pesar del talento del gobernador y de la indiscutible popularidad del vicegobernador. Sin dejar de señalar causas exógenas en lo económico y en lo político, digamos que en la subversión culminó un largo proceso de graves disentimientos intestinos —que es común, diría yo, a todos los movimientos actuales—, que es indispensable superar en el futuro si se quiere afianzar la legalidad y la estabilidad del gobierno del pueblo. Digámoslo con claridad y honestidad: Estos conflictos deterioran todo el status político del país y ahora, precisamente, en el momento en que el general Perón necesita el tiempo y los recursos para producir el despegue económico del país y el mejoramiento de los índices de nuestro bienestar, por culpa de imprudentes reyertas debe destinarlos a subsanar errores, reorganizar cuadros y rectificar rumbos, sobre todo porque cierta oposición intenta una deslucida unidad democrática alrededor de cuestiones lamentables del quehacer nacional.

Es necesario entender que un movimiento revolucionario como el que debe sistematizar la labor del gobierno del general Perón requiere unidad conceptual y organizativa: un jefe, un programa y un movimiento. Y quienes no acatan al jefe, no cumplen el programa y no ayudan a conservar el movimiento, se pasan al enemigo, conspiran contra el jefe y sirven intereses ajenos a los de la revolución a la que creen pertenecer.

Una vez me permití recordar al doctor Obregón Cano que siendo Córdoba una ciudad y provincia de raíz española, podría decirse de ellas lo que un rey de España decía de su país: «Con España podrá hacer cosas grandes y hermosas quien sea capaz de mantenerla en paz y unida». Y esto es lo que desgraciadamente no logró el gobierno del doctor Obregón Cano. Y no deseo entrar en un análisis del gobierno ni de las personas ni de los hechos, porque a eso se han referido con amplia solvencia intelectual y verbal algunos de los señores diputados preopinantes. Solamente diré que mi partido ha repudiado la subversión policial, la que alcanzó formas, expresiones y duración realmente incalificables. Estábamos acongojados ante esta si-

tuación. Deseábamos y esperábamos el menor deterioro posible de nuestra provincia y no correspondiendo ya el restablecimiento del gobernador y del vicegobernador y porque la renuncia indeclinable de ambos introduce un cambio en la situación, anticipo el voto favorable al proyecto venido en revisión del Senado, por dos causas: primera, porque existe la renuncia indeclinable de ambos gobernantes, y segunda, porque la realidad fáctica de Córdoba ha tornado más que imposible, inconveniente, esa posibilidad de restablecerlos. Hay una situación real a la que debe darse fin cuanto antes. Demorar la solución puede llevar de hecho a dar tiempo a otros reventones subversivos, a la vez que agravar la situación industrial de la provincia.

La CIA no duerme, señor presidente, y aunque ya no está en El Plumerillo ni en la Dirección Impositiva, es recomendable no darle un voto de confianza para que urda las maniobras de la traición y el sometimiento.

Creemos que la intervención federal debe limitarse, como el Poder Ejecutivo lo dice en su proyecto, a los cargos vacantes, considerándose tales los que han sido objeto de renuncia indeclinable por parte de sus titulares, subsistiendo, en consecuencia, la Legislatura, la justicia y los gobiernos municipales.

He hablado de Córdoba con más entusiasmo que sabiduría, pero sé que no habrá paz ni desarrollo en Córdoba, ni en parte alguna del país, si no se dan aquellos pasos audaces y urgentes, como decía el doctor Frondizi en su declaración, que lleven al cambio de las estructuras: de las sociales, mediante la alianza de clases y de la justicia distributiva y la movilidad social; de las económicas y productivas, mediante el uso reproductivo del crédito, la explotación intensiva de los recursos naturales, régimen de la tierra en función de la productividad, tecnificación del agro, control del comercio exterior, sistematización de industrias, con gran ímpetu de la industria pesada; de las de poder, mediante el entrelazamiento de la economía y la política en procura de un equilibrio armónico y fecundo de necesidad y libertad, de modo que las exigencias de la economía no pongan en peligro las excelencias de la libertad, y que los derechos de la libertad no desorganicen, debiliten o malogren las construcciones de la economía.

Esto podría ser un programa para un gobernante capaz de regir políticamente sin odio y sin miedo, pues la política es el arte y la ciencia de organizar la convivencia. Si en tiempos de paz, con el trabajo; si en tiempos de revolución, cumpliendo los cuatro pasos que el general Perón ha señalado como esenciales de toda revolución. Pero en uno u otro caso, para asegurar la justicia social, el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Para que se cumpla ese programa en Córdoba, votaremos los dipu-



tados integrantes de este grupo parlamentario el proyecto venido del Honorable Senado. Para dar una expresión de confianza al superior gobierno, y dársela porque los argentinos debemos tener confianza en las instituciones y en las personas. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Señor presidente: tenía pensado dedicarme exclusivamente al problema de orden constitucional planteado por los sucesos de Córdoba, en razón de que este poder, integrante del gobierno federal, resultaba el más comprometido. Ya fuere porque el señor diputado Molina ha sido el inmediato anterior en el uso de la palabra, ya porque ha puesto tono vibrante a sus expresiones de manera tal que nos hemos despertado esta madrugada con su elocuencia, o acaso porque resulta ideológicamente desdeñable, voy a referirme ligeramente al problema político asociándolo con Córdoba.

En primer término yo diría que la alocución del señor diputado Molina es un sermón para ser usado por el pastor de otra religión, porque no podría entenderse que hiciera historia sin buscar un resultado moral como enseñanza o expresión señera, así como no podría tocarse un tema de esta naturaleza sin llegarse a una conclusión que sea el fruto de los factores puestos a jugar como método.

El señor diputado Molina ha comenzado haciendo el elogio de la revolución. Todos podríamos hacerlo ya que hay una cantidad de revoluciones. Podría decirse que se trata de la revolución que se da en el organismo humano o en las sociedades que pugnan por sobrevivir, desarrollarse y llegar a niveles de superación. Por supuesto que no habrá querido referirse a la revolución que se dio en Rusia, en China, o en Cuba, cuya proyección opera en estos instantes como una dura experiencia, y como una sombra sobre el camino de la civilización humana.

**Sr. Molina (G. H.).** — Me he referido a la revolución que se está operando en el país.

**Sr. Falabella.** — Pero el señor diputado habló del marxismo y volvió a crucificar a Cristo asociándolo al pensamiento despiadado de Marx.

**Sr. Molina (G. H.).** — En un intento por sacarlo de los lazos de la oligarquía.

**Sr. Falabella.** — ¡La oligarquía! Cuántas frases huecas para explicar procesos que no se entienden. ¿Seguiremos estereotipando en la cabeza del pueblo fórmulas que ya no tienen sentido? Aquí, acaso, puede haber una oligarquía intelectual, pero el señor diputado levantó el grito de liberación o muerte.

**Sr. Remero.** — Después del préstamo del BID, de 600 millones de dólares, ¿de qué liberación se habla?

**Sr. Falabella.** — ¿En qué ha puesto más énfasis el señor diputado, en la liberación o en la muerte? ¿Qué es lo que se ha dado más como resultado cierto en estos momentos? ¿Se ha li-

berado a alguien? Esto es muy dudoso en la Argentina, como es dudoso en Rusia, donde Solzhenitsyn está sufriendo el polvo del exilio, como es dudoso en Cuba, donde no se puede pensar sino como el amo. En cambio, si hubiera que computar la muerte, yo le diría que la revolución tiene resultado cierto.

Se ha referido a la violencia, pero a la violencia agresiva, y ha dado nombres. Es la violencia de la agresión la que ha querido celebrar. Hubiéramos preferido que fuera la violencia de la transpiración, la violencia que el hombre sufre cuando tiene que acometer grandes empresas, la violencia que se pone sobre el alma con la continencia y con la moderación, la violencia que el hombre se echa encima para regularse, moderarse y elevarse. Pero no; aquí se trata de la otra violencia, de la que arma la mano y pega el golpe. ¡Y todavía se cree que con esas fórmulas se va a sembrar trigo pan! ¡Se cree que con esas fórmulas se va a alzar con dignidad y destellante esa bandera! ¡Se cree que con su ruidoso transfondo se van a acunar nuestros sueños y nuestros ideales! Lo decimos en nombre de nuestras tradiciones, que no son valores residuales, como decía el señor diputado, porque es permanentemente turgencia, porque es esencialmente emergente, porque es la apostura, el signo y la gloria de la gesta alzada como mandato para la familia argentina.

Yo quería traer una conclusión, y el señor diputado me la ha dado generosamente. Después de exaltar la violencia y decir que se había levantado la bandera de liberación o muerte, que convenía a la revolución, y de presentar el territorio de Córdoba, yacimiento de substancia medular para la cultura argentina, como territorio en el que se estaba dando la experiencia dialéctica de la violencia, concluyó diciendo...

**Sr. Molina (G. H.).** — No me adjudique palabras que no he dicho. Sea honesto intelectualmente.

**Sr. Falabella.** — Quiero serlo.

El señor diputado ha dicho que en Córdoba se iba a producir, a través de esa dialéctica de dos fuerzas encontradas en un proceso revolucionario, el milagro que todos estaban esperando, a lo que asoció todo el programa económico del señor Frondizi, que no sé qué tenía que ver.

**Sr. Molina (G. H.).** — No es cierto.

**Sr. Falabella.** — Lo que el señor diputado ha dicho es muy serio, por lo menos para nosotros.

**Sr. Molina (G. H.).** — Está falseando la verdad.

**Sr. Falabella.** — Y el señor diputado concluyó afirmando —voy a tratar de citarlo textualmente, para ser honesto—...

**Sr. Molina (G. H.).** — Hablé de un contexto económico, social y político.

**Sr. Falabella.** — ...dijo que no se ha logrado mantener a Córdoba en paz y unida. Entonces,

si la llamada revolución no ha logrado mantener a Córdoba en paz y unida, que se busque otro método.

Discúlpeme el señor diputado; no he querido molestarlo en lo más mínimo, y así como pone vehemencia y pasión —que yo le he reconocido— permítame que yo también ponga vehemencia al proclamar mis convicciones.

Toda vez que tenemos que analizar, como integrantes del Poder Legislativo argentino, qué es lo que procede en base al ordenamiento legal de nuestro país frente a un movimiento sedicioso ocurrido en la provincia de Córdoba, no obstante tratarse de hechos muy conocidos, voy a hacer un ligero replanteo de los mismos, para luego incursionar en la teoría constitucional.

El día 28 de febrero los argentinos tuvimos la impresión, al leer los diarios, de que habíamos sido transportados un siglo y medio hacia atrás en nuestro sufriente proceso republicano, o de que estábamos leyendo los diarios del siglo pasado.

Un jefe de policía se había sublevado y había detenido al gobernador y vicegobernador de Córdoba, electos en una muy reciente elección. Pese a que no van a resultar datos aportantes para el análisis, no podría dejar de considerar que ante esta actuación del jefe policial, que ya ha sido evaluada por todos los sectores, se dan simultáneamente una serie de fallas en los organismos técnicos y legales de la República y de la provincia en cuestión.

No tenemos conocimiento sobre lo que de inmediato hizo el señor jefe del Comando número III con asiento en la provincia de Córdoba al tener conocimiento, como lo debió haber tenido de inmediato, de que un hombre, que no obstante su situación de retiro se debe, de acuerdo con el Código Militar, a la disciplina castrense, había incurrido en un acto sedicioso. No sabemos qué actuación o qué actitud asumió el señor jefe de ese cuerpo de Ejército.

Tampoco tenemos conocimiento de lo que hizo el señor comandante en jefe. No resulta disimulable que el señor comandante en jefe no haya actuado de inmediato ante una situación que no sólo comprometía la seguridad de una provincia y el ordenamiento institucional, sino que en su trasfondo también comprometía el prestigio del Ejército.

Mientras esto ocurría en lo que tendría que ser el área de contralor de las instituciones de Córdoba, ocurrieron una serie de anomalías. En el Poder Legislativo las Cámaras no actuaron como debieron haberlo hecho en virtud de las prescripciones legales. Y esto cuando la Constitución marca muy claramente cuál era el procedimiento a seguir. Debieron denunciar la situación de los gobernantes y actuar individual y conjuntamente en su defensa.

Sin embargo, lo que ocurre es que un representante de una de las Cámaras consiente en asumir el gobierno y en substituir al gobernador

y un representante del Poder Judicial, en una actuación sin precedentes, acepta la anomalía de que el substituyente jure en su presencia.

Tampoco sabemos qué hizo el señor ministro del Interior, responsable en la faz política.

Sr. Porto. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Falabella. — Sí, señor diputado.

Sr. Porto. — Las palabras del diputado Falabella me hacen retrotraer la memoria al año 1943, cuando se hizo una revolución cuya proclama tenía tres consignas, pues se manifestaba que se hacía contra la injusticia social, la venalidad administrativa y el fraude electoral.

Recuerdo que el 5 de abril de 1931, antes del peronismo, siendo yo radical y dirigente de la juventud de La Plata, se anuló una elección que habíamos ganado contra los conservadores que se habían adueñado violentamente del país en 1930.

Quiero recordar que en 1932 los políticos conservadores con Raúl Díaz, Edgardo Míguez y Uberto Vignart hicieron salir a la calle al señor subjefe de la policía de Buenos Aires, Tiberio Podestá, quien destituyó al gobernador Martínez de Hoz.

Quiero señalar que en esa década, que se llamó infame, y que obligó al Ejército argentino a hacer una revolución en 1943, los conservadores fueron los gestores de la violencia y del fraude, pues salvo en la Capital Federal y en algún pequeño distrito, como San Nicolás, no se podía votar en ninguna parte, porque la policía brava votaba por el pueblo.

Esos señores conservadores tuvieron a todo el pueblo argentino fuera del Estado que ellos explotaban para sí y para sus parientes oligarcas, según la acepción que le dio a esta palabra, hace miles de años, Aristóteles, en su libro *La política*.

También quiero recordar que los conservadores se unieron con los comunistas y los radicales en 1946 para dar la batalla electoral contra el peronismo, y nosotros los derrotamos a todos juntos.

También el partido conservador se alió en 1955 con las fuerzas que expulsaron a todos los profesores que habíamos ganado legítimamente nuestros concursos, a todos los que habían ejercido con dignidad los cargos públicos, y puso en la cárcel o en el exilio a todos los que habían sido elegidos por el 66 por ciento de la ciudadanía.

Fueron también los que desgobernaron el país hasta que vinimos nosotros, dispuestos a jugar nos la vida con nuestro líder para llevar a la Argentina a los altos destinos que merece, donde todos seamos esclavos de la ley, y donde el Estado vele no sólo en los hogares de los oligarcas sino también en el de los humildes.

Aprovecho la ocasión que me brinda el compañero Falabella para pedirle al compañero Za-

manillo que vuelva a hacer la pregunta que entiendo hizo cuando yo no estaba en el recinto...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Después de la breve aclaración del señor diputado Porto, continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Si nosotros pudiéramos obtener, no sé si mediante adhesión o contrato, un adversario como el diputado Porto que nos ataque todos los días, de esa manera, iríamos creciendo en prestigio todos los días. (Risas.)

**Sr. Romero.** — Y le pido al señor diputado Porto que no se vaya cuando me corresponda el uso de la palabra porque tengo algo que decirle.

**Sr. Falabella.** — Ante esta actitud de un jefe policial que estaba subordinado al gobernador de la provincia, es indispensable analizar, para el planteo fáctico, algunos artículos de la Constitución provincial. Los artículos 49 y 56 establecen la única fórmula de destitución de un titular del Poder Ejecutivo. El artículo 100, por su parte, expresa que en caso de separación o impedimento simultáneo del gobernador y vicegobernador, el mando será ejercido por el presidente provisorio del Senado y, en defecto de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados, quien convocará dentro de tres días a la provincia a una nueva elección para llenar el período corriente, siempre que de éste falte por lo menos un año y que la separación e impedimento del gobernador y vicegobernador «sean absolutos».

Nos encontramos en este caso con que el impedimento del gobernador y del vicegobernador no eran absolutos, porque si se debían a la fuerza, ésta no era irresistible o insuperable, y pudo ser resistida y superada por una fuerza mayor, como la del gobierno federal.

Para tener una idea precisa de la proporción de la lesión de tipo institucional que se ha inferido, no podemos dejar de comentar el artículo 116, en virtud del cual se atribuye al gobernador la jefatura superior de la provincia y se deja a su cargo la administración general. El inciso 9) de este artículo, que lo faculta para nombrar y remover sus ministros, oficiales de secretaría y demás empleados de la administración cuyo nombramiento no esté acordado a otro poder; el inciso 14), que le asigna el cargo de comandante en jefe de las milicias de la provincia; el inciso 16), que lo faculta para prevenir las conspiraciones y tumultos por todos los medios que no le estén expresamente prohibidos, y el inciso 19), que pone bajo su inspección suprema, conforme a las leyes, todos los objetos de la policía, de seguridad, y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la provincia.

¿Cuánto le habrá costado a Córdoba, como a sus hermanas de la República, llegar a elaborar una Constitución tan precisa para determinar las facultades y asignarlas, y en qué medida es agravio y nos somete a la vergüenza y al ridículo la actuación de un hombre que atropella ciento cincuenta años de elaboración histórica y que con insólita soberbia se burla de los principios definitivamente impuestos.

¿Qué pasa en la provincia de Córdoba ante esta situación? Es necesario analizar los artículos 59 y 69 de la Constitución Nacional, que los doy por sabidos y que han sido repetidos en el curso de esta sesión. Pero antes corresponde decir que es pauta fundamental en la hermenéutica de nuestra Constitución Nacional la circunstancia no casual ni fortuita de que tanto el reconocimiento de la personería provincial como la fórmula articuladora de la intervención están en la primera parte, capítulo único, en donde todo el articulado va bajo la denominación de «Declaraciones, derechos y garantías».

Debe destacarse, entonces, liminarmente, que la Constitución Nacional no ha puesto un régimen para incursionar en el territorio de la provincia o para eventualmente interrumpir su proceso político institucional, sino que antes, por el contrario, ésta es una garantía fundamental que se le ha dado a la provincia, que la tenía a la hora de subscribirse la Constitución Nacional: prioridad histórica y pactos preexistentes; personalidad propia e indelegable, reconocida y garantizada.

Se le dijo a la provincia: si dentro de esa órbita asegura la fórmula republicana de gobierno en función de esta Constitución homogeneizadora, el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria, la Nación, esta Constitución y, a través de ella, el poder federal le garantizan su personalidad política e histórica.

En el artículo 69, siempre como una garantía para la provincia, existe la llamada intervención, que se da solamente en dos supuestos: cuando está suprimida, alterada o amenazada la forma republicana de gobierno, y cuando es necesario repeler invasiones exteriores. En el otro aspecto, por requisición de las autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si fueran depuestas. Está con la no requisición y con la requisición.

Ahora bien: ¿podría decirse aquí que en la provincia de Córdoba estaba suprimida o alterada la forma republicana de gobierno que reposa en la voluntad popular y en la división de los poderes, para justificar el envío de una intervención? Digamos que no. Digamos que el acto sedicioso por sí no alcanzó a proyectarse con ese alcance perturbador. Ese solo acto de sedición únicamente alcanzó a interrumpir el funcionamiento de la forma republicana de gobierno, la que se mantuvo en todos sus planteos y toda su potencia. Pudo recuperarse automáti-

camente si una fuerza mayor que la del jefe sublevado se le hubiere contrapuesto y hubiera liberado a los institutos provinciales. Quiere decir que éste no es el caso del supuesto constitucional.

Entonces la pregunta se plantea de inmediato: ¿ha existido requisición? Podría afirmarse que la requisición no se dio ante un gobernador y un vicegobernador detenidos.

Vamos a analizar los distintos intentos de reglamentar en la Argentina la intervención federal. Casi todos los autores de proyectos de ley que en su momento comprendieron la necesidad de instrumentar un procedimiento para canalizar la fórmula de la intervención sostuvieron un principio: para Pesenti, en junio de 1912, «cuando fuere notorio que por encarcelamiento, secuestro u otra imposibilidad material no pudiera requerirse la intervención, se entendería requerido el auxilio nacional al solo efecto de restablecer las autoridades constituidas»; Rodolfo Moreno incluye idéntica fórmula en el artículo 79 de su proyecto en 1924, y en comentarios se remite a Julio Costa, que también en su proyecto del 10 de enero de 1916 entendió que no era necesario que se produjera la expresa requisición del gobernador detenido o secuestrado, porque debía dársele por expresada tácitamente en el carácter de una necesidad política y en la imposibilidad de transmitirla.

De tal manera que ni siquiera podríamos en este caso apelar al reclamo que el señor gobernador Obregón Cano le hace al gobierno nacional cuando es liberado. En el momento mismo de la detención el gobierno federal debió entender que existía la tácita requisición de las autoridades provinciales, porque no podría de ninguna manera aceptarse que el gobernador encarcelado no quisiera estar en libertad y no deseara ser restituido a la función de gobierno.

**Sr. Molinari Romero.** — Con el permiso de la Presidencia, ¿me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Falabella.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Molinari Romero.** — En cierta manera no podemos decir que no hubo requisitoria de las autoridades de Córdoba. Tengo aquí un recorte de «La Voz del Interior», de Córdoba, que transcribe la resolución tomada por la asamblea legislativa de la provincia requiriendo precisamente el auxilio del gobierno federal. Lo hizo con el voto de los diputados de la Unión Cívica Radical, por cierto, y de todos los integrantes del bloque del Frejuli, salvo, por rara casualidad, de los señores que luego ocuparon los ministerios en el gobierno usurpador.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Falabella.

**Sr. Falabella.** — Gracias, señor diputado. Precisamente yo estaba diciendo que resultaba innegable la existencia de requisición tácita del gobernador detenido. Si a esto se le sumara la expresa, más a mi favor.

Nos encontramos entonces, señor presidente, con que existe una clara razón para la ayuda o auxilio, pues se da típicamente el caso previsto en el artículo 69 *in fine* de la Constitución Nacional: «si hubiesen sido depuestas por la sedición».

Otro problema a analizar, ya que aceptamos la necesidad del acto de intervención en auxilio, es determinar con qué alcances, con qué objeto debe hacerse.

No obstante que, por abandono de la doctrina constitucional y por la intromisión no siempre correcta de intenciones políticas en la República Argentina ha sido un vicio la actuación del gobierno federal interrumpiendo la vida institucional de las provincias y privándolas del derecho de autodeterminarse —derecho que de ninguna manera han delegado sino que, por el contrario, han conservado en el acta que significa la Constitución Nacional—, corresponde decir que una intervención siempre debe darse con carácter restrictivo, para lo mínimo, para lo imprescindible.

En la Convención de 1860 Sarmiento discute y lleva el recuerdo del artículo 49, sección IV, de la Constitución norteamericana. En los Estados Unidos de América, que tienen exactamente nuestra misma base constitucional y nuestra misma conformación federativa, que además tienen una prescripción constitucional que se asemeja a la nuestra —sobre todo después de la reforma de 1860—, no se registran casos concretos en los que el gobierno federal haya penetrado en el interior de un Estado y menos aún que haya sustituido la autoridad de un gobernador. Estados Unidos ha sido respetuoso del principio, y lo ha mantenido largamente.

Recordemos la respuesta del presidente Tyler al gobernador King, de Rhode Island (Matienzo, *Nuevos temas políticos e históricos*, pág. 88).

En cambio, el sistema republicano argentino ha sido más perjudicado por el remedio que por la enfermedad. No ha sido tan grave el disturbio interno como la fórmula para solucionarlo. A través de esta fórmula de la intervención se ha atropellado al gobierno de la provincia, se lo ha conculcado.

Veamos lo que dice Rodolfo Moreno citando a Sarmiento. Cuando el Congreso Nacional dictó las leyes 317 y 318 del año 1869, Sarmiento sumó su pensamiento al de Vélez, envió un mensaje al Congreso de la Nación y vetó las dos leyes. Es sumamente importante que lo recordemos: «La función primordial del Ejecutivo nacional, por tanto, habiéndose despojado las provincias del poder de hacer la guerra o contraer alianzas, es reprimir las insurrecciones de cualquier carácter que sean pues la requisición exigida por las provincias no es un privilegio que se ha concedido por la Constitución Nacional a los revolucionarios provinciales sino una obligación contraída por la Nación con cada provincia, cualquiera que sea su debilidad nu-

mérica, de darle toda la fuerza nacional necesaria en defecto de la propia para mantener sus autoridades constituidas contra toda violencia doméstica o extraña que pretenda subvertirlas».

Y luego continúa con algo muy importante porque es doctrina substancial que tendría que ser la base para la futura ley argentina de intervención a las provincias, para que pasaran años y años de gobierno sin que el poder federal ingresara al territorio de una provincia, para que fuera sacramental el respeto a cada una de las autonomías conformadas por la federación nacional.

Decían Sarmiento y Vélez Sarsfield: «El artículo 69 de nuestra Constitución tiene un carácter que lo distingue de todos los otros. Los demás constituyen un gobierno nacional compuesto individualmente de los ciudadanos argentinos. Este establece el pacto de federación de las provincias y crea derechos a sus autoridades y obligaciones al gobierno federal. El pueblo argentino, sin distinción de límites territoriales, se da una Constitución y crea un gobierno federal con rentas y ejército pagado por él, y gobiernos provinciales de cuya existencia se constituye garante el gobierno federal. Si las autoridades constituidas fuesen derrocadas o amenazadas por la sedición o invasión, el poder material de la Nación cuando sea requerido tendrá el imperioso deber de restablecerlas o sostenerlas. Este es un simple *vinculum foederis* entre el gobierno federal y el gobierno provincial».

La exposición es mucho más extensa, pero voy a suprimir la lectura del mensaje comentado en razón de que he reproducido lo más substancial y también por lo avanzado de la hora y por la falta de tiempo.

Uno de los problemas más serios que ha tenido el país —y lo dijo Rodolfo Moreno— fue el gobierno del radicalismo, que anuló la teoría constitucional argentina, que hizo de la intervención un instrumento de política doméstica, un sistema para doblegar a los opositores en cada uno de los territorios provinciales. Me remito a la palabra exenta de pasión del autor del Código Penal. «Solamente tres provincias se han librado de la intervención durante los dos primeros años del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Han sido intervenidas por ley la de Entre Ríos y por decretos del Poder Ejecutivo las de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y San Luis. La de Mendoza lo ha sido por dos veces: la primera para derribar al gobierno y la segunda para apuntalar al que fuera nombrado bajo los auspicios del presidente de la República.»

Quería leer todo esto de Rodolfo Moreno analizando las causas de las intervenciones. Los comités de provincias y de distritos municipales se quejan al ministro del Interior, quien entonces justifica la intervención por las quejas de

sus adeptos y, en consecuencia, les manda una intervención para que le prepare una elección a cada uno de ellos. No obstante este largo proceso de catorce años...

**Sr. Zamanillo.** — ¿Usted se refiere al mismo Rodolfo Moreno a quien el radicalismo le encargó el proyecto de Código Penal?

**Sr. Falabella.** — Debe ser el mismo, y no creo que ello no haya significado un homenaje a su estatura intelectual. Entonces, si le han reconocido su capacidad, admitan también su versión histórica.

**Sr. Zamanillo.** — Es un aspecto parcial.

**Sr. Romero.** — El Código Penal no era para una parcialidad sino para toda la Nación.

**Sr. Falabella.** — Como no quiero disgustar al radicalismo, voy a dar la opinión de Leandro N. Alem, quien en 1895 decía: soy un autonomista perfectamente convencido que esta tendencia centralista, que no es más que una derivación —digo mal: que no es más que un corolario— de un principio autoritario de la escuela autoritaria, en general es peligrosísimo. Es claro: don Leandro N. Alem no sabía en 1895 en qué correrías iba a andar su sobrino hecho presidente de la República. (Risas.)

Yo no sé si estoy equivocado con la historia, pero el pueblo no ha encontrado su propia historia porque se ha encontrado con ustedes.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Señor diputado Falabella: ha vencido el término de que disponía para su exposición. La Presidencia le solicita concluya su exposición a la brevedad posible.

**Sr. Falabella.** — ¿Cuál es la filosofía de la intervención federal? Esto es muy importante.

Cada una de las provincias —esa fue la lucha— quiso que fuera respetada en el futuro de la federación su individualidad, sus principios, sus convicciones, sus banderas. A tal efecto dio la mínima posibilidad al poder federal. Solamente la Constitución Nacional señala que cada una de las Constituciones de las provincias deben respetar ciertas fórmulas, no ocurriendo como antes de 1860, que se sometía a las Constituciones de las provincias a una previa revisión por parte del Congreso de la Nación o del poder federal. De modo que las provincias de ninguna manera han delegado sus facultades de autodecisión; las mantienen y las conservan, y en ningún caso el poder federal puede substituir a las provincias en esas atribuciones indelegables e intransferibles. Por ello, cualquier conflicto de poder debe ser necesariamente solucionado en la provincia.

¿Por qué esta filosofía de la intervención? Porque el sistema federal y democrático quiere que la única forma para derribar al gobierno, la única forma para rectificarlo, sea el acto eleccionario. Es decir que en lugar de ocurrir el poder federal a interferir en la vida autónoma, debe hacerlo para recuperar la vida autónoma y permitir la autodecisión mediante las elecciones.

**Sr. González.** — ¿Las elecciones libres?

**Sr. Falabella.** — Si me pregunta si deben ser libres, le digo que sí, aunque lo voten a Frondizi, lo que podría ser una libertad vesánica.

**Sr. González.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Falabella.** — Sí, señor diputado.

**Sr. González.** — Suponga el señor diputado que en la provincia de Córdoba dentro de seis meses haya elecciones, y que el partido gobernante organice elecciones fraudulentas para asegurarse el poder. ¿Sería éste un caso de intervención federal?

**Sr. Falabella.** — Sí, señor diputado.

**Sr. González.** — Esa es la filosofía de las intervenciones que mandó Hipólito Yrigoyen.

**Sr. Falabella.** — ¡Cómo va a decir eso! Está la historia y están los documentos en el Ministerio del Interior explicando lo contrario.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Falabella.** — Además, ¿qué más fraude que la mentira política? ¿Qué mayor fraude que la demagogia? En este aspecto el conservadurismo ha preferido decir la verdad, aunque con ello se ganara la impopularidad y la frustración electoral. Interesaba la honradez de pensamiento y de conducta.

**Sr. Sarli.** — Como en tiempos de Barceló.

**Sr. Falabella.** — Ustedes son solamente los sacerdotes encargados en exclusividad para officiar la ceremonia cívica.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

**Sr. Falabella.** — Interpretan la función, exclusivamente, como expresión de un culto esotérico del radicalismo.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Falabella.** — Yo no voy a justificar el fraude, aun cuando al fin de cuentas vino a tener su justificativo, ya que para votarlo a Hipólito Yrigoyen la alternativa era bastante dura: el error o el error.

**Sr. Presidente (Busacca).** — La Presidencia no le ha concedido la palabra al señor diputado para un diálogo conservador-radical sino para terminar su exposición.

**Sr. Falabella.** — Como veo que tienen un celo raigal...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

**Sr. Falabella.** — En realidad, es una iglesia disidente.

Voy a continuar, señor presidente.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Le reitero, señor diputado, que ha vencido el plazo.

**Sr. Falabella.** — Tengo que concluir porque mi discurso ha sido interrumpido.

**Sr. Presidente (Busacca).** — El señor diputado sabe que aún restan doce oradores.

**Sr. Falabella.** — Tengo que decirle algo al gobierno.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Puede dejarlo para otro día.

**Sr. Falabella.** — En ese caso me quedaría un flanco sin cubrir.

La prensa ha tratado de indagar quién es el autor de ese mensaje del primero de marzo que le han hecho firmar al señor presidente y el señor diputado Sueldo se quejaba amargamente de que al señor presidente de la República le pongan a la firma una cosa tan abstrusa e inconcluyente. No se sabe qué es lo que quiere decir, ni a qué conduce. Es tan seriamente enrevesado y tan comprometido, por lo que para mí, diciéndolo con palabras propias, esto podría llevar la firma radical de la época de 1929. (Risas.) Es una redacción de don Hipólito que nadie pudo nunca descifrar y que está en los papiros; es una redacción que Nicolás Repetto comentaba y glosaba con sorna y sabia ironía. Es conveniente que se busque la pista en el sentido de que esto lo redactó algún radical de la época yrigoyenista.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

**Sr. Falabella.** — Este mensaje del 1º de marzo no merece otra atención que no sea para analizar la seria contradicción que guarda con el proyecto de ley que veinticuatro horas luego fuera enviado al Congreso de la Nación. En el primer mensaje se hace una exposición a título informativo, y se formula la promesa de que se va a dejar a la provincia de Córdoba que busque la solución dentro de sus propias instituciones, permaneciendo en la serenidad y el equilibrio del gobierno. Veinticuatro horas después se cambia de opinión y entonces se advierte que el señor Ricardo Obregón Cano, el propio correligionario, y el señor vicegobernador, Atilio López, han permanecido pasivos ante la manifestación de grupos subversivos que han creado el caos, como decía el señor diputado Sueldo. Entonces, se lamenta de los enfrentamientos, de las pérdidas de vida y demás, presumiéndose que los agentes del caos y la subversión han de tratar de provocar hechos más graves todavía, por lo cual se solicita la intervención a la provincia de Córdoba.

Lo que no dice el Poder Ejecutivo, pero lo sabe el país, es que más que un problema institucional éste es un problema político intrapartidario. Aquí se ha jugado con la provincia de Córdoba. El señor presidente de la República, que había prometido serenidad para lograr todo a su tiempo, la ha interrumpido, y si el señor gobernador Obregón Cano y el señor vicegobernador López le disgustaban, debió cumplir la

promesa de no perturbar la vida de la provincia y no intervenir con el poder del gobierno federal.

¿Por qué tenemos que estar arriesgando Córdoba y el país todo ante este tremendo problema, a niveles de drama, derivado de un simple problema político interno?

¿Por qué se transforma en un problema institucional lo que se debió guardar para ser resuelto como un problema propio del partido gobernante?

Le aconsejamos al señor presidente de la República que si tiene que perder una provincia por alguno de los hombres nominados en el proceso electoral que él patrocinó y que condujo al triunfo, en aras de la tranquilidad de esa provincia y en aras del respeto al principio, que es una fórmula inviolable para crear la paz y la armonía social, que pierda momentáneamente su influencia en la provincia y que no sea impaciente.

Que cumpla con la fórmula de lograr todo a su tiempo, que espere para imponer al futuro gobernador y vicegobernador en las elecciones de 1977. Le decimos al señor presidente de la República que no prolongue este pleito interno de su partido a las demás provincias argentinas, que por defecto de su organización interna no cree la anarquía en el país, que no atropelle al federalismo, que es la base substancial de nuestra organización, que no cree la organización unitaria para adosarla definitivamente a la imagen de su partido, que no vuelva a dar la confusión de identificar a su partido con el país, con la República y menos con la patria, que solucione internamente los conflictos partidarios y que deje vivir a las provincias.

**Sr. Presidente (Busacca).** — La Presidencia le señala al señor diputado que ha vencido con exceso el término de que disponía para hacer uso de la palabra.

**Sr. Falabella.** — Ya termino, señor presidente.

Y digo todo esto en nombre de mucha gente que me acompaña porque quiere la paz aunque nunca ha sido peronista.

Se ha podido apreciar nuestro comportamiento en el recinto y las múltiples actitudes de ponderación. Pensamos, y esto es dramático, que si este gobierno llega a fracasar, en la Argentina no estamos seguros de que pueda haber un gobierno con capacidad para substituirlo. Por eso le hacemos responsablemente esta advertencia. Todos tenemos interés en que el gobierno logre la verdadera autoridad —que es más que el poder—, que logre la autosuficiencia, el equilibrio, la serenidad y la sabiduría para gobernar.

Le pedimos al señor presidente de la República que prescinda de su partido y que mantenga serenamente a su gobierno porque, de lo contrario, nos espera el caos total y la anarquía.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Balestra.

**Sr. Balestra.** — Señor presidente: en el curso de la exposición del señor diputado Sueldo, de cuya versión taquigráfica me he enterado después, se lee lo siguiente: «Pero no admitimos falacias leguleyas tendientes a demostrar que ese desempeño, acertado a veces, equivocado otras, haya configurado una violación de la forma republicana de gobierno, una supuesta privación de derechos constitucionales.

»Aquí voy a disentir con un miembro de la minoría, el señor diputado Balestra, que desde una posición curiosa impugna la sedición, impugna al Poder Ejecutivo nacional por moroso, pero termina justificando la intervención porque según él, según su partido o su Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, el gobierno de Córdoba habría conculcado —aunque no lo dijo, así lo dio a entender— los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional, o sea los derechos civiles de los habitantes, los derechos de defensa en juicio y de propiedad.

»Se trata de una acusación demasiado grave como para no haber tenido el celo de concretarla y de demostrarla. Eso es falso, y me permito decir, aunque me duela, que se torna una expresión facciosa de intereses oligárquicos agravados por cierta orientación y ciertas medidas que el gobierno cordobés se vio obligado a tomar.

»Es posible —y estoy seguro de ello— que el manejo de las cuestiones del transporte y del abastecimiento de carnes pueden haber sido más felices por parte del gobierno provincial, pero también estoy cierto, como creo que lo están todos los componentes de la Honorable Cámara, de que determinados grupos empresariales y oligárquicos del viejo poder no descansan ni de día ni de noche para provocar desabastecimiento, para torpedear los servicios y para hacer fracasar al gobierno del pueblo, sea nacional o provincial.»

Antes de entrar en la consideración de las manifestaciones del señor diputado Sueldo, quiero pedirle que ratifique sus términos o, en todo caso, la intención que ha tenido al expresarlos.

**Sr. Sueldo.** — A lo largo de todo mi desempeño en esta Cámara ha sido una preocupación, repetida incluso por mí, el distinguir entre intenciones y resultados, y más de una vez lo he dicho aquí.

No imputo intenciones pero señalo que los resultados, o las apariencias en todo caso, son negativos. El único párrafo del que podría agravarse el señor diputado Balestra —no es un párrafo, es una línea—, es aquél donde aparece la frase «se torna una expresión...».

Dudo haberla pronunciado, no por idoneidad del servicio taquigráfico, sino por la dificultad que a veces se presenta para reproducir una palabra con exactitud cuando se dice con rapidez. No parece de mi hábito ese giro: «se torna una expresión...», sino que creo haber dicho «semeja una expresión...».



En todo caso la intención con que ha sido pronunciada esa frase es la de mi costumbre. No señalo en ningún diputado un servicio negativo para el país, sino que señalo una posición que lo puede ubicar equivocadamente.

En este caso, lo digo abiertamente, no he querido imputar —y ahora lo repito— de ningún modo al señor diputado Balestra que esté prestando el servicio de asesor o representante de los intereses que allí condeno, sino que por la ligereza —y así lo dije y lo sostengo— de su afirmación no demostrada parece colocarse en una actitud que creo no le favorece.

No ha habido ninguna intención, no la hay, y espero que esta aclaración satisfaga al señor diputado Balestra.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Con la aclaración formulada entiende la Presidencia que está terminada la cuestión, si el señor diputado Balestra no tiene nada que aclarar.

**Sr. Balestra.** — Solamente en cuanto al aspecto objetivo, y muy brevemente por haber sido aludido, me declaro satisfecho con las explicaciones que da el señor diputado en lo personal; pero quiero dejar aclarado que cuando manifesté que nosotros somos partidarios, y lo fuimos desde el primer momento, de la intervención federal y de que se tratara de inmediato en el caso de Córdoba, es porque juzgábamos que estaba en juego la forma republicana de gobierno. Considerábamos que la forma republicana de gobierno había sido violada porque el estado de subversión, de anarquía y de caos generado en la provincia, si no por la responsabilidad directa, por la complicidad o por la complacencia o, en definitiva, por no asumir las medidas del caso el gobierno provincial, generó un estado totalmente incompatible con las libertades, derechos y garantías en lo individual y en lo social, y en materia de propiedad establecidos en la Constitución Nacional.

Ese es el alcance con el que nosotros hemos formulado nuestras referencias a los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Moyano.

**Sr. Moyano.** — Señor presidente: sólo quiero fundar mi voto en favor del proyecto que está en consideración, haciendo míos los argumentos expuestos por el señor diputado Balestra.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Romero.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: a esta altura del debate, luego de las muy extensas y fundadas exposiciones que han hecho los distintos oradores, resulta difícil agregar un argumento más a los que ya se han desenvuelto con soltura y eficiencia frente a este desgraciado problema de la intervención federal a Córdoba.

La posición de nuestro sector minoritario fue bien clara desde la iniciación misma de esta aguda crisis. En cuanto al requisito de los dos tercios, sostuvimos que de inmediato debíamos

dar nuestros votos para que la Cámara tuviese oportunidad de debatir el instrumento legal que habrá de utilizar el Poder Ejecutivo de acuerdo con la decisión que en su momento adopte la mayoría. En cuanto a la cuestión de fondo, nuestra posición divergió desde el principio de la tesis sustentada en el proyecto del Poder Ejecutivo. Sostuvimos que debía enviarse una intervención federal a la provincia de Córdoba a los efectos de restituir a las autoridades legítimas en las personas del gobernador Obregón Cano y del vicegobernador López.

A posteriori, un hecho informado a la Cámara por los presidentes del bloque mayoritario, diputado Pedrini, y del bloque radical, diputado Tróccoli, agregaron un elemento de juicio que hizo variar de manera notoria la intención y el proyecto del bloque de la Unión Conservadora, que ahora va dirigido —ese es el sentido de nuestro voto— a que el señor interventor federal se constituya en la provincia de Córdoba y proceda a regularizar las instituciones locales en un todo de acuerdo con las normas contenidas en la Constitución de ese Estado.

Pero quiero aprovechar también esta intervención para dejar señalada, de una manera concreta, nuestra repulsa frente al acto sedicioso, a esa aparcería ávida de poder que ha querido trastocar el orden local por ambiciones. Además, destacamos la lamentable frustración que esta serie de hechos implica para el proceso institucional, al que todos estamos encaminados, ansiosos y esperanzados de que se afirme en la República, traducido más de una vez en las palabras del excelentísimo señor presidente, de que debemos ser esclavos de la ley y no de las hordas o aparcerías que pretendan tomar el poder por el camino del atajo.

Quiero referirme finalmente a manifestaciones vertidas hace unos instantes por el señor diputado Porto. Campeón de la amnistía en mayo de 1973, el señor diputado Porto no mantiene la misma serenidad y el mismo espíritu para con los conservadores. Se ha amnistiado a todo el mundo, por cualquier clase de delitos, inclusive algunos comunes lindantes apenas con lo político, pero suficientes para quedar incluidos en la sanción de la ley. Se ha amnistiado hasta a los deportistas. Pero han pasado cuarenta años y todavía no se amnistia a los conservadores por el fraude. En ese sentido es injusto. Además de ello, es contradictorio, porque este campeón de la amnistía hace pocos días se convirtió en campeón de la severidad, y cuando el señor diputado Zamanillo le demostró que el señor jefe de policía Navarro, usurpador del poder, cuenta con un rosario de delitos, este campeón de la severidad silenció todo ello y no dijo que se tenía la oportunidad de aplicar las nuevas leyes severas que se sancionaron.

Por otra parte, es igualmente injusto. Ha hablado del fraude, pero se olvida de la demagogia, que es el otro gran vicio de la democracia, por-

que no sólo el fraude la lesionó sino que también la demagogia, muy de turno durante largos años, incurrió en tremendas confusiones que desorientaron más de una vez a la ciudadanía y dio lugar a tremendos errores políticos.

De todas maneras quería recordar al señor diputado Porto, ex profesor mío de derecho penal y actual profesor de otras generaciones, porque tiene muchos más años que yo (risas), que tampoco circunscriba la oligarquía al sector conservador, como se suele hacer frecuentemente. En esto me atengo al método que enseñaba muy bien el señor diputado Sueldo, cuando hablaba del empleo de la palabra «liberal» y del liberalismo. Con la oligarquía sucede lo mismo. Cuando se habla de ella se hace referencia únicamente a los conservadores o al sector conservador. Pero todos sabemos que en todos los partidos hay oligarcas; creo que hasta en el socialismo, y no sé si no los hay en el comunismo. Quizás mi distinguido amigo, el señor diputado Porto, sea un poquito oligarca. (Risas.) En buena hora lo sea. No soy receloso de los que tienen dinero y posición. Si la han ganado, que la disfruten, pero conviene hacer esa aclaración.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Isidro J. Odena.

**Sr. Romero.** — Los radicales hablan también de la oligarquía vacuna. En la provincia de Buenos Aires la oligarquía vacuna son los radicales.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Romero.** — En cuatro pueblos típicamente rurales, agrarios —General Madariaga, Ayacucho, General Guido y Chascomús— siempre gana el radicalismo, e incluso triunfó en la época de Perón. Y ha ganado no con el peonito ni con el mensual, ni con el que va arriando las vaquitas, sino con los grandes oligarcas rurales terratenientes que hay en esos pueblos, ya que casi todos son radicales. Ahí está el fraude, el engaño y la mentira.

**Sr. Rabanal.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Porto.** — Solicito hacer uso de la palabra porque he sido mencionado por el orador preopinante.

**Sr. Presidente (Odena).** — Oportunamente se le concederá el uso de la palabra al señor diputado.

**Sr. Romero.** — Le concedo al señor diputado Rabanal la interrupción que me ha solicitado.

**Sr. Presidente (Odena).** — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Rabanal.

**Sr. Rabanal.** — Señor presidente: de las palabras del señor diputado Romero, por quien guardo una particular estima, se desprende que en los partidos que él ha señalado de la provincia de Buenos Aires, donde tradicionalmente

triunfa el radicalismo, de los hombres poseedores del ganado vacuno, y que no son pocos, la gran mayoría apoya a nuestro partido.

Quiero señalar que si esto fuera así, en estos partidos de la provincia de Buenos Aires se habría producido una real y justa distribución de la riqueza, porque en este caso sus poseedores serían la mayoría del pueblo, y eso sería lo que posibilitaría que los radicales ganáramos las elecciones.

**Sr. Romero.** — No existe tal mayoría, señor diputado Rabanal. Los campos los tienen unos pocos. No los tiene sólo Santamarina.

Quería hacer una última aclaración con respecto a la exaltada exposición del señor diputado Molina, quien se refirió a la Unión Democrática. No quiero entrar en viejos temas, pero es hora de que vayamos poniendo las cosas en su lugar; así no nos enredamos más, como lo hacemos en más de una ocasión. Justo es decir que cuando se hizo la Unión Democrática, a los únicos que no dejaron entrar fue a los conservadores; sería tal vez porque tendrían muy fresca la marca del fraude. Y a esa Unión Democrática entraron inclusive hasta los comunistas. Nosotros no estuvimos en ninguna Unión Democrática, aunque somos demócratas.

**Sr. Presidente (Odena).** — Señor diputado Romero: el señor diputado Porto le había solicitado una interrupción.

**Sr. Porto.** — Señor presidente: yo preferiría que previamente el señor diputado Zamanillo formulara la pregunta que hizo en mi ausencia del recinto. Así habré de contestarle a los dos: al señor diputado Romero y al señor diputado Zamanillo.

**Sra. Bonifati.** — El señor diputado Porto no pregunta cuántos son sino que vayan saliendo. (Risas.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Señor diputado Porto: conteste primero al señor diputado Romero, y después al señor diputado Zamanillo.

**Sr. Rabanal.** — No lo incite, señor presidente.

**Sr. Zamanillo.** — Señor presidente: estamos enredando el debate.

**Sr. Romero.** — Estoy en el uso de la palabra, señor presidente, y deseo continuar con mi exposición, pues resulta que le concedo una interrupción al señor diputado Porto y éste la quiere aprovechar para contestarle al señor diputado Zamanillo. Luego que yo concluya, se trenzan entre ustedes. (Risas.)

Señor presidente: quiero dejar en claro mi voto, no obstante la excelente exposición de mi colega, el señor diputado Falabella, que adelantó la posición que habremos de adoptar los tres integrantes del bloque conservador.

Con nuestros votos apoyamos el tratamiento sobre tablas de este asunto, y estábamos por la intervención para reponer al gobernador Obregón Cano y al vicegobernador López. Producidas sus renunciaciones, estamos porque la intervención vaya a la provincia de Córdoba y

restablezca a las autoridades legítimas sobre la base del orden jurídico de ese Estado.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Tula Durán.

**Sr. Zamanillo.** — Pido la palabra para una aclaración.

**Sr. Presidente (Odena).** — Señor diputado Zamanillo: la Presidencia lo anota para el final de la lista de oradores.

**Sr. Zamanillo.** — Es sólo un par de minutos, señor presidente; deseo solicitarle una información al señor diputado Porto.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Zamanillo.

**Sr. Zamanillo.** — Señor presidente: evidentemente existe una confusión, motivada seguramente en el hecho de que el señor diputado Porto me llamara «compañero Zamanillo». No he buscado etimológicamente cuál es el significado de la palabra «compañero», aunque recuerdo aquello de *cum panis*, de compartir el pan. Si el señor diputado Porto ha querido invitarme a compartir el pan de su hogar, desde ya me siento honrado y acepto. (Risas.)

Con respecto a la pregunta que quería formular al señor diputado Porto, se trata de lo siguiente. Yo no participaba de los requerimientos en privado de algunos señores diputados que han manifestado que la pena que merecería el teniente coronel Navarro sería la de fusilamiento con redoble de tambores. Pero, evidentemente, si ansío que el teniente coronel Navarro tenga la mayor pena posible. Se me han suministrado algunos datos de acuerdo con los cuales esa pena alcanzaría a 25 años, y requerí entonces la colaboración del señor diputado Porto, en quien reconozco una extraordinaria versación en materia penal, para que me aconsejara si podíamos encontrar alguna forma de extender un poco más la pena. (Risas.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Porto para evacuar una consulta jurídica. (Risas.)

**Sr. Porto.** — Y para contestar al señor diputado Romero, porque acaba de decir que yo no respondí al señor diputado Zamanillo. Si no lo hice, fue porque no estaba.

**Sr. Presidente (Odena).** — Bien, señor diputado, pero la Presidencia le ruega que sea breve.

**Sr. Porto.** — Contesto a mi distinguido alumno, que tenía la gentileza de asistir desde Dolores a las clases que yo daba en el Instituto de Criminología de La Plata, donde los alumnos —y digo esto para que se advierta que no soy tan viejo como podría parecer— eran todos médicos o abogados. Además, le agradezco la oportunidad que me da de rebatir algunas apreciaciones que ha formulado y que, desde luego, significan una profunda advertencia que yo recibo de un ex discípulo.

Quiero manifestarle que si bien es cierto que yo soy un campeón de la amnistía y también

del indulto de los procesados, sobre lo cual tengo publicado un libro hace muchos años, no soy sino el campeón de la amnistía de los delincuentes políticos o partícipes en delitos comunes con finalidad política. Pero no soy propenso a que se amnistien los delitos cometidos contra la Nación Argentina, contra el pueblo argentino, contra la soberanía de la patria, ejercitando el fraude y la violencia, ejercitando aquello a lo que se refería la proclama cuando el Ejército salió en 1943 y que luego reconoció la Corte Suprema conservadora: que debían salir para ponerse contra la venalidad administrativa, contra la injusticia social y contra el fraude electoral.

Yo no puedo consentir que la historia amnistie a quienes ahora vienen aquí a querer enjuiciarnos a nosotros diciendo que ejercitamos violencia, cuando ellos, como lo dije ya con motivo de la intervención a Formosa extrayendo datos de una publicación oficial que tengo sobre mi banca, hasta la presidencia de Victorino de la Plaza dispusieron 82 intervenciones que fueron violentas, sobre todo porque la mayor parte de ellas lo fueron por decreto, y después, entre 1930 y 1942, otras trece intervenciones, lo que hace un total de 95. La Unión Cívica Radical fue mucho más cauta que los conservadores, porque entre las dos presidencias del ilustre argentino que fue Hipólito Yrigoyen y la de Alvear sólo enviaron 33 intervenciones, correspondiendo 19 a la primera presidencia de Yrigoyen, 12 a la presidencia de Alvear y 2 a la última de Yrigoyen.

Quiero expresar también al distinguido compañero y colega —yo digo «compañero» en el sentido de compañero de trabajo en esta Cámara— que la oligarquía es una de las formas degeneradas de gobierno que señala Aristóteles en su libro *De la Política*.

No debe ignorar ningún abogado que las tres formas puras de gobierno que analizara este insigne político y filósofo eran la monarquía, la aristocracia y la democracia y que las tres formas degeneradas eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia. De manera que decir que se hace demagogia cuando se pone un cartel o se hace propaganda no está conforme con lo que decía Aristóteles ni es lo que corresponde al significado del término.

**Sr. Romero.** — Yo no hablé de una propaganda o de un cartel.

**Sr. Porto.** — Yo quiero recordarle también al distinguido y amigo doctor Romero que los conservadores en el año 30 golpearon las puertas de los cuarteles y que en el año 55 fueron nuestros verdugos y los que encarcelaron, junto con las otras fuerzas no peronistas a que se aliaron, desde la Junta Consultiva, a todos los que habíamos sido elegidos o nombrados por el gobierno mayoritario y representativo de la soberanía popular que encabezaba el insigne patriota y genio político que es el teniente general

Juan Perón y que había sido consagrado por el 66 por ciento de los votos de la ciudadanía.

A esta altura, señor presidente y señores diputados, y a efectos de aflojar un poco la tensión, voy a recordar un cuento de la época de los romanos. Recuerdo que en una oportunidad en el circo un condenado a muerte es enterrado dejándole solamente la cabeza afuera. Le sueltan el león para que peleara con él; el león se acerca al condenado y éste le dice algo al oído. Entonces, el león se va y se mete en su cubil. Después lo perdonan y le preguntan qué le dijo al león; y contesta: le dije, mira, no me comas porque si no después empiezan los discursos y esto no se acaba nunca. Y evidentemente esto que estamos tratando no se acaba nunca porque ya llevamos muchas horas de sesión y todavía no hemos concluido. *(Risas y aplausos.)*

Yo quiero decirle al señor diputado de la bancada conservadora que cuando Raúl Díaz, Edgardo Míguez y Uberto Vignart se levantaron en contra del gobernador de su propio sello político Martínez de Hoz y le hicieron ejecutar la sedición al subjefe de policía Tiberio Podestá, es cierto que el gobernador fue despedido y es también exacto que fue vuelto a poner en el cargo en función de la segunda parte del artículo 6º de la Constitución Nacional. Pero quiero señalar que todo esto no era más que una cuestión entre facciosos, porque el gobernador depuesto y repuesto luego y los que lo repusieron, todos eran hijos de la violencia y del fraude y estaban a espaldas de la voluntad del pueblo argentino. De manera que ése no es un ejemplo que pueda argüirse en esta Cámara con la seriedad suficiente.

Quiero señalar, señor presidente, que todos nosotros, hasta el último diputado del Frente Justicialista, de cualquier sector del Frente, hasta el último gobernador electo en este país en las elecciones del año pasado, hemos sido elegidos porque todos nosotros fuimos detrás del nombre de nuestro conductor, el insigne general Perón; y él fue quien obtuvo los votos, primero el 49,5 por ciento con Cámpora, y luego, con su propia figura y la de su esposa el 62 por ciento. Quien obtuvo los votos que nos consagraron a todos, a unos gobernadores y a otros diputados o senadores, no fuimos nosotros, sino que lo fue el señor general Perón, que tenía una doctrina escrita y publicada, una doctrina tercermundista que tiende a la soberanía política, a la independencia económica y a la justicia social. Cuando un gobernador, llámese Obregón Cano, o llámese como se llame, o cuando un diputado se aparta de esa doctrina, ese señor está violando la soberanía del pueblo, está conculcando el sistema republicano de gobierno porque ese señor está violando la doctrina del conductor de su partido, que votó el pueblo, que lo ha llevado al gobierno. De manera que cuando Obregón Cano se aparta de esa doctrina deja de ser un representante del pueblo, ya que no

fue él quien obtuvo los votos sino el general Perón.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

**Sr. Porto.** — Aquí tal vez cabría citar el caso de un señor a quien se le ocurrió en los Estados Unidos llamar por teléfono al infierno, para lo cual le cobraron mil dólares. Pero en momentos en que se deponía al gobernador de Córdoba y se arrojaban petardos y bombas a las casas y se tiroteaban las facciones en la calle, si a ese mismo señor del cuento se le hubiera ocurrido hacer la llamada al infierno desde Córdoba le hubieran cobrado solamente veinte pesos porque se trataba de una llamada urbana. Esto es lo que da motivo para que sin titubeos podamos decir que mandamos la intervención a Córdoba para restablecer el sistema republicano de gobierno.

**Sr. Romero.** — ¿O para institucionalizar la situación?

**Sr. Presidente (Odena).** — La Presidencia ruega a los señores diputados se sirvan no interrumpir al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Porto.

**Sr. Porto.** — El Poder Ejecutivo nacional, que los argentinos tenemos el orgullo de poseer, respetuoso en estos momentos como el que más de la Constitución y de la ley, antes que dictar un decreto interviniendo la provincia de Córdoba ha preferido enviar el proyecto respectivo al Congreso para ser considerado en las sesiones extraordinarias precisamente por ser respetuoso de la ley. Los tratadistas dicen que el Congreso debe hacer el diagnóstico en todos los casos y que el Poder Ejecutivo debe ser el cirujano en la emergencia.

En 1916 el conservador doctor Rodolfo Moreno (hijo) presentó a la Cámara de Diputados de la que formaba parte un proyecto de Código Penal tomando el que fuera presentado en 1906, redactado por Rivarola, Moyano, Gacitúa, Piñero, y otros, con una planilla de 29 modificaciones, proyecto que a su vez era una reproducción del presentado en 1891, cuyo texto había sido tomado fundamentalmente del primer código penal nacional italiano de 1889. De manera que no es justo atribuir a Rodolfo Moreno (hijo), sin que por ello se le quite el mérito que tiene, la total redacción del actual Código Penal, sancionado por la ley 11.779, que en última instancia proyectó una comisión que él presidiera.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Tula Durán.

**Sr. Tula Durán.** — Creo que ha sido altamente ilustrativa la intervención del señor diputado Porto para un análisis —si cabe a estas horas y después de tan enjundiosos exámenes que se han efectuado de la realidad política cordobesa— sobre la forma y el modo en que estamos nosotros, los legisladores nacionales, resolviendo el problema cordobés.

Una vez más esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación ha tenido que afrontar un problema con consecuencias políticas ya consumadas. Una vez más formalmente el Parlamento argentino tiene que dar el paliativo institucional a un hecho político cuyas consecuencias acaban de consumarse, inclusive con la manifestación hecha en este recinto de la renuncia indeclinable del señor Obregón Cano y del señor vicegobernador de Córdoba. Una vez más, señores diputados, como en el caso de la sanción de la amnistía, tenemos que sancionar una ley —apresuradamente para algunos y tal vez dilatoriamente para otros— cuyas consecuencias de hecho virtualmente ya han llegado a los últimos detalles del hecho político.

Si era irreversible ya, desde el punto de vista fáctico, el hecho de que el gobernador y el vicegobernador de Córdoba habían perdido el ejercicio del poder del que habían sido investidos en elecciones ejemplares en la historia argentina, ahora sentimos algunos —y lo digo en plural— acallada en forma mínima nuestra conciencia cuando sabemos que por lo menos hay una renuncia indeclinable que permite a muchos señores diputados, que no hubieran aceptado jamás votar otra cosa que no fuera la intervención para reponer a los mandatarios en sus funciones, pronunciarse por la intervención para regularizar la situación del Poder Ejecutivo cordobés, porque ya ni siquiera la hipótesis constitucional obliga.

Nosotros, con la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo en la situación primitiva en que se encontraba el problema cuando la Cámara fue convocada, hubiésemos dado el cumplimiento formal, jurídico y constitucional a un hecho que, por lo menos al nivel de cultura institucional en que queremos desenvolvernos, jamás se había producido en el país. Un jefe de policía dejado hacer por el Poder Ejecutivo nacional toma por sí mismo el derecho de horca y cuchillo, detiene al gobernador y al vicegobernador, burla así el mandato popular y obliga a la Cámara de Diputados de la Nación a tomar una resolución que le dé un visto de legalidad a la violación de ese mandato popular. Los daños inferidos al país no se agotan con esta burla del mandato popular. Por eso dije que eran ilustrativas las palabras del señor diputado Porto, porque de ahora en más están notificados los gobernadores de provincia que todos, salvo uno, pertenecen al Frente Justicialista de Liberación, que el hecho de que se considere, y no se sabe por quién, que se apartan de la doctrina justicialista es causa suficiente para entender que están incurso en violación del sistema representativo, republicano y federal.

Este hecho subversivo ha tenido entonces el resultado pretendido, ha tenido un resultado que va más allá de todo lo que he escuchado, o por lo menos de mucho de lo que se ha dicho en esta Cámara; sirva como toque de atención

para cinco o seis gobernantes que están impugnados desde ya por algún sector del Partido Justicialista; sirva para que esos hombres deban tener por sobre todas las cosas un acatamiento que puede ir más allá del federalismo y de las autonomías provinciales.

No me hubiera gustado de ningún modo incursionar en este análisis de un partido político. En oportunidad de la renuncia del presidente Cámpora dije aquí que la Cámara no debía entrar a conocer las motivaciones de esa renuncia porque pertenecían a un partido político y porque esa renuncia tenía un profundo sentido político, sentido que nosotros no debíamos indagar porque se trataba de hechos que compelian directa y exclusivamente al justicialismo. Pero cuando esos hechos del Partido Justicialista afectan a las instituciones de la Nación y a las provincias, nos vemos obligados a analizarlos, con todo el respeto que merece un partido que ha tenido un líder político que supo llevar a las urnas más del sesenta por ciento del electorado. Por esta misma circunstancia, cualquier convulsión que se produce en ese partido mayoritario afecta profundamente a la Nación, por lo que estamos obligados a analizarla con la profundidad del caso.

Hablo esta noche simplemente porque un mandato de mi partido, hecho público inclusive a través de los diarios, me ha sido conferido para que la opinión de los partidos del interior no se diluya excesivamente en el concierto nacional, por más que se trate de expresiones minoritarias, y, en el caso nuestro, de la primera minoría. Pero nosotros somos los primeros defensores de la autonomía local y los primeros defensores del gobierno de la provincia de San Luis, en cuanto el mismo representa una voluntad popular mayoritaria, aun cuando hemos impugnado los actos políticos en que ha cabido tal calificación, consiguiendo inclusive que, aun siendo minoritario, compareciesen los ministros de Gobierno y de Economía. Hace pocas horas se ha interpelado al ministro de Gobierno para que informe sobre la subversión en San Luis y si es cierto que la misma ha tenido como cómplice a un jefe de policía departamental; y en el caso de la interpelación al ministro de Economía, se le ha preguntado por qué se ha violado el estatuto del empleado público, persiguiéndose a los opositores. Hasta el mismo justicialismo apoyó esos pedidos de informes, considerando que su conocimiento era positivo, y nosotros pensamos que ésta es la forma de hacer crítica constructiva dentro del respeto de la autonomía provincial.

El método que se ha seguido en el caso que analizamos, así como los hechos que han producido el resultado que motiva este largo debate y las circunstancias que han llevado a que las consecuencias fueran absolutamente irreversibles al no tomarse los remedios constitucionales que debieron ejercitarse en el momento oportuno, hacen que nosotros sólo podamos dar un visto

de aparente legalidad constitucional a hechos ya agotados en sus últimas consecuencias. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha sucedido porque el Parlamento argentino no es el protagonista de los hechos políticos que acaecen; es el receptáculo de situaciones de necesidad que nos obligan a actuar después que esos hechos han producido todas sus consecuencias. Es así como hemos legislado bajo presiones, con las manifestaciones golpeando a nuestras puertas y luego que los hechos, que debían ser regulados por las normas que nosotros íbamos a sancionar, ya se habían producido. Por tal razón, y no quiero extenderme más en este análisis, es que, en un primer momento, iba a votar para que la intervención tuviera como objetivo la reposición de los funcionarios depuestos.

Ahora nos vemos obligados a votar totalmente en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, pero para que los mecanismos propios de la Constitución de Córdoba funcionen y para que un interventor federal, a la brevedad y en un término perentorio, los ponga en funcionamiento porque Córdoba merece de todo el país la confianza de que se podrá dar las soluciones que no se le han dejado tomar.

Es deplorable que el presidente del bloque mayoritario haya venido a decirnos que ya no tenemos más problemas para votar, que ya obran aquí y no ante la Asamblea Legislativa de Córdoba las renuncias indeclinables de los gobernantes. Y todo esto para acallar las conciencias de algunos y para modificar los votos de otros.

**Sr. Pedrini.** — Yo no he dicho eso, señor diputado. Está totalmente equivocado. Hice conocer que obraban en mi poder las renuncias del gobernador y vicegobernador de la provincia de Córdoba. No he dicho que habían terminado los problemas. Eso corre por su cuenta y riesgo, señor diputado.

**Sr. Tula Durán.** — Es así, como lo señala el señor presidente del bloque de la mayoría. Retiro la expresión de que se han acabado los problemas. Va por mi cuenta este concepto que yo había inferido.

**Sr. Presidente (Odena).** — Antes de dar el uso de la palabra al señor diputado Mira, la Presidencia desea formular una invitación cordial a los señores diputados.

Hay once señores legisladores inscritos en la lista de oradores, y si deseamos finalizar el tratamiento de este asunto alrededor del mediodía, les ruego que reduzcan sus exposiciones en todo lo que sea posible. Sé que la Presidencia no puede imponer este criterio a los señores diputados porque los que aún no han hablado pueden decir que tienen el mismo derecho de los que ya han usado de la palabra. Sin embargo, y si tienen la posibilidad de hacerlo, la Presidencia les solicita que sean lo más breve posible.

Tiene la palabra el señor diputado Mira.

**Sr. Mira.** — Señor presidente: trataré de cumplir con el pedido que me ha formulado. A esta

altura de la sesión ya hay una serie de cuestiones planteadas por los señores diputados preopinantes y no deseo redundar en ellas.

En mi breve exposición me voy a referir a dos cuestiones que creo centrales. La primera de ellas está referida a la circunstancia de que el problema de la provincia de Córdoba no lo podemos analizar al margen de lo que está ocurriendo en Sudamérica y, especialmente, al margen de lo que está pasando en nuestro país.

Creo que el proceso abierto el 11 de marzo en la Argentina, la irrupción de amplias masas en el quehacer político y el triunfo electoral que llevó al gobierno al general Perón, han provocado una honda preocupación en los círculos reaccionarios, en los sectores imperialistas y en los grandes intereses de las empresas multinacionales. Es un secreto a voces que estos sectores quieren cerrar el proceso abierto en nuestro país el 11 de marzo.

Lo que ha sucedido en Bolivia, en el Uruguay y muy recientemente en Chile con el gobierno fascista de Pinochet, algunas mentes calenturientas pretenden reproducirlo en nuestro país. Esto se va llevando muy sutilmente y de distintas maneras, ya sea a través del desabastecimiento de productos de primera necesidad o de materias primas, a través del descrédito hacia las medidas positivas, especialmente en materia de política internacional, que está tomando el gobierno y hacia algunas medidas, aunque tibias, en relación con los problemas económicos y educacionales.

Esta actitud también se refleja en una serie de actos terroristas y de ataques contra organizaciones populares de izquierda, y en el asesinato de dirigentes de la juventud y del movimiento obrero en distintos lugares del país. También se concreta en una escalada contra una serie de gobernadores a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio.

Ahora se trata de ir en contra del gobierno de la provincia de Córdoba a través de un sistema de lo más novedoso. Un señor policía, acusado, entre otras cosas, de haber organizado grupos parapoliciales, de haber robado catorce millones de pesos y de otros delitos, detiene al gobernador, al vicegobernador, a los dirigentes sindicales de los gremios legalistas que se encontraban presentes en la Casa de Gobierno, a los señores diputados y toma en sus manos las riendas del gobierno.

A partir de ese momento en Córdoba las radios pasan a su poder, ocupan los canales de la televisión, y ya sabemos que se están preparando listas en esos medios de difusión para despedir a presuntos infiltrados.

Había grupos armados en las calles durante el día —los he visto con mis propios ojos—, con brazaletes o sin brazaletes, que eran prácticamente los dueños de la ciudad, se pusieron bombas y se produjeron atentados contra la casa del doctor Obregón Cano, contra el juez que subs-

tanció la causa por los asesinatos de los cooperativistas, se puso una bomba en la casa del padre del juez y se atentó contra organizaciones sindicales y populares de Córdoba, todo ello con allanamientos permanentes.

No se trata aquí de cuántas intervenciones hubo en la época de los radicales, de los conservadores y posteriormente. Mi preocupación es que este asunto no puede dejar pasarse como una cosa normal, como también me preocupan manifestaciones del señor miembro informante de la mayoría y algunas palabras pronunciadas por el diputado Porto.

Si dejamos pasar esto, es de presumir que pronto se repetirán estos hechos. El jefe de policía, u otras fuerzas, destituirá a otros gobernadores. ¿Será el de Santa Fe, el del Chubut, el de Salta? No lo sé, pero seguramente esta escalada terminará derrumbando al gobierno nacional.

Como lo han manifestado otros señores diputados, independientemente de los partidos políticos a los que pertenecemos, todos queremos que se respete el orden constitucional y al gobierno del general Perón lo consideramos el gobierno de todos los argentinos.

El señor legislador Cossy Isasi —le ruego que no lo tome como una cuestión personal— ha efectuado algunos planteamientos que tienen gravedad. Ha dicho que el hecho de la detención del gobernador y vicegobernador es una simple consecuencia del estado general que se vive en la provincia de Córdoba. Su intervención no tiene ningún ataque duro contra ese bandido, que ha encarcelado a las autoridades, y para justificar públicamente el golpe armado sedicioso ha dicho que «a esta altura llegamos a la conclusión de que si bien es un hecho sedicioso indiscutible, el mismo fue como culminación de un proceso de desfiguramiento del sistema republicano de gobierno».

¿Había acaso conflictos de poderés? ¿Los gobernadores de Córdoba no eran respetados por todas las instituciones políticas y los organismos populares? El desorden, la falta de respeto al estilo republicano de vida lo tenemos nosotros cuando el señor Navarro es dueño de la ciudad de Córdoba y no cuando regía los destinos el gobernador legalmente elegido.

Sigue diciendo el señor diputado Cossy Isasi: «Ellos se encuentran encuadrados por los sucesos callejeros acontecidos en los últimos días, en que la población entera de Córdoba ha tenido que buscar refugio en sus hogares para salvar sus vidas desatendiendo sus obligaciones y ocupaciones, paralizando la industria y el comercio, deteniendo la actividad bancaria, a la vez que se ha visto privada de los alimentos más indispensables para la subsistencia poniendo en grave riesgo la salud pública y la vida misma». Esto no podemos achacárselo al gobierno legalmente constituido, sino a las bandas armadas y al jefe de policía que es actualmente el dueño de la ciudad de Córdoba.

Dice en otra parte: «Examinando la realidad de la vida pública de Córdoba, las angustias y la inestabilidad que sufren el ciudadano y el habitante de Córdoba, la falta de garantías para el ejercicio pleno de los derechos que les otorgan la Constitución Nacional y la provincial, llegaremos rápidamente a la clara conclusión de que en la provincia mediterránea no se dan en lo más mínimo las condiciones esenciales para que tenga vigencia el sistema republicano que consagra la Constitución, mientras subsistan las condiciones actuales». El remedio saltaba a la vista. Como lo han sostenido varios señores diputados en el curso del debate, el Poder Ejecutivo y el señor ministro del Interior debieron haber intervenido directamente con la fuerza pública para encarcelar a ese usurpador del poder y restablecer de inmediato el régimen republicano. Eso no se hizo, pero no podemos atribuir la culpa ni al gobierno de Córdoba ni al Congreso argentino.

El señor miembro informante de la mayoría leyó una cita de Linares Quintana, que viene muy bien al caso pero para defender la tesis contraria a la que él sostuvo. El señor diputado Cossy Isasi dijo lo siguiente: «Por su parte, Linares Quintana en su *Tratado de gobierno y administración de la República Argentina* expresa: "Dentro del sistema federativo que ha organizado la Constitución argentina, las provincias son autónomas, lo que importa decir que, según expresamente estatuye el artículo 98 de aquélla, se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Pero los estados miembros han delegado en el poder central las atribuciones suficientes para que éste sea capaz de defender a todos y cada uno de ellos, no solamente de los peligros exteriores sino de los peligros que puedan surgir en el orden interno y sean susceptibles de afectar los respectivos gobiernos y hasta la existencia misma de la provincia".» Yo concuerdo totalmente con esta cita de Linares Quintana, que deja en incómoda situación precisamente al gobierno nacional y particularmente al ministro del Interior, que dejó pasar todos estos días en que la provincia de Córdoba se desenvolvía en medio de un caos total, con el peligro de que esa situación se extendiera a otras provincias y se produjeran acontecimientos de peligrosidad mucho más grave.

Un diputado del bloque de la mayoría ha dicho que la CIA no duerme. Concuerdo totalmente con ese punto de vista.

Paso por alto otras argumentaciones que tenía previsto plantearlas en honor a lo avanzado de la hora y a los señores diputados que todavía han de intervenir en el debate. Pero no quiero terminar mi exposición sin hacer un ferviente llamado a que los señores diputados tomen conciencia de la gravedad de los hechos que acontecieron en Córdoba. Desde ningún punto de vista podemos aceptar un gobierno no representativo del elegido por la voluntad de la mayoría



del pueblo. El jefe sedicioso, señor Navarro, no representa la voluntad popular. Si queremos que esto no se extienda a otras provincias y desemboque en levantamientos militares y nuevas angustias para nuestra patria, es necesario que los partidos políticos, el movimiento obrero y las instituciones populares de todo tipo se unan sin diferencias de banderías para cerrar el paso a este desafío de la ultraderecha, como se ha dado en llamar, y retomemos el camino de la independencia nacional, de la democracia y del programa que el pueblo votó el 11 de marzo, que fue ratificado en las elecciones realizadas en septiembre, que dieron como resultado el acceso del general Perón a la primera magistratura.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Loncharich Franich.

**Sr. Loncharich Franich.** — Señor presidente: concurrimos a este debate, luego de esta pesada vigilia, con nuestra modesta palabra, haciéndonos cargo de que no compadece nuestra disciplina con el alto espíritu constructivo de las exposiciones anteriores relativas al tema. Lo hacemos, por supuesto, con la humildad que caracteriza nuestras acciones, en bien de la provincia a la que tanto queremos y a la que tantos desvelos hemos dedicado en nuestra carrera política.

La agresión que se pretende inferir a la ciudadanía cordobesa, de privarla de la potestad de elegir a los gobernantes que deben conducir sus destinos, es de vieja data. Diría que en el último medio siglo solamente un gobernador, Amadeo Sabattini, ha terminado su mandato completo. No ha ocurrido otro caso, en el último medio siglo de vida institucional de la provincia de Córdoba, de que un gobernante elegido por el pueblo haya cumplido hasta el final su mandato, rindiendo cuentas del acierto o del fracaso de su gestión.

La institución que hoy quiere darse como remedio federal es, para Córdoba, la que siempre se ha adoptado en toda su vida. Los cordobeses ya saben cómo se llama; para ellos es la «langosta federal», porque va y arrasa con todo lo que la provincia tiene o pueda tener en materia de planes de gobierno, económicos, o de cualquier otra índole, que hagan a su progreso.

Tanto es así que nos cabe recordar, porque hemos sido un accidente en esa oportunidad, que cuando se produjo el arrasamiento de las instituciones del país en 1966, la provincia de Córdoba se encontraba en una situación floreciente, con planes edilicios perfectamente definidos, con programas eléctricos totalmente terminados, con un desarrollo industrial acorde con las necesidades del momento, de la provincia y del país, con la pretensión de liderar en lo político y en lo cultural con un sentido verdaderamente argentinista. Sin embargo, después de esta noche negra de la tiranía, ocurre que hay que recomponer a la provincia en todos los as-

pectos, desde el económico hasta los planes edilicios, desde la cultura general hasta la conformación espiritual del pueblo, porque todo quedó devastado por las consecutivas interferencias que el puerto ha realizado siempre en esta querida provincia del interior que ha sido señera en la política argentina. Esto nos produce un dolor personal. Esto nos indica, no más, que otra vez Córdoba va a tener que afrontar esta nueva contingencia.

Por eso es que nos preocupa escuchar la voz de la bancada mayoritaria para que se nos exprese cuáles van a ser las instrucciones que va a llevar el próximo delegado federal, pues por supuesto descontamos que —con el apresuramiento e interés que tiene la sanción de esta ley— la mayoría habrá de votar afirmativamente el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. También quisiéramos conocer en qué condiciones se desenvolverá la vida política de la provincia, cuáles habrán de ser las seguridades para su población, y cuáles las de que se aplique el artículo 100 de la Constitución provincial. En definitiva, nos interesa conocer cuándo va a terminar el remedio o antídoto federal. Esto sí que también importa.

Una vez comenzada la chirinada policial, el presidente de nuestro partido nos comisionó, juntamente con el diputado provincial Negrini, para que concurriéramos a la Casa de Gobierno a fin de concretar las posibilidades de garantías, pues la Casa Radical de Córdoba estaba siendo merodeada por grupos facciosos. En tal oportunidad fuimos recibidos por el gobernador Obregón Cano, y así pudimos comprobar la conversación que éste mantuviera en ese entonces con el Ministerio del Interior. En tal ocasión cambiamos ideas acerca de las posibilidades que tenía el jefe de la subversión para encaramarse en el poder. En ningún instante hemos visto un reparto de armas ni agrupamiento de personas con características de bandas facciosas. Sí hemos visto —y esto deseo agregarlo, pues sólo el azar hubiera podido impedir que este debate fuese una seria cuestión de privilegio—, sólo cinco minutos después de que abandonáramos la Casa de Gobierno, a los policías que se hicieron cargo de la guardia y las únicas armas que aparecen luego en la declaración del jefe de policía como existentes en el lugar. Sólo cinco minutos más que hubiera durado esa reunión, estoy seguro —porque reconozco la hidalguía de nuestros pares y de mis pares— que esta Cámara hubiera reaccionado de otra forma, pues entonces tampoco hubieran sido respetados los fueros del diputado que habla. De allí que otro hubiera sido el tenor de esa reunión y otra hubiera podido ser la suerte a correr por la provincia de Córdoba. En verdad, lamento profundamente que el destino no me hiciera correr ese riesgo.

Esta es la reflexión que quiero dejar a mis pares. La situación se ha desarrollado en términos rayanos en la emotividad y también en

la delincuencia política, entronizada en la persona de un jefe militar que quiso hacer de las instituciones un estropajo.

**Sr. Presidente** (Odena). — Tiene la palabra el señor diputado Mombelli.

**Sr. Mombelli.** — Señor presidente: dado lo avanzado de la hora, habré de constreñir mi exposición a sólo verter algunos conceptos, a pesar de que ya hemos escuchado en esta Honorable Cámara versiones muy concretas sobre el problema de la provincia de Córdoba.

El partido que represento, Acción Chubutense, quiere también hacer oír su voz ante la tan grave situación institucional que en estos momentos vive el país. Como auténtico partido federalista, no avala el proyecto de intervención a la provincia de Córdoba, por esos mismos principios, y sugiere remitirse a la Constitución de la provincia de Córdoba. Con los acontecimientos sucedidos en el día de ayer, con la renuncia de los señores gobernador y vice, el proceso tiende a menguar la gran tensión que existe y que produjera la pérdida de bienes y costara la vida a personas, muchas de las cuales hicieran posible este gobierno popular. Pero lo cierto es que ha ocurrido un hecho sedicioso ejecutado por el jefe de Policía, acto insólito y desconocido en la historia política e institucional argentina, acompañado de asesinatos, de la detención del gobernador, el vicegobernador y otros funcionarios, de bombas contra la propiedad privada y toma de radioemisoras que incitan a la ciudadanía. Podría pensarse que todo esto estaba orquestado desde hace mucho tiempo y consentido por alguien.

El silencio y la demora del Poder Ejecutivo y lo declarado por el señor ministro del Interior en el sentido de no interferir, en defensa del federalismo, ha permitido que ocurriesen toda clase de desmanes que motivaron el proyecto de intervención que ahora consideramos.

Esta ola de sedición que afecta tan profundamente al quehacer nacional se repite en otras provincias con tendencia a confundir, enmascarando los hechos con interpretaciones personalistas o de grupos. Se llega así a dar a lo ilegal visos de legalidad. Señala bien la página editorial del diario «Esquel» de la provincia de Chubut, del pasado 5 de marzo: «En ello reside el peligro que deberá alejarse de una vez por todas, si es que queremos transitar por la senda de la paz y la concordia, y para ello existe una sola fórmula apta: la real y cabal interpretación de la Constitución y de las leyes y el respeto absoluto de la voluntad expresada por el pueblo en las urnas».

A propósito de voluntad popular, haré referencia a los hechos ocurridos recientemente en mi provincia, Chubut, cuando en la ciudad de Comodoro Rivadavia un hecho desgraciado provoca la muerte de obreros y gran cantidad de heridos por la represión policial. Los hechos ocurren de esta manera. Se convoca a elecciones para renovar la comisión directiva del

Sindicato de Petroleros Privados, y se presentan dos listas: la de la actual conducción, que tiene mayoría absoluta, y la otra, que estaría fomentada o apoyada por el ministro de Bienestar Social y que responde a una minoría. Esta última, a fin de evitar el proceso eleccionario, produce la ocupación del local sindical para obtener de esa forma la intervención y colocar en ella a un miembro que responda al gobierno de la provincia.

Este proceso es la culminación de una política de sucesivos desaciertos del Ejecutivo provincial, que aparentemente no entiende el proceso de reconstrucción nacional y se maneja con egoísmo, no produciendo una verdadera integración, que es la única forma de conseguir los objetivos de la liberación nacional. La provincia está paralizada y en un clima de verdadera tensión, más aún con los hechos recientes; pero este proceso se inicia con el triunfo del actual gobernante, que en esa oportunidad dijo que la mayor parte del pueblo que lo había votado representaba intereses oligárquicos, en vez de iniciar allí la nueva etapa.

Esta posición se sigue esgrimiendo actualmente al decirse en un discurso reciente, con motivo de los hechos de Comodoro Rivadavia, que había tres clases de disconformes: primero, los que no entendían el proceso; segundo, los que no querían entender y, tercero, los que no les convenía entenderlo. A los primeros había que explicárselo y a los otros dos había que hacérselo entender. La forma en que había que hacerlo no se aclaró; tal vez sea el procedimiento adoptado en los hechos del Sindicato de Petroleros Privados.

Con esta posición la provincia se verá envuelta en un proceso de verdadero enfrentamiento tanto entre los sectores políticos como entre los gremiales, pudiendo presagiarse días muy difíciles para Chubut.

**Sr. Martínez (P. N.).** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Mombelli.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente** (Odena). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Martínez.

**Sr. Martínez (P. N.).** — Señor presidente: con el respeto que me merece el distinguido amigo diputado Mombelli debo manifestar que su información es totalmente inexacta. Solicito a la Presidencia o a la Secretaría que se pidan informaciones al Ministerio del Interior o de Defensa de los hechos que acaba de relatar el señor diputado como sucedidos en la provincia del Chubut. Esa información desvirtuará totalmente las manifestaciones que acaba de pronunciar el señor diputado Mombelli.

Agradezco la interrupción al señor diputado.

**Sr. Presidente** (Odena). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Mombelli.

**Sr. Mombelli.** — El señor diputado Martínez expresa que los hechos ocurridos en Comodoro Rivadavia no son los que yo relaté. Deseo re-

cordar al señor diputado Martínez que he sido testigo presencial y en ese caso, y en relación a la propuesta del señor diputado de pedir información, también le aclaro que en la provincia del Chubut se están analizando los hechos. De todas maneras, el señor diputado tiene a su disposición las vías correspondientes para hacerlo.

Yo no me retracto en lo que he dicho, y por eso insisto en que el señor diputado podrá tener toda la información que desee a través de la vía que corresponda.

Al comienzo de mi exposición manifesté que mi voto no avalaría el proyecto de la intervención. He aclarado muchos hechos ocurridos en la provincia; pero esto no significa de ninguna manera que yo pretenda la intervención ni a la provincia de Córdoba ni a la del Chubut ni a ninguna otra, tal como lo dejé específicamente aclarado. Durante estos años que se vienen sucediendo desde la iniciación del gobierno, en distintas oportunidades he puntualizado que las provincias no deben intervenir.

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Alvarez Guerrero.

**Sr. Alvarez Guerrero.** — Señor presidente: este debate ha sido sin duda especialmente prolongado, pero sucede que las circunstancias que vive el país son también muy particulares; son esas circunstancias especiales que exigen en la vida política de los pueblos un balance en la interpretación de la realidad social y un replanteo en las actitudes políticas.

El problema de Córdoba, obviamente, es hoy el problema del país, el problema del gobierno, de la civilidad y de las instituciones republicanas. Este problema constituye una crisis del régimen, entendiendo por tal una situación de ruptura del nexo entre el pasado y el presente, sin nada que lo reemplace, que provoca este vacío, esta carencia de fundamentos, esta excesiva fluidez de los acontecimientos políticos, causa de la angustia que vive la ciudadanía de la República hoy.

Por supuesto, señor presidente, nos oponemos a esta intervención, pero esta oposición no es importante en la medida que no trasciende el plano formal y reducido de denunciar su ilegalidad. Es preciso, urgente y necesario caracterizar el trasfondo político y social en el cual se inserta nuestra negativa.

El examen de los episodios de Córdoba, desde un plano teórico constitucional, nos señala, en primer lugar, que este hecho es un hito en la reversión ya evidente del difícil proceso de institucionalización que el pueblo festejó alborozado el 25 de mayo. No es el único hito ni es el primero, aunque esperamos que sea el último, pero es quizá el más revelador. Es el más revelador porque este episodio significa una quiebra clara, nítida, sin atenuantes, de la legalidad constitucional en la República. Es revelador también porque esa quiebra se ha producido y provocado no desde fuera de las instituciones sino desde su

seno mismo por acción de un jefe de Policía y por omisión del Poder Ejecutivo nacional. Implica una auténtica deformación, una grave degeneración del funcionamiento de las instituciones republicanas. Este hecho es revelador —y esto es quizá lo más grave— porque pareciera pretender ser el origen de una verdadera institucionalización de la violencia.

El examen del marco político en el que se desenvuelven estos episodios superficialmente pareciera indicarnos que se trata de una consecuencia de la aparente división interna del partido gobernante, pero en el fondo, por su trascendencia institucional, que escapa de los marcos provinciales de Córdoba, por sus consecuencias prácticas, representa, a nuestro juicio, un agudo avance de las corrientes reaccionarias y antidemocráticas que tienen vigencia real en el aparato estatal.

Hay fascismo en la Argentina. El señor diputado Sueldo enumeró una serie de circunstancias y hechos, que no vale la pena repetir, que son reveladores. Esto del fascismo no es una novedad en la Argentina, porque existe desde hace mucho tiempo. A Yrigoyen lo derrocó en 1930 el golpe fascista del general Uriburu.

Lo que es preciso denunciar hoy aquí con energía, y reiterarlo, es que este fascismo tiene un acelerado desarrollo en nuestros días y que, inconscientemente quizá, ha cristalizado en influyentes sectores de la vida nacional. Hay pesimismo y tristeza en la ciudadanía. La alegría juvenil de los cantos del 25 de mayo y de las campañas electorales se ha ido transformando en la torva mirada de las bandas armadas y de los inquisidores ideológicos. Hay una necesidad imperiosa por parte de las fuerzas democráticas y populares de reaccionar enérgicamente ante este proceso acelerado. Es evidente que nuestra posición partidaria perderá esta votación. Pero queremos que trascienda nuestra denuncia, nuestro llamado de atención y el sentido de nuestra gestión. No admitiremos complicidad alguna con quien pretende quebrar la legalidad y defendemos celosamente hasta el último vestigio, aunque sea formal, de la realidad constitucional, porque creemos que las instituciones políticas democráticas son el único instrumento válido para la liberación nacional, social y humana que pretendemos.

No sé, señor presidente, si habrá posibilidades de rectificar el rumbo por parte del gobierno. No sabemos si nuestra gestión dialoguista de advertencia tendrá éxito, aunque sea relativo. Yo ya empiezo a ser pesimista. En estas circunstancias sólo nos cabe invocar nuestras propias convicciones, reivindicar con un acto de fe nuestros propios postulados, encolumnarnos con firmeza, intransigencia y tozudes yrigoyeneana tras nuestros ideales esenciales y permanentes. Sin grandilocuencia pero con la grandeza que las circunstancias imponen es preciso reafirmar en este recinto, para que se sepa en todos los recintos del país, que

no negociaremos ni cejaremos en nuestra ratificación de fe doctrinaria. Y mientras quede un solo radical —le hemos dicho otras veces— habrá la esperanza en la Argentina de una efectiva vigencia de la democracia y habrá luchadores para que se imponga esta concepción de la vida cívica en la Nación. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Llorens.

**Sr. Pedrini.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Llorens, con el permiso de la presidencia?

**Sr. Llorens.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Pedrini.** — Señor presidente: mientras presidía esta sesión el señor diputado Busacca me manifestó, hace ya bastante tiempo, que la bancada del radicalismo disponía para sus exposiciones de treinta minutos. Pero estoy observando que en estas dos o tres horas ya han hablado varios señores diputados de ese bloque. Vale decir que el plazo acordado de qué disponía se ha cumplido con exceso.

**Sr. Presidente (Odena).** — La Presidencia entiende que ulteriormente se resolvió que se iba a asignar a todos los bloques el tiempo que marca el reglamento.

**Sr. Pedrini.** — Exactamente.

**Sr. Presidente (Odena).** — De acuerdo con el reglamento, cada uno de los señores diputados dispone de treinta minutos.

**Sr. Pedrini.** — ¿Sin límite?

**Sr. Presidente (Odena).** — Sin límite.

**Sr. Falabella.** — Una pequeña aclaración, señor presidente.

Quisiera preguntarle al señor diputado preopinante Alvarez Guerrero si no obstante su repudio al fascismo y su profesión de fe a favor de convicciones tan ardorosamente mantenidas al servicio de la democracia, su partido va a seguir sirviendo de laboratorio de ministros políticos de los gobiernos fuertes del país. Así lo ha hecho con Alconada Aramburú y con Mor Roig. ¿Se van a decidir, entonces, atacar al fascismo y a otros gobiernos fuertes?

**Sr. Presidente (Odena).** — El señor diputado está fuera de la cuestión en debate.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

**Sr. Presidente (Odena).** — La Presidencia había concedido la palabra al señor diputado Llorens, quien puede iniciar su exposición.

**Sr. Llorens.** — Señor presidente: como representante del pueblo de Córdoba en esta Honorable Cámara debo expresar mi discrepancia con este proyecto, cuya aprobación lesionaría arbitrariamente la autonomía de uno de los poderes de mi provincia.

Mi oposición obedece a las mismas irrefutables razones de orden constitucional que fueron expuestas en el Honorable Senado por el representante de Córdoba, doctor Eduardo Angeloz, y por otros senadores del bloque de la Unión Cívica Radical, cuando se consideró el

proyecto de intervención que nos ocupa. Se trata primordialmente de lo preceptuado por el artículo 6º de la Constitución Nacional, cuyos precedentes son, entre otros, las instrucciones a los diputados de la Banda Oriental en el Congreso de 1813, el pacto de unión suscrito por varios gobernadores, precisamente en Córdoba, en el año 1830, y el Acuerdo de San Nicolás. Ese artículo 6º le impone al gobierno federal el deber insoslayable de concurrir con las fuerzas necesarias al territorio de una provincia para sostener o restablecer las legítimas autoridades provinciales gravemente amenazadas o ya derrocadas por un movimiento sedicioso.

De acuerdo con la modificación impuesta a este artículo por la Convención Constituyente de 1860, la intervención del gobierno federal, a ese solo efecto, debe efectuarse a requisición de las autoridades provinciales destituidas por la sedición. Sin embargo, cuando dichas autoridades se hallan en la imposibilidad fáctica de formular esa requisición, el gobierno federal debe entender que la requisición existe tácitamente, y respondiendo a ella, tiene la obligación de acudir sin dilación alguna al territorio provincial para reponer con presteza en sus cargos a los gobernantes depuestos.

Mi afirmación coincide con el juicio que emiten al respecto nuestros constitucionalistas, y especialmente con lo que opina, refiriéndose concretamente a la situación planteada en Córdoba, el profesor César Enrique Romero.

Precisamente, en virtud del artículo 6º de la Constitución Nacional fueron restablecidos en sus cargos el gobernador delegado Juan López en la provincia de Santa Fe en 1856, y el gobernador riojano Francisco S. Gómez en 1857.

Nuestra historia registra el caso de un gobernador depuesto por un piquete de la policía, y ese hecho presenta una evidente semejanza en el reciente derrocamiento del gobernador de Córdoba, que fue destituido por un jefe de policía sedicioso. El hecho al que me refiero sucedió en la provincia de Catamarca en 1891. El gobernador a quien depuso un piquete policial fue Gustavo Ferrari; pero recobró su cargo una vez sofocado ese movimiento insurreccional.

La actitud del gobierno federal con respecto a la sedición que perturbó profundamente a mi provincia debió ser la que le ordena nuestra Ley Fundamental; no obstante, ha sido otra. En efecto, el Poder Ejecutivo dejó transcurrir varios días y se mantuvo en absoluta pasividad pese a la gravedad de los sucesos que conmovían a Córdoba. Dejó que se perpetraran atentados terroristas y enfrentamientos a mano armada, en los que intervenían sectores que se hallan en pugna dentro del movimiento justicialista. La situación era tan apremiante que, al solo efecto de reponer a los gobernantes destituidos, hubiera sido lícito que el Poder Ejecutivo interviniera por propia decisión para restablecer el orden subvertido. González Calderón en su *Derecho constitucional* y otros tratadistas

opinan que tal debe ser la actitud del gobierno federal en ese caso. Pero el Poder Ejecutivo nacional ha incurrido en una tardanza inexplicable e injustificada, y a esa demora se deben muchas de las graves consecuencias que ha traído aparejada la sedición. No respondió a lo que le impone la Constitución Nacional y al requerimiento de auxilio federal que, mediante un mensaje difundido por el periodismo, formuló el gobernador destituido cuando hubo recuperado su libertad.

Ahora se allana parcialmente la autonomía de Córdoba pese a que en reiteradas declaraciones se afirmó, desde la Presidencia de la República, que el federalismo sería afianzado y que las autonomías provinciales merecerían el invariable respeto del gobierno central.

No nos hallamos considerando un tema opinable, señor presidente. Una vez producida la sedición, existía un deber cuyo cumplimiento no puede ser omitido por el gobierno federal. Aunque la gestión del gobernador de Córdoba sea objetable, como en realidad lo es, a nuestro juicio, la obligación que ha tenido el gobierno federal es —desde el punto de vista constitucional— absolutamente incuestionable. Esa omisión del Poder Ejecutivo nacional acentúa la arbitrariedad del proyecto mediante el cual se pretende intervenir el Poder Ejecutivo de Córdoba. Si no cumplió oportunamente con el deber de restablecer a las autoridades constituidas, su proyecto de intervención revela ahora la intención de actuar, no con el propósito de respetar la voluntad mayoritaria del pueblo que eligió a esos gobernantes, hoy depuestos por la sedición, sino con el fin de cohonestar el objetivo del movimiento sedicioso, que consistió evidentemente en derrocar a las autoridades constituidas.

Cuando la Unión Cívica Radical, tanto desde el Comité Central de Córdoba como desde su Comité Nacional, ha exhortado al cumplimiento del artículo 69 de la Constitución y al consecuente restablecimiento de los gobernantes legítimos de mi provincia, no ha querido con ello, de ningún modo, manifestar su asentimiento a la gestión de gobierno del doctor Obregón Cano y de sus colaboradores.

Por el contrario, esa gestión merece, a nuestro juicio, algunos reparos, pero la única manera legítima de separar al doctor Obregón Cano de su cargo hubiera sido someterlo a un juicio político en el ámbito del Poder Legislativo de mi provincia. Mientras ello no ocurra, en opinión de los radicales, que somos respetuosos de la Constitución, de las leyes y de los pronunciamientos populares, ese ciudadano debiera continuar siendo el representante genuino de la voluntad mayoritaria del pueblo.

No aceptamos ni aceptaremos, señor presidente, los movimientos sediciosos, porque, dentro de la normalidad institucional, ellos tienen como propósito esencial el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.

Rechazamos el atropello cometido contra la investidura del gobernador, no contra la persona determinada que ejercía la gobernación de la provincia. Defendemos los principios y procedimientos constitucionales, sea quienes fueren las personas a quienes les concierne la efectiva vigencia y el real cumplimiento de esos principios.

Si el ciudadano que hasta el día del movimiento sedicioso ejerció la gobernación de Córdoba hubiera sido radical, quizá alguien hubiera atribuido a un móvil sectario nuestra oposición a este proyecto de intervención. Pero ese ciudadano es ajeno a nuestro partido, y si postulamos su reposición en el cargo, resulta evidente que no asumimos la defensa de su gestión ni de su ideario político. Defendemos principios y normas que están por encima de las personas y de las circunstancias. Defendemos en particular la voluntad popular, que no puede ni debe ser defraudada con el reemplazo arbitrario de los gobernantes que la ciudadanía ha elegido. Y defendemos la autonomía provincial que es el postulado sobre el cual reposa uno de los caracteres fundamentales de nuestro sistema de gobierno. Es decir, el principio federalista que consagra nuestra Constitución Nacional.

El gobierno federal debe, ciertamente, intervenir en Córdoba, pero con el único propósito de ser fiel al deber que le impone nuestra Ley Fundamental en los casos de sedición contra las autoridades provinciales legítimas. Pero intervenir el Poder Ejecutivo de Córdoba para restablecer tardamente el orden y para substituir a sus gobernantes constituiría un acto contrario no sólo al espíritu y a la letra de la Constitución sino también al propósito proclamado a menudo por el oficialismo de propender a la normalización definitiva de nuestras instituciones.

La provincia de Córdoba no está dispuesta a admitir que las contradicciones y los enfrentamientos internos que afectan al movimiento justicialista provoquen la pérdida transitoria de su autonomía.

Aprobar este proyecto de intervención equivaldría a franquear las puertas de las instituciones a los movimientos sediciosos, cuyos cabecillas e instigadores merecen el repudio de la ciudadanía que intenta preservar nuestro sistema republicano, federal y democrático. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Odena).** — Tiene la palabra el señor diputado Vinti.

**Sr. Vinti.** — A esta altura del debate resulta difícil efectuar consideraciones sobre el tema en discusión. Se han escuchado argumentos en pro y en contra, dichos con total y absoluta erudición y, además, con elocuencia. En homenaje a la hora el bloque de Unión Popular va a ser lo más sintético posible.

A nuestro juicio hay tres aspectos fundamentales en el proyecto en consideración. El primero, como ya se lo ha señalado, es que ha habido una mora por parte del ministerio competente para

tomar resoluciones e impedir el avasallamiento al Ejecutivo provincial.

Entendemos que detrás del teniente coronel Navarro se han movido intereses que lo han impulsado a actuar en un acto de sedición inédito en la vida política del país.

Hay un aspecto que quiero recalcar. Nosotros alentábamos la esperanza de que la intervención del poder central fuera para restablecer a los mandatarios depuestos por el acto sedicioso, para que después las instituciones normales de la provincia procedieran, como lo dijo el señor diputado preopinante, a formular el correspondiente pedido de juicio político si la conducta de los mandatarios así lo exigía.

Se produce el acto de sedición, que sienta un precedente tenebroso para el futuro del país, y no sabemos qué habrá salido de la reunión que tuvieron los representantes de la policía de Salta con el gobernador Ragone solicitándole un sueldo mínimo de dos mil pesos mensuales; allí podría haber otro «navarrazo».

Pero también ocurre que los mandatarios depuestos no fueron acompañados por todas las instituciones que componían el grupo político de la provincia, como debieran haberlo hecho. Se hizo una declaración muy anodina y se los abandonó a su suerte.

Cuando se leyó un comunicado del Ministerio del Interior que dice así: «Respetuoso del régimen republicano federal en vigencia, aguarda que ese Estado encuentre dentro del juego de sus propias instituciones y la madurez política de su pueblo las soluciones más adecuadas para que el orden y la tranquilidad retornen a la provincia», el señor diputado Zamanillo preguntó dónde estaban las instituciones si el gobernador se encontraba preso y la Legislatura clausurada. La Legislatura podría haberse reunido en la plaza si es que quería reponer a los mandatarios depuestos. Además, el presidente de la Cámara de Diputados, señor Agodino, asumió la gobernación y sin reunir el requisito de los dos tercios de la Asamblea Legislativa convocó al pueblo de Córdoba a elecciones por medio de un decreto. Y por si esto fuera poco, tengo a la vista un recorte del diario «Crónica», del 4 de marzo, que dice lo siguiente: «Navarro, confirmado como jefe de Policía. Un decreto del Poder Ejecutivo de la provincia, a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, doctor Mario Dante Agodino, ha remediado la situación en que se encontraba el jefe de Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro, separado de su cargo y luego exonerado por dos resoluciones del gobernador Obregón Cano, a quien luego el mismo Navarro destituyó y apresó. La disposición adoptada a última hora de anoche por el doctor Agodino deroga los dos decretos que sancionaban al jefe rebelde, con lo cual otorga legitimidad a todo lo actuado. Con esta resolución quedaría sin efecto la causa por el delito de sedición abierta contra el jefe de Policía, quien ya

había sido intimado por el juez federal doctor Zamboni Ledesma».

Además, el presidente de la Cámara de Diputados prestó juramento ante la Suprema Corte. Quiere decir que en este ir y venir político interno de la provincia hay algo que aquí no se ha dicho y es que todos los poderes locales están implicados en el proceso. Todos han incurrido en mora. En última instancia, las dos figuras que en cierto modo han quedado incólumes son los dos mandatarios depuestos que llegaron ayer a esta Honorable Cámara y que con el propósito de contribuir a la solución moral del problema —de ninguna manera significa terminar el trámite que esta Cámara debía realizar— entregaron sus renunciaciones al presidente del bloque de la mayoría, señor Ferdinando Pedrini.

Nosotros somos defensores del federalismo. Estamos inspirados por el anhelo de que no se avasallen los poderes políticos provinciales, pero entendemos que el Poder Ejecutivo nacional se ha quedado corto en el alcance de la intervención porque, como digo, todos los poderes locales se encuentran comprometidos en el problema. ¿Qué porvenir le espera al señor interventor que irá a la provincia? ¿Qué es lo que se está preparando allí? ¿Cómo podrá conducir los asuntos provinciales de acuerdo con las disposiciones expresas que se le impartan? Para el desempeño de su cometido necesitará autoridad, y yo me pregunté si la tendrá.

Sin querer cargar las tintas en el problema y debido a lo avanzado de la hora, circunstancia por la cual no quiero prolongar más el debate, expreso que el bloque de la Unión Popular va a apoyar el proyecto de intervención al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. Pero al mismo tiempo quiero dejar constancia de que en este debate se han hecho muchos requerimientos a la paz, a la unidad y a la concordia. Se le hacen demasiados pedidos al presidente de la República creyendo que puede hacerlo todo sin que nosotros y el resto de la ciudadanía pongamos nada.

Consideramos que el Poder Ejecutivo es, sí, el responsable de la conducción del país, pero también creemos que todos los sectores políticos, con cordura y razonabilidad, deben aportar su parte para la solución de estos problemas.

Es indudable que existe una escalada de intereses antinacionales, sean de derecha o de izquierda, que tratan de frenar el proceso de reconstrucción. A nadie se le escapa que esos intereses multinacionales y monopólicos harán lo imposible para que el país no logre el despegue que necesita. Estamos en una carrera contra el tiempo, que tratará de ser saboteada en todos los sectores de la vida nacional, en el cultural, el político, el social y, fundamentalmente, el económico.

Apoyamos el proyecto del Poder Ejecutivo en la certeza de que se trata de la normalización de un estado más de conflicto en el orden nacional, que era conocido por todos, aunque nos

callábamos creyendo que se solucionaría por las vías naturales del entendimiento provincial.

Pero esta situación ha hecho eclosión a través de un señor teniente coronel que se arrogó el derecho de avasallar el Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba y que mañana se podrá hacer por otro medio, asociando intereses y antagonismos, siempre de la mano de lo antinacional.

Por eso lo de Córdoba no es un correctivo ni una amenaza para los demás gobernadores que verían pendiente la espada de Damocles sobre su cabeza. Es simplemente un llamado a la reflexión a todos para que cada uno deponga posiciones y trate de empujar hacia adelante el carro que cada día se nos quiere empantanar más para que no podamos salir del lodazal de 18 años, con la salvedad del período de gobierno radical, que tuvo aspectos muy positivos, sobre todo en la vida política del país. Esos 18 años, considerados globalmente, han dejado al país en una situación de descalabro total que es muy difícil remontar.

**Sr. Presidente (Odena).**— Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

**Sr. Sandler.**— Señor presidente: en ocasión de pronunciar nuestra opinión con respecto al tratamiento sobre tablas, hemos anticipado que nos parecía que el remedio propicio se encontraba dentro del orden jurisdiccional cordobés. Con ello adelantábamos nuestra posición contraria al proyecto de intervención tal como ha venido redactado del Senado.

Sin embargo, después de sucesivas exposiciones donde se ha analizado lo anecdótico y lo institucional, con reflexiones políticas e ideológicas, nos parece oportuno intervenir para intentar una visión del proceso ocurrido en Córdoba, con un sentido mucho más sintético, que ponga de manifiesto dónde está el riesgo profundo de los hechos de los que somos partícipes y testigos a la vez.

El hecho visible y concreto es, indudablemente, la sedición del teniente coronel Navarro. Pero el interrogante que deja este hecho, de alguna manera insinuado por algunos oradores y del que yo haré el punto central de mi exposición, es casi el planteo de una investigación que debería comenzar con esta pregunta: ¿cómo es posible que se alzara Navarro?

Yo me hago esta pregunta, señor presidente, porque el día de mañana, cuando los textos registren el episodio, éste será históricamente incomprensible, y así, tomado en su conjunto, aun abigarrado de informes, el hecho se torna políticamente inexplicable.

Partamos de la base de que el teniente coronel Navarro es un oficial de las fuerzas armadas, y esto supone una práctica, un hábito, un sistema de pensamiento, que desde luego, yo diría, es una manera de actuar, que facilita al hombre para la acción de guerra. Pero este mismo sistema de pensamiento —graficado quizá con la expresión de la víspera de cada día:

subordinación y valor— refleja también un mecanismo mental que lo habitúa a la disciplina, al respeto; y a veces el gran problema de los militares consiste en su escasa iniciativa justamente en los hechos de guerra, a raíz de este hábito o costumbre de que deben actuar dentro del margen del acto debido. De modo que no es tan sencillo ni tan fácil hacer un lugar común, como si fuera un pensamiento cierto, de que los militares —por el hecho de serlo— sean contumaces y rebeldes; yo diría que es al revés, y a veces al contrario.

La formación del teniente coronel Navarro, de por sí, indicaría que naturalmente tiene una mayor cautela habitual para actuar. Por eso es que el señor Navarro no es un *kamikaze*, ni comete un acto de desacato o de sedición con el coraje del valor solitario que, sable o pistola en mano, se arroja contra las autoridades constituidas. El señor Navarro avanza con la policía cordobesa, y ésta, por supuesto, también pertenece al ramo de la fuerza de seguridad. Aunque puede haber matices diferenciales, las mismas pautas psicológicas y educacionales también se dan en la policía, como fuerza militar en el orden civil. También los cuadros policiales se gobiernan con el sentido de querer cumplir el acto debido. Aplican los mismos criterios para moverse y desplazarse en hechos de esta naturaleza, que son muy cuidadosamente repensados.

Y yo pienso que este teniente coronel sedicioso, si hubiese sido un demente, si hubiese estado inspirado por un acto quijotesco, se hubiera quedado sólo en el umbral del Cabildo de la ciudad de Córdoba. Pero no solamente él debía tener la visión de que estaba moviéndose dentro de ciertos márgenes de seguridad. La institución misma que lo acompañó debía haber tenido el mismo criterio. Este margen de seguridad en la vida militar y en la policía —que a los efectos es lo mismo— viene brindado por eso que yo acabo de decir: por el cumplimiento, de algún modo, del acto debido; lo indebido es de alguna manera el apartamiento del reglamento.

Pero esta seguridad es un valor relativo. Un tenue apartamiento del reglamento exige menor grado de seguridad; una violación del reglamento en un lugar poco sensible, inhóspito o alejado también exige un menor grado. Si la desviación reglamentaria, aun en lugar sensible, se produce sin la presencia de los factores superiores que actúan como elementos catalizadores, también ofrece menor seguridad esa sensibilidad.

Pero cuando se trata de esa seguridad en nuestro caso concreto, la interpretación se torna más difícil. No se trata del apartamiento de un reglamento común; el teniente coronel Navarro se alza contra su inmediato superior jerárquico con una subversión total del orden que tiene inmerso en sí por profesión y que sabe muy bien que le pudo haber acarreado el fusi-



lamiento en el acto de combate. De tal manera que éste es, quizás, uno de los más tremendos desvíos desde el punto de vista militar.

Tal vez esto pudiera explicarse por lo que decía antes: operación en lugar no sensible. No sé si así podría ser en el borde de la cordillera, en los llanos de La Rioja o en Ushuaia. Pero esta desviación se produce en una de las principales regiones del país desde el punto de vista político, económico y social; nada más ni nada menos que en la ciudad de Córdoba, donde la sensibilidad global, y no sólo la sensibilidad política, es muy alta. El apartamiento del reglamento es muy visible e inmediato, pues no solamente desde el punto de vista geográfico sino también desde el punto de vista histórico la zona es sensible.

Por otra parte, ese apartamiento se produce en medio de un proceso político logrado luego de muchos años de frustraciones, proceso que remata en un presidente que además de ser tal es un líder político que tiene ocho millones de votos directos, seis millones de votos en función del juego democrático y el apoyo de todo el espectro político, económico y social del país. No son pocos los que en la calle han dicho, después de este proceso electoral, que la era de los golpes de Estado había terminado. Quizá se equivocaran en el fondo, pero la impresión que recogían era correcta. ¿Quién se atreve no sólo dentro de las fuerzas armadas, sino también a nivel político o social, a hacer frente al señor presidente de la República? Yo no conozco por ahora quién con efectos importantes pueda enfrentarse directamente; y la razón está en esa tremenda fuerza que emana de la personalidad del presidente y del proceso político. Y es Navarro, el teniente coronel Navarro, quien desde Córdoba tiene esta ocurrencia.

Decía que, además, la desviación reglamentaria es menos fácil y reclama un mayor afinamiento de seguridad si hay factores catalizadores. Esto significa lo siguiente, para explicarlo con un ejemplo burdo. A veces, en la vida militar fumar un cigarrillo es una desviación reglamentaria. Si se hace de noche y en el baño, sigue siéndolo, pero es menos peligrosa; si se hace en la plaza de armas, es mucho más grave, pero mucho más grave aún resulta si se hace en presencia del general. Aquí también está dado el factor catalizador, porque en Córdoba no solamente está la policía provincial sino que están también el III Cuerpo de Ejército y una de las guarniciones más importantes de la aeronáutica militar.

Por lo tanto, el movimiento del teniente coronel Navarro, acompañado por la institución policial, con este apartamiento reglamentario tan importante, en una zona geográfica e históricamente tan sensible y con estos efectos catalizadores en contra, está revelando una cosa mucho más profunda, que justifica la pregunta inicial que he formulado: ¿cómo es posible el alzamiento del teniente coronel Navarro? ¿Qué

fuerzas ocultas, qué tramas internas subyacentes detrás del fenómeno político apariencial se han movido para crear en la conciencia del teniente coronel Navarro y de la policía insurrecta una visión jerárquica que lleve a decir: compañeros, salgamos porque no hay peligro? ¿Cuáles son estas fuerzas ocultas e internas?

Yo creo que el teniente coronel Navarro, más allá de su situación individual y de sus arres-tos y presencias un poco desmedidos, ha sido un instrumento de esas fuerzas ocultas. Pero, señor presidente, se está al borde de que todo esto sea instrumentado por segunda vez, porque ahora empieza a aparecer el teniente coronel Navarro no como el jefe rebelde sino como el chivo expiatorio, es decir que «Los cañones de Navarone» lo apuntan a él, quien lógicamente tiene que ser juzgado y, así lo espero, severamente condenado. De acuerdo con lo que acabo de anticipar, señor presidente, el juicio individual por sedición al teniente coronel Navarro es de muy poco valor; y todo lo que acabo de relacionar pone de manifiesto la presencia de estas fuerzas ocultas, único factor que permite explicar este acto de aparente audacia del teniente coronel sedicioso y la institución policial. Indudablemente esto demanda un proceso político de investigación. Tanto en nuestro país como en otros países del mundo al cometerse crímenes políticos —de un dirigente político, o de un funcionario del Estado—, quizás por la emotividad que el hecho produzca se solicita una investigación política, porque todos sabemos muy bien que no nos satisface de ninguna manera la investigación judicial porque media una gran distancia entre la autoridad directa del crimen y las fuerzas ocultas que lo instrumentan.

El teniente coronel Navarro es un criminal político, pues aparte las muertes que ha causado en la sedición de Córdoba ha enfrentado y asesinado directamente la institución que representa la soberanía popular materializada en esa provincia. Si en casos individuales se reclama una investigación política, en este caso más que nunca deben conocerse los orígenes y las honduras de este crimen político, que no es contra personas determinadas sino contra la institución republicana y de la soberanía popular.

En un diario del día de ayer, señor presidente, se publicó un editorial que es realmente alarmante. En este recinto se ha expresado y reconocido hasta el cansancio que ésta es una sedición, a la que yo le he agregado matices que son de singular importancia. En este editorial no se comparte esta opinión sino que se califica al teniente coronel Navarro de anticipado terapeuta, o sea que ha operado un forúnculo al costado de la Nación. El forúnculo es Córdoba. En el mismo editorial se agradece y felicita a este avanzado terapeuta que es el teniente coronel Navarro, que para nosotros es un sedicioso, porque en realidad el país no pue-

de esperar la lenta y parsimoniosa actividad de las instituciones constitucionales, especialmente las parlamentarias. En ese editorial de un diario capitalino no solamente hay una felicitación a ese sedicioso, y a la delincuencia por él practicada contra las seguridades personales, sino que hay una crítica, repito, hacia las instituciones de la patria. Esto me ha hecho reflexionar, y por lo tanto desde esta banca solicito, por útil y necesario, descubrir a estas fuerzas ocultas que instrumentan a los tenientes coroneles Navarro para fortalecer el poder político parlamentario.

Al término de esta sesión daremos la solución que la provincia de Córdoba necesita, solución que se complementará seguramente con el proceso judicial al teniente coronel Navarro. Pero si hace apenas unos meses, cuando civiles armados atacaron un cuartel, atentando contra el proceso popular, el hecho motivó la reacción del gobierno central —que día tras día se nos recuerda a través de la radiotelefonía y de la televisión—, la misma reacción tiene que producirse contra la delincuencia ejercida a través de la insurrección contra las instituciones y los funcionarios.

Quisiera, señor presidente, que en esta misma madrugada se tuviesen los elementos de juicio suficientes como para poder anticipar, en alguna medida, este proceso político que el país necesita en gran medida. Pero no puedo hacerlo porque sería inútil pretender asumir el rol de una comisión investigadora, sino solamente proponer como una sintomatología de que evidentemente han habido fuerzas ocultas que han instrumentado al teniente coronel Navarro, y que algunos órganos periodísticos han registrado. ¿Cómo se compadece este atentado contra la soberanía popular y el proceso político popular cuando un señor ministro del Interior da la respuesta por varios citada de que mientras se ponía preso al gobernador de Córdoba observa expectante los hechos? El señor ministro del Interior debe ser investigado para determinar qué grado de participación tiene en este proceso de Córdoba.

¿Qué dice el señor ministro de Defensa cuando su Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba y su guarnición aérea militar se abstienen de intervenir en los hechos mientras él pierde el tiempo en diálogos palaciegos con el señor ministro del Interior? Estos son organismos importantes, responsables directos más allá de la actuación de este Parlamento.

La respuesta de observar expectante el proceso y de no intervenir en él es tan pueril como si cualquiera de nosotros denunciara al juez que en su casa están invadiendo los ladrones y aquél contestara que no puede intervenir porque es respetuoso de la propiedad privada. Es un sofisma, es un escapismo que no se puede aceptar.

¿Qué hace el señor juez federal de Córdoba, el doctor Zamboni, a quien se le denuncia que ha sido puesto preso el gobernador y que en lugar de recurrir al auxilio de la fuerza pública

a nivel nacional emplaza al insurrecto para que deponga su actitud? Este es otro síntoma del mal profundo que alienta a este proceso.

El representante del Ejército argentino firma las actas en que asume la gobernación el presidente de la Cámara de Diputados. De mal gusto es la excusa de que es un error protocolar. También esto es síntoma del mal que estoy tratando de denunciar.

Como lo acaba de decir el señor diputado Vinti, el nuevo gobernador jura frente al presidente del tribunal superior de la provincia. ¿Es que un magistrado de esa jerarquía ignora que éste es un procedimiento falaz que no puede convalidar? ¿Es que el presidente de la Cámara de Diputados, aun en el supuesto de que asumiera el cargo en defensa de la comunidad para que no cunda el desorden, puede en ejercicio de ese poder convalidar la actuación sediciosa? Esto también es síntoma del mal que he denunciado.

Finalmente, hay otro hecho que me preocupa en demasía como consecuencia del proceso político pertinente. En instantes en que se produce la sedición —a Dios gracias que no se ha cruzado la línea peligrosa de la guerra civil— el señor ministro de Trabajo declara normalizada la C.G.T. a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ojalá se normalice, pero todos sabemos que mientras se normalizaba muchos dirigentes se encontraban detenidos por el jefe sedicioso.

Reconozco que pueden existir motivos poderosos en la vida política, pero hay una regla de juego fundamental que hay que elegir en todos los órdenes: saber hasta dónde se pueden llevar las cosas sin pasar de un campo a otro. Un país que ha elegido el rumbo de las elecciones, el método de contar las cabezas en vez de romperlas, tolera hasta donde es aceptable, vale decir, no viola por la fuerza lo que queremos que otros respeten el día de mañana.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Salvador F. Busacca.

**Sr. Sandler.** — Están pendientes de investigación del proceso político las bombas en la casa del gobernador Obregón Cano, que no van a remediar su renuncia; las bombas en la casa del juez Hairabedian; las bombas en «La Voz del Interior». ¿Quién duda de que estas bombas habrían sido puestas por el ejército insurrecto de la policía provincial en manos del teniente coronel Navarro? Es el mismo juez que está juzgando el asesinato de los cinco cooperativistas y que ha dado un trato especial a los procesados. En mi larga trayectoria profesional de abogado nunca he visto imputados que vayan a declarar con camisa, cuello, corbata, anteojos negros, e incluso fumando. Todos estos policías asesinos de los cooperativistas así lo han hecho. Pero el solo hecho de tocar esta cutícula ha valido para que después se le pusiera la bomba al juez.

Por eso el teniente coronel Navarro debe ser sometido a un juicio penal como corresponde. Pe-

ro el país no se va a declarar satisfecho ni el Parlamento verá cumplida su función recomendando sólo esta investigación, ni aun cumpliéndose el proceso de la intervención. El Parlamento debe, en la medida de lo posible, ir retomando el poder oculto que fuerzas oscuras le están retaceando, porque no sólo se ha puesto preso al gobernador y al vicegobernador, sino que en la «arriada» cayeron también diputados provinciales. En realidad, estas fuerzas ocultas no sólo no respetan las instituciones, sino que les caen mal las instituciones. Es algo que soportan de mal grado.

De manera que este episodio de Córdoba, motivado por estas fuerzas ocultas —que ni siquiera es un episodio aislado—, tiene una onda expansiva que cada uno de nosotros debe calcular, porque en la antesala de ese hecho estamos todos. Si no creemos que vale la pena, si pensamos que en realidad esto es una superchería, dejemos estar las cosas; pero si pensamos que un sistema parlamentario, un sistema democrático, un sistema de elecciones es algo valioso para un pueblo, hay que defenderlo no solamente con el enjuiciamiento del teniente coronel insurrecto sino con la revelación a fondo de los males de la política nacional argentina, de los poderes reales que no sólo condicionan a estos tenientes coroneles sino quizá también a muchos de los poderes institucionales.

Yo sé que esta operación es difícil. ¿Cómo no va a ser difícil si es descubrir el carcinoma que invade hasta el tuétano toda la estructura nacional! Es ésta una elección política. Pero el Parlamento —hablo ahora de nuestro poder— asume el riesgo de realizar esta vivisección; de lo contrario, al Parlamento le ocurrirá quizá lo que le ocurrió a Chamberlain en Munich, cuando se dijo que no sólo se perdió la guerra sino que se perdió también la honra.

De modo que es necesario que esta decisión política sea vivida por mis pares como un problema substancial de la política nacional. Las fuerzas ocultas que empujan a ese teniente coronel Navarro reaccionario son también reaccionarias. Se ha sabido antes del proceso electoral que las elecciones eran una estafa para la liberación del pueblo argentino, pero que ella no era la dominación de los poderes reales que están por debajo. En algunas ocasiones, y con motivo del estudio de otras leyes, he denunciado el aflorar de estos poderes reales, que no se satisfacen con muchas de las leyes que hemos dictado. Están buscando el poder político, concreto, substituyendo la voluntad del pueblo de la República. Pero el pueblo se ha empeñado esta vez en una elección con un objetivo tan claro y terminante como pocas veces se ha dado en el país. El objetivo era y sigue siendo la liberación nacional. De tal manera que aunque Córdoba esté lejana y a pesar de que mis palabras parezcan dramáticas, señalo que éste es un hecho de trascendencia en la política nacional, porque en realidad es el ataque de las fuerzas

reaccionarias existentes en nuestra sociedad contra este proceso de liberación.

Mis reflexiones van para todos. Desde luego, por razones obvias, para los representantes del bloque de la mayoría. Decir que ojalá estos hechos no se repitan me parece una invocación noble pero romántica. Es más o menos lo mismo que esperemos que la gente no siga robando, que la gente se porte mejor; es una demanda de responsabilidades ajenas. Yo ni siquiera levanto el dedo —si cupiera— contra el Poder Ejecutivo nacional. Alguien ha dicho aquí, y yo lo he expresado por escrito hace pocos días: ¡cuántas cosas se demandan del presidente de la República! Por eso aquí yo hago demanda de responsabilidades propias. Los negocios políticos son legítimos; tan legítimos como cualquier actividad política, siempre y cuando no se excluya esa tremenda raya roja de la peligrosidad que es el aniquilamiento de las instituciones en las concesiones pequeñas que se hacen en función de una supuesta mejora del estado actual.

Señor presidente: yo termino con estas palabras, que son puramente de reflexión, dejando así fundado nuestro voto.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Molinari Romero.

**Sr. Molinari Romero.** — Voy a pedir a los señores diputados que no se asusten mucho, porque voy a ser lo más breve posible, tratando de eliminar toda una serie de observaciones jurídicas, y todo lo que iba a exponer sobre la Constitución vulnerada de la provincia de Córdoba; simplemente, voy a limitarme a hechos muy concretos.

La provincia de Córdoba ha tenido siempre la desgracia de su rebeldía, de la rebeldía que la colocó en las trincheras de la libertad y del pueblo; eso ha hecho que se la confunda muchas veces con otras expresiones, que pueden ser respetables, pero que no constituyen la ideología predominante en esa provincia. Así, por ejemplo, uno de los fundamentos para pedir la intervención a Córdoba está dado en este documento que dice: «Y ese clima de Córdoba está demostrando cómo un gobernante, porque deja simplemente hacer, porque simplemente deja traslucir su simpatía con el delito comunista, porque más bien le agrada, conmueve a la sociedad, porque este clima comunista es una formidable levadura de malos instintos... Así como en Córdoba el clima es comunista por la complicidad clandestina de su gobernante, en la República tenemos frenado el peligro comunista por la actitud enérgica del presidente de la Nación».

Este documento no es de ahora; es de 1936, está suscrito por el señor Matías Sánchez Sorondo y es dirigido al presidente de la República, a quien un militar digno, que era comandante de la IV División de Ejército, un hombre que es historia y orgullo de las fuerzas

armadas, el general José María Sarobe, llevó la información de que era totalmente imposible para el pueblo altivo de Córdoba soportar una intervención que tenía semejantes pretextos. Y cumple a mi hidalguía señalar que fue el presidente Justo quien aceptó esa información del general Sarobe y mandó decir al gobernador de Córdoba —que también es historia—, Amadeo Sabattini, que podía quedar tranquilo el pueblo cordobés, porque no iría la intervención.

Yo tomo los ejemplos, y no me interesan sus orígenes cuando esos ejemplos tienen un contenido nacional, democrático y de pueblo; por eso no he vacilado en citar a estas personas. Ahora también se ha pretendido instrumentar contra el gobernador Obregón Cano, que no pertenece a mi partido, y contra el vicegobernador, Atilio López, la acusación de favorecer los extremismos. Con la misma hidalguía del anterior razonamiento debemos señalar que hemos destacado errores de esta fórmula gubernativa en mi provincia, pero también reconocemos hidalgamente que había la libertad suficiente para la expresión de las ideas, que los hombres que pertenecemos a otras extracciones políticas no éramos recibidos en la casa de gobierno como enemigos cuando teníamos que tratar sobre los problemas de la provincia y que se escuchaban, aun cuando a veces parecía que no, las voces de la Legislatura. También debemos señalar que las comunas, que no son todas justicialistas, realizaron un congreso de municipalidades y tuvieron palabras de reconocimiento hacia la actitud del gobernante Obregón Cano. Pero ahora, de la noche a la mañana, este gobernador justicialista se ha transformado en el extremista peligroso que ha convertido a Córdoba en el infierno de que hablaba el señor diputado Porto. En infierno se convirtió después de lo que el pueblo cordobés llama el «Navarrazo» o el «Canazo». Después de esto se convirtió en un infierno la ciudad de Córdoba porque andaban en ella las bandas armadas identificadas con el brazalete amarillo, que no sé si tenía un sentido de temor, amenaza o dolor. Andaban por allí llevando el terror y el desconcierto a todos los espíritus y a personas que muchas veces no tenían nada que ver con este problema.

Pero en todo esto hay un problema humano que todavía no se ha tocado. No se respetaron las instituciones, pero tampoco se respetó la categoría de hombre, la dignidad humana. Hubo un avasallamiento de todo lo que era institucional, pero también hubo un avasallamiento del respeto que los hombres deben a los hombres. No otra cosa significan las actitudes de la policía rebelde de Córdoba bajo las órdenes y directivas de este tristemente célebre señor Navarro.

Y digo esto porque no es anecdótico, aunque alguien pudiera pensar lo contrario, el hecho de

entrar a la Casa de Gobierno —desplegando la bandera de su instinto— una verdadera horda de agentes policiales, gritando insultos y amenazas. No es anecdótico que al primer mandatario de la provincia se lo hiciera salir con las manos en la nuca y se lo pusiera contra la pared, como en las épocas de la más tenebrosa barbarie. No es anecdótico que se llevara la insolencia hasta hacerle saltar de una cachetada el cigarrillo que tenía entre las manos.

No es anecdótico que a un senador provincial se le dijera con ironía que se habían terminado los senadores, y que luego se preguntara con la misma ironía si existía algún otro senador entre los presentes. En esta circunstancia, al identificarse el vicegobernador, con la culata de un arma se le pegó en el estómago y se lo insultó, vejándolo en una de las formas más cobardes.

No es anecdótico que al presidente del Banco de la Provincia se lo obligara a arrojar al suelo y allí se le castigara cobardemente, negando en esta forma la generosidad argentina, la generosidad criolla, el respeto al adversario, inclusive al enemigo, cuando se encuentra en el suelo.

Hay negación de la Constitución y de las instituciones, pero también ha habido negación del respeto más elemental que se debe a la condición humana.

A esta altura del debate no haré la exégesis de la Constitución y de las leyes. No voy a recordar, porque no es tiempo de que recordemos, los fraudes de hace cuarenta años, las demagogias de ayer, de hoy o de mañana. No voy a recordar todo aquello que en algún instante nos enfrentó. Es hora de que miremos hacia adelante y de que pensemos que la bandera que nos cobija es la azul y blanca, común para todos los argentinos, y que no la podemos manchar con la negación del derecho, de la justicia, de la ley y del respeto por el pueblo y por los hombres. (Aplausos.)

Quiero señalar que algún señor diputado ha dicho que si alguna vez existió la subversión, esa sedición había terminado. Esto es lo mismo que pensar que cuando se comete un asesinato ya se terminó el delito y no hay nada más que velar al muerto.

La sedición todavía no ha terminado. Navarro todavía continúa al frente de la policía de Córdoba; todavía sigue siendo una amenaza. Se siente probablemente, como recién lo manifestara el señor diputado Sandler, protegido por alguien que trabaja desde la sombra, por algún titiritero que alguna vez verá que se descorren las cortinas y que se cae el andamiaje.

Y digo esto porque este señor, con toda arrogancia y con toda prepotencia, en un diario de la ciudad de Córdoba, que no es precisamente izquierdista, me refiero a «Los Principios», hace una declaración que determina que esta situación, que es un delito continuado en el tiempo,

se repita todavía, acentuándose en sus consecuencias.

Interrogado sobre cuál será la actitud de la policía de Córdoba ante la intervención federal, el señor ex jefe de Policía se permitió decir: «Como es de público conocimiento, la Policía resistió una decisión del Poder Ejecutivo que significaba mi separación del cargo; vale decir que en el futuro todo queda condicionado a la actitud que adopte esta repartición, y entiendo que en principio será de absoluto acatamiento».

No dice todavía que va a acatar a la autoridad que emane de la más alta magistratura del país, sino que la va a acatar en principio; es decir, siempre que no haya otros elementos que le hagan desconocerla. Se aprecia que todavía está amenazando, no al gobernador Obregón Cano —que ha sido reconocido como tal aquí en este recinto, porque así lo llamó repetidas veces el señor presidente de la bancada mayoritaria— ni al vicegobernador Atilio López, sino que está haciendo un anuncio contra el propio representante del poder federal.

Hago esta denuncia en este instante y espero que se recoja. No me interesan los tenientes coroneles Navarro, que son insignificantes en el juego de ajedrez que quiere realizar y está realizando la antihistoria. Pero detrás de estos insignificantes, muchas veces es posible encontrar los protagonistas principales, y por eso deben quedar señalados indefectiblemente para que nunca más en nuestra historia y en la historia de una provincia puedan repetirse estos acontecimientos que son una ofensa y una negación de todos los valores morales y culturales de Córdoba, como así también una ofensa a la cultura argentina.

Con la fe cristiana que yo siento pido a Dios que no se repitan estos actos, y así pido, con fervor y esperanza, que Dios proteja a la provincia de Córdoba, que Dios salve a la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Busacca). — Tiene la palabra el señor diputado Acevedo.

**Sr. Acevedo.** — Por cierto que después de tan prolongado debate yo debo ser consciente de la fatiga que agobia a todos y cada uno de los integrantes de esta Cámara. Esa fatiga tiene su explicación porque hace muchas horas que vivimos en permanente tensión, preocupados por el angustiante problema de Córdoba, que también se cierne sobre la realidad institucional del país.

Podría resultar llamativo que en un bloque tan reducido como es el nuestro sus tres integrantes se sientan en la obligación de participar en tan trascendente debate. En lo que a mí respecta existen dos motivos substanciales para que así ocurra.

El primero, es que posiblemente éste sea el debate más importante que se ha realizado en esta Cámara desde el 25 de mayo de 1973. La segunda motivación es un tanto más personal: yo

confieso que me siento obligado a participar en este debate porque después del análisis que se ha hecho de todo el proceso nos queda un profundo sabor de amargura en orden a las posibilidades de reinstitucionalización del país.

Quiero, por lo contrario, volcar algún sabor de esperanza en medio de todas estas desolaciones. En buena medida han contribuido a ayudarme en la tarea las palabras del señor diputado que acaba de intervenir en el debate porque él se ha expedido en términos semejantes.

Quiero recordar, señor presidente, que en oportunidad del primer debate que tuvo lugar en esta Honorable Cámara, un debate que a todos nos conmovió y emocionó, aquél en que se trató el proyecto de ley de amnistía que mereció, en definitiva, unánime sanción, nosotros fijamos nuestra postura, que incluía también establecer cuál es el meridiano de nuestra actuación a lo largo de los cuatro años en que debe prolongarse nuestro mandato. No era otro que el respeto y el acatamiento a la ley. En el curso de aquella sesión explicamos que la caída de la Argentina en el pozo en que se encontró sumida durante tanto tiempo se debió substancialmente a ese tan frecuente quebrantamiento y a esa falta de respeto a la ley.

Hoy volvemos a fijar y reiterar que ése es el norte de nuestra actuación en la Honorable Cámara. Vamos a bregar incansablemente por el respeto a las reglas de juego establecidas en la ley, que es la esperanza que tiene un pueblo para vivir en paz en todas las circunstancias, por difíciles que ellas parezcan.

En el curso de aquel mismo debate de la ley de amnistía se acuñó una frase. Desde aquel instante se habló y se ha repetido muchas veces que nuestra preocupación substancial debía consistir en hacer posible la reconstrucción nacional. Empero, a nadie se le escapa que cuando hablamos de la reconstrucción nacional tenemos fundamentalmente en vista no otra cosa que el proceso de reinstitucionalización, toda vez que es en esa esfera donde están dados los males más profundos que agobian al país.

Este desgraciado episodio de Córdoba nos vuelca de lleno en el tema de la reinstitucionalización, para lo cual voy a hacer antes unas breves reflexiones. Más allá de las explicaciones que puedan darse ahora acerca de si el gobierno de Córdoba se desenvolvía con aptitud e idoneidad suficientes para facilitar el desarrollo de la vida ciudadana en la provincia y, sobre todo, desde el ángulo constitucional, para saber si efectivamente hubiese garantizado la forma republicana de gobierno, todo lo que se diga ahora llega tardíamente.

La estricta verdad de las cosas, dejando por ahora de lado las contradicciones de los mensajes del Poder Ejecutivo que también examinaré, es que una mañana el país asistió atónito a la noticia de un hecho que, por lo insólito, resultaba realmente incomprensible para la cultura política argentina. Un jefe de Policía, un

subordinado de las autoridades legítimas de Córdoba, había tenido la osadía de privarlos de su libertad y de deponerlos de los cargos que ocupaban. Valga inclusive recordar que no sólo ellos fueron privados de su libertad sino que ocurrió otro tanto con ministros y legisladores, multiplicando lo insólito del episodio que recién recordábamos.

¿Y cuál fue la actitud de los funcionarios responsables del Poder Ejecutivo nacional, en esa circunstancia? Al cabo de muchas horas, cuando ya el país esperaba con honda expectativa cuál habría de ser la actuación de los funcionarios del área política del gobierno de la Nación, se recibió la noticia de un comunicado donde se decía, quitándole importancia al episodio cordobés, a este insólito episodio que agravía la cultura política argentina, que Córdoba habría de resolver sus problemas dentro del resorte de sus instituciones. Y, ¡oh, paradoja!, se invocaban cláusulas constitucionales para sostener esta actitud cuando precisamente en nuestra Carta Magna, si hay una norma que podríamos caracterizar como aquella que más se acerca a las elaboradas con un sentido casuístico, no sería otra en ese sentido más propicia que la de la última parte del artículo 69 de la Constitución. Allí se alude, precisando con un rigor inequívoco, que en tal caso, frente a la situación de sedición en que se incurre al deponer a las autoridades legítimamente constituidas, debe operar de inmediato el gobierno federal para restituirlas.

Se invocaban principios asentados en la Constitución, pero se olvidaba la norma precisa que regía estrictamente la cuestión que se había originado.

No voy a seguir con todo el proceso o con todos los hechos que van multiplicando los desaciertos y la poca felicidad con que actuó en esta emergencia el ministerio responsable. Pero sí debo destacar que inclusive para desgracia del propio gobierno nacional —o del Poder Ejecutivo— se llevaron a la firma del presidente de la República dos mensajes; uno de ellos es de fecha 19 de marzo, y el otro del día 2. Quien lea atentamente los considerandos del mensaje del 19 de marzo encontrará que la intervención federal aparecía plenamente justificada en función de que estaba alterado el sistema republicano de gobierno, sobre todo en lo que hace a las garantías individuales. No puedo dejar que esta afirmación quede vagamente en el aire. Se dice —y voy a leer la parte pertinente— que «el gobierno provincial toleró, y hasta fomentó, a veces, diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública», haciendo luego una enunciación de todos los incidentes que afectan la tranquilidad de la población. «En el campo de la seguridad y el orden público, el déficit de actuación positiva del gobierno fue realmente alarmante —continúa expresando ese mensaje—; tanto es así que

puede afirmarse que en esa provincia se halla radicado el centro de gravedad alrededor del que gira la más importante acción subversiva que se registra en el país».

En el inciso d), del punto 9, del mensaje del 19 de marzo, hay otra afirmación similar: «puede afirmarse que desde Córdoba se proyecta también una coordinada acción subversiva hacia el resto del país, que procura como alternativa una revolución violenta en lugar de la expresada voluntad de cambio pacífico que sustenta la inmensa mayoría del pueblo argentino».

El inciso siguiente de dicho punto del informe que cito insiste sobre el tema de la subversión, destacando inclusive que el gobierno provincial no ha podido hacerle frente de un modo eficaz; y por si esto fuera poco, agrega que «... debe sumarse la innumerable serie de hechos violentos e intimidatorios...», es decir, lo que afectó a las garantías de seguridad para los ciudadanos de la provincia cordobesa. Y termina esta parte del informe destacándose: «... sin que hayan sido adoptadas por el gobierno las medidas conducentes a ponerle fin, o por lo menos, intentar su control».

Y cuando de todo este conjunto de antecedentes no cabe sino reflexionar que la única alternativa posible es la de solicitar al Congreso de la Nación el dictado de la ley pertinente para que concurra el remedio federal, termina el mensaje con una referencia en el sentido de que va a mantener informado al Honorable Congreso facilitando para su análisis «... la totalidad de lo que obra documentadamente en su poder acerca de lo acontecido en Córdoba y de sus antecedentes». Tenemos allí el primer contrasentido. En el mensaje del día 2 de marzo —en el que precisamente se requiere el remedio de la intervención— se afirma expresamente: «No ignora que los agentes del caos y de la sedición han de tratar de provocar hechos que desdibujen en el exterior la imagen de esta Argentina...». Resulta que aquí se recuerda el episodio de la sedición que había acontecido en el transcurso de la madrugada del 27 de febrero, cuando lo pertinente en estas circunstancias habría sido omitir toda referencia a este hecho, desde que con él sólo aparece justificada la intervención para reponer a las autoridades depuestas. Esa referencia —segunda contradicción— aparece casi como una triste ironía en la documentación que se lleva a la firma del señor presidente de la República.

Y voy a entrar ahora en lo que constituye la verdadera razón de mi intervención en este debate. De todo lo que aquí ha acontecido, lo que substancialmente me preocupa es la proyección político-institucional de estos episodios en la vida de la República, amén de lo que ya significan para la doliente provincia de Córdoba. Aquí viene a cuento, entonces, volver sobre el problema de la reinstitucionalización al que me referí al comienzo.



La estricta verdad de las cosas es que este episodio se proyecta negativamente sobre las instituciones de la República, y también del mismo modo sobre su devenir político. En realidad, la responsabilidad no cabe sino al gobierno y al partido gobernante, y voy a decir por qué.

No se trata, en esencia, de otra cuestión más que de un conflicto entre los grupos antagónicos que militan dentro del propio partido oficial, sectores éstos que quieren consolidar sus situaciones de poder para un futuro más o menos inmediato.

Aquí ocurre —no sé si con ingenuidad, aunque muchas veces pienso que sí— que hay una actitud en el partido oficial, tendiente a confundir prestamente lo que son los órganos del gobierno y las instituciones del país con lo que es la propia organización del partido, amén del hecho —que debe computarse— de un triunfo electoral tan considerable como el que logró en las elecciones que llevaron a Perón al poder o como las que ocurrieron el 11 de marzo.

En tales circunstancias resulta explicable que los problemas del partido oficial repercutan en las instituciones del país por la natural interrelación que existe entre lo que resulta del juego de las propias fuerzas políticas proyectadas al gobierno, por una parte, y las instituciones, por otra.

Yo decía al comienzo que este episodio repercute muy negativamente en el proceso de reinstitucionalización y pone signos de seria alarma en el devenir político de la República, y quiero hacer alguna reflexión sobre este particular.

He dicho que yo llegaba a este debate abrumado por la inmensa cantidad de argumentos que se han volcado en disfavor del dictamen de la mayoría. Ese análisis no puede menos que provocar una honda amargura y creo además que refleja con cabal objetividad cuál es el estado de ánimo de la opinión pública en la Argentina.

Desde los días en que comenzaron a acontecer estos episodios se creó en el país una tensa expectativa que pronto se convirtió en ansiedad y angustia. Podría decir que del escrutinio que todos hacemos de lo que es la opinión de la ciudadanía, es decir, lo que logramos en nuestra diaria compulsión de las opiniones de los hombres que integran esa misma ciudadanía, resulta que la situación es de cabal desesperanza, de desaliento y de desánimo.

Pero no obstante esa circunstancia que yo quiero volcar preocupadamente sobre todos, y en particular sobre la conciencia de los integrantes del sector de la mayoría, quiero decir que aún estamos a tiempo. Este proceso no tiene el curso de los hechos de la naturaleza, cuyo encadenamiento es causal e inexorable. Los hombres tenemos la ventaja de que somos quienes hacemos la historia. Depende de nues-

tra voluntad, de nuestra pasión y de nuestro propósito de servir al bien común —toda vez que somos hombres políticos— cambiar el curso de un proceso que se torna alarmante para la tranquilidad del país.

Comprendo que cada uno de nosotros ponga la más intensa pasión cuando se trata de luchar por nuestras propias convicciones, y esto sirve para que también me explique que las desavenencias y las dificultades que enfrentan los sectores que se combaten entre sí dentro del partido oficial tengan las características de agudeza y de tensión con que se han presentado.

En estas circunstancias no podemos olvidarnos de que tenemos responsabilidades muy honradas. Nosotros representamos a millones de ciudadanos —todos en conjunto— que tienen sus apetencias, intereses, finalidades y propósitos de todos los cuales se nos hace intérpretes. Si esto es así no olvidemos que la gran vocación del pueblo argentino expresada a través de los comicios últimos ha sido la de empezar a vivir de una vez por todas como corresponde a un pueblo con una alta cultura política obligado, como tantas veces se repite —aunque en oportunidades se declama y nada más que eso—, sólo por la letra y el espíritu de las leyes.

Retomo la idea que hace unos instantes me brindó el diputado que me precedió en el uso de la palabra y que sirvió para darme una idea más cabal de hasta dónde llegan nuestras obligaciones en estas circunstancias. Somos hombres políticos; actuamos con apasionamiento. Pero por lo mismo que somos hombres políticos tenemos un instinto de peligro cuando se trata de las cuestiones del país. Nosotros tenemos que sellar en común una gran alianza que será la del respeto a la ley, a la Constitución y a la soberanía popular. Y para favorecer esa alianza todos debemos concurrir de buena fe a olvidar todo aquello que en el pasado nos ha separado y dividido. No es porque los conservadores no puedan enfrentar el debate de si sus aciertos fueron más que sus errores o de si sus errores superaron a sus aciertos; esto lo podemos discutir y no tendremos problemas en afrontar una discusión de tal naturaleza. Pero no se trata de eso, señores diputados. No olvidemos que la política es una empresa de futuro. Es cierto que cada uno de nosotros asienta ese futuro en el propio pasado y en la solidaridad hacia las ideas que han servido para nutrir las propias convicciones. Esa empresa de futuro deberá realizarse en este cuerpo sobre la base de la coincidencia de todos los sectores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para buscar firme y ahincadamente de aquí en más, con una pertinacia que no debe ceder ante nada, el respeto a la ley y, substancialmente por cierto, a la Constitución Nacional. Si esto ocurre, días de ventura habrán de venir para la Argentina. No nos vamos a arrepentir de haber sabido ser sensatos, prudentes y sabios en un momento difícil de la vida argentina. A eso



estamos llamados porque ese es el mandato que nos ha dado el pueblo del país. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Busacca).** — Tiene la palabra el señor diputado Cossy Isasi.

**Sr. Cossy Isasi.** — Señor presidente, señores diputados: antes de contestar los pocos puntos esenciales que se han traído a debate a este recinto, me siento obligado a pedirle disculpas al distinguido diputado Monsalve, quien me reprochó que no pusiera énfasis federalista en mi exposición y por no haber tenido para con él un poder de convicción que lo llevara a apoyar el despacho de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Le aclaro que esa circunstancia se debe única y exclusivamente al hecho de que en mi vida política sólo pongo énfasis para defender la causa del pueblo, la causa nacional, los principios que me enseñó Perón y que han sido los únicos que he conocido. Si no he logrado convencerlo, posiblemente ello se deba a que los argumentos de mi exposición estaban dirigidos a mis pares para tratar de convencerlos de que el pedido de nuestro líder es justo y se ciñe a la Constitución. Cuando se haga la votación ya verá el señor diputado los resultados de mi exposición.

**Sr. Monsalve.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Cossy Isasi.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Monsalve.** — Deseo aclarar que el señor diputado no ha interpretado correctamente mis palabras. Yo no dije que el señor diputado no me ha convencido por falta de énfasis en sus apreciaciones o por la forma en que manifestaba las causas por las que pedía el voto para la aprobación del proyecto en consideración, sino que manifesté que extrañaba el énfasis, el empuje de los caudillos entrerrianos. Y dije esto porque el señor diputado es representante de Entre Ríos. En esos momentos recordaba la figura de Ramírez, de Urquiza, y entendía que un representante de esa provincia debía emocionarse por ese recuerdo.

**Sr. Cossy Isasi.** — Es que al recordar a Urquiza perdí el énfasis, porque yo recuerdo nada más que a Pancho Ramírez y a López Jordán.

**Sr. Falabella.** — No sé dónde estaríamos si no fuera por Urquiza.

**Sr. Cossy Isasi.** — Que le conteste Borda-behere.

**Sr. Presidente (Busacca).** — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Cossy Isasi.

**Sr. Cossy Isasi.** — También me extraña un poco la advertencia que formulara el distinguido y apreciado diputado Mauhum al referirse en tono de crítica al gobierno del general Perón. Decía que para encontrar una solución institucional al problema que nos preocupa no hubiera recurrido al empleo de las fuerzas armadas en Córdoba. Posiblemente esa reflexión sea alguna reminiscencia, no sé si de él o de

allegados, de esa costumbre que los justicialistas jamás tuvimos de ir a golpear las puertas de los cuarteles, porque al Ejército lo vemos siempre como algo que desciende del general San Martín y que sólo está para defender la soberanía de la patria.

El general Perón recurre al Congreso de la Nación para encontrar la solución institucional que la Constitución nos dicta. No va a las fuerzas armadas. Va a la ley, a la norma constitucional, y recurre a nuestro consejo.

Posiblemente —y en esto me reconozco algo culpable— recién ahora ponga mi verdadero énfasis en este hecho lamentable de Córdoba. Tal vez sea porque yo, como abogado, con veintidós años de profesión, aún tenga el impacto en mis venas de aquella monstruosidad jurídica que se dio cuando se derogó una Constitución por un simple decreto. Todavía tiemblo de sentimiento argentino, porque lo primero que aprendí en la Facultad de Derecho fue el orden jerárquico de las normas. Y un día, sorpresivamente, una Constitución que fue votada libremente por el pueblo argentino, que reflejaba las necesidades sociales, las aspiraciones del futuro y la sensibilidad de aquella dama que aún nos acompaña con su cariño, que es Eva Perón, por un simple decreto de un general que nadie conocía, que sólo lo conocían en los hospitales, porque era de sanidad, fue derogada.

Esto posiblemente me haya curado de espanto, como se dice. Pero no pierdan cuidado mis distinguidos pares de que el hecho de Córdoba ha merecido mi censura, a pesar de que algunos hayan pensado que no he reprobado el acto de este teniente coronel. Está el testimonio escrito de cuando hice uso de la palabra. No hace falta ser muy jurista para saber que por la ley penal y por la Constitución se califica a esto como un hecho criminoso. No habrán pretendido que yo vaya a hacer justicia *manu militari* contra este coronel Navarro para decir que lo censuro.

Pero vayamos a lo esencial de la cuestión. Al hacer uso de la palabra delimité y fijé el problema desde el punto de vista constitucional. A través de medulosos discursos, ejemplares algunos de ellos, varios señores diputados han considerado esta cuestión, aunque posiblemente por la fatiga se hayan diluido un poco los conceptos.

Dije al plantear la cuestión que la medida que pedía nuestro líder era estrictamente ajustada a la Constitución, porque se encuadraba dentro de la primera parte del artículo 69 de la Constitución, por interpretarse que el sistema republicano de la provincia de Córdoba había sido quebrantado, no por un capricho del Poder Ejecutivo. Entonces dije que para calificar el acto sedicioso de este teniente coronel no lo podíamos analizar simplemente estudiando el hecho aislado, sino que teníamos que verlo a la luz de los acontecimientos que lo antecede-

dieron para poder recién encuadrarlo dentro de un marco sociopolítico.

En algunos de los discursos se ha dicho que yo era benevolente y demasiado complaciente con este teniente coronel. Sepan los señores diputados que el Partido Justicialista, y por ende el Frente Justicialista de Liberación, del que aquél es la columna vertebral, siempre se ha caracterizado por la legalidad, no apartándose de ella ni por un instante; no ha subido al poder a través de revoluciones, sino de actos eleccionarios libérrimos, los únicos en los cuales el Partido Comunista ha podido actuar libremente, con libre expresión en la tribuna y con votos en las urnas.

No nos confundamos, señores diputados. A esta altura del proceso sería inútil querer seguir descubriendo nuevas cosas cuando está todo dicho. La cuestión ha quedado planteada tal como lo hiciera al inicio de la exposición. El sistema republicano se ha quebrantado en la provincia de Córdoba al no tener sus habitantes el libre ejercicio de las garantías individuales. ¿O acaso se piensa que no se ha quebrantado ese sistema? El sistema republicano ha quedado quebrantado en la provincia de Córdoba porque los ciudadanos no pueden vivir en libertad y tranquilidad, porque de la noche a la mañana se ven privados no sólo de la facultad de transitar y de comerciar, sino también hasta del derecho de proveerse de los alimentos más indispensables. Sostenemos que se encuentra quebrantado el sistema republicano. Y por eso pedimos la intervención de la provincia, para restituir en esa zona mediterránea, que es orgullo de la República, porque constituye la cuna de la evolución cultural argentina desde la época de los jesuitas, el sistema político que por la acción de fuerzas extrañas no sólo a nuestro partido sino también a la bancada opositora se encuentra amenazado de destrucción junto con nuestras instituciones republicanas, democráticas y federales.

Por estas razones y para orientar definitivamente a la provincia y a nuestros comprovincianos dentro del marco de la legalidad, es que sostenemos este proyecto de ley en nombre de la bancada justicialista, y pedimos a la bancada opositora el apoyo a esta intervención para que en la Argentina se inicie de una vez por todas una etapa de convivencia en paz y felicidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Busacca).**—Se va a votar en general el proyecto de ley contenido en el orden del día número 362.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Busacca).**—En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º y 3º.

—El artículo 4º es de forma.

**Sr. Presidente (Busacca).**—Queda definitivamente sancionado (1).

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

4

#### ACTUACION DEL EX JEFE DE POLICIA DE CORDOBA

**Sr. Presidente (Busacca).**—Tiene la palabra el señor diputado Zamanillo.

**Sr. Zamanillo.**—Señor presidente: en el transcurso del debate anticipé que solicitaría el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución del diputado que habla y de otros señores diputados referido al encuadramiento y a las consecuencias legales de los actos protagonizados por el teniente coronel Antonio Domingo Navarro. Este proyecto está estrechamente vinculado con el asunto que acaba de sancionar la Honorable Cámara.

Por lo tanto, reitero el pedido de tratamiento sobre tablas de dicho proyecto de resolución.

**Sr. Presidente (Busacca).**—La Presidencia supone, señor diputado, que usted se refiere al proyecto emanado de la Comisión de Labor Parlamentaria.

**Sr. Zamanillo.**—Creo que el texto de la iniciativa está en la mesa de la Presidencia.

**Sr. Presidente (Busacca).**—Hay un proyecto, señor diputado, considerado por la Comisión de Labor Parlamentaria, que está siendo firmado en este momento.

**Sr. Zamanillo.**—No hago una cuestión de prelación, señor presidente; pero son dos proyectos diferentes.

**Sr. Presidente (Busacca).**—La única diferencia que observa la Presidencia, señor diputado, es que uno ha sido considerado por la Comisión de Labor Parlamentaria y el otro no.

**Sr. Zamanillo.**—Por eso, señor presidente, pido el tratamiento sobre tablas.

**Sr. Presidente (Busacca).**—Oportunamente, señor diputado, se pondrá en consideración su proyecto.

**Sra. Guzmán.**—Solicitaría, señor presidente, que se lean los dos proyectos.

**Sr. Presidente (Busacca).**—Se trata de cuestiones diferentes, señora diputada, tal como lo acaba de señalar el señor diputado Zamanillo.

Por Secretaría se dará lectura del proyecto de declaración presentado por la Comisión de Labor Parlamentaria.

**Sr. Secretario (Lavia).**—Dice así:

*La Honorable Cámara de Diputados de la Nación*

DECLARA:

Que la actuación del ex jefe de Policía de Córdoba y la de sus copartícipes en los hechos que son de dominio público constituye típicamente la comisión del delito de sedición.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.